

Batallas de Michoacán

Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto

José Gil Olmos



**ediciones
proceso**

BATALLAS DE MICHOACÁN

Primera edición: enero, 2015

D.R. © 2015, Comunicación e Información, S.A. de C.V.
Fresas 13, Colonia del Valle, delegación Benito Juárez,
C.P. 03100, México, D.F.

D. R. © José Gil Olmos

Foto portada:

Diseño y formación: Juan Ricardo Robles de Haro

Coordinación editorial: Alejandro Pérez Utrera

Corrección de textos:

edicionesproceso@proceso.com.mx

Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: XXXXXXXXXXXXXXX

Impreso en México / *Printed in Mexico*

Agradecimientos

Este libro, como muchas de las obras y acciones individuales, es producto de un esfuerzo colectivo sin el cual no habría podido realizarse. Entre las personas a quienes tengo que agradecer por su invaluable apoyo está Francisco Castellanos, corresponsal de **Proceso** en Michoacán, quien me compartió su profundo conocimiento del conflicto en su estado. También doy gracias al director de dicha revista, Rafael Rodríguez Castañeda, por su apoyo para realizar esta investigación periodística, que duró más de un año en tierras michoacanas. De la misma manera agradezco al investigador Salvador Maldonado por haber compartido sus fundamentales indagaciones sobre la historia de Tierra Caliente.

Sobre todo doy las gracias a quienes me ayudaron desinteresadamente a entender las múltiples historias que hay detrás del crimen organizado en Michoacán y que reflejan el entramado que se ha tejido a lo largo de los años en todo el país, donde el narcotráfico ha crecido tanto que se ha convertido en gobierno.

Finalmente, a manera de homenaje, dedico este trabajo a la memoria de las miles de víctimas de la violencia generada irresponsablemente por el gobierno mexicano merced a la declaración de guerra contra el narco, con el compromiso de que no habrá olvido hasta que tengan justicia.

ÍNDICE

PRÓLOGO	9
INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO 1. LOS ORÍGENES	24
– El narcotráfico, una tradición familiar	25
– Salinas y las políticas neoliberales	32
– El fracaso de la transición	41
CAPÍTULO 2. UNA FORMA DE VIDA EN MICHOACÁN	50
– El sur de Michoacán, las primeras semillas	51
– Tierra Caliente	53
– Sierra Sur y la Costa	56
– Lázaro Cárdenas, el puerto templario	58
– Zona estratégica	63

CAPÍTULO 3. EL MODELO MICHOACANO DEL CRIMEN ORGANIZADO	68
– Los primeros narcos	69
– Los Valencia, señores de ultramar	73
– La llegada de Los Zetas	80
CAPÍTULO 4. LA FAMILIA MICHOACANA	88
– El arranque sangriento	89
– Narcosecta paramilitar	97
– Nazario, <i>El Pastor</i>	100
– <i>San Nazario</i>	105
– La insurgencia social	111
CAPÍTULO 5. LOS CABALLEROS TEMPLARIOS	122
– El nacimiento	123
– El Código Templario	136
– La industria criminal	141
– La estrategia mediática	146
CAPÍTULO 6. LA NARCOPOLÍTICA	154
– La captura del Estado	155
– <i>Los Almada</i> y el gobernador Tinoco Rubí	158
– Los perredistas	164
– <i>El Michoacanazo</i>	177
CAPÍTULO 7. LA GUERRA	184
– La guerra de Calderón	185
– El fracaso	191
– Wikileaks, las dudas de EU	198

CAPÍTULO 8. EL NARCOGOBIERNO	202
– El narcogobierno	203
– Los tratos de <i>Cocoa</i> y <i>La Tuta</i>	209
– La cooptación de Fausto Vallejo	213
– El caso de Jesús Reyna	224
– <i>El Gerber</i> y <i>La Tuta</i>	232
CAPÍTULO 9. LAS AUTODEFENSAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO	242
– La crisis de gobernabilidad	243
– Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto	253
– Mireles, el alzado	269
– Un nuevo Estado y el Frente Nacional de Autodefensas	282
– La infiltración	289
– La traición	296
– El reacomodo	302
CAPÍTULO 10. LAS VÍCTIMAS	308
– Violencia de Estado	311
– Historias de terror	313

Prólogo

Si algo caracteriza a José Gil Olmos, además de su larga y necesaria trayectoria periodística, es que ha tenido el acierto de seguir muy de cerca los dos grandes movimientos morales de los últimos 20 años en México: el zapatismo –que nació en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las montañas del sureste mexicano como una respuesta a la ancestral opresión de los pueblos indios, a la corrupción del Estado y a la violencia que se ahondaría con la apertura del país al TLC y a la llamada economía neoliberal– y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que en 2011, a raíz de la masacre de siete personas en Morelos, comenzó a movilizarse por todo el país y Estados Unidos para visibilizar a las víctimas de la violencia y buscar una ruta de justicia y de paz. Supongo que buscaba en ellos un diagnóstico y una respuesta a la emergencia nacional y a la tragedia humanitaria que desde entonces no ha dejado de crecer y de hacerse más honda con la guerra contra el narcotráfico y la solidificación del crimen organizado.

Recuerdo, en este sentido, que durante la caravana que el MPJD hizo a lo largo de la frontera y de la costa este de Estados Unidos, Pepe, como le llamamos los amigos, me dijo que quería escribir un libro sobre ambos movimientos. No lo hizo. Nunca le pregunté el porqué. La respuesta, sin embargo, me llegó cuando me pidió prologar el libro *Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto*. Al leerlo, me di cuenta de que José Gil no había escrito aquel libro,

primero, porque sabía que, a pesar del profundo trabajo que ambos movimientos habían hecho por la justicia y la paz, la corrupción de las élites políticas no haría nada por resolver el problema y la lucha para detener el horror continuaría de otras maneras. Segundo, necesitaba saber con claridad lo que en el fondo de la propuesta neoliberal –desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta Enrique Peña Nieto, que había iniciado su administración tratando de borrar de la conciencia pública la violencia y las víctimas, y haciendo los consensos para las reformas estructurales– no sólo la había generado, sino exponenciado.

La respuesta llegó bajo la forma de un nuevo alzamiento. El 24 de febrero de 2013, a inicios de la administración de Enrique Peña Nieto, en Michoacán –el estado de la República Mexicana donde Felipe Calderón, al comienzo de su mandato, en 2006, y vestido de militar, lanzó su guerra contra el narcotráfico– un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente. No eran, como los zapatistas y las policías comunitarias, indios armados con escopetas, algunas armas de alto poder y “rifles de palo”; mucho menos, como el MPJD, víctimas urbanas que, apertrechadas con las enseñanzas de Gandhi, se habían puesto a desafiar al crimen y al Estado. Eran rancheros –pequeños propietarios– equipados con armas de asalto que, como muchas comunidades del país, habían sido sometidos, mediante el terror, a la extorsión y el pago de piso, y que se llamaban Autodefensas. Eran, también, la confirmación de lo que había afirmado el MPJD a finales de 2011, en Xalapa, frente a las simulaciones, co-

rupciones, traiciones y complicidades de los gobiernos con el poder del dinero: “Seremos el último movimiento no violento que tenga el país”.

Inmediatamente, José Gil Olmos se trasladó allí y, al igual que lo hizo con el zapatismo y el MPJD, acompañó, miró, indagó, entrevistó. Lo que allí encontró no fue un movimiento puramente moral, como el del zapatismo y el del MPJD, sino una estrategia de guerra diseñada por Óscar Naranjo, el general colombiano que había enfrentado a los cárteles en su país y a quien Enrique Peña Nieto, desde que era candidato a la Presidencia de la República, había traído como su asesor en seguridad para fracturar, utilizando gente vinculada con los cárteles, el inmenso poder que, en connivencia con el Estado, habían adquirido Los Caballeros Templarios. Esos grupos, con excepción, a lo que parece, del doctor José Manuel Mireles –quien no dejó de denunciar, hasta su encarcelamiento, los vínculos de muchos líderes de las Autodefensas con Los Caballeros Templarios y funcionarios del gobierno, incluyendo al comisionado Alfredo Castillo, enviado por Enrique Peña Nieto a pacificar la región–, hunden sus raíces en las rutas del narcotráfico que se generaron, a causa de la miseria y del abandono, durante la década de los cincuenta, en el reforzamiento y multiplicación de los grupos delictivos bajo la política neoliberal del salinismo y su reforma del artículo 27 constitucional y en los intrincados vínculos que, a partir de entonces, fueron tejiendo con el Estado. En este sentido, el nacimiento de las Autodefensas no es sólo el fruto de sectores de la población indignados frente a la ausencia del Estado y los crímenes de los cárteles. Es, sobre todo, el fruto

de una estrategia de guerra diseñada no para reconstruir el Estado de derecho –la lógica neoliberal, basada en la maximización de los capitales, no conoce ni el derecho ni la ética política–, sino para quitarle el mando político y comercial a Los Caballeros Templarios que, a través del gobierno, controlaban la mayor parte de los 113 municipios de Michoacán. En la lógica de Enrique Peña Nieto, que es la lógica del neoliberalismo y de una nueva forma de la dictadura, el Estado –parece decirnos la larga, fascinante y aterradora investigación periodística de José Gil Olmos– no sólo debe poseer el uso legítimo de la violencia –de allí la transformación de las Autodefensas, cuando cumplieron su cometido, en policías rurales, y el encarcelamiento de Mireles–, sino, por lo mismo, la administración del crimen. Al Estado no le importa que quienes conformaron las Autodefensas hayan sido templarios, narcotraficantes o asesinos; no le importa tampoco que lo sigan siendo. Le importa, en cambio, que el control y la administración de esas actividades los tenga él. El dinero de los capitales legales o ilegales es, como el uso de la fuerza, competencia exclusiva del Estado.

Las batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto es así la historia de la violencia que en los últimos 20 años se ha instalado en el país. Porque el micro contiene al macro, José Gil Olmos, al investigar y contarnos la génesis de las rutas de las drogas en Michoacán, su reforzamiento y expansión a través de la política neoliberal del salinismo y de las siguientes administraciones, el surgimiento de La Familia Michoacana y, luego, de Los Caballero Templarios y de su cultura –una *New Age* criminal mezcla de autoayuda, principios

religiosos, contrainsurgencia paramilitar y guerrillera y fanatismo—, la espantosa degradación del Estado que los protegió hasta convertirlos en gobierno, y la estrategia de la administración de Peña Nieto para recuperar la administración política y comercial del crimen, nos revela la realidad del país. Nos revela también, de alguna forma, las causas estructurales que generaron el surgimiento del zapatismo, del MPJD y, recientemente con la tragedia de Ayotzinapa, las movilizaciones de miles de jóvenes, del hartazgo de la nación y de las estrategias de control que ha comenzado a articular el Estado utilizando la violencia de los mal llamados “anarquistas”. Nos revela, por último, el absoluto fracaso del Estado, su articulación en una dictadura de nuevo cuño y la necesidad de una refundación nacional.

Libro imprescindible para entender parte de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, *Batallas de Michoacán. Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto*, sienta las bases para que un día José Gil Olmos escriba el libro del que en la caravana por Estados Unidos me habló. En esos movimientos, que también acompañó e investigó a fondo, hay una profunda respuesta al fracaso del Estado y su intento de rearticularse en una dictadura basada en el dinero y la administración del crimen.

Javier Sicilia

Barranca de Acapantzingo, 6 de diciembre de 2014

INTRODUCCIÓN

El 24 de febrero de 2013 un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que, durante años, habían sido sometidos por Los Caballeros Templarios a un régimen de terror y miedo.

Aquellas personas se hacían llamar “Autodefensas”. Y, de pronto, se convirtieron en referente del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia.

¿Pero quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esta zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios?

En Michoacán, el narcotráfico y su evolución es un asunto complejo y con una larga historia, en el que se entrecruzan muchos factores y actores sociales, políticos, económicos y hasta culturales. En más de medio siglo, este fenómeno se ha filtrado hasta las raíces de la sociedad y permeado en la mayor parte de sus gobernantes, incluso de manera directa.

En dicha entidad casi todo mundo conoce a alguien que se ha dedicado a este negocio –que empezó siendo un apoyo económico y devino el sustento de todo el estado merced a los millones de dólares generados por el crimen organizado convertido en gobierno.

Ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo.

Se trataba de armar a numerosos civiles de la zona de Tierra Caliente que ya estaban cansados del yugo de Los Caballeros Templarios. Se les daría dinero y protección para que fueran ellos quienes combatieran a los criminales en su propio terreno. Para esto hicieron un pacto con una banda criminal enemiga de Los Templarios –encabezada por los hermanos Juan José y Uriel Farías Álvarez–, que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En noviembre de 2012, habitantes del pueblo de Tepalcatepec vieron al general colombiano Óscar Naranjo llegar al salón Plaza para reunirse con los Farías. Les ofreció su apoyo para los grupos de autodefensas ciudadanos o policías comunitarios. Lo mismo ocurrió en el poblado de La Ruana por esas mismas fechas.

Testigos señalan que el 24 de febrero de 2013, cuando las autodefensas se dieron a conocer en las instalaciones de la (Unión) Ganadera de Tepalcatepec, militares y familiares de los hermanos Farías repartieron armas y camisetas a más de mil personas que ahí se reunieron.

Ese día empezó una guerra sórdida entre autodefensas y templarios que duraría hasta mayo de 2014, cuando el gobierno de Peña Nieto convirtió a los insurgentes en Fuerza Rural.

La estrategia peñista, además, daría lugar al nacimiento de un nuevo grupo del crimen llamado El H3 o Tercera Hermandad, que significaba la tercera generación de narcotraficantes michoacanos. Sus precedentes eran La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Esta banda es el nuevo amo de la delincuencia organizada en Michoacán, protegida por el pacto que concretaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con el general Naranjo, quien regresó a Colombia a inicios de 2014, una vez que su misión había concluido. Quedarían fuera de este pacto algunos personajes como el doctor José Manuel Mireles, quien se rebeló e intentó hacer de las autodefensas el agente del cambio y de lucha contra el crimen organizado en Michoacán y en todo el país. En castigo fue encarcelado en Sonora.

Estos elementos le dieron forma al escenario que en los últimos años hemos presenciado en el sur de Michoacán y que es similar al de una guerra, con pueblos y ciudades custodiadas por miles de militares y soldados equipados con armas de alto calibre, cascos de acero, chalecos antibalas, camionetas con metralletas en el techo o helicópteros artillados sobrevolando territorios anegados por la violencia de los cárteles, que también se enfrentaron a grupos de autodefensa y policías comunitarios igualmente pertrechados.

Al momento de escribir este libro –mediados de 2014– en Michoacán había por lo menos 12 organiza-

ciones legales e ilegales fuertemente armadas dispuestas a disparar en cualquier momento: las policías comunitarias, las autodefensas ciudadanas, los grupos criminales La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, además del Ejército y las policías estatal, municipal y federal.

Al observar con detenimiento el paisaje actual de Michoacán podríamos decir que, en esta segunda década del siglo XXI, se desarrolló un conflicto armado o una guerra no convencional, en la cual un ejército de 10 mil militares y policías se enfrentó a diversos grupos armados. Se disputaron el control de un territorio a costa de miles de víctimas civiles heridas, muertas, desaparecidas y algunas comunidades desplazadas.

Además, si le damos un sentido histórico a lo que ha acontecido en esta región del país, resalta de inmediato un aspecto de enorme impacto político y social. Hace 200 años, en Apatzingán (el corazón de la Tierra Caliente), los independentistas encabezados por José María Morelos y Pavón promulgaron la Constitución de 1814, que delineó los primeros rasgos de lo que sería el rostro del Estado mexicano.

Dos siglos después, en esa misma parte de México se expresa un nuevo actor, un nuevo grupo de poder: el crimen organizado que tiene incidencia directa en las decisiones de gobierno y en las funciones propias del Estado, como son la seguridad, la justicia y el control del territorio, dándole un nuevo perfil a este último.

Así, en medio de este conflicto armando, podemos apreciar con claridad el evidente fracaso del Estado

mexicano, que ha sido incapaz de dar seguridad a la población de Michoacán y, al mismo tiempo, permitió la formación de un Estado paralelo en un territorio donde el que gobierna es el crimen organizado.

Desde 1989, con el nacimiento del PRD y el arranque del gobierno de políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Michoacán entró a una etapa de continuos conflictos que han cobrado la vida de miles de civiles. Pero la espiral de violencia se acrecentó desde 2006, con la declaración de guerra al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón: un fracaso que cimentó las bases para la construcción de un reino de terror por parte de bandas delincuenciales, que a su vez sometieron pueblos y ciudades enteras.

Es evidente que en esta región del país se fracturó el Estado y que de las grietas emergieron dos grupos de narcotraficantes con un perfil distinto a los que ya existían en México. Estos grupos tienen rasgos de secta religiosa, un sentido de pertenencia regional y una organización de células estilo paramilitar o guerrilla: se trata de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Al inicio surgieron como una especie de autodefensas, pues en el discurso proponían a los ciudadanos darles la protección que el gobierno no les daba, a cambio de cuotas voluntarias que se convirtieron en obligatorias: En la práctica se trataba de un impuesto cuyo incumplimiento implicaba la muerte.

Con la presencia ominosa de estos grupos, en una década la vida cambió para los michoacanos, que dejaron de salir en la noche y se fueron acostumbrando a las extorsiones, secuestros, cobro de cuotas, ejecuciones, desa-

pariciones y amenazas de los delincuentes y sus aliados: los policías estatales y municipales, ediles y legisladores, quienes se fundieron con las bandas para establecer una amplia red de poder que traspasaba todas las leyes.

De acuerdo con información del gobierno estatal, la entidad se la disputan cinco grupos: Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Producto de la violencia generada por esta guerra entre las mafias del narcotráfico cada año se cometen 35 mil delitos del fuero común. Así, a partir de 2013 y en 43 municipios surgieron grupos de autodefensa ciudadana, policías comunitarias, rondas comunitarias y, en otros, 50 guardias blancas.

Todos estos grupos de autodefensa y bandas de delincuentes cuentan con armas de alto poder a pesar de que el gobierno federal ha hecho varios intentos para desarmarlos. De hecho, a principios de 2014 envió a 10 mil policías y soldados como parte de un operativo de recuperación estatal.

La Familia Michoacana primero y luego Los Caballeros Templarios resistieron los embates policiacos y militares y ensancharon su área de influencia hacia otras actividades que resultaron ser mejor negocio que la producción y venta de droga: las extorsiones, cobro de cuotas, secuestros, venta de autos y negocios turbios con empresarios chinos. Todo, a través de la violencia y el terror como los principales métodos de control social y de mercado.

Según la información que se desprende de documentos requisados a Los Caballeros Templarios y de declara-

ciones del exgobernador Fausto Vallejo (PRI), así como de líderes de distintos sectores económicos, las ganancias obtenidas por el crimen organizado entre 2012 y 2014 se estiman en 31 mil 460 millones de pesos por la vía de extorsiones a los mineros, productores de aguacate, empresarios y comerciantes grandes, medianos y pequeños, por “cuotas”, venta de drogas y secuestros.

Además de este auge económico, el crimen organizado michoacano se convirtió en cogobierno desde principios de este siglo, controlando de manera absoluta la mayor parte de los 113 municipios e infiltrándose en las instituciones policiacas, municipales y de gobierno del estado.

En resumen, el crimen organizado levantó un imperio y una forma de gobierno en Michoacán, haciendo realidad lo que tanto se temía, la formación de un Estado y un gobierno-narco.

Los casos más evidentes de esto son la vinculación del exgobernador interino Jesús Reyna (PRI) con Los Caballeros Templarios –que supuestamente le dieron 300 millones de pesos para la campaña a la gubernatura de Fausto Vallejo, que él coordinó en 2011– y también de Rodrigo Vallejo, hijo del mencionado Fausto Vallejo. Desde 2008, Rodrigo ya era jefe de plaza en Morelia para La Familia Michoacana y, luego, para Los Caballeros Templarios.

Visto a la distancia, de nada sirvió que en 2006 el presidente Felipe Calderón se haya vestido de casaca y quepis militar y, ante las tropas militares destacamentadas en Apatzingán, lanzara una temeraria declaración de guerra contra el narcotráfico. Envío a miles de soldados y policías que no pudieron controlar a ninguna banda

sino que, al contrario, avivaron el avispero provocando más de 100 mil muertes, 26 mil desaparecidos y miles de desplazados en todo el país a causa de la violencia en seis años, muchos de ellos en Michoacán.

La misma táctica la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014 dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un “comisionado”, y en ese puesto colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados a Peña Nieto desde que éste gobernaba el Estado de México.

El presente libro parte de un intento por responder preguntas elementales: por qué surgió el fenómeno de las autodefensas y por qué en Tierra Caliente y, al mismo tiempo, desbrozar el confuso panorama de Michoacán. Se pretende dar algunos elementos para entender que se trata de una tierra tradicionalmente productora de drogas (mariguana y opio), en la que ha emergido un actor dentro de un escenario de por sí complejo: se trata de las autodefensas ciudadanas, que llegaron a inspirar a pueblos y comunidades de otros estados a tomar en sus manos las armas para protegerse y, en algunos casos, establecer su propio sistema de justicia.

El objetivo es explicar los orígenes de este conflicto armado que, según el investigador Salvador Maldonado Aranda, se encuentra en las políticas neoliberales del expresidente Carlos Salinas de Gortari y en el fracaso de la transición a la democracia de Vicente Fox y Felipe Cal-

derón. (Maldonado Aranda, 2012a) Se busca explicar por qué en Tierra Caliente se dio este conflicto armado y por qué surgieron ahí los poderosos cárteles locales de la droga que desafiaron las instituciones de gobierno y justicia, así como sus némesis, las autodefensas auspiciadas por el gobierno federal a través del general colombiano Óscar Naranjo, promotor de las autodefensas en su país.

También trataremos de describir el impacto económico y social de este conflicto, que ha generado un escenario similar al de una guerra y ha afectado a la población de todo el estado. Finalmente habremos de dar cuenta del surgimiento de los grupos de autodefensas ciudadanos, de la participación del gobierno peñista a través del general colombiano Óscar Naranjo, quien a pesar de haber dicho públicamente que estos grupos eran un “error y un peligro social armado” participó en su formación y equipamiento, tal como lo aseguran testigos que lo vieron en los pueblos de Tierra Caliente.

De esta manera habremos de contar las historias de los principales personajes de esta imbricada historia, de las organizaciones criminales y grupos armados que se disputan el territorio y de las erráticas estrategias gubernamentales a través de entrevistas, reportajes y crónicas de los pueblos sojuzgados por el crimen organizado y de los principales acontecimientos que, en los últimos años, han dado lugar a una lucha sin cuartel, a las batallas de Michoacán.

CAPÍTULO 1. LOS ORÍGENES

El narco, una tradición familiar

Cuando los viejos michoacanos de Tierra Caliente se sientan en las tardes y apaciguan el sopor de un día caluroso en los porches de sus casas, cuentan que el origen del negocio del narcotráfico en su tierra se remonta a mediados del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando en el frente de batalla Estados Unidos necesitaba heroína para calmar el dolor de sus miles de heridos o mutilados, y la mariguana para apaciguar el terror de los soldados perdidos en el infierno de los enfrentamientos en Europa y Asia.

Estas historias son tan familiares y populares que hasta en la cúpula política se repiten las versiones de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para permitir el cultivo de la mariguana y la “adormidera”, como se le llama a la goma de opio extraída del bulbo de la flor de la amapola, con el objetivo de mandar cigarros ya forjados y la goma preparada a los diferentes frentes de la guerra.

Por ejemplo, la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, dice que este negocio tiene como 60 años y fue permitido y auspiciado por el gobierno mexicano en connivencia con Washington.

“La historia se remonta a las guerras mundiales y a los contratos que hacía Estados Unidos con el gobierno mexicano para poder asegurar (la provisión de) amapola y mariguana. Hasta allá se remonta la historia, y luego se desgaja de Sinaloa a Michoacán, donde se siembra desde hace muchos años. Hay gente que dice que en la década de los cincuenta venía un avión de Guadalajara, se supo-

nía que traía zapatos, pero la gente trabajaba haciendo churritos de droga, se supone que de marihuana.” (Calderón Hinojosa, 2014)

Desde entonces muchas familias de Michoacán, principalmente del sur del estado y de la zona de Tierra Caliente, se han dedicado al cultivo, transporte y comercialización de drogas hacia Estados Unidos. Esto ha devenido una tradición y un ingreso regular. Pero este micronegocio “de familia” se convirtió en un gran negocio nacional e internacional cuando se le agregó, a finales del siglo XX, el tráfico de la cocaína proveniente de Sudamérica, sobre todo de Colombia, junto con la producción de drogas sintéticas entre las que destacan las metanfetaminas provenientes de China y que ingresan por el puerto de Lázaro Cárdenas.

Rancheros de Tierra Caliente recuerdan casi como una costumbre la cosecha de marihuana y amapola en sus tierras. Uno de ellos, originario de Tepalcatepec, participante de los grupos de autodefensa ciudadana, comentaba que no hace mucho tiempo –antes del control de los grandes cárteles– él sembraba y cosechaba marihuana en su rancho y la mandaba a Estados Unidos por autobús de pasajeros:

“Yo no me metía con nadie, lo hacía sin hacer ruido ni desmadre, sembraba en mi rancho las matas y las ponía a secar para empaquetarlas. Luego las ponía en autobús y mandaba a Tijuana unos 50 kilos al mes, allá los recibían y me mandaban el dinero. Nadie sabía de esto, ese dinero me servía para mantener mi rancho, las vacas, la siembra. Así lo hice por años, pero ahora ya no se puede, los grandes se lo quedan todo.”

Luis Astorga, en su libro *Drogas sin frontera. Los expedientes de una guerra permanente* (Astorga, 2001), indica que desde los años cincuenta, precisamente en Tierra Caliente, ya se cultivaba mariguana y amapola. Cita que un agente del Ministerio Público Federal de la región de Aguililla –donde precisamente décadas después nació el primer gran grupo de narcotraficantes, Los Valencia–, asevera que, para esas fechas, los cultivos tradicionales de frijol y maíz ya habían sido sustituidos por mariguana y amapola.

El agente ministerial, dice Astorga, pidió al gobernador actuar, pero sin involucrar a la Policía Judicial, porque era ineficaz y fomentaba el cultivo. El gobernador de entonces (1950-1956) era Dámaso Cárdenas del Río, hermano del general Lázaro Cárdenas, quien había gobernado el estado anteriormente.

El mismo investigador menciona que, en agosto de 1959, el Ejército decomisó 300 kilos de mariguana, y el 29 del mismo mes detuvo a una persona con 8.2 kilos de goma de opio.

De acuerdo con una copia ministerial enviada a la Procuraduría General de la República (PGR), un agente del Ministerio Público federal solicitó que enviaran agentes para investigar el hecho de que, que para esas fechas, ya había 10 mil hectáreas sembradas de mariguana y se preparaban otras 3 mil para cultivar la amapola.

Otro investigador, Salvador Maldonado, señala que según fuentes históricas del propio Ejército mexicano, la primera campaña contra el narcotráfico en Michoacán fue en 1959, con el envío del Batallón 49 a cargo del comandante Salvador Rangel, “cuya misión también fue

contener la oposición política del general (Lázaro) Cárdenas contra el gobierno de Adolfo López Mateos”. (Maldonado Aranda, 2012a)

El mismo autor señala que es probable que, ya desde finales del siglo XIX, haya habido cultivo de drogas en Michoacán a la par de la explotación minera, “paliando extenuantes jornadas de trabajo y aislamiento”. (Maldonado Aranda, 2010)

Como puede observarse, las raíces del narcotráfico en Michoacán son profundas, se encuentran en las zonas rurales y tienen que ver con cuestiones de pobreza, marginación, olvido y negligencia del Estado mexicano.

No obstante, también se vinculan con grandes acuerdos comerciales mantenidos con el gobierno de Estados Unidos, país que años después, dirigido por el presidente Richard Nixon, inició el combate contra el tráfico de estupefacientes en toda América Latina. Ese programa fue conocido como Plan Cóndor, se basó en el Ejército y la policía que, en lugar de disminuir la cosecha y comercialización de estupefacientes, generó más violencia, inseguridad y muertes en la población civil, y facilitó el surgimiento de poderosos cárteles desde tierra mapuche hasta el río Bravo, con extensiones en Europa y Asia.

Estas razones de naturaleza militar y política son las que motivan que en Michoacán –sobre todo en la Tierra Caliente, cuyo centro de actividad social, política y económica es Apatzingán–, haya surgido el narcotráfico, se formaran bandas locales del crimen organizado y, posteriormente, se desarrollaran los grupos de autodefensa ciudadana como expresión de hartazgo social ante la ausencia del Estado mexicano, que cedió territorio y go-

bierno por más de una década a La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Si bien encontramos registros documentados de que, a mediados del siglo pasado el narcotráfico sienta sus bases sobre todo en el sur de Michoacán, es a partir de la década de los setenta cuando este incipiente negocio familiar se transforma en una industria de dinero y poder y su influencia alcanza la zona templada de Uruapan, así como gran parte de la sierra de Michoacán y Jalisco.

El doctor en antropología Salvador Maldonado, que lleva 15 años estudiando la historia de Tierra Caliente, señala al respecto: “En el transcurso de los años setenta llega a esta zona la semilla de mariguana, que empieza a ser cultivada por unos cuantos de los más atrevidos, y su cultivo se expande al mismo tiempo que los desmontes para producir maíz se reducen. La zona templada de Uruapan se consolidó como la principal productora de aguacate para el mercado estadounidense y más tarde para el europeo. Se dice que se invirtieron grandes capitales ilegales en fincas aguacateras, pero también que gente de la región Sierra se desplazó hacia esta zona para protegerse de la violencia”. (Maldonado Aranda, 2012a)

En boletines militares de la zona de Apatzingán que consultó Maldonado se lee que “durante el *boom* de la droga de los años setenta, el Ejército destruyó 374 hectáreas de amapola, cerca de 200 de mariguana e innumerables plantíos, además de la intercepción de droga en la zona sur. Para los setenta, las cifras oficiales señalan un elevado porcentaje de destrucción y aseguramiento de droga. Por ejemplo, se destruyeron 13 millones y medio de plantas de amapola, más de 30 hectáreas y alrede-

dor de 2 mil plantíos de amapola, varios kilos de opio y heroína y casi una tonelada de semilla. En cuanto a la mariguana, se destruyó una y media toneladas listas para el consumo, 550 hectáreas cultivadas, aproximadamente 500 plantíos y 95 toneladas de semilla, entre las cifras más importantes”. (Maldonado Aranda, 2012a)

El negocio del cultivo y comercialización de estos dos enervantes creció de manera extraordinaria en esta época, cuando en México había una crisis económica y en Estados Unidos comenzaba a crearse un gran mercado del consumo de drogas en los años de la revolución cultural, del existencialismo y nihilismo, en la llamada “era de Acuario”, en la cual miles de jóvenes se rebelan contra el *establishment* o el *statu quo*, contra la autoridad de los padres y los maestros, y se lanzan al individualismo, la sicodelia y los estupefacientes naturales y sintéticos como nunca antes en la historia de los imperios.

En los años ochenta, en Michoacán se duplicó el cultivo y tráfico de drogas. La heroína comenzó a sustituir a la mariguana en el comercio internacional de las drogas. Así, se eleva el precio de la adormidera.

Maldonado cita al respecto: “La información disponible sugiere una expansión acelerada del narcotráfico en el sur de Michoacán durante la ‘década perdida’. No obstante las cuestionables cifras del gobierno estatal, podemos observar algunas tendencias significativas. Entre los setenta y ochenta hay un aumento importante, más del doble, en el cultivo y tráfico de las drogas. En los ochenta, el cultivo de amapola va sustituyendo al de la mariguana. El cultivo se realiza en extensiones más pequeñas de tierra y en recónditos lugares en vez de hacer-

lo en terrenos planos, como se hacía en años pasados. Por ejemplo, durante toda la década la destrucción del número de amapola y mariguana disminuyó en relación con el número de plantíos: hubo cerca de dos mil hectáreas destruidas por aproximadamente 22 mil plantíos, fundamentalmente de mariguana. Otro indicador significativo es el aumento de los decomisos, con un total de 17 toneladas de mariguana y unos kilos de opio y heroína. Los plantíos se ubican en las laderas de los cerros alejados de las vías de comunicación y de la vigilancia policial, lo cual también significa que ya no son únicamente familias rancheras las que cultivan o procesan la droga, sino hombres solos, jóvenes o nuevos colonos que ingresan a la sierra en busca de trabajo. Son quienes se convierten más tarde en sicarios”. (Maldonado Aranda, 2012a)

Según la información del gobierno del estado, mientras que en toda la década de los setenta se destruyeron 30 hectáreas de amapola y mil 725 plantíos, sólo en 1985 se devastaron 43 hectáreas de amapola y mil 485 plantíos de la misma droga.

Lo que por 30 años fue una salida a la precaria economía familiar, para la década de los ochenta se transformó en un gran negocio con ganancias multimillonarias. Una nueva etapa se iniciaba a partir de las reformas constitucionales empujadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, que permitieron la privatización del ejido y la apertura a los mercados extranjeros, que rompieron las cadenas locales de producción agrícola. La política económica salinista le dio una nueva fisonomía al narcotráfico. Aparecieron los *brokers* de la droga, y los campesinos y rancheros de Michoacán rentaron sus tierras y

mano de obra a los nuevos empresarios: los cárteles del narcotráfico. Empezó la violencia.

El neoliberalismo salinista, pobreza y narco en Michoacán

Durante décadas los habitantes de la Sierra Sur de Michoacán sobrevivían de sus tierras o de las remesas que miles de familias mandaban de Estados Unidos, a donde migraban como parte de una tradición de familia o de pueblo. Paliaban la pobreza sembrando maíz, frijol, frutas y hortalizas, criando algunos animales o merced a un incipiente comercio de drogas.

De todas las formas de sobrevivencia quizá la migración era la más recurrente, pues no era lo mismo ganar en dólares que en pesos haciendo lo mismo: trabajar la tierra. De ahí que miles de los que se fueron y regresaron de Estados Unidos –algunos con la doble nacionalidad– soportaban la economía de sus comunidades, ciudades y hasta del estado, al enviar 2 mil 600 millones de pesos cada año, que representan 16% del PIB estatal y 2.7% del nacional.

Un policía comunitario de Urapicho, en la meseta purépecha, recuerda en entrevista una historia que ejemplifica la manera tan cotidiana en que los michoacanos conciben la migración hacia la Unión Americana. Un día, una de sus vecinas hizo un viaje a Estados Unidos junto con sus hijos para buscar a su esposo. La mujer no sabía leer ni escribir: “Una noche me la encontré en una huerta, iba con sus hijos chiquillos y su maleta. Caminaba de prisa cuando le pregunté a dónde iba. ‘Voy a buscar a

mi marido porque no sé nada de él', me dijo. ¿Pero sabes cómo llegar?, le contesté, diciéndole que estaba muy lejos, y ella contestó que no, pero que todo mundo iba p'al norte y que ella haría lo mismo. Pasaron como tres meses y un día nos habló para decirnos que por fin había encontrado a su marido en Arizona, que no pensaba que estuviera tan lejos pero que preguntando llegó hasta allá con sus hijos de la mano".

Hoy, esas fuentes tradicionales de migración ya no son suficientes para atenuar la pobreza entre los michoacanos. Menos lo es sobrevivir de la siembra del frijol o maíz, sobre todo porque desde que Salinas impulsó las reformas neoliberales en el campo, la crisis se acentuó entre las familias campesinas que buscaron en la siembra de mariguana y amapola salir adelante o, aún más, enriquecerse: La política neoliberal salinista desmanteló la responsabilidad social del Estado y provocó que algunas regiones abandonadas del país se convirtieran en los principales refugios e imperios ingobernables del crimen organizado.

Así, en el sexenio salinista empezó el auge del narco en México. Pasó de ser un fenómeno local, muy focalizado en ciertas regiones, al gran comercio nacional e internacional, como ahora existe. Es como si los narcos mexicanos fueran los que mejor entendieron y aprovecharon las leyes de la economía globalizada, que no sabe de límites fronterizos ni de códigos humanitarios.

Esta es la tesis que Salvador Maldonado plantea (Maldonado Aranda, 2012a) para explicar cómo se crearon vacíos en el campo, con las políticas de reestructuración económica, política y social, que dieron paso al

surgimiento de “un poderoso narcotráfico regional” que creció y se convirtió en uno de los cárteles más poderosos del país y con presencia en el mercado internacional.

Maldonado apunta que durante los ochenta la crisis económica dio lugar a la adopción de políticas de ajuste estructural que repercutieron ampliamente en el sur de Michoacán. Paralelamente, el recorte presupuestal para infraestructura, créditos, insumos y precios de garantía para la agricultura impactó de manera muy fuerte en la próspera economía regional.

El investigador explica: “La caída de los precios internacionales de los productos agrícolas colapsó las economías domésticas y empresariales de la región. Adicionalmente, había enormes problemas de corrupción entre el gobierno, las asociaciones ejidales y los propietarios privados, que edificaron un caciquismo muy violento sustentado en la impunidad.

“Empresas y comercios se fueron a la ruina, mientras que gran parte de la infraestructura oficial quedó abandonada. Productores agrícolas y dueños de empacadoras de frutas y hortalizas ya no invirtieron sus ganancias ante la reducción de los precios y los problemas de comercialización, crónicos por lo demás. Grandes compañías transnacionales cancelaron sus acuerdos con productores rentistas, dejando las tierras profundamente deterioradas por el uso intensivo y la utilización de plaguicidas y fertilizantes para obtener mayor rendimiento, y aunque el gobierno instauró programas compensatorios no logró elevar los niveles óptimos de exportación”.

Destaca: “Con la administración de Carlos Salinas de Gortari, el Estado abrió el sector agropecuario a la in-

versión privada, nacional y extranjera, quitándole apoyo político y económico a las asociaciones agrícolas y de productores rurales. Estas medidas eliminaron la asistencia oficial, ocasionando la descapitalización del campo. En algunos casos, el dinero ilícito compensa las deterioradas condiciones sociales, mientras que la población rural optó por cultivar droga en montes y sierras de manera más sistemática”. (Maldonado Aranda, 2012a)

El investigador apunta que, además, las políticas neoliberales salinistas se articularon con dos procesos significativos que dieron una relevancia inédita al narcotráfico.

“En primer lugar, la implementación de políticas antidrogas en Colombia, Perú y Bolivia redujeron el cultivo, el procesamiento y el tráfico. Estas políticas prohibicionistas provocaron una disminución en la llegada de sustancias ilícitas, por lo que México pasó a ocupar un lugar central para abastecer de marihuana y heroína al mercado estadounidense. Asimismo, con la cancelación de la ‘ruta del Caribe’, la costa del Pacífico se convirtió en una zona estratégica para el tráfico hacia Estados Unidos. El sur de Michoacán, cuya costa es una de las más extensas y hasta hace poco tiempo con nula vigilancia, juega un papel central en la recepción de cargamentos de cocaína y su posterior exportación.

“En segundo lugar, la descapitalización del campo y la implantación de políticas antidrogas se generan en el marco de las políticas de descentralización administrativa del Estado mexicano (reforma al artículo 115 constitucional), que dan poder a las instituciones estatales y municipales, controladas por grupos políticos o por caciques. Estas reformas del Estado fortalecieron los arreglos

locales y regionales de ciertos actores involucrados en el narcotráfico y la política. En el caso de Michoacán, el gobierno estatal de los años ochenta cuestiona el centralismo del gobierno federal y el papel del Ejército en acciones policiacas de vigilancia, cuyos efectos repercutieron en un escaso monitoreo de las actividades ilegales, hasta ese entonces mantenidas en relativo secreto público-estatal.”

En su valioso ensayo que resume una amplia investigación editada por El Colegio de Michoacán (Maldonado Aranda, 2010), Maldonado señala otros factores que van a tener un impacto profundo en la configuración moderna del narcotráfico. Se trata del fenómeno de la migración interna, el del flujo de personas hacia el cultivo y procesamiento de drogas en serranías y cañadas, que se conjuga con la migración internacional y da cabida a rutas del narcotráfico.

Describe: “Conforme aumentan los cultivos de droga y la demanda, y se acentúan los flujos migratorios, se fortalecen las asociaciones ilegales transfronterizas e interregionales. Mediante redes familiares y de paisanaje, grupos de jóvenes y adultos pasan a formar parte de organizaciones criminales, tanto en su lugar de origen como en Estados Unidos. Esta situación se acrecienta cuando la ley Simpson-Rodino restringe el flujo de migrantes indocumentados. Muchos jóvenes que pretenden seguir la trayectoria migratoria legal de sus padres, hermanos o amigos, se enfrentan a una serie de obstáculos que los orilla a embarcarse en desafíos extralegales para construirse un mejor futuro.

“El prestigio personal es también una fuente poder-

sa para atreverse a cruzar los límites legales. Muchos de ellos obtuvieron grandes ganancias del cultivo y el tráfico de drogas con un golpe de suerte. Esto genera una percepción generalizada de que sólo por medios extralegales se puede progresar, por lo que el narcotráfico parece ser el mejor camino a seguir por quienes ven frustradas sus expectativas de construirse una vida mejor o ascender más rápidamente que otros.

“Si se recorren los narco pueblos se puede observar en la conducta cotidiana de algunas personas que el dinero juega un papel relevante por el prestigio que proporciona, como cuando, en una ocasión, durante una entrevista con un candidato a un puesto de elección popular, llegó un joven narcotraficante, acompañado de tres mujeres –a quienes trató con prepotencia–, para brindarle ‘todo su apoyo’ al candidato.”

Conocedor de Tierra Caliente, que ha recorrido por años, Maldonado señala varios pasajes que describen cómo se dan estos flujos migratorios internos determinados por la creciente economía del narcotráfico, tanto en la Sierra Sur como en la Costa Michoacana, los cuales tienen sus diferencias.

“Con las debidas reservas por la generalización, la gente afirma que durante los ochenta el cultivo de droga va ampliándose hacia terrenos lejanos para la comunicación terrestre. Esto provoca desplazamientos poblacionales a las serranías más inhóspitas para cultivar droga. Desde estos años se escucha entre los pobladores, no sin ciertas reservas, hablar de un acentuado flujo de pobladores tanto locales como fuereños hacia la sierra para cultivar droga, previo contacto con los *brokers*.

“Algunos de los narcos que acopian la droga o que sirven de intermediarios con los cárteles construyeron ostentosos ranchos, compraron tierras y ganado, mientras que familias enteras fueron expulsadas dada la vulnerabilidad social. Surgieron, así, populares anécdotas acerca de cómo grupos de campesinos ‘mal vestidos’ o ‘mugrosos’ llegaban a agencias automotrices de Michoacán en busca de camionetas último modelo, las cuales, supuestamente, compraban en dólares.

“También se cuenta que los *brokers* y los capos penetran en localidades remotas con camionetas de lujo que ofrecen a los lugareños por el cultivo de unos cuantos plantíos: ‘¿Pa’ cuántas matas te gusta esta camioneta?’. En la sierra Jalmich (Jalisco-Michoacán) “es evidente que la mariguana libró a muchos rancheros de la crisis económica desde los ochenta (...). Ha llegado a ser incluso el elemento más dinamizador de las transformaciones ocurridas en la región. Aunque a muy alto costo humano, la mariguana aportó parte de los recursos imprescindibles para abrir brechas, comprar camionetas, dándole así un segundo aliento a la economía.” (Maldonado Aranda, 2012a)

Maldonado indica que en la Costa michoacana, la siembra de la mariguana tuvo un punto máximo de producción en la comunidad indígena de Pomaro entre 1980-1984, periodo en que la siembra de mariguana sustituyó y rebasó la del maíz: antes de 1980 la pista aérea era una angosta brecha, mientras que al inicio de la década se pavimentó y es utilizada por avionetas que trasladaban droga fuera de la zona.

Advierte que los resultados de las políticas neoli-

berales y prohibicionistas en la vida de los pobladores fueron bastante dramáticos, pues en los centros urbanos la crisis de la agricultura repercutió ampliamente en la estabilidad financiera de las élites, afectando los circuitos que soportan la economía regional, los cuales fueron compensados o aprovechados por el narcotráfico, ya que las comunidades serranas y costeñas produjeron y procesaron más droga.

“En el valle de Apatzingán obtuve testimonios acerca de cómo las familias campesinas enfrentan desafíos entre la crisis agrícola y el narcotráfico. La señora Ortega, de 50 años, dueña de una tienda de dulces en un poblado rural mísero, me platica en una entrevista sus estrategias para seguir subsistiendo en el pueblo: gran parte de su familia radica en Estados Unidos, pero a ella y su esposo no les gusta la idea de irse para ‘el otro lado’.

“Comenta que han optado por sobrevivir en la localidad afrontando los retos diarios en el campo. Cuando hay temporadas en las que les va ‘muy mal’ en la agricultura, buscan contacto con *brokers* para obtener semillas de mariguana y sembrarlas en las montañas cercanas al poblado. Dice que no hay otra cosa que se pueda hacer, se queja del gobierno, de que no los ayuda a comprar semilla de maíz o frijol cuando las remesas familiares escasean. Para estas poblaciones rurales, el cultivo de mariguana en pequeñas cantidades es una ayuda para paliar sus precarias condiciones de vida.

“Sin embargo, el Ejército regularmente supervisa la región, sitia la localidad, ‘catea’ las casas y recorre las serranías en busca de plantíos. La localización de sembradíos es motivo para tomar declaraciones y realizar

consignaciones, previos golpes y amenazas. Durante los días en que el Ejército ‘catea’ el poblado, la gente escasamente sale de sus casas; evitan platicar con vecinos para no ser calificados de ‘mariguaneros’.”

De esta manera es que el negocio ilegal de la siembra, cosecha y comercialización de las drogas se convierte en sustento de los procesos de inversión legal, precisa Maldonado. Señala que, al final, los bordes entre tales esferas se volvieron indivisibles por medio del lavado de dinero, mientras que la distancia entre élites o caciques y narcotraficantes se hizo más estrecha y borrosa.

“Abundan las versiones de que después de la reforma constitucional de 1994 –que transforma en propiedad privada, mediante títulos parcelarios, millones de hectáreas de propiedad social y comunal que antes no se podían vender o arrendar legalmente–, los ejidatarios vendieron grandes extensiones en Tierra Caliente, en la Sierra y Costa michoacanas, a gente desconocida. Algunos de estos terrenos agrícolas son productivos ranchos que funcionan, además, como sistemas de vigilancia y protección de los territorios”, señala el investigador de El Colegio de Michoacán, dejando ver la posibilidad de la compra de estas tierras por transnacionales de la industria agraria o por el crimen organizado.

Con estos datos aportados por el investigador podemos ver cómo se van emparentando los distintos factores económicos, políticos y sociales que empiezan a configurar el rostro del negocio del narcotráfico en esta entidad. Faltaría añadir un elemento más, igualmente importante, que también tiene su aporte en la conformación ya no sólo del narcotráfico sino en su transfor-

mación como crimen organizado y su configuración de Estado paralelo.

El fracaso de la transición democrática, impulsor del crimen organizado

Para explicar el auge del narcotráfico en Michoacán, Salvador Maldonado asegura que las políticas de ajuste estructural y la reestructuración económica, política y social contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades, sobre todo en las drogas.

En su ensayo señala que en las transformaciones neoliberales del Estado relacionadas con cuestiones de seguridad, corrupción y protección política, “la violencia forma parte de un fenómeno más global, que tiene que ver con la desregulación económica y los cambios en los mercados informales ilegales-criminales y el mercado político. En tanto que la acumulación social de la violencia involucra la existencia de dos mercados: uno que realiza transacciones de mercancías económicas ilícitas y otro que, imitando al primero, produce y trafica con mercaderías políticas, como el clientelismo y la corrupción. Es el desequilibrio o la competencia por estos mercados y su eventual regulación lo que provoca una lucha por realizarla sobre la base del Estado”. (Maldonado Aranda, 2012a)

Estos dos aspectos, dice Maldonado, sitúan la emergencia del narcotráfico en un contexto de desmantelamiento del Estado y de desregulación económica y política con impactos severos en regiones tradicionalmente

productoras de drogas, como la Tierra Caliente michoacana, una región “donde emergió un poderoso narcotráfico regional que ha desafiado a las instituciones”.

Sin embargo, a la hipótesis de Salvador Maldonado de que el incremento del narcotráfico en Michoacán tiene raíces económicas y neoliberales, hay que agregarle las causas políticas que incidieron en este proceso de descomposición de la clase gobernante y que, de alguna manera, explican la infiltración y el crecimiento de las agrupaciones criminales locales como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que llegaron a convertirse en gobierno en al menos un tercio del territorio michoacano, principalmente en Tierra Caliente.

Estas causas tienen que ver con el fracaso de la transición democrática que el PAN no supo concretar a escala nacional y el PRD en Michoacán. Esto originó grietas y fracturas en las estructuras del gobierno, por las cuales se colaron otros grupos de poder, en este caso, el crimen organizado.

Una de las ideas que se han desarrollado luego de la decepción del PAN tras 12 años en la Presidencia de la República es que el fracaso de la transición a la democracia en México trajo consigo la formación de vacíos de poder que fueron llenados por dos grupos poderosos: los medios de comunicación –en específico las principales televisoras, Televisa y TV Azteca, que crearon la mediocracia o telecracia– y los grupos del crimen organizado que, como en el caso de Michoacán, han sido capaces de desestabilizar instituciones y establecer un Estado paralelo al Estado mexicano, creando una forma de gobierno basada en el terror y el miedo.

Esta última tesis –la del aprovechamiento del fracaso en la transición a la democracia por parte del crimen organizado– también explica, en parte, lo que ocurrió en algunos países de Europa del Este, que después de salir del yugo hegemónico de la Unión Soviética, a partir de 1989, fracasaron en sus cambios democráticos y cayeron en manos del crimen organizado que, junto con los mexicanos e italianos, es ahora uno de los más poderosos del mundo.

Para el caso de México, esta idea que planteo presupone que, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República tras siete décadas de dominio casi hegemónico, se formaron huecos o vacíos en el sistema de alianzas que integraba el gobierno priista con diversos grupos de poder muy fuertes –sindicatos, empresarios de medios de comunicación, narcotraficantes, entre otros–, que fueron desatendidos por el PAN con Vicente Fox a la cabeza.

No hubo una transición democrática en México, sino que todo se quedó en un simple cambio de partido en la Presidencia, con renovación de pactos políticos y electorales entre las cúpulas de los partidos y líderes sindicales, como fue el caso del magisterio con Elba Esther Gordillo, pero sin atender las transformaciones que exigía la sociedad en salud, educación, justicia, seguridad, vivienda y mercado laboral, esencialmente.

En esta mudanza de poderes también se perdieron los controles y pactos con los diversos grupos del narcotráfico, a través de los cuales se mantenía la paz y gobernabilidad que hoy están en entredicho en varios estados y regiones del país –donde se han creado verdaderos “Estados de emergencia” o “Estados de excepción”, como es el caso de Michoacán.

Esa “dictadura perfecta” de la que hablaba el escritor peruano Mario Vargas Llosa en realidad no lo era tanto, sino más bien se trataba de una estructura de poder porosa y débil en muchas partes, donde los cacicazgos regionales eran más fuertes, los empresarios mantenían sus cuotas, lo mismo que los líderes sindicales, líderes políticos, el narcotráfico y gobernadores.

Es por eso que cuando el PRI perdió la Presidencia de la República lo que emergió fue el poder de los gobernadores, que se comportan como virreyes dentro de su estado, y el de cárteles y agrupaciones criminales, que se funden con los grupos políticos convirtiéndose en expresiones de gobierno.

A través de esa porosidad se coló el poder de los distintos grupos del crimen organizado, que durante la etapa priista crecieron y se desarrollaron hasta llegar a los niveles de mayor fuerza con los gobiernos de Fox y Calderón. No debe sorprender entonces que en los estados donde gobierna el PRI sea donde más se desarrollaron las bandas criminales: Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Nuevo León y Coahuila.

También fueron duramente golpeados Morelos, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que en apariencia fueron gobernados por la oposición (PRD y PAN) pero que en esencia mantuvieron las estructuras heredadas por el PRI.

Habría que añadir a este panorama otro elemento que también ha tenido incidencia en la consolidación del crimen organizado y en el estancamiento de los aparatos de justicia y seguridad nacionales.

Lo que al parecer también impulsó el poder del cri-

men organizado en estos últimos años –sobre todo desde 2000, cuando Vicente Fox ganó la Presidencia– fue que en esta supuesta transición no se tocó el sistema de justicia y el aparato de seguridad nacional, lo que creó un espacio de impunidad y corrupción que abonó al rápido crecimiento de los grupos del crimen organizado en todo el país, sobre todo en estados como Michoacán. Los aparatos de seguridad nacional tradicionales, como fue la Dirección General de Seguridad, corrompida por el narcotráfico desde los setenta, fueron desarticulados previamente y en su lugar se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que, al igual que con los priistas, fue utilizado por Fox no para proveer seguridad sino como un instrumento de espionaje político.

En tanto, el resto del aparato de seguridad nacional fue puesto en manos de las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado y la disidencia social, representada por los grupos guerrilleros y movimientos populares considerados subversivos.

Siguiendo la política de prohibición dictada por Estados Unidos desde el tiempo de Richard Nixon, que implicaba el uso de la fuerza militar y policiaca para enfrentar el narcotráfico, los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y ahora del priista Enrique Peña Nieto no limpiaron ni modernizaron los sistemas de justicia y de seguridad, y tampoco elevaron el gasto social en las zonas de mayor impacto del narcotráfico, sino que se centraron excesivamente en invertir en la estructura castrense.

Así, mientras que en 2006 el gasto militar en México era de 44 mil 496 millones de pesos, un año después creció a 52 mil 235 millones; luego a 54 mil 977 millones,

y en 2009 llegó al tope de 64 mil 348 millones de pesos.

En contraste, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que en 2006 la pobreza afectaba a 42.6% de los mexicanos, en 2008 alcanza a 47.4%, tanto en el medio rural como en el urbano.

A pesar de esto, sólo para 2014 el Congreso de la Unión autorizó 60 mil 810 millones 570 mil 686 pesos para gasto militar, en detrimento de la inversión social.

La idea consustancial de esta estrategia es que mientras el Estado ejerza mayores controles en la producción y consumo de las drogas, merced al uso de la fuerza pública (policías y militares), la demanda disminuirá automáticamente. Esta tesis, sin embargo, ya mostró su fracaso desde 1929, cuando el gobierno de Estados Unidos prohibió el alcohol y el tabaco. Esto sólo generó más violencia, más consumo, corrupción y la formación y proliferación de las mafias.

El caso es que con el fracaso de la transición, la crisis en el aparato de seguridad y la estrategia militar y policiaca impuesta desde Washington basada en la política de prohibición, el gobierno mexicano enfrentó a las bandas del crimen organizado y provocó un efecto contrario al deseado, pues no los debilitó ni los desapareció, sino que abonó su expansión dentro y fuera del país. Al mismo tiempo multiplicó el número de grupos criminales y los hechos delictivos, con la consecuencia de decenas de miles de muertos y desaparecidos desde 2006, cuando Felipe Calderón lanzó su guerra al narcotráfico con la llamada Operación Conjunta Michoacán. Inicialmente le destinó un presupuesto de mil 600 millones de pesos y destacamentó a 7 mil soldados y policías en la entidad.

Sólo para sopesar el número de víctimas: desde la guerra cristera de 1926 y 1929, cuando según cifras extraoficiales murieron 150 mil mexicanos, no se tenía un número tan alto de víctimas en el país en un periodo tan corto de tiempo. Se estima que en la actual guerra, de 2006 a 2014, ha habido 120 mil muertos y 50 mil desaparecidos. Esta cifra resulta más preocupante si los comparamos con los 15 mil muertos que dejó la dictadura chilena de Augusto Pinochet y la argentina de los años setenta, con 30 mil muertos y desaparecidos.

La grave situación en Michoacán es producto también de la descomposición política y social que se ha alcanzado en la última década y de la profunda crisis del Estado mexicano –en particular Michoacán–, pues la propia entidad vivió su propio proceso de fracaso de transición democrática, que igualmente fomentó la aparición de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Estas bandas se infiltraron hasta lo más profundo de las estructuras de gobierno, cooptando incluso al exgobernador interino Jesús Reyna, preso por sus vínculos con Servando Gómez *La Tuta*, líder de los Templarios.

Después de haber sido gobernador por el PRI desde la fundación de ese partido, en el año 2002, por primera vez, arribó al gobierno del estado Lázaro Cárdenas Batel, un político que no era del PRI aunque su abuelo Lázaro Cárdenas del Río, su padre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su tío Dámaso Cárdenas del Río fueron gobernadores priistas.

Lázaro Cárdenas Batel, propuesto por el PRD, gobernó Michoacán de 2002 a 2008, y de acuerdo con políticos michoacanos con él empezaron a formarse y fortalecerse

grupos criminales locales como La Empresa y La Familia Michoacana. Luego siguió otro gobierno perredista, encabezado por Leonel Godoy, que sólo gobernó cuatro años –de 2008 a 2012. En este lapso surgieron Los Caballeros Templarios.

El cambio de partido en el gobierno no tuvo consecuencias democráticas y menos en los cacicazgos formados por décadas en las zonas de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha. Durante esa década los dos gobernadores surgidos del PRD no tocaron los poderes caciquiles, que se mantuvieron y mezclaron con el crimen organizado. Las bandas sentaron sus reales y se robustecieron hasta el grado de imponer presidentes municipales, jefes de policía, legisladores e impulsar la campaña del exgobernador priista Fausto Vallejo –que se separó del cargo por “motivos de salud”.

Rebasados por estos poderes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy pidieron al presidente Felipe Calderón que interviniera con el Ejército en Michoacán. Tras el ataque del 15 de septiembre de 2008, cuando supuestamente Los Caballeros Templarios hicieron estallar unas granadas de fragmentación entre la gente que había asistido a la celebración de la Independencia, en Morelia, la militarización se acrecentó. Después, con el famoso *Michoacanazo*, del que hablaremos más adelante, se trató de dar un golpe político al perredismo michoacano para allanarle el camino a la gubernatura a la panista Luisa María Calderón *Cocoa*, hermana del primer mandatario.

La militarización de Michoacán –sin resultados positivos– se dio precisamente durante las administraciones perredistas y, especialmente, con Leonel Godoy. En su

cuatrienio el cártel de Los Caballeros Templarios se infiltró hasta lo más profundo de las estructuras del gobierno y de las familias de la clase política. El ejemplo más claro es el de Julio César Godoy Toscano, medio hermano del entonces gobernador perredista, quien fue desaforado como diputado federal, acusado de ser parte de este grupo comandado por *La Tuta* y *El Chayo*.

La fragilidad del andamiaje político y de gobierno de Michoacán en los últimos 25 años, con el fracaso de la transición democrática tanto a nivel federal como estatal, aunada a la alta corrupción de la clase política michoacana y a las reformas neoliberales que comenta el investigador Salvador Maldonado dio lugar al auge y fortalecimiento del crimen organizado en la entidad, sobre todo en Tierra Caliente.

CAPÍTULO 2.
UNA FORMA DE VIDA EN MICHOACÁN

El sur de Michoacán: Las primeras semillas

Dice el profesor Guillermo Vargas Uribe que el uso de estimulantes en Michoacán es muy viejo, que viene desde la época prehispánica y hay registro del uso de marihuana y amapola como plantas silvestres, a la postre cultivadas en varias regiones del estado.

En su trabajo *Michoacán en la red internacional del narcotráfico*, el investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Vargas Uribe, 1993) apunta que, en el Calendario Botánico de Michoacán, de finales del siglo XIX, el doctor Miguel Tena “reporta el uso de marihuana con fines artesanales en los distritos de Morelia y Tacámbaro, y el cultivo de la amapola como planta de ornato en Zamora y para usos farmacéuticos en Pátzcuaro”.

Acerca del cultivo con fines comerciales, señala que es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando surge debido a la demanda de Estados Unidos, que empieza a hacerse notoria a partir de la postguerra. Como ejemplo de esto, indica que en la investigación hemerográfica encontró la primera referencia al narcotráfico en Michoacán en el diario *El Sol de Morelia* el 26 de octubre de 1952, cuando se descubrió un “escandaloso tráfico de enervantes” en San Antonio Obispo (en realidad se trata de San Nicolás Obispo, comunidad agraria ubicada al suroeste de la ciudad de Morelia). Ahí se encontró a un hombre en posesión de “diez cartuchos de marihuana”. En 1956, en tanto, se hizo otro decomiso en la población de Aguililla. Se confiscaron enervantes con valor de 6.5 millones de pesos.

Desde hace más de medio siglo las semillas del nar-

coetráfico están diseminadas principalmente en el sur de la tierra michoacana. Esa zona comprende las regiones de Tierra Caliente, Costa y una parte de la Sierra Madre Sur. Aquí es donde se ha concentrado buena parte de la economía agrícola de Michoacán, con la concomitante formación de cacicazgos y terratenientes poderosos y la generación de grupos del crimen organizado que se disputan la producción de marihuana y amapola, sobre todo porque la entidad colinda con Colima y Jalisco y tiene la salida natural de drogas sintéticas hacia Estados Unidos por el puerto de Lázaro Cárdenas.

En esta región es donde, el 24 de febrero de 2013, surgieron los grupos de autodefensa ciudadana.

No es casual, entonces, que en esta zona se haya presentado el conflicto armado o la guerra entre el gobierno federal, los grupos del crimen organizado y las autodefensas, Salvador Maldonado describe muy bien esta región de Michoacán en *Transición política, seguridad y violencia en México* (Maldonado Aranda, 2012b): “Se distingue por una larga historia de conflictos entre el Estado y las poblaciones, indígenas por el lado de la Costa del Pacífico y rancheras por el lado de la Sierra. El sur de Michoacán tiene una larga y complicada historia en el cultivo y tráfico de drogas, con intervenciones asistenciales escasas y quizá fallidas. En la Tierra Caliente se desarrolló una economía agrícola de grandes dimensiones conectada a procesos transnacionales, luego de que el Estado desarrollista decidió transformar las abandonadas tierras fértiles en campos de cultivo de frutas y hortalizas para la exportación.

“Paralelamente, la transnacionalización agrícola dio lugar a una internacionalización más ágil y exitosa del

narcotráfico. Sin embargo, tan pronto como el Estado abandonó sus programas de asistencia social y económica en la década de los ochenta, los grandes capitales privados revirtieron el modelo asistencial e impusieron nuevas prácticas de dominación.

“La crisis del campo y las inversiones agrícolas posibilitaron un mayor aumento de cultivos ilegales. En los años noventa, el fenómeno de la migración internacional, que había sido un soporte significativo para aquellas familias excluidas del modelo económico, sufrió un gran impacto con las reformas a las leyes migratorias aprobadas por Estados Unidos. Así, la crisis del campo agrícola, el retiro del Estado y sus programas de apoyo y la crisis de la migración internacional afectaron grandes poblaciones, cuyo saldo es el de una mayor marginación social, como veremos más adelante. En estas circunstancias el narcotráfico creció de manera sorprendente.”

El crecimiento del narcotráfico llegó a ser tal en Apatzingán que, según el sacerdote Gregorio López, vicario de la catedral de esta ciudad, más de 30% de la población era parte de Los Caballeros Templarios. Mientras que en Arteaga, el pueblo natal de Servando Gómez *La Tuta*, jefe de este grupo criminal, casi todo el pueblo lo protegía y obtenía dinero de parte del capo.

Tierra Caliente

Para el historiador José Luis González y González la región de Tierra Caliente “es un país tropical, un medio de mala reputación, distante de las rutas máximas del tráfico mer-

cantil. Está fuera de camino”. (González y González, 2001)

Por siglos esta región del país fue inhóspita e inaccesible por su difícil situación geográfica, poblada de serranías y barrancas que impedían la construcción de buenos caminos. A esto se sumó el desinterés gubernamental para impulsar su desarrollo. “Por su débil situación respecto de las veredas del hombre, se le estampó el epíteto culto de Última Tule y el apodo de fondillo del mundo”, señala José Luis González, quien recuerda que incluso se le llegó a catalogar como “un estuche de horrores”.

Tal era el abandono de la zona que, según un “inspector” que visitó la zona en el siglo XVIII, los calentanos eran considerados “obtusos, inquietos, insubordinados, ebrios, traidores, holgazanes, inclinados a la lujuria desenfrenada, tahúres, ignorantes y supersticiosos”. (González y González, 1991)

No es casual que este rincón abandonado fuera el refugio de los rebeldes desde hace siglos. Hace 200 años, en 1814, el general José María Morelos y Pavón decretó la Constitución de Apatzingán configurando el perfil soberano de México. Durante la guerra de Independencia y en los tiempos posteriores, la región fue refugio de los ejércitos rebeldes y sus caudillos. Morelos incluso celebró misas en las iglesias de algunos pueblos como Nuevo Urecho, donde en la plaza hay una imagen del llamado Siervo de la Nación. Los habitantes les dieron acogida y alimentos, construyendo un perfil social de rebeldía.

Pero dada su lejanía, difícil acceso y abandono por parte del gobierno central, también se convirtió en refugio de los bandidos de aquella época y de la actual.

El investigador Salvador Maldonado cita al respecto:

“En parte, caciques y hacendados ejercieron su dominio utilizando ejércitos particulares contra la rebelión y los asaltos, y contra la intervención del centro político nacional. Así es como surgieron soberanías paralelas, pues nada menos que una gran parte del territorio del sur estaba controlada por cinco haciendas hacia el siglo XIX. Fuentes históricas señalan que es muy probable que durante ese tiempo se haya generalizado el cultivo de droga junto con la explotación minera, paliando las extenuantes jornadas de trabajo y aislamiento. Con todo, la región fue terreno fértil para todo tipo de comercio ilegal de madera, tabaco, animales, armas y drogas”. (Maldonado Aranda, 2012b)

Tierra Caliente está ubicada en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Arteaga, Coalcomán y Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana. Está rodeada por la Sierra de Jalisco y Michoacán, la Meseta Purépecha y la Sierra Madre del Sur, y colinda con los estados de Jalisco y Colima al norte, y al sur con Guerrero. Tiene caminos que la comunican con la costa, principalmente con el puerto de Lázaro Cárdenas.

Toca tres estados: Michoacán, Estado de México y Guerrero. En esta región se han creado zonas dominadas completamente por el crimen organizado, por lo que se le ha llamado “pequeño triángulo dorado”, en alusión al gran triángulo dorado del narco mexicano, formado en la serranía que hay entre Sonora, Durango y Sinaloa.

Señala Maldonado: “La reputación de la región como una zona periférica, malsana, indomable e indolente siguió reproduciéndose hasta principios de siglo XX. Sin embargo, dicha reputación volvió a adquirir predominio público con la emergencia de una zona narcotizada y, en

los últimos años, por ser presa de una gran violencia en todos los niveles y desde todas las trincheras. Hacia mediados de siglo XX, el narcotráfico comienza a dominar gran parte de la economía y probablemente la política regional, generando una de las transformaciones más significativas a nivel económico, político y espacial.

“Por un lado, la Tierra Caliente, situada a unos 400 metros sobre el nivel del mar, se especializa en la producción agrícola nacional e internacional, cuya ciudad más importante, Apatzingán, alberga las principales oficinas de gobierno, agroempresas y residencias de los ricos empresarios, ejidatarios y narcotraficantes. Como esta franja bordea la Sierra Madre del Sur, muchas localidades se convirtieron en narcopueblos cada vez más peligrosos y situados al margen del Estado”. (Maldonado Aranda, 2012b)

Sierra Sur y la Costa

Partes de esta zona estratégica para el narcotráfico son también la Sierra Madre del Sur, que corre de este a oeste por todo Michoacán, Guerrero y Jalisco. Se trata de una región llena de caminos secundarios y veredas que sólo los que nacieron ahí conocen, y que forman una amplia red de comunicación por donde se realiza de manera continua y sin problemas el trasiego de la droga.

Este territorio es rico en madera, fauna y flora, y ha sido el que menos atención ha recibido con proyectos de infraestructura, sea en caminos de terracería, carreteras asfaltadas, escuelas, hospitales u oficinas de gobierno.

A contrapelo de esta desatención oficial, lo que hi-

cieron los narcotraficantes fue construir un buen número de pistas aéreas para mantener mejor comunicación y traficar estupefacientes.

Las deficiencias, dice Salvador Maldonado, también fueron “compensadas” por otros servicios como televisión satelital, teléfonos celulares, camionetas de lujo, luz de energía solar y bienes de una modernidad efímera, haciendo de los municipios que integran la región los más emblemáticos de los narcopueblos, ya que son puerta de entrada a la Sierra, cuyos sinuosos caminos hacia las comunidades más pequeñas sólo son transitables en tiempo de secas.

La otra franja que integra esta región estratégica es la llamada Costa Michoacana, donde habitan pueblos nahuas. Es el caso de Aquila, que por mucho tiempo resistió invasiones mestizas, hasta que en el siglo XX ya no aguantó. El territorio siguió disputándose por el desplazamiento de sociedades rancheras en terrenos comunales comprados o tomados a la mala, señala Maldonado.

El investigador explica que el municipio de Lázaro Cárdenas se transformó en uno de los centros estratégicos para el cultivo y tráfico de droga. Es la puerta de entrada y salida hacia la Sierra y salida a la Costa del Pacífico, y embarcaciones sudamericanas han sido interceptadas en sus costas.

De ahí que, paradójicamente, algunas comunidades rechazaron la construcción de brechas de terracería como parte de proyectos de explotación minera y maderera, pero exigieron otros servicios, como educación o salud.

El académico detalla: “Varias comunidades indígenas entraron al cultivo ilegal por ciclos económicos u oportunidades políticas, pero siempre manteniendo agudos conflictos agrarios con los mestizos por pretender privatizar la tie-

rra, arrendarla para sembrar droga o porque ellos mismos la cultiven. Algunas localidades específicas se convirtieron en puertas de entrada y salida de enervantes, sobre todo cuando la droga se transportaba por lanchas bajo ríos permanentes o a lomo de mula hacia la costa. Estas localidades adquirieron mayor relevancia cuando se construyen redes de ferrocarril y, en los ochenta, con la carretera federal que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Zihuatanejo, edificada a partir del proyecto de construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y la ciudad del mismo nombre.

De esta manera, agrega, la economía de la droga construyó una ciudadanía al margen del Estado, aunque profundamente relacionada con el establecimiento de normas locales para la eventual solución de algún conflicto, lo cual contribuyó a generar huecos cada vez más hondos entre la ciudadanía y el Estado, sobre todo cuando el Ejército se ocupa de campañas de erradicación de enervantes y realiza aprehensiones.

Concluye: “El uso de la violencia como estado de excepción es una práctica desde hace varias décadas en la región michoacana, que conllevó a generar mayores conflictos y distanciamiento hacia y desde las instituciones”. (Maldonado Aranda, 2012b)

Lázaro Cárdenas, el narcopuerto

Lázaro Cárdenas es uno de los puertos más importantes del país por el comercio con las naciones asiáticas. Por ahí salen toneladas de tierra con minerales como hierro no procesado rumbo a China y entran otras cantidades enormes de

insumos químicos para la elaboración de droga sintética.

Un cable de la agencia Notimex, citando datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), asienta que en 2013, en Lázaro Cárdenas, se realizaron 91 mil 296 operaciones de comercio exterior.

El valor de las importaciones ascendió a poco más de 121 mil 825 millones de pesos y, el de las exportaciones, a 43 mil 182 millones. Dichas operaciones representaron una recaudación de más de 16 mil 556 millones de pesos.

El valor de las importaciones asciende a poco más de 121 mil 825 millones de pesos, y el de las exportaciones a 43 mil 182 millones, lo que dio un movimiento total de más de 165 mil millones de pesos en 2013. Dichas operaciones representan impuestos por más de 16 mil 556 millones de pesos, por lo que esta aduana marítima se encuentra en el número cuatro a escala nacional en recaudación tributaria. En el recinto portuario diariamente se realizan operaciones comerciales con 41 empresas privadas y entidades públicas como Pemex y la CFE.

Desde 2008 los grupos del crimen organizado de Michoacán empezaron a realizar el negocio millonario de la minería con empresarios de China. Según cifras oficiales, la cantidad de hierro exportada a ese país se cuadruplicó entre 2008 y la primera mitad de 2013, llegando a 4.6 millones de toneladas por año. Este aumento se vivió precisamente durante el periodo en que La Familia y luego Los Caballeros Templarios afianzaron su control sobre Michoacán.

En 2008, por Lázaro Cárdenas pasaba sólo 1.5% de las exportaciones de hierro mexicanas a China; para mediados de 2013, por el puerto pasaba casi la mitad de esas exportaciones. En 2010, la PGR calculó que los cár-

teles enviaron por ahí, ese año, 1.1 millones de toneladas de mineral de hierro extraído ilegalmente.

El *boom* de la minería ilegal en Michoacán sigue y se han cuadruplicado las exportaciones del mineral en sólo seis años: de 1.5 millones de toneladas en 2006 a 4 millones de toneladas en 2012.

El cártel de Los Caballeros Templarios ha hecho de este lugar uno de sus principales negocios. Desde que hace una década se abrió a los barcos de gran calado, Lázaro Cárdenas comenzó a competir con otros puertos del Pacífico como Manzanillo y Los Ángeles, California, para recibir las mercancías asiáticas y –evidente aunque ilegalmente– para mandar drogas hacia Estados Unidos.

Sólo el 4 de noviembre de 2013 el gobierno mexicano decidió poner en manos del Ejército la ciudad de Lázaro Cárdenas, por donde, desde hacía seis años, se traficaban miles de toneladas de droga sintética y minerales de Michoacán –el estado que produce más hierro, metal fundamental para la economía china.

Días después de que la Marina interviniera, el gobernador Fausto Vallejo estimó que el valor de los negocios ilegales de Los Caballeros Templarios en torno a Lázaro Cárdenas podía ascender a unos 2 mil millones de dólares al año, cerca de la mitad del presupuesto de Michoacán en 2012.

Se calcula que casi la mitad de la actividad minera en la zona fue realizada sin los permisos adecuados en 2013. El hierro no procesado se vende a operadores chinos a 32 dólares por tonelada, lo que dejaba una ganancia de cinco a siete dólares por tonelada. Según cálculos de algunos mineros michoacanos, en China se podía vender el mineral con una ganancia de casi 15 dólares por tonelada.

El país asiático produce cerca de 45% del acero en el mundo y consume poco más de 46%, según los datos más recientes de la Asociación Internacional del Acero. A pesar de que hubo un descenso de precios de 187 dólares por tonelada en 2010 a casi 151 a finales de 2013, esto no aminoró el negocio de los grupos delictivos y los mineros chinos en Michoacán.

Servando Gómez *La Tuta* encontró en la industria minera un negocio tan próspero como el de las drogas. Una investigación de la agencia de noticias Reuters reveló en 2013 que el jefe de Los Caballeros Templarios reunió en su pueblo natal Arteaga, ubicado a una hora del puerto, a cientos de camiones para transportar miles de toneladas de mineral no procesado.

“Gómez comprendió el potencial de Lázaro Cárdenas, apenas conocido por sus cocoteros, hasta que hace 40 años el gobierno decidió construir fundiciones siderúrgicas. Los camiones de la banda (templaria) se movieron rápidamente por las minas de hierro de Michoacán para satisfacer la demanda china, lo que contribuyó a aumentar las exportaciones del mineral a 4 millones de toneladas hasta octubre, desde entre 1 y 1.5 millones de toneladas en años anteriores”, señaló Reuters.

“El negocio se apoya en varios pilares, según testimonios de funcionarios locales, mineros y empresarios. En primer lugar, Los Caballeros Templarios controlan el movimiento del mineral. Tras volverse el grupo dominante en la ciudad hace algunos años, el cártel exigió a las cooperativas locales de transporte pagos a cambio de protección. También ayudaron a los extractores locales a apropiarse de áreas mineras que no habían sido

reclamadas por otros o estaban fuera del control de los propietarios de concesiones existentes. Luego de eso, Los Caballeros exigieron su cuota.” (Graham, 2014)

El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en tres ocasiones en 2013. En su visita a México en junio de ese año, firmó una serie de acuerdos de cooperación económica. Todo indica que los gobiernos de ambos países quieren cerrar los ojos ante las relaciones entre el crimen organizado mexicano y las mineras asiáticas. Así, este negocio sigue funcionando a pesar de la presencia de las fuerzas armadas.

El poder de Los Templarios en Lázaro Cárdenas sigue presente. Aunque los empresarios y comerciantes guardan silencio, pagan cuota como lo hacen los chinos para sacar el mineral no procesado.

Apenas en marzo de 2014, el gobierno federal realizó un operativo en el que incautaron mineral y maquinarias pesadas con un valor de aproximadamente 15 millones de dólares, según datos oficiales.

Al dar a conocer la operación, el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, designado por el presidente Enrique Peña Nieto, reconoció que la minería ilegal en esta entidad generó ganancias a los narcos de al menos 28 millones de dólares solamente en 2013.

Más recientemente, el 30 de abril en el puerto de Manzanillo, Colima, la Marina interceptó un barco que transportaba desde Lázaro Cárdenas, de manera ilegal, más de 68 mil toneladas de mineral de hierro

Castillo Cervantes dijo que el metal era producto de las actividades ilícitas de Los Caballeros Templarios. In-

formó que fue a través de una llamada anónima como se enteraron de su existencia.

El líder de las autodefensas ciudadanas José Manuel Mireles reveló al reportero que fueron ellas las que informaron de este cargamento, y también de que estaban usando empresas mineras fantasma para aparentar la extracción legal del mineral. La compañía que operaba la embarcación, Jian Hua, no pudo probar que el mineral fue extraído legalmente en México.

Según las autoridades, más de 200 mil toneladas de mineral de hierro han sido decomisadas en los meses recientes. La mayoría estaba destinada a China.

Zona estratégica

Como podemos ver, el sur de Michoacán es considerado una región estratégica para todos los cárteles de la droga, porque presenta las condiciones idóneas para el trasiego de cocaína y metanfetaminas, para la producción de marihuana y goma de opio, así como por su riqueza en minerales y productos agrícolas como el aguacate, que algunos llaman “el oro verde”.

Dada la geografía de Tierra Caliente y con base en los operativos realizados por la PGR y el Ejército, se sabe que los narcotraficantes michoacanos cuentan con varias rutas para mover los enervantes. Para llegar al mar la droga se lleva a través del río Coalcomán y de ahí es trasladada hasta el Pacífico, a Punta Tejuapan o a San Juan de Alima y trasladada a Colima –a El Paraíso o La Mascota. Se sube a un avión y finalmente se entrega en

Estados Unidos, bien en California o en Arizona.

En todo el sur michoacano, desde Huetamo hasta Pihuamo, hay decenas de pistas de aterrizaje, varias de ellas han sido detectadas y desmanteladas, pero otras siguen operando.

Hay elementos de investigación que hacen suponer que la droga también es trasladada por carretera a través de Guanajuato. En 1999 había dos rutas seguidas por los traficantes de opiáceos michoacanos: rumbo a San Luis Potosí y Monterrey, para alcanzar, al fin, Miami, o llegar a la sede del Cártel del Golfo en Matamoros y Laredo y enfilarse a Texas, Illinois y Michigan, donde existe el mercado de consumidores más rico del planeta.

Por esto, a partir de la década de los noventa y del 2000, Michoacán se convirtió en un jugoso pastel para los cárteles de las drogas. Cada cual tiene su succulenta tajada, pero los predominantes son los grupos locales. A la cabeza están Los Caballeros Templarios, fundados por Nazario Moreno *El Chayo* o *El Doctor*.

Además de las rutas terrestres están las marítimas. Información oficial consigna que de La Tupitina, entre los municipios de Lázaro Cárdenas y Aquila, han salido submarinos cargados con cocaína, así como lanchas con doble motor fuera de borda. Se dirigen hacia La Paz, Baja California Sur, según relatan fuentes de la Secretaría de Marina. Hoy, La Tupitina es una base de la Armada de México.

Michoacán produce, en la Sierra Madre Sur Occidental, la Costa y Tierra Caliente, drogas sintéticas como efedrina, crystal y crack –el que dicen se inventó en la tierra de Los Templarios, Apatzingán, según fuentes de inteligencia.

En Aguililla, Coalcomán, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Tepalcatepec y Sierra de Tumbiscatío se produce amapola.

Reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indican que tropas de la 21 y 43 zonas militares detectaron y destruyeron decenas de laboratorios clandestinos de heroína (o *chiva*), lo que ubica a la entidad en primer lugar en cantidad de narcolaboratorios, arriba de Jalisco y Sinaloa, según informó la PGR en un informe del 28 de febrero de 2013.

Uno de los casos más trascendentes al respecto sucedió el jueves 25 de octubre de 2012, cuando soldados del 12° Batallón de Infantería de la XXI Zona Militar hallaron y destruyeron una millonaria fábrica de crystal. Allí se aseguraron tres toneladas del enervante, cuyo valor en el mercado habría sido de unos 300 millones de pesos. La narcococina estaba oculta en la serranía del poblado Piedras de Lumbre, en el municipio de Morelia.

Datos de la 21 Zona Militar indican que en 2012 se echaron abajo 21 narcolaboratorios, se incautaron mil 500 kilos de “afa”, que es la sustancia precursora del crystal; 60 mil litros de otras sustancias químicas, 14 kilos de agentes químicos y cinco mil 845 kilos de crystal, lo que representó una merma para el crimen de más de un billón 461 millones 250 mil pesos, ya que el kilo de este narcótico cuesta alrededor de 250 mil pesos.

Fuentes cercanas a la milicia revelaron que la mayoría de las “cocinas” halladas en Michoacán han sido de tamaño mediano. La más grande fue la destruida en Piedras de Lumbre. Estos centros se ubican principalmente en zonas boscosas y de difícil acceso, y la región

preferida por los maleantes para instalarlas es la Meseta Purépecha.

Un mando militar comentó que los productores instalan las narcococinas en sitios boscosos, para evitar que sean detectadas por los patrullajes aéreos del Ejército, y lejos de centros poblacionales, para que el fuerte olor no las delate.

Los “cocineros” provienen de lugares diferentes a donde se instala el “centro de fabricación”, trabajan sólo una vez cada mes para no llamar la atención y pernoctan en los narcolaboratorios. Además, su expectativa de vida es muy corta, pues el contacto con los diferentes químicos nocivos repercute en su salud.

La PGR señaló que en 2012 se desmantelaron 938 laboratorios clandestinos, 83 de los cuales eran utilizados para la elaboración de metanfetaminas. En Michoacán ocurrieron 388 de los aseguramientos; en Sinaloa, 225, y en Jalisco, 177.

Informes de la Secretaría de Marina (Semar) revelan que el crimen usa los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima –los más importantes del Pacífico– para recibir los precursores químicos que vienen de China y Holanda. Así, los cárteles fabrican sus propios narcóticos de una forma más económica y “en casa”.

De este modo, la Sedena detectó que la creación de estas fábricas aumentó hasta 1,200% y desplazó el cultivo y siembra de mariguana y amapola.

De ahí vino la disputa que sostuvieron el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y La Resistencia contra Los Coroneles, el Cártel del Golfo, Los Templarios y La Federación de Sinaloa, a partir de 2012.

Según fuentes de inteligencia, Los Zetas pudieron haber formado entonces una alianza con el CJNG y La Resistencia –hoy unidos con el Cártel del Milenio– así como con La Familia Michoacana, ya que así reforzarían sus controles e influencia en las rutas principales de Jalisco (Zapopan, Ciudad Guzmán y Guadalajara), Michoacán y Colima.

De junio de 2013 a mediados de 2014, la guerra por el control de los territorios michoacanos en los límites con Jalisco, Colima, Guanajuato y Guerrero, dio como resultado 415 homicidios dolosos y el decomiso de 223 armas de fuego, según fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán (PJEM).

Los Caballeros Templarios, por su parte, se organizaron de una forma peculiar para resistir los embates de sus enemigos: se dividieron igual que la PJEM, es decir, en siete subregiones, cada una de ellas con un jefe. Aunque a inicios de 2013 controlaban 81 municipios, a mediados de 2014 solamente tenían poder en 41 de ellos, tras la aparición de las autodefensas en Tierra Caliente.

Acorde con esos análisis, la Familia Michoacana controla 18 municipios, de la entidad, varios del Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Querétaro. Nueva Generación dominaba 13 demarcaciones desde Jiquilpan hasta La Piedad, en los límites de Jalisco y Guanajuato.

En septiembre de 2014, la PGR admitió que Los Caballeros Templarios seguían operando en Michoacán, con lo que contradujo anteriores declaraciones oficiales en el sentido de que, en la entidad, ya no actuaba esta banda del crimen organizado.

CAPÍTULO 3.
EL MODELO MICHOACANO
DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los primeros narcos

Luisa María Calderón, senadora por el PAN y hermana del expresidente Felipe Calderón, recuerda en entrevista que la historia de las drogas en Michoacán se remonta a las guerras mundiales.

Personalmente ella constató la situación en 1986, cuando participó en la campaña de “un candidato a gobernador”. Era pública la existencia de campesinos dedicados a la siembra y comercialización de droga en territorios que ya eran considerados peligrosos:

“Nos decían que no fuéramos solos a esas partes, que no llegáramos solos, que ahí había que viajar en convoy para protegerse. Nosotros no entendimos por qué. Llegamos a la plaza de un pueblo en Tierra Caliente y había un chiquillo que tendría unos 13 años con un enorme aparato de sonido, una camioneta de rines de magnesio y un cuerno de chivo. Decía que no iba a la escuela, que él trabajaba moviendo macetas (con amapolas) hacia donde estaban los rayos del sol, luego veíamos a los chiquillos con los dedos negros de estarle quitando la goma a las amapolas.

“Desde entonces se siembra en aquella zona. Luego, en los ochenta, también recuerdo que empezaron a secuestrar a mucha gente. Decían que en tiempo de estío el negocio se equilibraba con secuestros. Empezaban los secuestros de gente adinerada en municipios pequeños, como en Ario de Rosales, pero también en Uruapan, Aguililla. Cuando íbamos a Lázaro Cárdenas ponían en fila a los autobuses, bajaban a la gente, le quitaban las cosas, había violaciones. Así que no es un tema nuevo, tiene muchos años.”

Otros registros históricos señalan que a finales de los ochenta el control de la narcoproducción lo detentaba un hombre llamado Manuel Salcido Auzeta o Azueta *El Cochiloco*, quien dio paso a las bandas que siguen vigentes.

En 1988 *El Cochiloco* se encargaba de comprar casi toda la mariguana a los productores de la zona. En ese entonces la producción anual de enervante rondaba las 529 toneladas. En 1990 llegó a 600 toneladas.

Sin embargo, en 1991 –año en el que fue asesinado *El Cochiloco* en Guadalajara– la producción bajó a 106 toneladas. En 1993 los productores de mariguana se reorganizaron y traficaron a otros niveles, con otros compradores. Ese año la producción estimada fue de 379 toneladas.

Uno de los narcos que abrió caminos internacionales, recuerdan los vecinos de Uruapan, fue Salvador Alcázar, quien 1990 se conectó con dos narcos originarios de Miguel Alemán, Tamaulipas: Juan y *July* García.

Con ellos logró internar varias toneladas de mariguana a Estados Unidos, vía Texas. Pasaban por Falcon Heights, después las trasladaban por carretera a Hebroville y de ahí, en avión, la droga era distribuida a todo el país.

Salvador Alcázar trabajó con los hermanos García durante dos años, hasta que tuvo un infarto por sobredosis de cocaína en 1993, del cual logró reponerse. Se asegura que el médico que lo atendió le advirtió que si volvía a drogarse podría morir. Ese mismo año, sin embargo, en una bodega en Miguel Alemán, Tamaulipas, poco antes de un enfrentamiento contra una banda rival, lo volvió a hacer, cayó fulminado y así fue traslado por sus guardaespaldas a un hospital en Roma, Texas, en donde falleció.

A partir de la aparición de *El Cochiloco* se desarrollaron los grupos de narcotraficantes más poderosos en la entidad. Estos “minicárteles” produjeron más de cinco millones de toneladas de la yerba en los últimos 20 años –en promedio 250 toneladas por año– y lograron ingresos de cinco mil millones de pesos, según el documento *Michoacán en la Red Internacional del Narcotráfico*, elaborado por el maestro en Economía e investigador Guillermo Vargas Uribe.

En los registros policiales están identificados los grupos que operaban entre las décadas de los ochenta y noventa: el primero fue el de los Valencia –Fernando y Manuel–, que operaba en Uruapan, traficaba cocaína y estaba relacionado con los Arellano Félix, ya que un hijo del primero de ellos, cuyo nombre es Christian, mantuvo relaciones sentimentales con una mujer de esa familia.

Otra banda se denominaba *Los Chelos*, encabezada por José Valencia y su hijo del mismo nombre, que operaban en Zamora. *El Chelo* fue aprehendido en Nayarit por asesinar a un familiar.

También estaban los hermanos Luis y Miguel Pulido en el municipio de Apatzingán, quienes conformaban otra organización importante. Igualmente operaban *Los Naranjos*, cuya cabeza era Luis Naranjo. Producían y traficaban principalmente mariguana.

Otra banda, dedicada primordialmente a proveer de gatilleros a los narcos de la zona –y que tuvo en su haber más de 40 homicidios– era la de Los Gaytán Ambriz, encabezados por Orlando, Ismael, Everardo y Rangel Gaytán, del municipio de Turicato. El grupo fue desman-

telado cuando sus integrantes fueron detenidos en Jalisco y en Michoacán.

Una agrupación más pequeña nacida en Michoacán a mediados de los ochenta –y que en algún momento tuvo el respaldo de los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva– fue Los 30.

Indagatorias de la PGR (averiguación previa AP/PGR/MICH/M-1/227/2007) indican que este grupo se inició en Tierra Caliente y se enfrentó al Cártel del Golfo.

La gavilla de Los 30 se hacía llamar también Los Tapanco, y tenía presencia en cinco municipios de Tierra Caliente: Turicato, Tacámbaro, Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo. Se dedicaba al asalto, secuestro y a los homicidios pagados. En los noventa arrancaron con el tráfico de drogas, y en 1993 fue la responsable de asaltar la cárcel de Tacámbaro para liberar a un narcotraficante rival, a quien asesinaron de más de 100 balazos.

Por más de 15 años tuvieron el dominio en los municipios mencionados, hasta la desaparición de su dirigente, Alfredo Méndez *El Ingeniero*, quien mantenía una sociedad con el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix. Su influencia llegó hasta Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, donde disputaron el control al Cártel del Golfo.

Flavio Rodríguez Espino, quien se quedó como cabecilla, fue detenido el 9 de diciembre de 2006, en la víspera del arranque de la Operación Conjunta Michoacán. Fue trasladado a la Ciudad de México y estuvo preso cuatro meses; regresó a Turicato, donde tiene su centro de operaciones. En la PGR arrancó una investigación interna, ya que se desconocen los motivos de su liberación.

Los Valencia, señores de ultramar

El pueblo de Aguililla se encuentra en uno de los últimos rincones del sur de Michoacán. Hoy es una comunidad dedicada a la extracción de minerales que son explotados por los consorcios de China. Ahí, todos los días, desde que amanece hasta el atardecer, cientos de camiones de carga recorren las carreteras polvosas que llevan a los ejidos de donde se extraen miles de toneladas de minerales. Después, todos los caminos conducen al puerto de Lázaro Cárdenas y, de ahí, el hierro es llevado al continente asiático.

La plaza central del municipio no tiene ningún atractivo si sólo se miran los comercios de ropa, alimentos y aguas de frutas. Pero si la mirada se dirige hacia arriba y se fija en la cúpula de la iglesia, un destello dorado puede cegar los ojos por unos instantes. “Es un reloj de oro que regalaron Los Valencia”, comenta un habitante del lugar que vio nacer el primer grupo del narcotráfico en Michoacán.

El brillo del reloj es apenas un vestigio de los “buenos tiempos” que vivieron Los Valencia en los noventa, cuando se asociaron con el Cártel del Valle del Norte de Colombia y, en México, con los cárteles del Golfo, Sinaloa y Colima para el traslado de cocaína, mariguana, amapola y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Antes de que en 1999 se revelara la existencia de Los Valencia, merced a una operación conjunta entre Estados Unidos, Colombia y México, poco o nada se sabía de la historia de este grupo. Algunos sitúan sus orígenes en la década de los setenta, con el trasiego minoritario de mariguana. Empero, sólo hay certidumbre de que, en los noventa, Armando Valencia Cornelio y Luis Valencia Valencia tendie-

ron las narcorredes desde Colombia hasta Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, pasando por Michoacán.

Diversos periodistas e investigadores estudiaron el origen, trayectoria y alianzas de esta banda, entre ellos María Idalia Gómez y Darío Fritz, en el libro *Con la muerte en el bolsillo*; Alejandro Gutiérrez, en *Narcotráfico: El gran desafío de Calderón*; Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hizo lo propio en su libro *Historia del narco en México*, igual que el periodista Ricardo Ravelo en su investigación *Los capos. Las narco-rutas de México*, y algunos artículos del historiador Luis Astorga.

Con base en lo que escribieron es posible rescatar algunos pasajes de la historia de Los Valencia y su importancia en la evolución del narcotráfico michoacano.

Armando Valencia Cornelio (1959) y Luis Valencia Valencia (1955) nacieron en Uruapan, y a principios de los ochenta emigraron a San José, California, donde se iniciaron en el narcomenudeo. Con las ganancias que obtuvieron compraron ranchos en Michoacán. Regresaron de Estados Unidos a finales de esa década y sus tierras las usaron para cultivar marihuana y almacenar cocaína proveniente de Colombia, que exportaban al norte aprovechando los contactos que ahí hicieron.

Documentos militares evidencian que Armando Valencia Cornelio nació en Uruapan el 28 de noviembre de 1959, es hijo de Armando Valencia y Ángela Cornelio Zavala, y se casó con Dora Alicia Cornelio Caballero (su prima). Procrearon tres hijos: César Armando, Édgar Alexis y Christian Alexander Valencia Cornelio. Al parecer tuvo otro hijo con otra mujer: Luis Armando Valencia Hernández.

Cuando Valencia Cornelio emigró a California se estableció en Redwood, colonia de michoacanos de Aguililla, de donde es originario su padre. La PGR considera que en 1985 ya participaba en el narco. Entonces era uno más de los traficantes subordinados a Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras la captura de éste, comenzó a trabajar con los Carrillo Fuentes.

Su primer antecedente penal data del 8 de febrero de 1990, cuando el juez tercero de Zamora ordenó su captura por posesión de cocaína. Un año después obtendría un amparo definitivo contra ese mandato judicial, gracias a que las autoridades no conocían su segundo apellido, y por esa “laguna judicial” se les escapaban de las leyes decenas de “Valencias” que se dedicaban a actividades ilícitas.

El investigador Salvador Maldonado señala, en su ensayo *Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán*, que Los Valencia pertenecían a una de las familias “tradicionales”, que manejaban tiendas de abarrotes.

“Eran aceptados como buenos intermediarios y eran gente de respeto, como cualquier persona con honor, disciplina y trabajo. Los jóvenes hijos aprendieron de sus padres el arte de comprar y vender, sabiendo lo que la gente demandaba para sus necesidades laborales o suntuarias. En pueblos con un historial largo asociado a las drogas y la migración, como Aguililla, las relaciones entre familias tradicionales, políticos y narcos se vuelven muy borrosas, sobre todo cuando el orden social depende de redes de amistad y parentesco. Rodeados de estos nexos, al parecer los hermanos Valencia deciden migrar a Estados Unidos, donde obtendrán experiencias y establecerán vínculos para construir el negocio de la droga.

Pero para estas generaciones de narcos el control regional del cultivo y tráfico de drogas ya no constituye una meta, sino la posibilidad de generar nuevos mercados. Para ello es imprescindible conocer el movimiento de la demanda de drogas, las redes de poder, la ingeniería financiera y los nichos para el lavado de dinero.” (Maldonado Aranda, 2012a)

De acuerdo con la investigación de María Idalia Gómez y Darío Fritz, cuando en 1999 la agencia norteamericana contra las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) pidió al gobierno de México y al de Colombia participar en un operativo para dismantelar al cártel de Los Valencia, la PGR manifestó que no sabía nada respecto de este grupo, a pesar de que ya llevaba casi una década operando.

Los Valencia habían mantenido un bajo perfil y mucha discreción en sus negocios y en su vida pública. Pasaban como aguacateros y rancheros. Pero en realidad se trataba del grupo que más droga introducía a territorio estadounidense.

Al parecer, en sus constantes envíos de marihuana a través de Ciudad Juárez entraron en contacto con Amado Carrillo, *El señor de los cielos*, quien a su vez los presentó con el colombiano Alejandro Bernal Madrigal *Juvenal*, jefe de la organización Valle del Norte, y con Fabián Ochoa, quien se quedó al frente del Cártel de Medellín a la muerte de Pablo Escobar. Fueron estos dos colombianos quienes les enseñaron a introducir la cocaína y les recomendaron tener un bajo perfil, sin muchos lujos ni escoltas, para que las autoridades no los detectaran. Así lo hicieron durante casi una década.

Los cárteles colombianos hicieron muchos negocios

con Los Valencia debido a los problemas que tuvieron con otros grupos de narcos mexicanos, que les subían los precios para transportar la cocaína. Y aunque los sudamericanos no dejaron de tener negocios con sus antiguos socios, con discreción se acercaron a los michoacanos.

Los Valencia tomaron en serio su papel y compraron buques atuneros equipados con avanzada tecnología para que no los detectaran. En ellos contactaban a los colombianos en altamar y traspasaban las cargas de cocaína al puerto de Lázaro Cárdenas, para después ocultarlas en las bodegas que ya tenían en sus ranchos y llevarlas hacia Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. El destino final era Texas. En aquel momento es cuando entraron en negociaciones con Juan García Abrego, el jefe del Cártel del Golfo hasta 1996, cuando fue detenido.

Los Valencia se convirtieron en “Los Señores de Ultramar”, y fueron quienes introdujeron a los narcotraficantes tradicionales de Michoacán en las grandes ligas del crimen organizado mexicano y colombiano. Pero al mismo tiempo, con ellos empieza la guerra de todos los cárteles por controlar el territorio michoacano, estratégico para transportar marihuana, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Durante su época dorada, bajo un manto de discrecionalidad, Los Valencia tuvieron el control casi absoluto de su territorio en Michoacán y conciliaron con los demás capos del país el traslado de la cocaína a la frontera con Estados Unidos. Tanto en Michoacán, como en buena parte del corredor del Pacífico y en la frontera, estuvieron asociados con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y, en Ciudad Juárez, con *El señor de los cielos*.

Según una investigación del reportero Ricardo Ravelo, es en 1999 cuando la PGR empieza a investigarlos, tras una delación del colombiano Gino Brunetti, su proveedor de drogas. Ante José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la desaparecida Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), Brunetti preguntó a los fiscales antidrogas de la PGR durante un interrogatorio ministerial:

–¿Ustedes tienen conocimiento de cuál es el cártel que más droga mueve en este momento?

–No... ¿A qué cártel te refieres? –le cuestionaron, a su vez, a Brunetti.

–A Los Valencia, al Cártel del Milenio...

–¿Quiénes son Los Valencia? –le inquirieron al testigo colombiano.

–Son los más importantes y poderosos introductores de drogas a Estados Unidos.

Y enseguida Brunetti –quien suministraba cocaína a otros cárteles, como el de Tijuana– comenzó a detallar paso a paso cómo estaban conformados Los Valencia. (Ravelo, 2007)

Otra fuente de información para el gobierno mexicano y el norteamericano surgió con las detenciones en Colombia de Fabián Ochoa y de *Juvenal*, los principales socios de Los Valencia.

Con ellos se tuvieron datos sobre las operaciones de Los Valencia, sus alianzas, rutas, infraestructura, redes de protección, empresas para el lavado de activos y, sobre todo, su flota atunera, principal transporte para mover sus cuantiosos cargamentos de coca por el Océano Pacífico. Curiosamente no había fotos de los jefes del grupo.

Cuando la PGR investigó las propiedades de la fa-

milia Valencia encontró que, entre 1989 y 1999, Luis y Armando habían comprado, al menos, 21 casas, seis huertas de aguacate en Uruapan, una empacadora, dos ranchos y dos terrenos. Descubrieron una red de lavado de dinero en la que participaban muchos miembros de la familia, entre ellas muchas mujeres.

Durante los noventa, cientos de toneladas de coca proveniente de Colombia fueron trasladadas desde Michoacán a Estados Unidos. Las autoridades incautaron 28.5 toneladas de dicho enervante en esa década y también grandes cantidades de otras drogas sintéticas, marihuana y heroína. Hay registros de que en esos años se dan grandes inversiones en algunos pueblos de Peribán y Uruapan, destinados a las huertas de aguacate y otros productos como el limón. Dichos frutos eran exportados a Estados Unidos y Europa. Por esa razón a Los Valencia también se les conoció como los “Reyes del Aguacate”.

A Armando y Luis Valencia no sólo se les conocía por sus propiedades, sino también por su actividad violenta, ya que se les relacionó con más de 30 ejecuciones ocurridas entre 1992 y 1999, tanto en Michoacán como en Jalisco.

Según informes judiciales, al menos 11 ejecuciones ocurridas en Michoacán estuvieron vinculadas con el presunto narcotraficante Armando Valencia Cornelio.

La red que durante una década había operado sin mayores problemas comenzó a desarticularse cuando los capos fueron descubiertos por la operación que realizaron los gobiernos de México, Colombia y Estados Unidos. Los Valencia ya no eran el grupo dominante y comenzaron a luchar con otras organizaciones el control de Michoacán y las rutas de trasiego.

Para esas fechas la DEA y la PGR identificaron que en Michoacán había diferentes células criminales: el Cártel de Tijuana, encabezado por los Arellano Félix, controlaba el movimiento de cocaína, mariguana y metanfetaminas en Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aquila, Aguililla, Coahuacán, Arteaga y Tumbiscatío. “Los Cowboys” de Sinaloa o *La Eme* vendían heroína, cocaína y metanfetamina, y su campo de acción estaba en Tingüindín, Tocumbo, Los Reyes, Sahuayo, Jiquilpan, Purépero, Peribán y La Piedad.

El Cártel de Juárez, comandado por los Carrillo Fuentes, estaba en Zitácuaro, Huetamo, Jungapeo, Tiquicheo, Tuzantla, Benito Juárez y Susupuato. El Cártel de Sinaloa dominada en Carácuaro, Tacámbaro, Nocupétaro, Villa Madero, Acuitzio y Turicato. Los cárteles de Juárez y del Golfo se disputaban Morelia y su zona conurbada.

Los cárteles de Colima y Milenio, regidos por la familia Amezcua y Armando Valencia Cornelio, imperaban en Apatzingán, Taretan, Tepalcatepec, Ario de Rosales, La Huacana, Buenavista, Tancítaro, Santa Clara de Cobre y Nuevo Urecho.

A partir de entonces empezó una de las grandes batallas de Michoacán, una guerra entre todos los grupos criminales del país tratando de quedarse con el control de esta zona estratégica, y de estas bandas con el Ejército y la Policía Federal.

La llegada de Los Zetas

Con Los Valencia, Michoacán fue descubierto por los demás grupos del narco como un pastel del que todos que-

rían la mejor tajada. El más ambicioso de estos grupos era el Cártel del Golfo, que en 2001 envió a sus pistoleros –Los Zetas– a arrebatarle el negocio a los michoacanos.

Para defenderse, Los Valencia se aliaron con Los Amezcua, de Colima; con Ignacio *Nacho* Coronel, jefe del Cártel del Milenio, de Jalisco, y con el Cártel de Sinaloa, y comenzaron la guerra contra el Cártel del Golfo y sus sicarios –exmilitares y exintegrantes de cuerpos policíacos de élite–, que sólo en 2010 habrían de independizarse y formar su propia banda.

Los Zetas se aliaron con Carlos Rosales *El Carlitos*, quien había trabajado con Los Valencia, y con Osiel Cárdenas. Hay información periodística acerca de que, por su parte, Los Valencia mandaron a entrenar a sus sicarios con los kaibiles –militares guatemaltecos de élite expertos en contrainsurgencia. De esta manera, la batalla entre estos grupos tuvo un perfil de guerra paramilitar porque en las filas de Los Zetas también había exsoldados guatemaltecos entrenados en la escuela kaibil.

En 2002, un comando de *zetas* iba a asesinar a Luis y a Armando Valencia, pero fue detenido en Guadalajara. El 18 de febrero de ese año fueron baleados Jorge Luis Valencia González, la colombiana Yolia Rieder Espinosa y los michoacanos Ana Olimpia Guzmán Ontiveros y Adalberto Bejines Prado tras una persecución que terminó frente al Cereso de Morelia.

La matanza se atribuyó a *El Carlitos* –también conocido como *El Tísico*. Datos de la PGR indican que Jorge Luis Valencia González supuestamente fracasó en una operación de compraventa de cocaína resguardada en un rancho de Los Valencia y *El Carlitos* ordenó

su muerte pensando que se trataba de una traición.

Vinieron los ajustes de cuentas. Una línea de investigación de la PJEM señala que el Rancho Mendoza, ubicado en la costa, fue usado por Los Valencia como centro de operaciones y que el móvil del múltiple crimen del 18 de febrero fue la desaparición de un paquete de 50 kilos de cocaína.

La PJEM determinó que, desde hacía tres años, cada mes arribaban al Rancho Mendoza cargamentos de cocaína pura para ser empaquetada en pequeñas dosis (grapas) y venderlas al narcomenudeo.

La droga procedía de Colombia y se lanzaba desde avionetas y helicópteros al Pacífico. Los trabajadores del rancho la cargaban en lanchas rápidas y la ocultaban.

A raíz del enfrentamiento entre Los Zetas y Los Valencia, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la PGR detuvo en el Aeropuerto de Guadalajara al capitán Francisco Jaime Madrid Sánchez y a Miguel Ángel Villalobos López, gerente general de la empresa Aerostar, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud relacionados con un caso ocurrido en Aquila.

En ese caso se descubrió que Eusebio Mamés Velázquez Mora, exalcalde de Aquila, era pieza clave en las pesquisas por la matanza en el Rancho Mendoza. En esa ola de violencia, el 21 de julio de 2003 en Los Reyes, seis individuos de apellido Valencia fueron asesinados.

Lo que antes parecía inaudito ahora era una realidad: grandes y muy bien organizadas bandas de narco traficantes se habían declarado la guerra, disputándose la Tierra Caliente.

Esta pugna penetró todas las esferas, incluyendo las

gubernamentales. Como prueba: sólo en 2002 siete servidores públicos fueron asesinados.

Entre 2002 y principios de 2003, las autoridades reportaron diferentes ejecuciones ligadas al narco en Jalisco y Michoacán, casi todas atribuidas a la pugna entre los grupos de Osiel Cárdenas y de Armando Valencia.

De 2002 a 2004, durante el gobierno del Lázaro Cárdenas Batel, la violencia aumentó y se contabilizaron más de 500 ejecutados de ambos bandos. Luego, con el gobierno de Leonel Godoy, también del PRD, la cifra aumentó a 900.

Los enfrentamientos se distinguieron por las particulares formas estratégico-militares de combate, así como por una brutalidad que sólo se había observado en las guerras sucias de Centro y Sudamérica: cabezas cercenadas, cuerpos desmembrados, quemados o colgados de puentes en las carreteras y entradas de los poblados. En ambos bandos era evidente la presencia de exmilitares mexicanos y guatemaltecos formados en escuelas de Estados Unidos. Habían sido “educados” para combatir grupos insurgentes y crear terror en las poblaciones.

A pesar de esto, el grupo de Los Valencia siguió operando hasta que, en 2003, Armando Valencia, uno de los fundadores más importantes, fue detenido en un bar de Guadalajara.

De acuerdo con un reportaje de Ricardo Ravelo (2007), Los Valencia y sus socios michoacanos controlaron buena parte de los destacamentos y oficinas de las corporaciones federales en esa entidad, situación evidente en municipios como Zamora y Los Reyes.

Gracias a un informe de inteligencia elaborado por la PGR y efectivos de inteligencia militar en 2007, se

supo que la jefatura del cártel la compartían Salvador Revueltas Ureña *El Chava Lentas* o *El Innombrable* y los primos Luis Valencia Valencia y Armando Valencia.

En estos informes se lee que la estructura central de Los Valencia la componían Óscar Nava Valencia *El Lobo*; Salvador Revueltas Barragán *El Borono*; Alfonso Revueltas *El Poncho*; Pedro Rebolledo López *La Coya*; Armando Valencia González *El Tocayo*; Cruz Valencia *El Cruzón*; Gerardo Mendoza Chávez *Gerardón*; Eleuterio Valencia Valencia; José González Valencia *El Cochi*; Erick Valencia Salazar *El Erick*; Juan Carlos Nava Valencia; Mario y Ramón Caballero Valencia; Juan Nava Valencia; Alejandro González Rentería *El Guajillo*; Librado Villa Gómez Arreguín; Antonio Torres *El Monillo*; Rutilo Naranjo Quintero, y Francisco García Silva *El Fran*.

También se encontraban exmilitares como Arturo Alanís N., quien fungió como director de Seguridad Pública en el municipio de Los Reyes y fue comandante de la Policía Ministerial; José Luis Caballero *El Cementerio*; Ernesto Mendoza Álvarez o Álvarez Mendoza; Rodrigo Urbina García, y Pablo Ángel Vázquez Duarte *El Tupo*.

El documento al que tuvo acceso Ricardo Ravelo señala que Juan José Farías Álvarez *El Abuelo* y Salvador Revueltas Ureña *El Chava Lentas* mantenían una estrecha relación con Arturo Peña Muñoz, conocido como *Flaco Peña*, quien estaba considerado como uno de los líderes del Cártel del Milenio. Ahora está preso en el penal de La Palma. Mientras que *El Abuelo*, de hecho, fue visto en febrero de 2014 con el comisionado del gobierno peñista Alfredo Castillo, en las primeras reuniones de negocia-

ción con los líderes de las autodefensas en Tepalcatepec, Más adelante se abundará en este hecho.

En el grupo había otra persona también conocida como *El Abuelo*. Se trataba de Jorge Castro Barriga, quien tiene una hermana que trabajaba en las oficinas de la Policía Federal Preventiva de Zamora, Michoacán. Laura Castro estuvo denunciada por robo y asociación delictuosa en perjuicio de la empresa Transportes Julián, según la averiguación previa 304/204/IV, que se integró en la Agencia Cuarta del fuero común, en la cual se da cuenta de por lo menos 400 robos a camiones de carga.

En un recuadro, el informe confidencial apunta: “La estructura cuenta con protección institucional por parte de dependencias del gobierno, en específico (de) la PJEM y la Dirección de Gobernación –no se precisa si dicha protección es por parte de la actual administración estatal o de anteriores gobiernos–, toda vez que se identificó a dos agentes acompañando a Luis Valencia Valencia a la salida del palenque de Morelia y durante el atentado del 12 de abril se otorgaron facilidades para evadir las acciones de ley”.

En un anexo titulado “Red de Vínculos de estructura ‘Milenio’, Protección Institucional”, se menciona como cómplice a Javier Pérez Solórzano, exprimer comandante de la PJEM. Y en la Dirección de Gobernación aparecen como protectores del cártel, de acuerdo con el diagnóstico criminal de la PGR y de inteligencia militar, Juan Gaona Gómez, coordinador de agentes de Gobernación en el estado; Armando Cuadra Vega, agente de Gobernación en Uruapan, así como los “hermanos Pablo y Gerardo Sánchez, agentes de Gobernación del estado de

Michoacán que acompañaban a Luis Valencia Valencia en el palenque de gallos de Morelia”.

Los Valencia, asentó la PGR, estuvieron ligados con el empresario Zhenli Ye Gon, preso en Estados Unidos, acusado de introducir enormes cargamentos de pseudoefedrina, base de las drogas sintéticas.

En el organigrama citado por Ravelo aparecen muchos integrantes de la familia Valencia: Sofía Valencia Cortés, madre de Luis Valencia, y sus hermanos: Angelita, Baltasar, Elvia, Albina, Rosa, Amparo, Elías y Ventura.

Incluye también a Jorge Luis Valencia González, a quien se identificó como uno de los operadores del cártel en Aguililla. Se afirma que “es hijo de Elías Valencia Valencia”. También están Jorge, Érika, Alejandra y Selma Yamira, hijos de Jorge Luis Valencia Rodríguez e Irma Rodríguez Valencia.

Pero toda esa estructura falló y Los Valencia empezaron a perder la guerra contra Los Zetas en el año 2000. Sus principales líderes fueron detenidos posteriormente: Armando Valencia Cornelio en 2003, y su hijo Elías en 2006; José Valencia y su hijo Jorge Armando, también ese año; en 2009 fueron detenidos Luis Valencia y Moisés Valencia, Juan José Farías *El Abuelo*, considerado lugarteniente del grupo, y también Orlando Nava Valencia *El Lobo*. En 2007 Ventura Valencia Valencia apareció ejecutado en Tepalcatepec.

Los saldos de esta guerra pintaron de rojo una buena parte de Michoacán. El gobierno estatal señaló que en 2003 se perpetraron 464 asesinatos en la entidad, y atribuyó 71 de ellos a ejecuciones del narcotráfico. A mediados de 2004, se reportaron 25 personas acribilladas.

En enero de ese año, Carlos Rosales *El Tísico* aún controlaba la plaza y presuntamente intentó orquestar la fuga de cinco reos del penal de Mil Cumbres y de 24 más del penal de Apatzingán. Se afirma también que intentó liberar a su jefe y compadre Osiel Cárdenas Guillén del penal de máxima seguridad de La Palma, pero fue detenido el 24 de octubre en un fraccionamiento de Morelia.

A la caída de Osiel Cárdenas, *El Tísico* fortaleció su estructura. Dentro del Cártel del Golfo ya encabezaba una célula que operaba en Querétaro, Guanajuato, Estado de México, parte de Guerrero y Michoacán, su sede.

En busca del poder, los cárteles establecidos en el país iniciaron una nueva guerra sin cuartel. Entre 2005 y 2006, en Michoacán, las ejecuciones se dispararon en 75%.

El Cártel del Milenio cedió el territorio michoacano a Los Zetas. Este grupo comenzó a controlar Michoacán mediante el terror, estableciendo un modelo de dominio hasta entonces no visto. Cobró “protección”, extorsionó, secuestró y controló gran parte de la actividad económica y política.

Empero, en 2006 apareció una nueva banda local, con características distintas, una mezcla de movimiento social, con perfil de secta religiosa, que nació como grupo de autodefensa y se hizo llamar La Familia Michoacana. Ese sería el punto de partida para una nueva etapa en la historia del narcotráfico en Michoacán y en todo el país.

CAPÍTULO 4.
LA FAMILIA MICHOACANA

El arranque sangriento

La noche del 1 de septiembre de 2006 el centro nocturno Sol y Sombra, de Uruapan, estaba casi lleno. El encargado del bar, Carlos Álvarez, contó que a la una de la mañana hombres armados llegaron en tres vehículos y que, tras someter a los clientes, dejaron caer sobre la pista de baile cabezas humanas que llevaban en unos sacos.

El comando había lanzado cinco cabezas cercenadas, aún chorreando sangre, de hombres que habían sido integrantes de Los Zetas. Se retiró tras dejar un pedazo de papel con un mensaje: “La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir. Sépalo toda la gente: esto es justicia divina”.

Esta fue la carta de presentación de La Familia Michoacana, fundada por Carlos Rosales Mendoza *El Tísico*, José de Jesús Méndez Vargas *El Chango Méndez*, Nazario Moreno González *El Chayo*, Enrique Plancarte *La Chiva*, Arnoldo Rueda Medina *La Minsa* y Servando Gómez Martínez *La Tuta*.

Este grupo se oponía a Los Zetas, que se habían apoderado de Michoacán tras erradicar a Los Valencia.

Hay datos de que desde 2005 ya se estaban organizando grupos locales para hacerle frente a Los Zetas. En julio de 2006 hubo mensajes que dejaron en algunos cuerpos de ejecutados en los municipios de Uruapan, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, con la leyenda “Para que aprendan a respetar. La Familia se respeta”.

Inicialmente se hacían llamar La Empresa –que fue fundada por *El Tísico*. Estaba integrada por dos grupos

operativos: uno dirigido por *El Chango* Méndez y otro por *El Chayo*.

Un documento de inteligencia militar al que tuvo acceso el reportero Alejandro Gutiérrez –autor del libro *Narcotráfico. El gran desafío de Calderón*– (Gutiérrez, 2007), asevera que en su arranque La Familia Michoacana estaba compuesta por 850 miembros, algunos de ellos excolaboradores de Los Zetas, lavadores de dólares y grupos criminales pequeños de Michoacán.

La Familia Michoacana y Los Zetas mantuvieron una lucha sin cuartel por el dominio de la entidad, así como de Guanajuato y el Estado de México, con resultados escalofriantes: 4 mil 927 muertos de ambos bandos, además de población civil, entre 2006 y 2011, según datos del Gabinete de Seguridad Pública. (Valdés Castellanos, 2013)

Otras cifras periodísticas indican que sólo en Michoacán –de 2003 a 2011, durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy– la cifra de muertos por la guerra entre estas dos organizaciones llegó a 6 mil.

Lázaro Cárdenas Batel negó entonces la existencia de un nuevo grupo criminal en la entidad, pero entonces La Familia Michoacana publicó un desplegado en varios periódicos estatales.

El 22 de noviembre de 2006, copias de un mensaje de La Familia Michoacana fueron repartidas en Ario de Rosales, Turicato, Tacámbaro, Apatzingán, Carácuaro y Nocupétaro. Este mismo mensaje apareció en dos periódicos de Morelia, *La Voz de Michoacán* y *el Sol de Morelia*, en el cual el grupo criminal hacía su presentación ante la opinión pública y los michoacanos.

El texto íntegro decía así:

LA FAMILIA MICHOACANA

¿Quiénes SOMOS?

Trabajadores nativos de la región Tierra Caliente en el estado de Michoacán, organizados por la necesidad de SALIR de la opresión, de la humillación a la que siempre fuimos sometidos de personas que siempre tuvieron en todo el tiempo el poder y consecuentemente ello les permitió realizar todo tipo de pillerías y atropellos en el estado; como los del cártel MILENIO algunos de apellido Valencia y otras organizaciones como la banda de los treinta que ha tenido aterrorizada a gran parte del estado sobre todo las áreas de Puruarán, Turicato, Tacámbaro y Ario de Rosales, desde los años ochenta hasta la fecha, que han pretendido entrar a realizar secuestros, robos, extorsiones y otras artimañas que perjudiquen la paz de los Michoacanos.

MISIÓN

Erradicar del estado de Michoacán el secuestro, la extorsión y asesinatos por paga; Por parte de la gente del Cártel del MILENIO y algunos de apellido Valencia, que han hecho del estado de Michoacán su feudo. Nuestra única razón es que amamos nuestro estado y ya no estamos dispuestos a que la dignidad del pueblo sea atropellada. Quizá en este momento la gente no entienda, pero sabemos que la región más afectada nos entiende. Y es posible combatir estos delincuentes aquí en Michoacán, los cuales fueron establecidos por gente de Jalisco, Sinaloa, Colima y Guerrero. A los cuales no

dejaremos que entren a nuestro estado a seguir delinquiendo. Se está erradicando en su totalidad en todo el estado de Michoacán la venta al menudeo de la droga LETAL conocida como "ICE" o "HIELO" por ser una de las peores drogas que están haciendo daños irreversibles en la sociedad michoacana y se va a prohibir la venta de vino adulterado que se comenta viene de "Tepito" y sabemos que lo que viene de ahí es de mala calidad.

OBJETIVO

Seguir manteniendo los valores universales de las personas, a los cuales tienen pleno derecho.

Erradicar el secuestro, robos, extorsiones telefónicas y secuestro express aunque para esto desgraciadamente se ha recurrido a estrategias muy fuertes por parte de nosotros, ya que de esta forma hemos visto que es la única forma de poner orden en el estado y no vamos a permitir que esto se salga de control de nuevo, sabemos que esto nos traerá como consecuencia problemas muy duros con algunos sectores de la sociedad ya que muchos de estos grupo estaban aliados con el mismo gobierno y desgraciadamente en gobierno, juzgados, jueces y magistrados no ven el mundo que llevamos, y sin culparlos por ser gente de oficina por no ver lo que realmente pasa en las calles y áreas rurales de nuestro lindo y hermoso estado de Michoacán; Ya que estamos haciendo actividades legales dentro de lo ilegal.

Apoyar a la gente con despensas, literatura así como aulas para mejorar la educación de la sociedad esto dirigido principalmente al área rural, la cual es

la más marginada, humillada y más en la región de Tierra Caliente en el estado.

¿Por qué nos Formamos?

Cuando empieza esta organización de la FAMILIA, Michoacán no se esperaba que fuera posible que se pudiera llegar a erradicar el secuestro, asesinato por paga, la estafa y la venta de la droga conocida como hielo pero gracias al gran número de personas que han tenido fe hemos logrado controlar este gran problema en el estado.

LA FAMILIA somos un grupo de gente la cual ha ido creciendo de tal forma que en la actualidad abarcamos todo el estado de Michoacán. Esta organización surgió con la proyección de combatir la delincuencia ya desenfrenada que había en nuestro estado como son el secuestro, asesinato por paga, la estafa y la venta de la droga conocida como hielo ya que el gobierno sin nosotros no lo hubiera logrado, aunque hay muchos que, no nos han apoyado ya que trabajan en conjunto con los del Cártel del Milenio muchos de apellido Valencia y con la banda de los treinta.

No se había podido erradicar la venta al menudeo de hielo y LA FAMILIA a logrado grandes avances al ir combatiendo poco a poco estos males, no podemos cantar victoria pero sí podemos decir que el estado se ha ido mejorando en estos problemas un 90%. Cuando empezamos a organizarnos y a proponer quitar la venta de drogas al menudeo de las calles como el “Hielo” muchos nos dijeron que ni en los

países del primer mundo lo habían podido controlar, ya lo estamos haciendo.

PARA REFLEXIONAR

¿Tú qué harías como Michoacano, te unirías a la familia si ves que estamos combatiendo estos delitos? O ¿Dejarías que sigan creciendo?... Danos tu opinión.

A ti padre de familia te pregunto: ¿Te gustaría que tu hijo anduviera en las calles y en peligro de caer en las drogas y en la delincuencia?

¿Apoyarías a esta organización en su lucha contra estos males que atacan a nuestro pueblo?

Los medios de comunicación han sido muy acertados y objetivos en sus comentarios ante los acontecimientos ocurridos, cosa que se les agradece por su imparcialidad y damos las gracias a estos medios por sus comentarios sobre nuestra acciones.

Aun en países del primer mundo no se han organizado para realizar este tipo de actividades a favor de su pueblo y aquí ya empezamos... El éxito esperado dependerá del apoyo y la comprensión de la sociedad michoacana.

ATENTAMENTE:

LA FAMILIA MICHOACANA

(sic)

Los jefes de La Familia alegaban públicamente que no eran una organización violenta y que tampoco estaban en contra del gobierno o el Ejército, sino todo lo con-

trario: que su tarea era “limpiar” el estado de todos los grupos delincuenciales y hacer el bien social.

En una entrevista, Nazario Moreno justificaba así la existencia de la organización:

“La Familia surge de la nueva forma de pensar de la gente. Lo que obtienes con violencia, con violencia vas a conservarlo. La Familia es un cambio de rumbo, de encauzar para bien. Hay infraestructura y hay que aprovecharla. Hay recursos humanos, hay poder para financiar, porque toda persona que trabaja aquí tiene su salario. Y cuando la gente ya está aquí y hace su trabajo con honestidad, sabe que se trata de una empresa. Como en todas las familias, hay quien actúa mal y hay personas que no llevan a cabo la misión que les fue encomendada. (...)

“El mando decidió, de alguna manera, hacerlo público para hacer saber que existen algunas personas que se dedican a matar a la población y hay muchos ilícitos y las autoridades están imposibilitadas. Ni siquiera existe la capacidad física, los recursos humanos para enfrentar la situación. Tienen incapacidad numérica. (...)

“A la gente le interesa mucho el bienestar de La Familia. Estamos preocupados por nuestra juventud. Ya basta de que en el estado haya tanta violencia, todas las drogas son malas, pero el ice o hielo acaba. (...)

“Esta es La Familia Michoacana, no tenemos rivalidad con Los Zetas o con el Cártel del Golfo. Es difícil... porque ellos estaban en su territorio. Se les respeta sin entrar en rivalidad, pero además no ha habido una intervención directa de ellos en el estado. Estamos cuidando que la gente no ande por ahí matando, que no ande tirando balazos. Se les conmina a que se comporten. No

queremos llegar a más. Ahora la nueva política es otra: a los que venden drogas, a los que roban, a los que secuestran a cualquier gente que esté fuera de orden, los vamos a exhibir, los vamos a desnudar públicamente. Es la política de la empresa. A la gente que anda haciendo cosas malas, a la gente que está vendiendo drogas, se le llama y se le dice: necesitas enderezarte. Se les llama la atención: o cambias o te tienes que ir. Aquí a nadie se le permite que ande con su pistola, no por el hecho de sentirse con poder va a andar abusando. Hay que sujetarse a una disciplina bastante rígida, basada en las buenas costumbres, y ninguna persona que trabaje honestamente será afectada. Queremos hacer saber que no somos una amenaza para la sociedad. (...)

“Sabemos que de alguna manera se cae en eso. Lo que La Empresa plantea es bajar la violencia. Ahora hay otra cosa muy importante: lo de las decapitaciones. Algunas nos fueron atribuidas. (...) Lo que se busca es bajar al máximo la violencia, el asesinato, no aplicando medidas tan drásticas. Quizá sí tuvo que haberlas. (...) Ha habido mandos que se han excedido y tuvieron que ser reemplazados, porque esa ya no es la política de La Empresa. La Familia no quiere matar.”

Diversos testimonios ofrecidos a distintos medios, como al periodista William Finnegan de *The New Yorker*, daban cuenta de las “bondades” de la organización en Tierra Caliente, donde la gente aseguraba que La Familia los cuidaba, les daba empleos, los ayudaba en problemas de salud y hasta llevaba a los jóvenes a centros de rehabilitación.

Con estas labores, al principio, La Familia Michoa-

cana se ganó la simpatía de muchos en pueblos, comunidades y ciudades, creó una base social muy similar a la que lograban algunos grupos guerrilleros. De hecho, sus partidarios varias veces salieron a la calle a pedir la salida del Ejército y policías federales que habían llegado a combatir al grupo.

La realidad profunda era otra: las manos de La Familia estaban tintas de sangre, tanta que después de tres años de lucha contra Los Zetas lograron expulsarlos de Michoacán. Y luego arremetieron contra quienes habían prometido proteger: autoridades, comerciantes, agricultores, empresarios, vendedores de la calle y todo aquel que no estaban dispuestos a acatar las órdenes del grupo.

Narcosecta paramilitar

El surgimiento de La Familia Michoacana es, quizá, el primer “aporte” del narcotráfico mexicano al crimen organizado mundial. Aunque comparte con Los Zetas una base paramilitar, pues en sus filas tuvieron expolicías, exmilitares y exkaibiles guatemaltecos, La Familia Michoacana incorporó además un perfil religioso, político, social y de guerrilla como no se había registrado en otros países, donde también existen organizaciones muy desarrolladas del crimen organizado, como Italia, Colombia y Estados Unidos.

De acuerdo con distintos documentos de inteligencia militar que circularon desde 2006, La Familia Michoacana tuvo dos años de preparación antes de darse a conocer como grupo “protector y justiciero”. Contaba con 4 mil

integrantes, a los cuales les hacían leer la Biblia y los pensamientos de Cristo, Buda, Mahoma y Gandhi. Además, a su base social le daban la atención que el Estado y el gobierno no le proporcionaban, como servicios básicos de salud, caminos, electricidad y trabajo.

El periodista Alejandro Gutiérrez señala en su investigación que un documento confidencial sobre La Familia Michoacana, elaborado por militares, asienta que este grupo se presentó como “un grupo civil que busca pelear al crimen con uso de la fuerza ilegal y que realmente se hacía llamar La Empresa”, para lo cual realizaban “trabajo social” mediante actos “justicieros” delictivos, como la decapitación de sus enemigos.

“El modo de operar de esta organización de La Empresa, hoy La Familia Michoacana, es a través de un consejo ejecutivo que está integrado por cabezas no visibles de cárteles regionales y municipales, que participan dentro del cártel del Golfo, y que en la actualidad se encuentran en Querétaro”, señalaba el documento consultado por el periodista.

Lo interesante es lo que el autor del análisis castrense dijo al reportero, de manera anónima: “Este grupo es lo más cercano a las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales se presentaban primero como una facción social que mantiene su lucha armada contra un sector de la guerrilla implicada en el narcotráfico, pero ellos mismos terminan implicados en el narco”. (Gutiérrez, 2007, pág. 59)

Y así ocurrió. Durante los primeros meses de 2006 los líderes de La Familia Michoacana citaron a empresarios y comerciantes de Tierra Caliente para decirles que ellos actuarían “como familia”, y que como tal los pro-

tegerían de los abusos de los otros cárteles, en especial de Los Zetas. Pero para ello, necesitaban de una “cooperación voluntaria” pues requerían recursos para armarse y mantener a la gente con la que se enfrentarían a los cárteles.

En el arranque de sus acciones llevaban a los jóvenes drogadictos a rehabilitarse en centros que la misma organización sostenía; castigaba a violadores, rateros, secuestradores y hasta borrachos que encontraban en las calles; como si fueran funcionarios le daban a la gente sus números de teléfono para que reportaran quejas; presionaban a las autoridades para que atendieran las demandas ciudadanas; gestionaban obras públicas y hacían negocios con los empresarios locales con el fin de llevar prosperidad a la comunidad, y combatían la venta de drogas duras.

Cuando las cosas cambiaron la cooperación voluntaria se hizo una obligación cuyo incumplimiento acarrearía la muerte; los jóvenes que eran rehabilitados se convirtieron en sus sicarios, adiestrados en las armas y moldeados bajo leyes de una secta; sacaron a la luz su participación en el narcotráfico, y profundizaron el modelo de extorsiones, secuestros, cuotas por derecho de piso, asaltos y expropiaciones de negocios que Los Zetas habían impuesto a la población. Arguyendo la “justicia divina”, sometieron a los michoacanos y se permitieron la más brutal de las violencias.

La nueva organización criminal de Michoacán mostraba su verdadero rostro hecho con los perfiles de sus líderes. En el manejo del negocio de las drogas estaban *El Tísico* y *El Chango Méndez*, especializados en el trasiego

y en el lavado de dinero, mientras que el aspecto “social” lo daba *La Tuta*.

Según el exdirector del Cisen Guillermo Valdés Castellanos, *La Tuta* se formó como maestro normalista, participó en los movimientos de izquierda en Michoacán y Guerrero cercanos al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Por eso tiene conocimientos de tácticas de lucha guerrillera, como las emboscadas que La Familia perpetró contra la Policía Federal y la construcción de una base social.

En tanto, *El Chayo* o *El Más Loco* le dio el perfil de secta religiosa a la organización criminal. Al respecto, Guillermo Valdés señala: “*El Chayo* fue un personaje carismático con aptitudes de líder espiritual que quiso imprimirle a La Familia una mística y una orientación de secta religiosa”.

Nazario, *El Pastor*

Conocido también como *El Pastor*, Nazario Moreno González nació en Apatzingán el 8 de marzo de 1970 y, según su autobiografía titulada *Me dicen El Más Loco*, vivió en la pobreza con sus 12 hermanos, hasta que decidió emigrar a Estados Unidos.

Católico primero y luego evangélico, a fines de los ochenta Nazario trabajó en Redwood, San José, Fresno y Palo Alto (California), donde según sus propias memorias comenzó a vender marihuana en parques, escuelas y reservas de indios. En 1987 regresó a Apatzingán, donde se dedicó al negocio de la siembra y venta de ma-

riguana a compradores de Guadalajara, Puebla e Hidalgo. Al mismo tiempo, vendía autos usados de Estados Unidos en Michoacán. En sólo un año ganó 2 millones de dólares.

En 1989 se fue a vivir a Río Grande, Texas, y continuó con sus negocios. En noviembre de ese año, en uno de sus retornos a Apatzingán, fue detenido por un pleito a balazos y recluido en el penal de Morelia por un corto periodo. Al salir de la cárcel –ese mismo año– regresó a Texas y fortaleció los negocios de autos hasta 1992, cuando se trasladó a California pero sin perder el vínculo con sus contactos texanos.

En los reportes estadounidenses aparece que su primer antecedente con el narcotráfico en aquel país data de 1994, cuando fue capturado por vez primera en McAllen, Texas, por transportar droga que pasaba de Reynosa, Tamaulipas, bajo las órdenes de su mentor, *El Tísico*.

Moreno regresó a México, donde inició un negocio que consistía en comprar sombreros rancheros hechos en Guanajuato y venderlos en Texas, California y Atlanta. Mientras, en la Ciudad de México fundó la agrupación de taxis Servitaxis Constituyentes.

Pero tenía problemas de alcoholismo desde hacía muchos años. Así, decidió entrar a Alcohólicos Anónimos donde, rememora *El Pastor*, descubrió su afición por el mundo espiritual y el estudio de las sociedades secretas. “Me relacioné con grupos que profesaban ideales secretos de superación mundial con ramificaciones en muchos países, especialmente Francia, Hungría, Rusia. (...) También en este tiempo fue cuando sentí el llamado de Dios, iniciando el estudio de la *Biblia*, como lo hacen los verda-

deros teólogos, profundizando en el entendimiento de la vida, mensaje y filosofía del maestro de Galilea”.

A partir de entonces, Nazario abrazó “su vocación de servir al prójimo” y trató de combatir “a los verdaderos azotes de la humanidad: la ignorancia, la injusticia y la mentira”. Pero no dejó el jugoso negocio del narcotráfico.

Así, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en McAllen, libró una nueva orden aprehensión contra *El Chayo*, a quien acusó de enviar más de cinco toneladas de mariguana en seis cargamentos entre el 15 de junio de 2002 y el 21 de agosto de 2003, por lo cual tuvo que regresar a México, donde se alió con *El Tísico* para formar La Empresa, y luego con *La Tuta* para lanzar La Familia Michoacana.

De este modo se dedicaba a difundir la palabra de Dios y, al mismo tiempo, vender estupefacientes.

Nazario escribió un par de libros –*Pensamientos de la Familia* y *Me dicen El Más Loco*– donde expuso sus confesiones y su visión del mundo, ofreciendo a los jóvenes una salvación y una superación personal. Cada libro tuvo un tiraje de al menos 20 mil ejemplares que se repartieron en multitud de pueblos e incluso en oficinas del gobierno estatal.

Estos dos libros –más los de John C. Maxwell *Las 21 cualidades indispensables de un líder*, el de Rich Warren *Liderazgos con propósitos* y el de John Eldredge, un líder cristiano fundador de la secta los Ministerios de los Corazones y autor del libro *Sé todo lo que puedes ser*, que sirvió de inspiración a Nazario– eran lectura obligada para los integrantes de La Familia Michoacana.

En sus libros –que son una mezcla de pasajes de su

vida con enseñanzas de filosofías china, hindú, griega, egipcia y de algunas sectas— habla de sus viajes iniciáticos vestido de pobre por todo el país, “parecido al Che Guevara”, y también revela que el nombre de La Familia Michoacana lo puso él retomando el nombre de una agrupación social que formó desde el año 2000 para ayudar a la gente, y que se llamaba “La Familia”.

Nazario convocaba a los jóvenes a “dejar todos los vicios”. Sus pensamientos eran la base de adoctrinamiento que imponía a todos aquellos que iban a dar a los centros de rehabilitación que La Familia Michoacana construyó y que en realidad servían de escuelas de sicarios. Según sus propias estimaciones, rehabilitaron a 47 mil personas en tres años.

Para difundir sus pensamientos incluso buscó maestros rurales o personas que formaron parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Creía que así tenía un mejor control de los pensamientos y motivación de sus integrantes para seguir adelante con sus crímenes.

Además, nombró a Rafael Hernández Cedeño *El Cede* —exagente del Ministerio Público— como “el instructor” en los albergues donde “rehabilitaban” a adictos y alcohólicos.

En 2009, cuando *El Cede* fue detenido, declaró que durante 2008 formó a más de nueve mil pistoleros que se incorporaron a la organización.

El adoctrinamiento, dijo, consistía en cursos de “superación personal, valores, principios éticos y morales acordes a los fines de La Familia”. Se buscaba que sus subordinados se apartaran de las drogas, el alcoholismo y “regresaran a sus familias”.

Entre los centros que esa organización tenía –y que de cierta forma era la oficina central– estaba el albergue Gratitude A.C., ubicado en Apatzingán. Los gatilleros eran escogidos según sus habilidades y llevados a otros “centros de meditación” ubicados en casas o ranchos en Santa María, Tarímbaro; Pátzcuaro; Erongarícuaro; Santa Clara de Cobre, y Acuitzio, entre otros.

Cedeño también reportaba directamente a *El Chayo* los pormenores de las actividades delictivas de la organización. Se encargaba de expandir la zona de influencia de la organización en Guerrero, para lo cual contaba con grupos de sicarios que se enfrentaban a Los Zetas, grupo que a su vez buscaba ingresar a Michoacán por Zihuatanejo, Guerrero.

El Cede tenía su centro de operaciones en Lázaro Cárdenas, donde coordinaba el trasiego de los cargamentos de cocaína provenientes de Centro y Sudamérica y recibía cargamentos de efedrina y pseudoefedrina provenientes de Asia y Europa, mismos que distribuía a los laboratorios clandestinos.

Asimismo, mantenía el control de los bares y giros negros de la zona, cobraba cuotas a los dueños y promovía la prostitución de estudiantes de secundaria y preparatoria. Al momento de su detención, Cedeño portaba una credencial que lo acreditaba como observador permanente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, una organización inexistente.

Hasta su detención en Morelia en un bautizo, *El Cede* mantenía relaciones con políticos, empresarios y policías locales. Según informes federales, llegó a vincularse con personalidades cercanas al gobierno de Leonel Godoy.

San Nazario

Pero *El Pastor* rebasó sus pretensiones de líder espiritual y se hizo santo. Esto ocurrió después de diciembre de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón aseguró que había sido abatido en un enfrentamiento, lo cual resultó falso, pues había escapado. Se escondió en la sierra, en refugios discretos desde donde seguía dirigiendo la organización.

Además de los libros, *El Chayo* mandó escribir rezos para que sus adeptos los cantaran mientras llevaban en sus manos rosarios con su imagen.

Una de las oraciones a *San Nazario* decía:

*Oh, Señor todopoderoso,
Líbrame de todo pecado,
Dame protección bendita
A través de San Nazario.
Protector de los más pobres,
Caballero de los pueblos,
San Nazario danos vida,
Oh bendito, santo eterno.
Luz bendita de la noche,
Defensor de los enfermos,
San Nazario, santo nuestro,
Siempre en ti yo me encomiendo.
Gloria a Dios Padre,
Te dedico mi rosario,
Danos salud y más trabajo,
Abundancia en nuestras manos,
Que nuestro pueblo esté bendito,
Yo te pido, San Nazario.*

Moreno mandó construir amplias capillas en las entradas de los pueblos donde gobernaba su banda, y en el centro de las mismas ordenó instalar un busto con su imagen estilizada, casi de tamaño natural. Aparecía con la misma barba de candado que se le suele poner a Jesucristo, pero en sus imágenes aparecía con una espada, un manto cubriéndole la cabeza y una cruz paté roja en el pecho, la misma que en el Medioevo emplearon Los Caballeros Templarios.

Algunas de esas figuras estaban chapadas en oro. Cuando en 2013 las autodefensas ciudadanas liberaron pueblos del dominio de Los Caballeros Templarios –como Nueva Italia, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec o Parácuaro, el pueblo del cantante Juan Gabriel–, el Ejército y la policía destruyeron cada capilla, imagen y busto de Nazario que encontraron.

Hacia 2012, el corresponsal de **Proceso**, Francisco Castellanos, tuvo la oportunidad de visitar una de las capillas que había en la comunidad de Holanda, municipio de Apatzingán, y atestiguar una ceremonia en la que medio centenar de personas rindió culto a Nazario, convertido en un santo parecido a Jesús Malverde.

Castellanos llegó al paraje Holanda, donde presuntamente fue abatido Nazario Moreno, acompañado de otro periodista, Edgardo Morales Shertier, quien había escrito un pequeño libro –*Los Caballeros Templarios. Un Movimiento Insurgente*– en el cual hacía una defensa de este grupo como un movimiento social. Ambos periodistas recibieron el permiso para llegar hasta este lugar, donde había una hilera de 37 cruces, correspondientes a cada uno de los muertos que hubo ahí en los enfrentamientos

del 9 de diciembre de 2010. Una de esas cruces, de casi dos metros de altura, tenía inscrita la leyenda: “Nazario Moreno González, Alias El Loco, nació 08/mar/1970, falleció 09/dic/2010”.

“Las cruces están colocadas frente a una capilla tenuemente iluminada por una lámpara. En el pedestal reposa una estatua artesanal de oro de 18 quilates e incrustaciones de brillantes con la efigie de *San Naza*, como se conoce ahora a Nazario Moreno, a quien los pobladores de la zona llamaban indistintamente *El Loco* o *El Chayo*”, reportó Castellanos. (**Proceso** 1866)

Entre las imágenes de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Misericordia, San Judas Tadeo y la misma Virgen de Acahuato estaba enmarcada la figura de Nazario y su oración. Incluso se vendían estampas religiosas, rosarios y escapularios.

Ya a la entrada a Holanda, los reporteros encontraron a los fieles de *San Nazario* que rezaban: “Luz bendita de la noche, defensor de los enfermos, *San Nazario*, santo nuestro. Siempre en ti, yo me encomiendo...”.

Se trataba de una procesión con la imagen de Nazario, donde se multiplicaban las oraciones, las velas, los ramos de flores portados por niños, jóvenes, ancianos y mujeres, estampas de Nazario transformado en una efigie de barba cerrada, vestido con una túnica dorada, bordes de perlas y brillantes en el cinturón. Los devotos llevaban bajo el brazo el libro rojo *Me dicen El Más Loco*. Uno de ellos justificó la veneración al narco:

“Lo queremos hacer santo. Ya mandamos a hacer 5 millones de estampas de *San Nazario* para repartirlas entre sus fieles. ¿Eso también es un delito? Si la Iglesia lo

quiere reconocer, mejor. Si no, de todas formas esto ya no lo para nadie. El culto a *San Nazario* crece. Somos muchos los seguidores y hay capillas en los 113 municipios de Michoacán; también en Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, el Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Querétaro y otros estados.

“No queremos competir con ese de Sinaloa, Jesús Malverde. Nazario no era narco. Sí estaba un poco loco, pero ayudaba a todas las poblaciones: prestaba dinero a los campesinos sin cobrarles rédito. Y ellos le pagaban cuando levantaban su cosecha. También repartía láminas, molinos, aparatos eléctricos, de línea blanca. Ahí está en el libro rojo.”

En dicho libro Nazario señalaba: “De mí han propalado algunos medios de comunicación, azuzados por el gobierno, las versiones más terribles que en la realidad nunca me hubiera atrevido a realizar. Ellos me han creado una fama de perverso, de ser un hombre sin sentimientos y sin escrúpulos. Han llegado a acusarme de que yo me siento un dios, un santo, un espiritista y quién sabe cuántas sandeces más, con el único fin de ridiculizarme y ocultar mis verdaderas metas sociales.

“Sinceramente, he de reconocer que sí han logrado exhibirme como una persona despreciable, pues he comprobado en reiteradas ocasiones que mucha gente tiene una imagen negativa de mí. Como dicen en el rancho: ‘Me han hecho un perro del mal’.”

Explicaba que La Familia Michoacana daba “terapia y ayuda de superación” a sus integrantes y que la denominación se la dio porque por definición, “la familia es un concepto que se refiere a un grupo homogéneo, a una

misma clase social, a una cultura, tradición; misma sangre, mismo linaje, mismos intereses e iguales objetivos”.

Y añadió: “No recuerdo en qué fecha, por qué motivo o razones los medios de comunicación al servicio del gobierno iniciaron la campaña de desprestigio diciendo que el grupo que yo dirigía era una bola de narcotraficantes y empezaron a atacarnos por todos los francos (sic) y quemarnos ante los ojos de la sociedad.

“Nos involucraron en actividades del narcotráfico y de pronto ya estábamos siendo perseguidos como si fuéramos perros rabiosos. Las noticias que pasaban por la televisión y la radio eran tan venenosas que pareciera que se conjugaron en mi persona todos los Jinetes del Apocalipsis.”

Escribió que al ser perseguido por el gobierno de Felipe Calderón se sintió “acorralado e incapacitado” para demostrar su “inocencia”, por lo que tuvo que refugiarse en las montañas de su pueblo.

Según él, para defenderse de la persecución federal contactó a “políticos de importancia, empresarios, productores agrícolas y ganaderos, dirigentes de organizaciones de derechos civiles, sindicalistas, restauranteros, e incluso funcionarios del mismo gobierno de Felipe Calderón y hasta algunos jefes policiacos.

“Poco después de remontarme en los montes, nuestros simpatizantes y las redes de apoyo nos hicieron llegar docenas, después cientos y al último miles de armas de diferentes calibres para que el brote de rebeldía no se extinguiera y siguiéramos con nuestra bandera de reivindicación social.”

En la montaña, añade, “protegido por miles de cam-

pesinos y cientos de hombres armados, me dediqué, seguro en mi refugio, a impartir conocimientos del arte de la guerra, lenguajes corporales, inteligencia y contra-inteligencia, saboteo (sic), amor a la patria, superación personal, valores morales, principios nacionalistas y humanos, lealtad a la causa, honradez y trabajo. Cada uno de los que invitaba, invitaba a otro en forma sucesiva y geométrica”.

Aseguró que en los últimos años de La Familia Michoacana, personas afines a la organización “torcieron sus objetivos sociales” y se dedicaron a la delincuencia:

“En esos momentos no pude hacer nada, pues eran muy fuertes, pero en cuanto pueda los acabaremos, debido a que la delincuencia no es nuestra meta.”

Paradójicamente, en 2013, cuando comenzaron a ser destruidas todas las imágenes de *San Nazario* tras la aparición de las Autodefensas Ciudadanas, se descubrió que Nazario Moreno no había muerto como lo afirmó el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, el “santo” líder de La Familia Michoacana y después de Los Caballeros Templarios duró poco tiempo “resucitado”: en un operativo realizado en marzo de 2014 fue abatido en los cerros aledaños a Apatzingán, donde se escondía en una cabaña de madera y cemento llena de libros y televisiones.

Según las versiones militares, efectivamente Nazario ya andaba solo, vivía como ermitaño, vestido de paisano, montaba en burro y recorría los caminos y veredas de Tierra Caliente.

Entre las características pseudorreligiosas del cártel está el hecho de que tiene a María Auxiliadora como su Virgen protectora. En esto se asemeja a la mafia siciliana,

que se encomienda a la Virgen de la Anunciación, ante la cual realiza el “picciotto”, un ritual de iniciación en el que el interesado deja caer una gota de sangre de su dedo en la imagen sacra, que luego quema lanzando una oración: “Juro ser fiel a mis hermanos, no traicionarlos nunca y ayudarlos siempre. Si en algún momento dejo de hacerlo, que muera quemado y reducido a cenizas como esta imagen”.

La insurgencia social

En La Familia Michoacana no campeaba la paz que exudaban los mensajes de Nazario: su poder sobre los pueblos y regiones completas del estado se basaba en el uso de la violencia brutal.

A partir de 2006, en que aparece, y hasta 2011, cuando se escinde y algunos de sus líderes forman Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana llegó a controlar más de 70% de los municipios del estado. Incursionó en narcotráfico, homicidio, secuestro, extorsión, lavado de dinero, tráfico de armas, piratería de discos fonográficos y películas.

Llegaron al Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Sinaloa, Nuevo León y Baja California. Su área de influencia alcanzó territorio estadounidense: California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Illinois, Georgia, Atlanta, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida.

Debido al perfil de sus líderes y al dominio que tuvieron en casi todo el estado, imponiendo a presidentes

municipales, policías locales y funcionarios estatales, en el gobierno federal hubo el temor de que ese cártel pudiera transformarse en un grupo insurgente sin dejar de ser crimen organizado.

A principios de 2008, *La Tuta* hizo sentir el peso de la organización a los presidentes de más de 20 municipios de Tierra Caliente, a quienes informó que para no ser asesinados tendrían que cumplir con las órdenes de poner como directores de Seguridad Pública y de Obras Públicas a miembros de La Familia Michoacana. No sólo eso, sino que pondrían a jóvenes a sus órdenes en puestos de oficinas municipales para que reportaran lo que hacían las autoridades.

De esa manera, esta organización imponía su propia estructura de gobierno y de vigilancia sobre la autoridad municipal, controlando desde dentro y desde fuera las decisiones que se tomaban en las alcaldías.

Otra forma de control era la instrucción de sicarios, que preparaban con técnicas militares, parecidas a las que se imparten en la Escuela de Kaibiles en Guatemala.

En 2010, el expolicía estatal Miguel Ortiz *El Tyson*, miembro de La Familia Michoacana, fue detenido. Este hombre fue el jefe de plaza en Morelia como premio por haber participado en la matanza de 15 policías federales en Zitácuaro en 2009. En los interrogatorios narró cómo eran entrenados los jóvenes pistoleros en las montañas cercanas a Morelia.

“Los hacemos que maten a los prisioneros y luego les pedimos que los descuarticen; de esa manera, cortando un brazo o una pierna, es como los nuevos le pierden el miedo a la sangre. No es fácil, tienes que cortar los

huesos y todo, pero necesitamos que sufran un poco: es para que vayan perdiendo el miedo poco a poco. Usábamos cuchillos de carnicero o pequeños machetes de 30 centímetros de largo. A los nuevos reclutas les llevaba como 10 minutos cortar el brazo pues se ponían nerviosos, cuando yo hacía lo mismo en tres o cuatro minutos”.

De acuerdo con el testimonio que obtuvo el periodista Ioan Grillo, *El Tyson* entregó a la policía videos donde se le veía degollando un cadáver frente a los jóvenes reclutas.

En un análisis del gobierno estatal al que se tuvo acceso se muestran las preocupaciones que las autoridades tenían acerca de que La Familia Michoacana encabezara una corriente de insurgencia “independizadora”, pues controlaba decenas de presidencias municipales y tenía dinero para comprar armas poderosas y mantener a miles de integrantes.

El documento señala que, ante la ausencia de autoridades encargadas de dar bienestar social y de las pugnas políticas y conflictos por el poder, fue que La Familia Michoacana comenzó a formar una especie de cogobierno al imponer o “recomendar” a funcionarios para cargos ejecutivos y, al mismo tiempo, formar una red de asistencia social.

“La Familia Michoacana estableció un coto de terror y de pugna entre cárteles del narcotráfico, (pero) su real visión e intención ante los acontecimientos suscitados a través de siete años no es más que buscar una insurgencia inducida para seguir operado con independencia en territorios hostiles, esto lo vemos reflejado que al igual que cualquier ser humano, organización o país, buscan un objetivo personal y quienes son ambiciosos lo hacen a

costa de muchas cosas sean legales o ilegales.” (sic)

Continúa señalando: “La política es la que ha hecho alusión a poder dentro del Estado en donde impone todo aquello que le parezca necesario, aunque se piense que el Estado ejerce su soberanía, en la actualidad no es así en Michoacán, puesto que existen casos en los que en el Estado se puede tener la soberanía jurídica, sin embargo, su soberanía política depende de los dictámenes del grupo delictivo de La Familia Michoacana en cuanto a su desarrollo social, político y económico”.

Considera que siendo “un movimiento neoevangélico”, el separatismo formaba parte de sus principios. “La historia nos dice que los neoevangélicos mantienen la visión de que las bancadas liberales y modernistas en las iglesias protestantes han rodeado su herencia como evangélicos al acomodar las visiones y valores del mundo. Sin embargo, ven el separatismo fundamentalista y el rechazo del evangelio social como una sobrerreacción. “ P e r o donde marca la diferencia esta organización criminal de La Familia Michoacana (es que) busca enlazar lo moderno con lo liberal de una forma tangible, manteniéndose un camino más tendiente al fundamentalismo. El blanco del movimiento es el reclamar de una independencia.”

Es en este contexto que desde 2006, en pleno arranque de su gobierno, Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico desde Apatzingán, Michoacán, considerado el corazón de La Familia Michoacana. En un acto realizado en las instalaciones de la 43 Zona Militar, vestido de casa y quepis verde, con las cinco estrellas de comandante general de las fuerzas armadas, el panista lanzó la proclama bélica con la idea de que, en un par de años, tendría

controlada la situación de inestabilidad nacional producto de los enfrentamientos con los diversos grupos criminales.

Contrario a sus deseos, Calderón sólo avivó el fuego, la violencia aumentó y en lugares como Michoacán se comenzó a delinear la formación de un estado gobernado por el crimen organizado.

Las batallas entre *zetas* y La Familia Michoacana derivaron en actos de terrorismo. El 15 de septiembre de 2008, durante las celebraciones patrias, en la plaza central de Morelia y ante cientos de asistentes a los festejos, fueron lanzadas varias granadas indiscriminadamente. El saldo fue de ocho personas muertas y 132 heridas. El ataque supuestamente perpetrado por Los Zetas fue catalogado por el gobierno de Estados Unidos como un atentado “narcoterrorista”, siendo el primer precedente en México.

Tres años después de que por primera vez tratara de abatir el crimen organizado enquistado en el gobierno del perredista Leonel Godoy, el presidente Calderón actuó nuevamente mediante un operativo conocido como *El Michoacanazo*.

El 26 de mayo de 2009 fueron detenidos 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez de Michoacán por elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército Mexicano, sospechosos de brindar información y protección a La Familia Michoacana. Posteriormente fueron detenidas otras ocho personas.

El operativo fracasó. En los años siguientes, todos salieron libres. Sólo quedó acusado Julio César Godoy Toscano, medio hermano del exgobernador Leonel Godoy. El sospechoso se escapó aprovechando su fuero de diputado federal.

Vendría el caso de Zhenli Ye Gon, en el cual salieron involucrados los nuevos integrantes del gobierno de Felipe Calderón. En 2006, la PGR decomisó cerca de 19.5 toneladas de acetato de pseudoefedrina en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La droga, según la versión de la PGR, se vinculaba a una residencia propiedad de un empresario de la Ciudad de México.

El 15 de marzo de 2007, en la casa aludida se encontró una fortuna en efectivo, por lo que Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino, fue acusado de comercializar con acetato de pseudoefedrina ilícitamente, para la fabricación de metanfetaminas.

Zhenli Ye Gon acusó a “Javier Lozano” de haberlo extorsionado diciéndole “cooperas o cuello”: la orden era guardar los 205 millones de dólares que se encontraron en su domicilio, que según el empresario chino serían para la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.

El entonces secretario federal de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, asumió que la acusación era en su contra, y anunció que demandaría al prófugo. Tras un viaje a Estados Unidos, presuntamente para contactar a un equipo legal, Lozano desistió del proceso

Ante los embates cada vez más fuertes del gobierno calderonista, en noviembre de 2010 y a través de un mensaje, La Familia Michoacana propuso al gobierno una tregua y la posibilidad de su desaparición. El mensaje íntegro y literal señalaba:

A LA SOCIEDAD MICHOACANA EN GENERAL:

LA FAMILIA MICHOACANA surge en el año 2005 ante la incapacidad de nuestro gobierno para

otorgar seguridad a los ciudadanos, está integrada por hombres y mujeres michoacanos dispuestos a dar la vida por defender a su Estado, seres humanos que con valor y entrega han expulsado de Michoacán a grupos externos que por medio de la violencia y el terror han intentado apoderarse no solo de nuestro Estado, sino de todo el país, somos hombres y mujeres decididos a tener un mejor MICHOACÁN, dispuestos a luchar ante la ineficacia y tibieza de las autoridades para erradicar de nuestro Estado a ladrones, violadores, narcotraficantes y secuestradores.

Lamentablemente el gobierno federal sigue mostrando su incapacidad y ha realizado una verdadera cacería en contra de la sociedad michoacana, utilizando como excusa el acabar con nuestra organización, ha cometido en contra de la sociedad civil innumerables atropellos, ha violentado y saqueado domicilios, han asesinado y violado a hombres y mujeres, han inventado figuras antijurídicas como el arraigo y los testigos protegidos para llenar las cárceles de gente inocente fabricándoles delitos que jamás han cometido.

Derivado de estas atrocidades en contra de Michoacanos inocentes, hemos reflexionado sobre lo ocurrido y nos hemos preguntado si LA FAMILIA MICHOACANA DEBE O NO SEGUIR EXISTIENDO, SI DEBEMOS O NO SEGUIR GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE NUESTRO ESTADO, A PESAR DE LAS VIOLACIONES QUE SE ESTÁN COMETIENDO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, esta organización no quiere ser el pretexto para que las

autoridades continúen lacerando y sobajando los derechos humanos de nuestros hermanos Michoacanos.

Por tales razones y con la incertidumbre de dejar nuevamente en manos de las autoridades la seguridad de nuestro Estado, HEMOS DECIDIDO REPLEGARNOS y reintegrarnos a nuestras actividades productivas, esto si el gobierno federal y local, la PFP y demás autoridades se comprometen a tomar el control del estado con fortaleza y decisión, con el ímpetu de servir a los ciudadanos de forma honesta, con el compromiso público de salvaguardar sin temor la seguridad de los Michoacanos de todos aquellos que pretendan venir a desestabilizar a nuestro hermoso Estado, con el compromiso pues, de morir-se en la raya por Michoacán.

Si el gobierno acepta este compromiso público y lo cumple LA FAMILIA MICHOACANA SE DISOLVERÁ, para no seguir siendo la bandera con la que las autoridades federales siguen atropellando los derechos humanos de los michoacanos.

Para finalizar, a la sociedad les recordamos que nosotros NO MATAMOS INOCENTES y nuestro compromiso con ellos es y seguirá siendo su bienestar, Y SI ES NECESARIO SEGUIR EN LA LUCHA LO HAREMOS, por ello, les pedimos que valoren si les servimos o desaparecemos, invitándolos a que nos hagan saber su opinión a través de los medios conducentes (Internet, redes sociales, radio, televisión, periódicos, etc.), ya que para nosotros es importante saber la opinión de todos ustedes”.

“MAS VALE MORIR DE PIE Y CON LA FRENTE

EN ALTO, QUE VIVIR TODA UNA VIDA DE RODILLAS Y HUMILLADO”.

ATENTAMENTE.- FAMILIA MICHOACANA
 Michoacán, Noviembre 2010.

Sin embargo, esta propuesta de tregua desapareció días más tarde. Tras la supuesta muerte de *El Chayo* el 10 de diciembre de 2010, luego de un enfrentamiento que duró 24 horas y que dejó como saldo al menos cinco muertos, 10 heridos y 30 autos quemados, La Familia Michoacana lanzó una amenaza de muerte contra Felipe Calderón, que ya estaba con la frustración de no acabar con el problema del crimen organizado como lo había planeado desde Los Pinos.

El nuevo mensaje de los traficantes decía, a la letra:

Cuídate Felipe Calderón, reza a tu santo porque nosotros traemos la bendición de nuestro Dios. Nuestro Dios Nazario, que Dios lo tenga en su gloria. Esto no va a parar hasta que La Familia Michoacana muera.

Y nunca van a morir Los Pumas, Los Bravos, Los Leones, La Resistencia, El 5-5, Los Élite, Los LF, Los Chayitos, Los Machitos, Las Fieras, Los X, Los de la A, y muchos más.

Vamos por Calderón y toda su puta familia, ya están en Michoacán y reconozcan Cheran, Capacuarro, Cheranastico, La Arantepacua, La Mohonera, Nuevo Morelos, están con nosotros concentrados.

Esto no es narco terrorismo, es una guerrilla, es la guerra por la paz y fuerzas federales de Michoa-

cán, el Don Juan de Arantepacua tiene su gente y vamos a dar la vida por todo, saludos.

MENSAJE PARA LOS MICHOACANOS

No se asusten, traten de no salir a la calle para que los puercos federales no les falten al respeto y para evitar las balas perdidas y más perdidas. No vayan a hospitales, no vayan a tiendas, vean la tele y quédense en su casa por favor.

Atte. La Familia Michoacana, El Fantasma 6 y Bravo 6.

Respeto y apoyo a nuestros líderes El Chango y La Tuta, sucesores... y sucesores de La Tuta, Cenizo y El Bravo 6.

Pa que hablen con argumentos les decimos quienes son los jefes de La Familia, pa que no engañen a la gente y le digan más mentiras.

Casi al mismo tiempo, el 15 de diciembre *La Tuta* emitió un mensaje por radio donde manifestaba que Nazario Moreno había muerto y pedía a los integrantes de La Familia Michoacana no bajar las manos ni dejar las armas: “No nos vamos a dejar por ningún motivo... estén listos con las armas, no abandonen las armas... esto no se acaba, vamos a seguir adelante, todo va a seguir igual. ¡Hasta la victoria!” arengaba.

A pesar del endurecimiento del gobierno calderonista, no fueron las acciones militares y policiacas las que lograron desintegrar a La Familia Michoacana, considerada entonces el grupo del crimen organizado más beligerante y peligroso de México. Tampoco las órdenes de aprehensión giradas en contra de sus líderes.

Lo que provocó la división interna y su desintegración fueron las peleas que suscitó la supuesta muerte de Nazario Moreno entre *La Tuta* y *Kike* Plancarte con *El Chango* Méndez, quien pretendía apoderarse de toda la estructura de La Familia Michoacana.

Así, de las entrañas de La Familia Michoacana, que para entonces ya tenía presencia en el Estado de México, Jalisco, Guerrero y Guanajuato, nació el nuevo grupo denominado Los Caballeros Templarios, que al paso del tiempo y de manera muy rápida les arrebató el control del estado, reforzó las ligas con la clase política, extendió sus negocios a la minería –con las trasnacionales de China– y ahondó el perfil religioso que *El Más Loco* le había dado a la organización.

La Familia Michoacana cedió casi todo el dominio en Michoacán, pero sus fuerzas se concentraron a partir de entonces en Guanajuato, Guerrero y, sobre todo, en el Estado de México, haciendo de esta entidad su principal plataforma cuando era gobernador el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

De hecho, el Estado de México es desde 2011 la entidad donde el crimen organizado michoacano y Los Zetas instauraron el mismo modelo de control político, social y económico basado en el uso brutal de la violencia para el cobro de “impuestos”, cuotas y extorsiones que ejecutan en negocios de todos los tamaños.

Un informe de inteligencia militar del 17 de febrero de 2014 asevera que La Familia Michoacana tenía presencia en 18 municipios; Los Caballeros Templarios, en 14, y Los Zetas, en 11. Otros cárteles que también se disputaban el territorio mexiquense eran los de Jalisco Nueva Generación y los Beltrán Leyva.

CAPÍTULO 5.
LOS CABALLEROS TEMPLARIOS

El nacimiento

De acuerdo con la PGR, a partir de la supuesta muerte de Nazario –la de diciembre de 2010– y mediante un amplio operativo militar efectuado en Morelia, Jesús Méndez Vargas *El Chango* quiso quedarse con el control de La Familia Michoacana y esto provocó desacuerdos con los otros cabecillas de la organización, principalmente con Enrique *Kike* Plancarte y Servando Gómez *La Tuta*, lo que al final llevó a la ruptura entre ellos.

La división y los desacuerdos internos duraron los tres primeros meses de ese año y fue hasta el 9 de marzo de 2011 cuando Servando Gómez y Enrique Plancarte dieron a conocer la división del grupo, al anunciar el nacimiento de Los Caballeros Templarios y advertir del inicio de una guerra contra *El Chango* Méndez, quien se quedaría al frente de La Familia Michoacana por unos meses.

La mañana de ese día, en Morelia, Apatzingán, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas aparecieron al menos 30 pancartas firmadas por la nueva organización “Los Caballeros Templarios”, en las que anunciaban que a partir de ahora ellos se encargarían de “salvaguardar” el orden en Michoacán:

A toda la sociedad michoacana: les hacemos de su conocimiento que a partir del día de hoy estaremos laborando aquí las actividades altruistas que antes realizaban los de La Familia Michoacana, estaremos a la orden de la sociedad michoacana para atender cual-

quier situación que atente contra la integridad de los Michoacanos, nuestro compromiso con la sociedad será de salvaguardar el orden y evitar robos, secuestros y extorsiones y blindar el estado de intervenciones de organizaciones rivales.

ATENTAMENTE

LOS CABALLEROS TEMPLARIOS

No fue el único texto, hubo otro más agresivo. Se trataba de una amenaza en contra de su antiguo compañero en La Familia Michoacana, *El Chango Méndez*, a quien acusaban de traidor por aliarse con Los Zetas.

Informes de la PGR de mayo de 2011 muestran que *El Chango Méndez* organizó una reunión en el poblado de Las Lomas, del municipio de Jilotlán, Jalisco, con el resto de sus operadores. La idea era acabar con Los Caballeros Templarios y recuperar el territorio, por lo que pidió ayuda a Los Zetas. Éstos acordaron enviar 200 elementos para apoyarlo.

El gobierno de Felipe Calderón parecía jugar el papel de réferi de la pelea entre los dos grupos, pues las acciones militares y policiacas que había echado a andar desde el 11 de diciembre de 2006 con el Operativo Conjunto Michoacán no hacían mella en el crimen organizado.

La detención del *El Chango Méndez* el 21 de junio de 2011, en la ciudad de Aguascalientes, frenó la ola de violencia que ya se estaba dando.

Siguiendo las mismas tácticas paramilitares de terror y miedo, así como los modos y el lenguaje místico-religioso de La Familia Michoacana, le arrancaron a balazos a esta última agrupación 70% del territorio michoacano.

Pero Los Caballeros Templarios no empezaron de cero para dominar rápidamente la mayor parte de Michoacán –como lograron desde el primer año–, sino que partieron de lo que ya había hecho La Familia Michoacana.

Los Templarios fortalecieron la estructura, el número de integrantes, así como el sistema de control social y de gobierno que tenían bien estructurado y que les había dado muchos réditos.

Según análisis gubernamentales, la estructura de Los Caballeros Templarios era una de las más fuertes y mejor diseñadas de todos los grupos del crimen organizado en México, pues se asemejaba al de una empresa: tenía un consejo que estaba al mando y asumía los tratos directos con políticos y otros grupos criminales; divisiones encargadas del trato con negocios, empresas nacionales y extranjeras como las de China; otra división encargada de tratar con organizaciones sociales, campesinas y medios de comunicación; una unidad operativa, en la cual estaban los sicarios a sueldo y los simpatizantes, que eran una red de espías e informantes llamados “halcones” o “apuntadores”, compuesta por jóvenes desempleados, policías, limpiadores de zapatos y taxistas que estaban en todos los pueblos y ciudades, y finalmente una unidad jurídica.

Se trataba de formar parte de la sociedad y del gobierno en una especie de simbiosis a través de la integración de una base social y la ocupación de puestos de gobierno y mando policiaco.

El discurso de Los Caballeros Templarios era el mismo que el de La Familia Michoacana: decía que se trataba de una organización que traía beneficios a la sociedad, pues les daba protección ante las amenazas de otros grupos cri-

minales de fuera del estado, y era un interlocutor de fuerza ante el gobierno estatal, federal y los partidos políticos.

Los Caballeros Templarios profundizaron el Estado paralelo con el cobro de “impuestos”, labores de vigilancia y seguridad, control de territorio y la imposición de autoridades.

Para esto llamaron nuevamente a alcaldes y les dijeron que el cártel se quedaría con el control de la policía y la Dirección de Obras, para cobrar impuestos. También anunciaron que les quitarían 10% del presupuesto municipal.

En reuniones con comerciantes, hoteleros, empresarios, ganaderos, productores agrícolas y tianguistas de cada municipio los templarios les avisaron que establecerían cuotas o impuestos extras a los precios de cada producto vendido: tres pesos por kilo de ganado; 1.5 pesos por kilo de vaca en resuello; 200 pesos diarios cada carnicería; dos pesos por kilo de tortilla; los mineros pagarían 100 pesos por día por cada camión de carga; los agricultores, 50 pesos por hectárea, para darles agua; los sembradores de mango abonarían mil pesos por semana en tiempos de cosecha; cada tonelada de aguacate se gravaría con mil pesos, y con tres pesos cada kilo de limón.

La seguridad también se pagaba: 60 mil pesos mensuales a tiendas, puestos de comida en la calle, tortillerías, carnicerías, “cervacentros”, farmacias. También a quienes tenían máquinas de juego les cobraban 150 pesos semanales por cada una de ellas.

Hubo lugares como el municipio de Tepalcatepec donde ya empezaban a cobrar 200 pesos por carro o camioneta, 300 pesos el metro cuadrado de construcción en las casas particulares, y a los jornaleros 300 pesos cada semana.

Productores de limón de Tierra Caliente denunciaron que Los Caballeros Templarios establecían los días y la cantidad de horas que podían trabajar los recolectores y los vendedores del cítrico. Así controlaban la producción y los precios de este producto, que a principios de 2014, cuando el conflicto con las autodefensas estaba en la parte más fuerte, llegó a costar 80 pesos el kilo: 300% más que su precio normal.

Algo similar ocurrió con el aguacate. Los jefes de plaza de la organización imponían cuotas millonarias a los productores de esta fruta, que llegó a conocerse como el “oro verde” por el precio tan alto que alcanza en Estados Unidos y Europa. Su ambición llegó al punto de apropiarse de las huertas más productivas en algunos municipios, como Tancítaro, donde se apoderaron de miles de hectáreas que pusieron a sus nombres a través de notarios que ellos tenían.

Los Templarios controlaban las ferias municipales y ganaderas, cobrando cuotas a comerciantes y locatarios a cambio de no hacerles daño.

La estructura organizativa era una mezcla de empresa y secta que llegó a meterse en las campañas para presidentes municipales y gobernador, como sucedió en 2011, cuando resultó ganador el candidato del PRI, Fausto Vallejo, tras una década de gobiernos del PRD.

Dicha organización era piramidal. En la parte alta estaba el consejo compuesto por “los hermanos de mayor experiencia”, encargado de dar órdenes, establecer las líneas de acción y revisar el ingreso de nuevos elementos bajo un ritual de juramento.

Hasta 2013 Los Caballeros Templarios tenían 225 cé-



lulas que operaban en todos los municipios del estado. El consejo estaba compuesto por sus principales líderes. Además, había un brazo social y de comunicación denominado Movimiento de Paz y Dignidad, así como una célula administrativa y otra operativa dividida en siete regiones. Así se conformaban dichas instancias hasta principios de 2014:

Consejo de Los Caballeros Templarios

Nazario Moreno González <i>El Chayo</i>	
Servando Gómez Martínez <i>La Tuta</i>	
Enrique Plancarte Solís <i>El Kike</i>	
Jorge Luis Valencia Alzate <i>El Chuki</i>	
Ignacio Andrade Rentería <i>El Cenizo</i>	

<p>Miguel Ángel Gallegos Godoy <i>El Micheladas o Migueladas</i></p>	
<p>Dionisio Loya Plancarte <i>El Tío</i></p>	
<p>Arturo Gallardo Serrato <i>El Tucán</i></p>	
<p>José Samper Servín Juárez <i>El 300</i></p>	
<p>José Pineda o Rodolfo Maldonado <i>Don José</i></p>	
<p>Tito Emigdio Fernández Torres</p>	

Movimiento de Paz y Dignidad

NOMBRE	NOTA	TRAYECTORIA
<p>Tito Emigdio Fernández Torres</p> 	<p>Líder del Movimiento de Paz y Dignidad.</p>	<p>Arquitecto, Originario de Sahuayo, Mich. Acusado de fraude y malversación de fondos e inhabilitado en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel donde fungía como subsecretario de Obras Públicas, además señalado por sus vínculos con las empresas de construcción propiedad de Carlos Ahumada que operaban en Michoacán.</p>
<p>Juan Polvos Mancilla</p> 		<p>Licenciado en derecho, profesor del Conalep plantel Apatzingán, hombre de confianza de <i>El Chayo</i>, candidato suplente a diputado federal por Apatzingán en 2009, donde el Candidato fue Saúl Solís, alias <i>El Lince</i>, templario detenido en septiembre de 2011. Hasta el 2014 Mancilla era director del plantel Conalep mencionado y activista político y social de Los Caballeros Templarios.</p>
<p>Juan Avilés Ruiz</p>		<p>Licenciado en derecho, presidente del Colegio de Abogados de Apatzingán, con fuertes nexos con la cúpula del crimen organizado; ha organizado diversas reuniones con empresarios y profesionistas de la región de Apatzingán por orden de Los Caballeros Templarios</p>

<p>Armando Aleján Maciel</p>		<p>Licenciado en derecho, tiene su despacho y colabora junto con un grupo de abogados de Los Caballeros Templarios. Administra junto con Juan Polvos Mancilla y el pasante en Derecho Salvador Ríos la producción de granos en Tierra Caliente. Estaban asentados en lo que fueron las oficinas y bodegas de la Productora Nacional de Semillas, por el Obelisco a Lázaro Cárdenas en Apatzingán.</p>
<p>Rigoberto Peláez Mendoza</p>		<p>Empresario, político del PAN, candidato a alcalde de Apatzingán en 2011. Fue adoctrinado en los “cursos de liderazgo” organizados por el crimen. Encargado de administrar la extracción y comercialización de materiales pétreos por parte de los templarios en la región de Apatzingán.</p>
<p>Alfonso Solórzano Fraga</p>	<p>Exsecretario de Obras Públicas del gobierno del perredista Lázaro Cárdenas Batel</p>	
<p>Filiberto Vejar Pulido</p>	<p>Representante técnico de los ejidatarios de la región de Tierra Caliente</p>	
<p>Juan Olmos Mantilla</p>	<p>Presidente de la asociación de ejidos de Apatzingán</p>	

Luis Padrón Ramírez	Director general de El Diario del Occidente de Michoacán	
Emma Gómez Vargas		

Administradores

Supervisor y administrador general	Alfonso Chávez Ruiz
	José Samper Servín Juárez

Unidades operativas

El grupo criminal se encuentra distribuido en siete regiones. En cada una se tienen identificados a los siguientes operadores:

COSTA

Encargado regional	Ignacio Beber <i>El Chivo</i>	
Coahuayana	Carmelo Núñez Vargas <i>El 7</i>	
Aguila	Enemerio Lucas Rivera <i>El Mollo</i>	


APATZINGÁN

Encargado regional	Francisco Galeana Núñez <i>El Pantera</i>	
Apatzingán	Rafael Álvarez del Río, <i>abogado</i>	
Tepalcatepec	Isidro Birrueta Montejano <i>El Chicano</i>	
Tancítaro	Alejandro Carranza Cervantes <i>El Zurdo</i>	
Aguililla	<i>El Tena</i>	
Coalcomán	Antonio Tapia Varelas <i>El Toñón</i>	

URUAPAN

Encargado regional	Pablo Magaña Serrato <i>Morsa o M5</i>	
Administrador	Rodrigo Herrera Álvarez	
Abogado	Polo Guerrero	
Administrador	Héctor Chávez Quiroz <i>El Mariachi</i>	
	Gerardo Cortez Gutiérrez <i>El 18</i>	


PÁTZCUARO

Encargado regional	Flavio Gómez Martínez	
Administrador	Santa Clara del Cobre	

MORELIA

Encargado regional	Jorge Luis Valencia Álzate <i>El Chuki</i>	
Encargado de la plaza	Sergio Bejines	
Zacapu	Alberto Quintero <i>El Toro</i>	
Morelia	Alejandro García	

ZITÁCUARO

Encargado regional	José Samer Servin Juárez <i>El Inge</i>	
Huetamo, San Lucas	José Pineda González o Rodolfo Maldonado Bustos	

ZAMORA

Encargado regional	Gustavo Alberto Magaña Mosqueda	
--------------------	------------------------------------	---

Los Reyes y Peribán	Broly Banderas	
Zamora, Jacona y Tingüindín	<i>El Burger</i>	
Yurécuaro	Mario Briceño Hernández <i>El Mamerto</i>	

El Código Templario

Michoacán ha sido una de las entidades de mayor religiosidad del país. Fue uno de los estados donde se expresó con más fuerza la guerra cristera, que se desarrolló entre 1926 y 1929. Proveyó cerca de 12 mil combatientes cristeros, con los que se creó la División del Sur, que contaba con nueve regimientos, y la Brigada de los Altos, con cinco regimientos. Su territorio de acción incluía Coacomán, Aguililla, San José de Gracia, Sahuayo, Zamora, Tiríndaro, Cotija, Cojumatlán, Tingüindín, Santiago Tangamandapio y Huetamo, entre otros.

La expresión más emblemática de la guerra cristera fue la beatificación del niño José Luis Sánchez del Río el 20 de noviembre de 2005 –junto con otros 13 mexicanos– en reconocimiento al martirio que soportó antes de ser ejecutado en su ciudad natal, Sahuayo, el 10 de febrero de 1928.

En los pueblos de Michoacán, como Pátzcuaro, Janitzio y Tzintzuntzan se realizan las fiestas de Día de Muertos más imponentes de todo el país, y también en tierras michoacanas se han expresado los fenómenos católicos populares más importantes de los últimos años, como la creación de la Nueva Jerusalén en 1973 (municipio de Turicato, zona de Tierra Caliente) por el cura “Papá Nabor” para dar cumplimiento a la visión de una anciana que –según la tradición– transmitió órdenes de la Virgen del Rosario al párroco del Puruarán para crear una comunidad “protegida por la divinidad”.

No es casual, entonces, que en Michoacán haya nacido el único grupo del crimen organizado con un perfil de secta religiosa: La Familia Michoacana que dio pie a Los Caballeros Templarios. Tampoco asombra que Nazario Moreno, uno de sus fundadores, se haya hecho a sí mismo “santo”.

Desde que se anunció la formación de Los Caballeros Templarios, la banda dio a conocer su “Código”, impreso en miles de ejemplares que fueron distribuidos en todo el estado.

Este código contiene 53 artículos y el juramento que supuestamente rige la conducta de todos sus integrantes, pero nunca fue respetado, pues a los días de que anunciaron que “lucharían por el bienestar de los michoacanos” comenzaron a impartir su “justicia divina”: colgaron los cuerpos de dos hombres con un mensaje: “Lo matamos por ladrón y secuestrador. Atentamente, Los Caballeros Templarios”.

La dirigencia de la nueva agrupación ya estaba acostumbrada a la sangre desde que estaban en La Familia Michoacana. Aunque tomaron el nombre de la orden mi-

litar cristiana de la Edad Media que tenía como misión proteger a los peregrinos que iban hacia Jerusalén, la compasión jamás ha estado entre las virtudes de Los Caballeros Templarios michoacanos.

Su Código, como lo dice el documento de 24 hojas ilustrado con estampas de los templarios medievales, es de cumplimiento obligatorio para sus integrantes y advierte de que quien tome el juramento “bajo un ritual establecido por el Consejo” lo hace de por vida y tiene que cumplirlo bajo pena de muerte.

En la portada del “Código de Los Caballeros Templarios de Michoacán”, impreso a color en un formato de bolsillo, se lee el siguiente párrafo: “Esa lucha es por tu gente, por mi gente, por nosotros mismos y por nuestras futuras generaciones”.

Al final de cada hoja ponen citas de superación personal y de liderazgo adornadas con una cruz paté: la tradicional de los templarios. Entre estas citas se ve: “Un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales es invencible”; “La fortaleza de un hombre radica en el dominio de su mente”; “Si eres constante, tus sueños y anhelos puede convertirse en realidad”; “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros los que las jugamos”; “Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro”.

De entrada, Los Caballeros Templarios aseguran que son “una Orden”, con la misión principal de “proteger a los habitantes y al territorio sagrado del estado libre, soberano y laico de Michoacán”, y que los integrantes de la “Orden” están obligados a comportarse con “honor, dignidad, absoluta disciplina, lealtad y honestidad”, ade-

más de cumplir un “voto de silencio” para no divulgar sus actividades y secretos.

En el capítulo de las batallas empiezan manifestando su creencia en un Dios, al que deben servir. Establecen la orden de luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo, empezando por su casa, colonia, ciudad, estado y país.

“La Orden deberá luchar contra el desmoronamiento de los valores morales y los elementos destructivos que prevalecen hoy en la sociedad humana”, sostienen Los Templarios, quienes manifiestan que apoyan “la libertad de expresión, de conciencia y de religión”, así como la “defensa colectiva” para erradicar la pobreza y la injusticia.

Se mandata que los integrantes del grupo se conduzcan con humildad; no deben ofender a ninguna persona. “Ninguna mujer deberá temer nada de un templario, ni de sus palabras ni de sus acciones. Ningún niño deberá padecer tampoco ese temor. Ningún hombre deberá temer a un templario, sino al contrario, debe sentir protección”.

Indican que cada miembro de la Orden debe evitar “ser brutal, emborracharse en forma ofensiva, ser inmoral, cobarde, mentir o tener intenciones maliciosas”. También están obligados a llevar “una vida sobria y alegre, manteniendo un perfil bajo para no hacerse notar”.

Queda estrictamente prohibido “realizar secuestros con la finalidad de obtener dinero” y tomar drogas. “Los jefes de la orden y su personal deben practicarse *antidoping* e informar al Consejo los resultados”.

Tampoco pueden matar por gusto o por dinero. “Cuando se tome esta decisión debe investigarse bien previamente y si existen razones suficientes, entonces sí proceder”.

Las reglas de conducta dictadas precisan que los integrantes deben cumplir las órdenes de sus jefes, respetar el organigrama, avisar a sus superiores cuando salgan de su zona y respetar el sitio adonde lleguen.

Se informa que se castigará con la muerte a aquellos que cometan una falta contra otro miembro del Consejo o violen el voto de silencio. Al que traicione a los templarios, además, se le decomisarán sus propiedades y sus familiares correrán la misma suerte.

“Si por desgracia yo traicionara mi juramento, ruego ser ejecutado por la Orden como un traidor”; “Yo consiento, si faltó a mi palabra de honor, en ser ejecutado por las armas de los buenos compañeros o ser devorado por las bestias salvajes del bosque”, se lee en el reglamento, que al final establece el siguiente juramento:

Juro delante de todos vivir y morir con honor.

Juro combatir la injusticia y socorrer a mi prójimo.

Juro, igual en el combate como en la paz, que ningún caballero será considerado por mí como enemigo.

Juro fidelidad al temple y esforzarme por perpetuarlo.

Juro respeto a las damas, veneración a las madres, protección a los niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados.

Juro respetar la fe de otros y buscar más la verdad que la gloria, el honor que los honores.

Los Caballeros Templarios de Michoacán no respetaron su Código, pero sí establecieron una especie de Estado feudal, con un ejército de sicarios; una amplia red de espionaje en los pueblos, ciudades y en el gobierno estatal;

autoridades bajo su dominio y voluntad, y un sistema de impuestos forzosos.

Más que una sociedad de justicia, edificaron un imperio de terror y muerte.

La industria criminal

La Familia Michoacana primero y luego Los Caballeros Templarios dieron el salto cualitativo de “traficantes de droga” a un “grupo del crimen organizado con representación en los niveles de gobierno municipal y estatal”.

Para finales de 2011, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reportó que Los Caballeros Templarios operaban en Michoacán, Estado de México, Jalisco y Morelos. Era el tercer cártel más extendido en el país, después del de Sinaloa y Los Zetas.

En 2013, las ganancias de Los Caballeros Templarios eran impresionantes: ingresaban más de 31 mil 460 millones de pesos anualmente en extorsiones a mineros, aguateros, empresarios, hoteleros, farmacias y otros comercios; secuestros, cuotas a autoridades y venta de drogas.

De acuerdo con un documento de cuerpos de seguridad al que tuvo acceso el reportero Juan Pablo Becerra, del diario *Milenio*, éstos eran algunos de los dividendos obtenidos por Los Templarios: (Becerra Acosta, 2013)

Por venta de drogas en el mercado nacional, 444 millones de pesos anuales; extorsiones a empresas de construcción, ganaderas, agricultura, comercios, servicios y sindicatos, 152 millones; extorsiones a presidencias mu-

nicipales, 170 millones de pesos; inversión en negocios como venta de vehículos, empresas de seguridad pública, tiendas de ropa, zapatos, aparatos eléctricos, productos agrícolas, restaurantes, bares, antros y hoteles, 205 millones de pesos.

En el desglose de cada uno de estos rubros se ve con más claridad el control económico de dicho cártel, del que nadie se salvaba. Un ejemplo: los alcaldes debían pagar cuotas fijas de 20 mil pesos mensuales o más y 4 millones y medio de pesos para realizar obras públicas como drenaje, pavimentación y alumbrado.

Las ganancias por cobros de “derecho de piso” a gasolineros les dejaban 451 mil pesos semanales en sólo 23 municipios; un millón y medio de pesos venían de las tiendas de abarrotes y tiendas con máquinas tragamonedas; un millón y medio también por fletes y empaques; cobro por permisos de exportación e importación en sólo 10 municipios, 472 mil pesos semanales; licencias y permisos para bares y cafés en otros 10 municipios, 589 mil pesos; por permitir la operación de rastros en seis municipios, 248 mil pesos; cobro a aserraderos de 12 municipios, un millón 200 mil pesos mensuales, y cobro a nueve sindicatos, 133 mil pesos mensuales.

Los transportistas también pagaban sus cuotas: 528 mil pesos mensualmente, los de Lázaro Cárdenas; 440 mil, los de Apatzingán, y una cantidad similar los de Uruapan y Zamora.

En tanto que, por extorsiones telefónicas a una serie de personas que aparecen en una lista, lograban 12 millones 800 mil pesos en sólo un mes.

Otras investigaciones periódicas indican que Los

Caballeros Templarios ganaban 2 mil 460 millones de pesos al año en extorsiones a los aguacateros de 46 municipios –dueños de 112 mil 673 hectáreas, donde se producen 1.2 millones de toneladas del “oro verde”.

La extorsión llegó a tal grado que algunos de los productores más importantes huyeron del país y otros trasladaron sus inversiones a lugares más seguros.

Un filón lucrativo fue la extorsión a la industria minera y sus vínculos con las transnacionales de China. Esta fuente de financiamiento se convirtió en una de las más importantes para Los Caballeros Templarios, como lo fue antes para La Familia Michoacana y Los Zetas –la agrupación que comenzó con este negocio tanto en Michoacán como en Coahuila.

En una entrevista con la agencia Associated Press (AP), el comisionado Alfredo Castillo reconoció que el mineral de hierro se volvió “su principal fuente de financiamiento”. Fue la primera vez que el gobierno mexicano reconoció que un grupo del narcotráfico ganaba más por otras actividades que por el trasiego de estupefacientes.

Reveló que el grupo cobraba alrededor de 15 dólares por cada tonelada exportada. Esto significa que sólo en 2013, cuando se extrajeron 5 millones de toneladas de hierro de las minas de Michoacán –las más productivas en el país–, el cártel se embolsó unos 75 millones de dólares.

Pero esta cantidad es mínima si tomamos en cuenta la declaración que hizo el exgobernador Fausto Vallejo después de que la Marina tomara el control del puerto de Lázaro Cárdenas, en noviembre de 2013. Declaró

que el valor de los ingresos criminales en torno a Lázaro Cárdenas podía ascender a 2 mil millones de dólares al año, cerca de la mitad del presupuesto de Michoacán en 2012.

Organizaciones del crimen organizado como Los Caballeros Templarios se han montado muy bien a las leyes del neoliberalismo, diversificando sus negocios más allá de las fronteras. Si en un principio los primeros grupos criminales de Michoacán eran sólo productores de marihuana y heroína, y luego se extendieron a las metanfetaminas y a transportar la cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos, ahora con Los Caballeros Templarios se ampliaron sus vínculos hasta China.

Esto no significa que Los Templarios hayan descuidado el tráfico de enervantes: siguieron transportando cocaína proveniente de Colombia, para lo cual incluso usaron submarinos. Informes confidenciales de la Secretaría de Marina aseveran que desde la costa michoacana han llegado a salir submarinos cargados con cocaína. Lanchas con doble motor fuera de borda parten de La Tupitina, en el límite de los municipios de Lázaro Cárdenas y Aquila, hacia La Paz, Baja California Sur. Hoy, La Tupitina alberga una base de la Armada de México.

Además, invirtieron en la producción de drogas sintéticas. La entidad es clave para los cárteles porque colinda con la Sierra Madre Occidental, el Océano Pacífico, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Querétaro. Además, los reactivos químicos para producir drogas que vienen de Asia llegan a Lázaro Cárdenas, puerto muy bien conectado.

La entidad produce, en las regiones Sierra, Costa y

Tierra Caliente, drogas sintéticas como efedrina, crystal y crack, y ha seguido con el cultivo de mariguana y amapola.

Con toda esta ramificación de actividades, Los Caballeros Templarios ya son reconocidos por organismos internacionales como un grupo del crimen organizado más avanzado que los tradicionales. Antonio Mazzitelli, representante para México y Centroamérica de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, los considera “una organización criminal de tipo mafioso”, cuya “capacidad operativa no está relacionada con un bien o mercado, como las drogas, sino con todos los mercados que les pueden generar una renta”.

El otro grupo que ha dejado de depender de las drogas como principal ingreso son Los Zetas, agrupación que, como se recordará, dio las bases y la estructura organizativa a La Familia Michoacán y, ésta, a Los Caballeros Templarios.

Este cambio visto en Los Caballeros Templarios es la expresión más clara de la mutación de los cárteles mexicanos, que dejaron atrás su papel de productores y traficantes de drogas para devenir organizaciones criminales con un esquema corporativo multinacional, que buscan y pueden involucrarse en cualquier actividad económica que les genere ganancias.

No sólo eso: también saltaron a las áreas social y política, creando una base en los pueblos y comunidades y, al mismo tiempo, vínculos estrechos con los distintos niveles de gobierno, o incluso fundiéndose en un solo cuerpo con el grupo gobernante.

De este modo, Los Caballeros Templarios alcanzaron los niveles más temidos del narco-gobierno en Michoacán.

La estrategia mediática

Los Caballeros Templarios han tenido una de las estrategias de comunicación más depuradas de todas las organizaciones del crimen organizado en México y el mundo. En su estructura llegaron a tener a una persona especialmente asignada para atender a la prensa y dar entrevistas a los reporteros locales, de la Ciudad de México y extranjeros.

Este personaje es *El Tío*. Su nombre es Dionisio Loya Plancarte y se encontraba en la primera línea de la organización, a un lado de Servando Gómez *La Tuta*, Enrique *Kike* Plancarte y Nazario Moreno *El Chayo*.

Desde que dieron a conocer en 2006 a La Familia Michoacana (y su cártel heredero, Los Templarios), este grupo utilizó una gran cantidad de estrategias de propaganda con el fin de influir en sus enemigos, en la sociedad, en los medios de comunicación y en el gobierno: primero fueron los narcomensajes que dejaban en los cadáveres; luego usaron mantas que colgaban en los puentes, con largas explicaciones acerca de quiénes eran y cuáles eran sus metas. Se trataba de comunicados de prensa que retomaban los medios.

Después emplearon las inserciones en los periódicos locales y le inyectaron dinero a algunos de ellos, como *Al Día*, *Diario de Occidente*, *Líder* y *Los Periodistas*, y pagaron a reporteros para que fueran sus portavoces, como es el caso de Eliseo Caballero –corresponsal de Televisa– y José Luis Díaz Pérez, dueño de la Agencia Esquema, quienes el 22 de septiembre aparecieron en un video con *La Tuta*. Ambos le daban consejos para la estrategia mediática de Los Caballeros Templarios.

Hay testimonios de reporteros de Michoacán que narran cómo con engaños los llevaban a desayunos en hoteles de Tierra Caliente, donde aparecían representantes de Los Templarios para dictarles línea informativa o para decirles que eligieran a un representante, que se encargaría de ser el enlace con la mafia y darles información o entrevistas, y a un encargado de repartirles dinero mensualmente.

Un reportero que pidió el anonimato recuerda que, desde 2006, cuando apareció La Empresa, *El Tío* ya operaba acercándose a los periodistas, principalmente de Morelia y de la nota policiaca, para ofrecerles dinero a cambio de colaboración.

El portavoz del grupo criminal llegó a proporcionar hasta 5 mil dólares mensuales a medios de comunicación y reporteros para que dijeran lo que el cártel quisiera y difundieran información filtrada.

Eufemísticamente les decían a los comunicadores: “Nosotros somos los técnicos, los que hablamos amablemente; pero si no jala con nosotros les mandamos a los rudos, y ahí ya no hay escapatoria”.

A los que no convencían los amenazaban y secuestraban por dos o tres horas, y ahí con golpes o amenazas los hacían cambiar de opinión, o cuando la información no les gustaba les decían: “Bájale de huevos, cabrón”, y a la salida de la redacción los esperaban camionetas con gente armada y eran llevados a casas de seguridad para ser intimidados y aceptar el dinero.

A otros reporteros los trataban de enganchar diciéndoles que aceptar los sobornos no los comprometía, pero después los obligaban a colaborar sirviendo de enlaces

con otros medios de alcance nacional. “Agárrelos, son órdenes de mi jefe, si no me van a partir la madre, es un regalo, para que nos ayude, nosotros detenemos a secuestradores, violadores, asaltabancos, asesinos, narcos de otros estados, y les advertimos dos veces, a la tercera les damos ‘piso’”. La ayuda consistía en difundir las decapitaciones perpetradas por ellos, las pancartas, los volantes y, lo principal, entrevistas para dar a conocer sus actividades”, señala otro reportero.

En 2012, Los Caballeros Templarios organizaron una reunión masiva con reporteros de todo el estado a los que con engaños citaron en un hotel para “darles línea” y dinero. Uno de los asistentes relata:

“El 12 de septiembre de 2012 me hablaron por teléfono para decirme que se realizaría una reunión con empresarios que querían invertir en Michoacán y me citaron a las afueras del Penal de Uruapan, en un Oxxo, junto con otro reportero de Uruapan. Ahí llegó una camioneta blanca del año con dos personas. Nos subieron y nos llevaron a Apatzingán, al hotel Camelinas. Cuando llegamos, casi a las 11 de la mañana, estaba lleno de periodistas de todo el estado, pero más de la región de Tierra Caliente y Los Reyes.”

Recuerda que no había ningún empresario y después del desayuno fue cuando aparecieron Los Templarios. “Llegaron dos tipos con camisas de marca, pantalones vaqueros de casimir, sombrero y una pistola escuadra en la cintura. Uno de ellos nos dijo: ‘Este va a ser el comisario de Prensa de la Zona Uruapan-Apatzingán. Habrá otros en Morelia, Zamora, el Oriente, Costa y los estados de Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Querétaro y Gua-

najuato. A él lo van a obedecer respecto de la información que les dé y a cambio les vamos a dar un “billetito” mensual, la entrada es de a huevo; si no, los matamos, y si no colaboran, también’.

“Un reportero de Apatzingán preguntó: ‘¿Cuál es la ventaja?’ El comisario, riendo, agarró un encendedor y dijo: ‘Si nos ayudan viven más y, si no, nos los chingamos luego luego’.”

Enseguida, recuerda el reportero, les dieron las nuevas reglas de publicación: “Ya no digan ‘crimen organizado’, digan ‘civiles se enfrentan a autoridades’; digan que va a haber inversiones en la entidad y que ya no habrá violencia. No mencionen a Los Caballeros Templarios. Cumplan al pie de la letra, si no les damos en la madre”.

Muchos de los asistentes aceptaron colaborar y comenzaron a publicar las notas como les habían ordenado. En uno de los decomisos que hizo el Ejército en una casa de seguridad del grupo criminal en Tierra Caliente, recogieron un documento que contenía una lista de 30 reporteros con nombre y medio donde laboraban, así como las cantidades de dinero que les entregaban mensualmente, de 10 mil a 30 mil pesos. Dentro de esta lista aparecen el corresponsal de Televisa, Eliseo Caballero, el director y dueño de Esquema, José Luis Díaz, y otros reporteros y fotógrafos.

La estrategia de prensa y propaganda de Los Caballeros Templarios incluyó también la distribución de volantes en las principales ciudades de Michoacán, con lo que buscaba promover sus ideales, informar de los apoyos a partidos políticos e impulsar el voto hacia personas afines a su organización.

El “plan de medios” también incluía llamadas de *La Tuta* a la radio en Michoacán y programas de televisión para exhortar al presidente Felipe Calderón a tener un pacto y poner un alto a la violencia.

Hasta 2011, Los Templarios habían colocado más de 300 mantas en 11 estados con mensajes dirigidos a la ciudadanía, a la que, según ellos, protegían de las extorsiones y violencia cometidas principalmente por Los Zetas.

En la última etapa de la estrategia de propaganda de Los Caballeros Templarios, usaron a medios de otros países, que fueron contactados por esta red de reporteros locales para ofrecerles entrevistas con *La Tuta*.

A finales de 2013, cuando las autodefensas ya avanzaban sobre territorio controlado por Los Caballeros Templarios y el gobierno de Enrique Peña Nieto declaraba que terminaría con el crimen organizado en Michoacán, *La Tuta* dio una entrevista a la cadena estadounidense Mundo Fox.

Desde un espacio ideal, Servando Gómez trató de convencer a la opinión pública de que su organización no era criminal sino “una hermandad” o “una empresa”, con el objetivo de “ayudar y proteger al pueblo”, pues ha “habido mucha desorganización social”.

Con un discurso sencillo, el líder de Los Templarios manifestaba que la meta de su organización “es cuidar al pueblo, queremos que no venga gente nociva, posiblemente nosotros seamos nocivos porque muchos de nuestros muchachos no se comportan, queremos que no venga gente de fuera a humillar, a extorsionar y a chingar a nuestro pueblo”.

También usó la entrevista para sembrar la duda sobre la integración de los grupos de autodefensa ciudadana, al asegurar que en realidad se trataba de una célula de su organización que no tuvo cabida “porque se dedicaban a extorsionar y a secuestrar” en la comunidad de Tepalcatepec y La Ruana, y ahora estaba apoyada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Finalmente, *La Tuta* habló de sí mismo: “Sí soy un delincuente pero no soy un delincuente rapillero. He traficado cosas, he hecho cosas que no, porque represento a una organización y ni los dedos de la mano son parejos, y muchos muchachos míos no entienden que esto es para servir no para servirnos, (...) y si nosotros en su momento asumimos esta postura que tenemos es porque estaba fallando el sistema judicial y no ha fallado desde ahorita, ha fallado desde hace mucho”.

La entrevista se difundió no sólo en el canal de televisión estadounidense como una gran exclusiva, sino que también corrió por las redes sociales.

En esta última fase de la estrategia de propaganda, Servando Gómez demostró en las redes sociales –Facebook y Twitter– sus dotes magisteriales para enviar mensajes directos al gobierno federal y a un sector del público, poniendo en entredicho la posición de las autoridades, que aseveraban haber controlado a Los Caballeros Templarios.

Además, la profusa difusión de las fotos y los videos se dio en momentos clave del conflicto, esto es, cuando se intensificaba la persecución al líder de Los Caballeros Templarios y en vísperas de las elecciones.

Las imágenes de *La Tuta* en reuniones con personajes

importantes de la clase gobernante de Michoacán, como el exgobernador interino Jesús Reyna y Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, lograron tener un impacto directo en las acciones del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien intentaba cerrar los ojos ante las pruebas contundentes de la simbiosis del PRI michoacano con el crimen organizado.

Con la sola difusión de las imágenes de estos dos personajes compartiendo mesa y dialogando, el líder de Los Caballeros Templarios obligó al gobierno de Peña Nieto a reaccionar, como no lo había querido hacer a pesar de las denuncias que ya habían hecho algunos ciudadanos y de las publicaciones en la prensa escrita de los vínculos del gobierno de Fausto Vallejo con Los Caballeros Templarios.

Servando Gómez grabó muchas de las reuniones que tuvo con personajes de la política. Además de los encuentros mencionados, hasta septiembre de 2014 había difundido –o alguien lo había hecho por él– sus charlas con los alcaldes de Aquila, Juan Hernández Ramírez; de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Ocegüera; de Pátzcuaro, Salma Karrum, y de Huetamo, Dalia Santana.

Empero, cuando se difundieron los videos de los encuentros, cada uno de sus aliados fue anulado y metido a la cárcel. De cualquier manera, lo que mostró el maestro rural convertido en líder de Los Caballeros Templarios fue la visión de usar los nuevos medios de comunicación como un arma política.

Ya no fueron necesarios los textos en las narcomantas ni los mensajes en los cuerpos sacrificados. *La Tuta* demostró saber lo que es el poder de las imágenes en internet.

Quizá sin los conocimientos profundos del complejo entramado de la propaganda, ni de su historia remota entre los grupos de poder, partidos políticos y gobiernos, Los Caballeros Templarios supieron esgrimir este recurso, que a través de la historia han empleado otros grupos de poder, como la Iglesia católica, partidos políticos, regímenes totalitarios, imperios o personajes como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Fidel Castro, José Stalin y Mao Tse Tung.

Richard Alan Nelson, autor de *Cronología y glosario de la propaganda en Estados Unidos*, define la propaganda como “una forma intencional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales, con el intento de influir en las emociones, actitudes, opiniones y acciones de los grupos de destinatarios específicos mediante la transmisión controlada de información parcial (que puede o no basarse en hechos) a través de los medios de comunicación masiva y directa”.

Tal vez Los Caballeros Templarios sean los primeros en la historia del crimen organizado en hacer uso de la propaganda de una manera clara y contundente, empleando tal cantidad de recursos, como mensajes en mantas, libros como los de Nazario Moreno, y videos y entrevistas de Servando Gómez, que han sido reenviadas miles de veces en las redes sociales, trayendo a la mente lo que alguna vez Joseph Goebbels dijo: “Una mentira repetida miles de veces se hace verdad”.

**CAPÍTULO 6.
LA NARCOPOLÍTICA**

La captura del Estado

Como hemos visto, la historia del narcotráfico en Michoacán tiene un largo camino que va desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. En una primera etapa se trataba del cultivo y cosecha de mariguana y amapola, mientras que en una segunda ya abarcaba la producción de metanfetaminas y el transporte de la cocaína proveniente de Sudamérica.

En la tercera etapa decíamos que se transformó en crimen organizado, es decir, en una especie de consorcio empresarial con distintas ramificaciones criminales, como la extorsión, el secuestro, la imposición de cuotas y el control de productos agrícolas y mineros.

Pero en una cuarta y última etapa, que es la más complicada porque suma todas las anteriores, Los Caballeros Templarios devinieron un tipo de gobierno que alcanzó a controlar la mayor parte del territorio michoacano y a sus autoridades, a través de un amasiato o simbiosis con el grupo gobernante encabezado por Fausto Vallejo.

El exdirector del Cisen Guillermo Valdés Castellanos señala que, al parecer, Michoacán es la primera entidad en México donde el crimen organizado “privatizó” la totalidad de los asuntos públicos municipales, y aclara que no se trata de un caso de corrupción, es decir, de la compra de gobernantes a cambio de complicidad y de esa manera garantizar la impunidad, sino de algo más elevado que denomina “Captura del Estado”. (Valdés Castellanos, 2013)

Valdés expresa que, en su definición original, dicho término fue creado por los investigadores Luis Jorge Garay

Salamanca y Eduardo Salcedo Albarrán en su libro *Narco-tráfico, corrupción y Estados*. Es “la intervención de individuos, grupos o compañías legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios de corto y largo plazo, principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público”.

Pero para el caso de México y, sobre todo, de Michoacán, habría que decir que estos individuos, grupos o compañías son ilegales y utilizan métodos de coerción y violencia como mecanismos que complementan o sustituyen al soborno para “capturar el Estado” o el gobierno en turno.

Según los autores del término, las implicaciones de esta “actualización” son complejas, porque conlleva una reconfiguración del Estado ya cooptado, que tendría las siguientes características:

1) Participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales; 2) beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino político e incluso de legitimación social; 3) coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno; 4) afectación de diferentes ramas del poder político y distintos niveles de la administración. (...) Estas prácticas las desarrollan con el objetivo de tener beneficios de largo plazo y asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, para así obtener legitimidad social en el largo plazo. (Garay Salamanca & Salcedo Albarrán, 2012, págs. 35-36)

En el caso de Michoacán, esta captura y reconfiguración del Estado por los grupos criminales como Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios se

fue dando de manera progresiva desde la década de los noventa hasta cumplirse completamente en el gobierno de Fausto Vallejo.

En los últimos 25 años estas bandas fueron participado en la vida pública y política de la entidad, primero corrompiendo autoridades y luego usando la violencia para cooptar y capturar las instituciones de todos los niveles de gobierno y los tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.

Como lo veremos en el transcurso de este capítulo, en realidad ninguna autoridad, independientemente del partido que sea, se salvó de la cooptación del crimen organizado, ya fuera voluntaria o involuntariamente.

El poder de La Familia Michoacana y, sobre todo, de Los Caballeros Templarios, alcanzó a todos. El cártel tuvo en sus manos, de manera plena, 70% de los municipios, incluida la capital, Morelia. Su ley era la violencia, las ejecuciones y las desapariciones.

Aunque ha habido otros gobernadores acusados de estar involucrados con el narcotráfico –como Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo; Tomás Yarrington, en Tamaulipas; Patricio Chirinos, en Veracruz, y Sergio Estrada Cajigal, en Morelos– el caso de Michoacán fue distinto porque la cooptación fue desde abajo, desde los pueblos, comunidades, colonias y barrios. Ocurrió en los cabildos, pasando por las presidencias municipales y el Poder Legislativo, hasta llegar al gobernador, haciendo de la entidad un estado gobernado completamente por el crimen organizado.

Si bien la “captura del Estado” en Michoacán alcanzó su máximo nivel durante el gobierno de Vallejo, este pro-

ceso comenzó mucho antes, con los gobiernos de Víctor Hugo Tinoco Rubí, también del PRI, y luego con los gobernadores del PRD, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.

Los Almada y el gobernador Tinoco Rubí

Cuando Víctor Manuel Tinoco Rubí arribó al gobierno de Michoacán en 1996, en el mundo del narco había dos familias que se mentaban con frecuencia: del lado de las bandas criminales, Los Valencia, y del lado político, *Los Hermanos Almada*, en referencia al secretario general de Gobierno, Antonio García Torres, y al procurador de justicia estatal, Eduardo García Torres, quienes desde entonces eran señalados como protectores del narco.

El 29 de agosto de 2003 se dio a conocer en **Proceso** un informe de inteligencia militar, en el que se señalaba que durante el gobierno de Tinoco Rubí (1996-2002), *Los Hermanos Almada* –entonces uno ya era senador y otro diputado plurinominal del PRI– habían mantenido nexos con el narco.

El documento fue elaborado entre 1996 y 1998, se titula *Conjunto de irregularidades y desvío de recursos del gobierno de Michoacán* y fue hecho por los asesores de inteligencia de la Sedena. Así se vinculaba al gobierno de Tinoco con el Cártel del Milenio y con Los Valencia.

El análisis, con clave SDN/S2/U03/Z1, indica que Tinoco Rubí (C1), Antonio García Torres, entonces secretario de Gobierno (C2), y su hermano Jorge Eduardo, procurador estatal (C3), estaban metidos en “lavado de dinero” proveniente de operaciones especulativas, pro-

ducción y venta de enervantes y por sobornos obtenidos de bandas delictivas y secuestros.

Los Hermanos Almada –como ya se les conocía en alusión a los hermanos Mario y Fernando Almada, actores de las primeras películas de narcotraficantes mexicanos– estaban directamente inmiscuidos en el blanqueo de capitales a través de las casas de cambio Dimex, de Morelia y Zitácuaro; Reforma, en Zamora; Divisas Dólar, en La Piedad y Uruapan, así como en una agencia de edecanes en Morelia y la Bodega Mercado de Abastos Cosmo Plus, donde según el documento de inteligencia militar, se vendía cocaína al menudeo y semanalmente se recibían uno o dos camiones torton con 18 toneladas del estupefaciente, provenientes de Chiapas, ocultas entre pencas de plátano, principalmente.

Añade el informe militar: “Sobre el narcotráfico, su conexión más directa detectada desde el arribo al estado (de los García Torres) es con la familia Valencia, narcotraficantes que simulan sus negocios con empacadoras de aguacate, lavados de carros y peleadores de gallos en la región de Tierra Caliente, teniendo su domicilio en la ciudad de Uruapan, en donde a pesar de tener orden de aprehensión y extradición de parte del gobierno americano, continúan controlando el tráfico de anfetaminas en Apatzingán y de cocaína en Coahuayana”.

El informe revela que el entonces senador Antonio García Torres buscó patrocinio económico de la familia Valencia para su campaña. A cambio ofreció impunidad.

“Pero existe la versión de que la familia Valencia condicionó su aportación a cambio de entrevistarse en privado, pero por conducto de los García Torres y en uno

de los ranchos ubicados a la salida de Uruapan- Paracho ('La Tregua'), con el jefe del FBI en México, Raúl Salinas, con el fin de aclarar las acusaciones en contra de la familia Valencia.”

En el informe se relata que desde el arribo de Jorge Eduardo García Torres a la PJEM, la institución devino un “núcleo de corrupción y órgano de mafia, pues se le acusa de tener nexos tanto con el crimen organizado como con el narcotráfico”.

Cita como prueba de ello los decomisos de diferentes vehículos de reciente modelo, “los cuales se encuentran remarcados, ‘doblados’ y con reportes a la vista de robo, mismos que no han sido devueltos a sus respectivos dueños o aseguradoras, ocultándolos en diferentes lotes de esta ciudad (Santa María, La Soledad e Independencia, entre otros), a la espera de tres meses para realizar un remate interno, como marca la ley, beneficiando a deshuesaderos, como el ubicado a la salida a Salamanca, propiedad de Fernando Orihuela Carmona –expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI–, actual coordinador de campaña del priista Alfredo Anaya Gudiño”.

Los autores del informe militar explican que en el año 2000 dichos vehículos se encontraban estacionados y separados en dos o tres bloques, marcados con letras y números, localizados algunos en la parte posterior de la PJEM, sobre las canchas de basquetbol y el corralón.

Precisa que algunos de estos autos fueron utilizados para diferentes objetivos, tanto de trabajo como delictivos o como parte del equipo de avanzada en la campaña del senador Antonio García Torres y del entonces candidato Alfredo Anaya Gudiño.

Pero también eran obsequiados a reporteros del estado: “Los vehículos también se les ha proporcionado a diferentes periodistas (Ignacio Roque Madriz, *El Universal*; Raúl Puente, *Ovaciones*; Elíseo Caballero, Televisa, etcétera), y estatales (Isaac Reyes, familia Palomino, Lino Hernández Gachí, Francisco García Davish, etcétera)”.

Los autos fueron asignados con resguardo de la PJEM o de la Oficialía Mayor, papel firmado por las áreas administrativas, bajo órdenes del propio Eduardo García Torres o del oficial mayor, Fausto Vallejo Figueroa, para que no fueran molestados.

Mientras que otros autos de lujo como BMW, Mercedes, Lincoln, etc., fueron resguardados y utilizados sólo por funcionarios de gobierno, entre los que se encontraban Francisco Corona Núñez, de Secodam; Raymundo González, de personal; Guillermo Guzmán Fuentes, exdelegado del Infonavit y excandidato a diputado por el PRI; el propio Antonio García Torres y sus hermanos Eduardo y Arturo (magistrado en el Estado de México y el mayor de los tres). También los hijos de *Los Almada* resultaron beneficiados.

En cuanto a las relaciones con el narcotráfico señaló lo siguiente: “La Procuraduría (estatal) realiza la recolección de la aportación económica para garantizar la impunidad de los delincuentes.

“De las recopilaciones denominadas gratificaciones en el interior del estado, es responsable el comandante Marco Antonio Cienfuegos Andrade, quien es originario de Tamaulipas, abogado, expolicía judicial del DDF (Departamento del Distrito Federal), brazo derecho del profesor Alfredo Torres Morales, y quien a su vez, dentro de

la PJEM, es el brazo ejecutor de Jorge Eduardo García Torres, detentando el coto de poder para dar protección a secuestradores, asaltantes y narcotraficantes. Este último personaje fue acusado, tanto en la PGR como por la prensa nacional, como precursor en el estado del espionaje telefónico y hostigamiento casero”.

En el documento se destacaba que para 2001 las actividades de la PJEM eran confusas, pues a pesar del aumento de delitos y violencia en el estado, sus informes indicaban lo contrario, que las acciones de la delincuencia organizada iban a la baja, informando que los delitos que más se cometían eran robo a casas habitación, secuestros, robo de vehículos y, a últimas fechas, las ejecuciones, principalmente en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Nueva Italia, Apatzingán y Morelia.

“Esto nos hace pensar que atrás de este ilícito están los ajustes de cuentas, por una reorganización de bandas criminales dedicadas al crimen organizado o narcotráfico.”

Finalmente, otra observación en el informe militar era que dentro de la PJEM, desde el arribo de Tinoco Rubí, se registraron “compras infladas” de diferentes artefactos de seguridad y armamento. Además, se adquirió armamento y balas sin autorización y con alteración de documentos de la zona militar. Dichos arsenales entraron de contrabando al país por la frontera de Tamaulipas.

Tinoco Rubí negó todas las acusaciones, pero lo evidente es que bajo su égida se consolidó la banda de Los Valencia y nació La Familia Michoacana, tendiendo sus redes con otros cárteles de la droga.

Esta colusión con Los Valencia fue tan evidente que en 1998 se llevó a cabo la remoción de todo el personal

de la subdelegación de la PGR en Uruapan, cuando menos tres comandantes de la Policía Judicial del Estado (PGJE) fueron despedidos y 13 agentes de esa misma corporación huyeron. Todos estaban señalados como protectores de los narcos.

También durante el gobierno de Tinoco se empezaron a producir drogas sintéticas como el “crystal” bajo el manto protector de las autoridades. Tan sólo en una pequeña localidad llamada Antúnez, ubicada cerca de Uruapan, en ese mismo año se descubrieron más de 20 laboratorios: fueron detectados porque los árboles cercanos se marchitaban rápidamente y aparecían amarillos por el efecto de las diferentes sustancias utilizadas en la elaboración de la droga.

Una vez que dejó el gobierno en manos del perredista Lázaro Cárdenas Batel, Tinoco Rubí fue acusado de hundir a la entidad en la inseguridad, la violencia y el narcotráfico.

Leonel Godoy Rangel, secretario de gobierno con Cárdenas Batel, señaló que el grave problema de seguridad pública que se vivía fue producto del gobierno anterior. Tinoco Rubí volvió a negar todo y apuntó que de acuerdo con los registros del Consejo Nacional de Seguridad del año 2001, Michoacán era considerado como el tercer estado más seguro del país, tras Tlaxcala y Colima.

En una carta pública fechada el 10 de junio de 2013, el ya exgobernador alegó que el propio expresidente de la República Vicente Fox Quezada, en una gira de trabajo que realizó a Michoacán en agosto de 2001, dio fe de la seguridad en Michoacán. Apuntó que, además, el primero de diciembre de 2000, la oficina de la DEA en

Phoenix, Arizona, entregó un reconocimiento al gobierno de Michoacán por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

“Sigo sin entender ese afán de querer eludir responsabilidades tratando de culpar a terceros y no enfrentar con autenticidad lo que a cada quien le corresponde”, sostuvo en su misiva Tinoco Rubí, quien estaba acusado de dejar una deuda pública de 140 millones de pesos.

Sin embargo, una auditoría practicada en 2003 por el gobierno de Cárdenas Batel reveló que durante 2001 su antecesor había desviado fondos públicos por más de 200 millones de pesos, que se presume fueron a parar a las arcas del priismo para campañas políticas en la entidad.

Los perredistas

En 2002 comenzó una década de gobierno del PRD en Michoacán, con Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y Leonel Godoy (2008-2012), tras siete décadas de gobierno absoluto del PRI. Durante esos diez años el crimen organizado se fortaleció, primero con Los Valencia, luego con Los Zetas y después con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Casi de manera coincidente, a escala federal se repitió el mismo fenómeno con el fortalecimiento y extensión de los grupos del crimen organizado en todo el país, mientras el PAN gobernó la nación con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), quienes tomaron la bandera de la transición a la democracia como

símbolo de su gobierno –que fracasó, al igual que la estrategia guerrista de lucha con el narcotráfico.

Como decíamos al principio del libro, en ambos casos este proyecto de transición a la democracia resultó un fiasco, y a partir de entonces creció la violencia y el poder de los grupos criminales hasta alcanzar los niveles inimaginables del cogobierno y la captura del Estado con el regreso del PRI al gobierno de Michoacán.

Este poder de los criminales en los partidos políticos, sin embargo, no fue exclusivo del PRI, también alcanzó al PAN, como lo veremos adelante, y al PRD, con los casos públicos de Julio César Godoy Toscano –acusado de estar involucrado con La Familia Michoacana– y el más reciente, el de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a quien en las redes sociales señalan de estar vinculada con Los Caballeros Templarios.

Desde julio de 2009, cuando apenas había ganado las elecciones para ser senador de Michoacán, el medio hermano del exgobernador Leonel Godoy fue acusado de estar estrechamente relacionado con *La Tuta*. El entonces vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubído, informó el martes 14 de julio que había una orden de detención en contra de Julio César Godoy Toscano, quien se dio a la fuga.

Ese hombre estaba acusado de tener a su cargo las redes de protección institucional para las operaciones de La Familia Michoacana en los municipios de Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y Arteaga.

En esa misma investigación de la Secretaría de Seguridad Pública dirigida por Genaro García Luna, se confirmó la complicidad del candidato a diputado federal por

el Partido Verde Ecologista de México, Saúl Solís Solís *El Lince*, quien era el encargado de vender las drogas de La Familia Michoacana en el Valle de México. Poco después fue detenido.

En el caso Godoy Toscano, después de permanecer prófugo por un año, logró tomar protesta en San Lázaro como diputado federal del PRD en septiembre de 2010, tras haber burlado a las autoridades que lo esperaban afuera del recinto. Se acusó a miembros del PRD de ayudarlo a meterse furtivamente en la cajuela de un auto al recinto legislativo.

En octubre de 2010, la PGR dio a conocer un audio de una conversación telefónica entre Godoy Toscano y *La Tuta*, donde éste último le ofrece todo su apoyo para que gane la senaduría. Ambos acuerdan trabajar conjuntamente.

La PGR levantó un nuevo cargo a Godoy Toscano por lavado de dinero, y para el 14 de diciembre de ese año, la Cámara de Diputados votó por su desafuero. Desde entonces sigue prófugo.

Leonel Godoy se ha deslindado de su medio hermano diciendo que apenas tenía contacto con él, pues desde niño a Leonel lo llevaron a Tijuana, donde vivió su niñez y buena parte de su juventud. Alegó que varias veces convocó a su hermano para que declarara ante el Ministerio Público si era o no gente de La Familia Michoacana.

Pero aun así, la sospecha de los vínculos de los Godoy y La Familia Michoacana permanecen, sobre todo porque salió nueva información con el caso de la senadora Mendoza.

Desde hace tiempo, Iris Vianey Mendoza Mendoza

ha sido acusada de tener vínculos con La Familia Michoacana y con Los Caballeros Templarios. En octubre de 2013 circuló en las redes sociales una foto de la senadora en una fiesta bailando a un lado de Melissa Plancarte, cantante grupera e hija de Enrique Plancarte, fallecido operador financiero de Los Templarios.

Esa misma imagen sería utilizada meses después, cuando el 5 de febrero del 2014 el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, la acusó de relacionarse con miembros del crimen organizado de la entidad. Dijo que fue ella la responsable de abrir las puertas del Senado de la Republica a un grupo de supuestos empresarios de Apatzingán que se querían reunir con los legisladores, pero que eran enviados de Los Caballeros Templarios.

Efectivamente, el 17 de octubre de 2013 un grupo de habitantes de Apatzingán presuntamente vinculados con Los Caballeros Templarios fueron al Senado a quejarse de la acción de las autodefensas. Entre el grupo se encontraban el director del Conalep del municipio, Juan Polvos; el empresario Tito Emigdio Fernández Torres, supuestamente relacionado con el brazo político de Los Caballeros Templarios, según expedientes de la Policía Federal, así como Juan Olmos Mantilla; Luis Padrón Ramírez; Emma Gómez Vargas; Juan Avilés Ruiz; Ricardo Sánchez; José Filiberto Vejar; Armando Alemán Maciel, y Rigoberto Peláez, líder local de la Canacindra, quienes se registraron como ejidatarios, empresarios e integrantes de una agrupación inexistente que llamaron Asociación Michoacanos, Paz y Dignidad.

Un mes después de este hecho, la senadora del PAN

Luisa María Calderón reveló la presencia de este grupo enviado por Los Caballeros Templarios, que se reunió con varios senadores, entre ellos la perredista Iris Vianey Mendoza, quien fue advertida de la verdadera personalidad de los visitantes.

Pero fue hasta el 5 febrero de 2014 cuando explotó el escándalo, luego de las declaraciones de Mireles en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su noticiero de MVS.

Utilizando un dicho de su abuelo, Mireles habló sobre la senadora Mendoza: “Mi abuelo decía que si ves un animal saltando, que tiene orejas de conejo, salta como conejo... es conejo”. Y sentenció: “La senadora tiene relación y contacto con los templarios. Ya los llevó al Senado y dice que no los conoce”. El doctor denunció que el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, y el director del Conalep, Juan Polvos, tenían vínculos con el grupo criminal.

En entrevista en el mismo espacio radiofónico, la perredista Mendoza reconoció que ella gestionó la reunión y aceptó que, aunque fue advertida de los supuestos nexos criminales por parte de la senadora del PAN Luisa María Calderón, decidió recibirlos porque son ciudadanos, “humanos”, y porque se lo pidió el propio alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez.

Dijo que Mireles estaba equivocado, lo acusó de mentiroso y denunció que detrás de él había gente “haciendo política”. Acerca de la imagen con Melissa Plancarte justificó que había asistido a una fiesta en Apatzingán como mucha gente.

La senadora de Apatzingán pidió que se instituyera

una comisión especial en el Senado para que investigara el caso y solicitó una licencia de un mes para que la PGR investigara las acusaciones.

Al mes regresó con la idea de que se había comprobado su inocencia. Pero para entonces ya circulaba en las redes sociales un video de 10 minutos de duración en el cual se detallaba su biografía y sus vínculos con La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Titulado *El lado oscuro de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza*, en el video aparecen imágenes cuyas sacadas de sus propios espacios en Twitter y Facebook, con textos donde se va describiendo su carrera política desde los 14 años, cuando era parte de los jóvenes del PRD en Apatzingán, hasta llegar a su participación en las campañas de Andrés Manuel López Obrador y de Leonel Godoy, concluyendo con la propia como senadora y sus aspiraciones a ser gobernadora.

En la parte más delicada, el video anónimo revela que tuvo relaciones sentimentales con Alejandro Elorza *El Primito*, a quien se identifica como integrante de La Familia y exjefe de plaza en Ixtapa Zihuatanejo, con quien tuvo un hijo. Se indica que en la lucha por Ixtapa, *El Primito* fue descubierto por los Beltrán Leyva, que lo levantaron y asesinaron junto con cuatro personas.

El video señala que durante la campaña de Godoy a la gubernatura Mendoza siempre lo acompañó con el objetivo de escalar en la política, y que el candidato aceptó su compañía tanto pública como en la intimidad a cambio de apoyarla en su carrera política.

Se cita la detención de un personaje conocido como *El Toro*, miembro de Los Caballeros Templarios, quien

aseguró haber acompañado a Godoy y a Mendoza en la campaña a la gubernatura del primero.

Según la grabación, después de que La Familia Michoacana fuera desarticulada y aparecieran Los Caballeros Templarios, Mendoza se acercó a Nazario Moreno *El Chayo*, con dos objetivos: “No tener represalias por sus anteriores nexos con La Familia Michoacana y seguir teniendo apoyo del nuevo cártel que se presentaba en Michoacán, ya que lo necesitaría en su carrera política”. Para lograr acercarse al fundador de Los Caballeros Templarios “tuvo que ser más que una amiga y servirlo en la intimidad”.

Desplegando información confidencial, los autores del video señalan que la senadora, “en las reuniones sostenidas con Nazario, pactó a través de sus relaciones pasionales que si era establecida como gobernadora les entregaría a Los Caballeros Templarios los puestos de titular de las principales dependencias de obra y de manejo de recursos económicos a personas de amplia imagen social que fueran afines” a los narcos.

En la grabación recuerdan también la visita de los enviados templarios al Senado, donde fueron recibidos por la legisladora del PRD, a petición del edil de Apatzingán, Uriel Chávez, sobrino de Nazario Moreno *El Chayo*. Actualmente, Chávez se encuentra en la cárcel acusado de haber mandado levantar y asesinar a Octavio Contreras, miembro del PAN, por las críticas a su gobierno y a Los Templarios.

Respecto de las actividades sociales de la legisladora, dicen en el video que, en repetidas ocasiones, ha estado con personas relacionadas con Los Templarios, y que

entre sus amistades hay hijas de los líderes de ese grupo, así como personajes dedicados al lavado de dinero y al despojo de propiedades.

“Entre sus mejores amigas se encuentra Melissa Planarte, hija de uno de los principales líderes de Los Caballeros Templarios, con la cual se les miró de compras en centros y plazas comerciales de Morelia y Uruapan en varias ocasiones.”

En su parte final, la grabación habla de los hermanos de la senadora: “Su hermano Manuel *Meño* Mendoza, se jactaba de trabajar con Hugo Lozoya, conocido narcotraficante de Apatzingán y parte de la estructura delictiva de Los Caballeros Templarios, y presumía a los cuatro vientos que le soltarían 100 kilos de droga ice para que ‘los trabajara’.

“Además de que el joven paseaba armado en los distintos spa, dentistas, estéticas y boutiques de la ciudad. Sin olvidar que era quien llevaba a su hermana la senadora a sus reuniones íntimas en Guanajuatillo con *El Chayo* a bordo de una Suburban.”

De otro hermano, Fredy Mendoza, en el video se dice que “divulgó en Morelia que su hermana sería la próxima gobernadora y, en tono de sátira, aludía a su cuñado Carlos Sotelo, quien les haría el trabajo político y que gracias a él es que ella es senadora”.

“(Fredy) por mucho tiempo en Apatzingán fue el novio de la hija de Juan *Garra*, conocido narcotraficante y compadre de Nazario Moreno, con el cual llegó a reunirse varias veces y sostuvo un amistad, la cual le favoreció mucho para que la senadora Iris pudiera acercarse a *El Chayo*.”

Finalmente, menciona al otro hermano, Kenny Mendoza, a quien se ubica como gran amigo de Manuel Moreno *El Chalo*, hijo muerto de *El Chayo*. Se muestra una imagen de su página de Facebook donde expresa cuánto extrañaba a su amigo, “funeral al cual asistió con sus hermanos y la senadora”.

Para cerrar se cita el caso de María Mariscal Magaña, regidora de salud en Buenavista Tomatlán por el PRD, supuestamente gran amiga de la senadora –muestran foto juntas del 27 agosto de 2013–, quien está desaparecida desde el 3 diciembre de 2013. Dice que hasta la fecha no ha mencionado nada al respecto aun sabiendo que su amiga estaba embarazada, “todo por proteger a Los Caballeros Templarios y que éstos no hablen en contra de ella”.

La senadora ha negado toda esta historia alegando que se le quiere dañar políticamente. Pero ella misma ha creado nuevos escándalos, como fue su viaje a Brasil el 26 de junio para asistir al partido de México contra Croacia en el Mundial de Fútbol. Durante más de una semana la legisladora dejó de ir a trabajar al Senado.

Leonel Godoy reconoce en entrevista que el crimen organizado se acercó a muchos políticos de todos los partidos, como fue el caso de su medio hermano. Dijo que a estos políticos los delincuentes “les pidieron el favor o se dejaron doblegar por ellos”.

Como exgobernador sostiene que no se puede evadir la responsabilidad que hubo de su administración, como tampoco en la de Lázaro Cárdenas, sobre el avance del crimen organizado en Michoacán, pero justifica que dicha responsabilidad era principalmente en el gobierno

federal, porque el combate del crimen organizado le corresponde por ley a la federación.

“Cada uno tendrá que responder, creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, sin duda, pero me parece que hay una cosa que no les gusta que lo diga, pero ahora como exgobernador lo puedo decir sin problemas: la tarea fundamental de perseguir los delitos federales es de la federación, es la que establece la estrategia, la que decide las directrices, la que resuelve a quién le corresponde hacer esta tarea.

“Es por eso que nosotros, con el presidente Calderón, tuvimos una posición absolutamente de oposición a lo que estaba haciendo, primero porque era una estrategia basada en la fuerza: no hubo un solo programa social de alto impacto, no había coordinación con el estado, politizaron el tema, en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública lo politizaron.”

Abunda: los gobernadores que no eran panistas se quejaban precisamente de que no se les tomaba en cuenta para coordinarse porque el gobierno federal desconfiaba de ellos, y más en su caso, porque como penalista y criminólogo siempre dijo que esa tarea le correspondía al procurador y no al secretario de Seguridad Pública.

—El PRD estuvo una década gobernando Michoacán, ¿entonces cuál es su responsabilidad en todo lo que está pasando? —se le pregunta.

—No fue una década, fue a partir de la entrada de Felipe Calderón, entonces fueron seis años, de los cuales cinco coincidieron con los gobiernos perredistas en Michoacán, uno de Lázaro Cárdenas y cuatro míos. Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad, el PRD se opu-

so a esa guerra como modelo para combatir el crimen organizado y la delincuencia. Como parte de la izquierda, históricamente siempre he creído que como cualquier fenómeno social se debe atacar sus causas, y ese delito es un fenómeno social cuyos efectos son los asesinatos, el cobro de piso, etc.

“Eso lo dijimos siempre y por eso chocamos con la posición de la derecha, que donde quiera siempre ha creído que la manera de combatir los delitos es con la fuerza. O sea, chocaron dos visiones. Por eso creo que es injusto para la izquierda hacerla responsable, porque si sólo hubiera ocurrido en Michoacán le hubieras podido echar la culpa a la izquierda, pero fue un fenómeno nacional de 100 mil muertos en todo el país durante esos seis años de gobierno de Felipe Calderón.”

Godoy asegura que cuando el PRD gobernó Michoacán no era de los principales estados con el problema del narcotráfico, como Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas, sino que fue hasta el inicio de la estrategia de Calderón en 2006, y el regreso del PRI al gobierno del estado, con Fausto Vallejo en 2012, cuando la situación llegó a los niveles máximos de poder del crimen organizado hasta la formación de un cuasi-Estado narco.

“Entonces me parece que se pierde la perspectiva histórica porque se ve lo que está ocurriendo ahora creyendo que así fue en nuestros gobiernos. Entonces, en primer lugar, aclaro que no fueron los 10 años, esto se detonó a partir de que Felipe Calderón llega a Apatzingán en diciembre de 2006 declarándole la guerra al crimen organizado, mandando tropas a Michoacán. Cuando yo llego al gobierno, tanto en declaraciones públicas como

en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, siempre sostuve que esa no era la estrategia correcta para disminuir el crimen organizado. Entonces no fue en Michoacán, fue en un fenómeno nacional.

–Fue en Michoacán donde Calderón lanza la declaración de guerra y manda tropas y policías para combatir al crimen organizado, pero sin una estrategia.

–Sí, pero si se revisan las estadísticas de la época, Michoacán no estaba entre los diez estados de mayor índice delictivo federal y menos del fuero común. Reitero que lo que está ocurriendo en Michoacán, creyendo que así estaba antes, me parece que es un error, basta con ver los propios informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

–¿Pero cómo fue que Michoacán llegó a esta situación?

–No niego que había un problema cuando estuvimos nosotros, pero lo digo claramente: se debió a esa estrategia guerrista equivocada de Felipe Calderón, que no fue acompañada de una ofensiva social necesaria. Nosotros la tuvimos que hacer, hicimos una presa de 2 mil 800 millones de pesos, nueve hospitales en Tierra Caliente, reconstruimos caminos con una inversión de más de mil 500 millones de pesos.

“La atención social la reclamamos todo el tiempo porque, claro que hay que combatir los delitos con mano firme, hay que meter a la cárcel a los que cometen delitos, pero esa no es la solución, es combatir sólo los efectos, pero si se quiere disminuir realmente un fenómeno social hay que ir a sus causas y éstas están en la falta de oportunidades.”

–Existe la intención de responsabilizar a usted y a Lázaro Cárdenas, diciendo que así dejaron la casa después de que gobernaron...

–Esa ha sido la actitud el gobierno del estado. Imagínate que yo después de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 hubiera salido a decir que eso se debía a los 70 años de gobierno del PRI en Michoacán. Creo que ésas no son respuestas apropiadas para la población, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde en el momento que le toca gobernar.

“Lo que está ocurriendo ahora se da dos años después de que el PRI llegó al poder, no ocurrió al siguiente día. Claro que sí había antecedentes y eso se fue acumulando, pero hubo un deterioro paulatino, y con Fausto Vallejo se puso en una situación insostenible, al grado de que intervino la federación.”

Para el exgobernador Godoy lo que ocurrió en los últimos años de gobierno del priista Fausto Vallejo fue que Los Caballeros Templarios rompieron los “equilibrios” delicados que se habían establecido para que no se metieran con la población, y pensaron que podían actuar de manera impune porque ellos le habían ayudado a ganar al PRI.

“La situación fue paulatinamente empeorando, pero en estos dos últimos años llegó a ser insostenible, porque a Los Caballeros Templarios se les pasó la mano en la extorsión, creo que ésa es la causa fundamental de lo que ocurrió, un exceso de estos señores que rompieron unos delicados equilibrios que siempre habían en el estado en cuanto a que no se metían con la población. Sus agresiones eran entre ellos y con sus adversarios, eso dejó de ocurrir y generó, sin duda, el surgimiento de los grupos

de autodefensa que son diferentes a la policía comunitaria de Cherán.

—¿Hay razones por las cuales se excedieron?

—Creyeron que iban a tener mucha impunidad, ésa es mi impresión, y casi salieron a la luz pública a extorsionar. No contaron con la intervención del gobierno federal. Pero esa intervención tiene muchas lecturas, entre ellas la política de que el PRI nacional rescata al PRI estatal y beneficiará a Los Caballeros Templarios. A todo esto tendrá que responder a su tiempo el gobierno federal, con una actitud muy transparente.

El perredista aclara que la solución al problema del crimen organizado en Michoacán, así como en todo el país, es de largo plazo y eso se le debe explicar a la población. El reto es, expresa, que el actual gobierno federal no repita el fracaso de Calderón con el famoso *Michoacanazo*.

El Michoacanazo

El 26 de mayo de 2009, en las vísperas de las elecciones en Michoacán para la renovación del Congreso y de las 113 alcaldías, Felipe Calderón ordenó un operativo policiaco-militar para detener a un grupo de funcionarios, alcaldes y agentes policiacos acusándolos de proteger a La Familia Michoacana, *zetas* y miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Se trataba de la segunda parte de la estrategia calderonista de intervenir en Michoacán para que su partido y su hermana Luisa María pudieran gobernar su estado natal.

El gobierno de Godoy aún no se reponía de los granadazos del 15 de septiembre de 2008, donde murieron ocho personas y resultaron heridas más de cien personas, cuando se le vino un golpe con *El Michoacanazo*, ordenado por Calderón para debilitar al gobierno del PRD y ayudar a los candidatos de su partido, coordinados por su hermana Luisa María.

Sin dar aviso al gobierno estatal para que la información no se filtrara, según justificó en su momento el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, los funcionarios y legisladores michoacanos fueron sorprendidos por los policías y soldados que ingresaron a las instalaciones de gobierno para ejecutar las detenciones, violando la Constitución local.

En total fueron detenidas 38 personas. Se les dictó arraigo de 40 días en las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, fue detenido por el Ejército durante unas horas, luego puesto en libertad. Apenas el 7 de abril su compañero de fórmula, Gustavo Bucio Rodríguez, había sido ejecutado en un restaurante de Nueva Italia, zona controlada por La Familia Michoacana.

Tres de los arraigados eran gente de confianza de Leonel Godoy en la PGJE: el titular, Miguel García Hurtado; el exsubprocurador en Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, y el coordinador de asesores, Ramón Ponce Ponce.

También fue detenida su más cercana colaboradora, Citlalli Fernández González, quien fue su primera secretaria de Seguridad Pública. Asimismo, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Po-

licial, que al principio de la actual administración fue director de Policía y Tránsito del estado.

Otro de los detenidos fue el empresario Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado y a quien se le acusaba de lavado de dinero. Igualmente Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Dirección de Gobernación estatal, para cuya aprehensión la Policía Federal entró a la fuerza en el Palacio de Gobierno.

De los alcaldes detenidos, seis eran del PRI: José Cortés Ramos, de Aquila; Jairo Germán Rivas Páramo, de Arteaga; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec, hermano de *El Abuelo* Farías, señalado por la PGR como miembro del cártel de Los Valencia y proveedor de efedrina de Zhenli Ye Gon. También fueron capturados Adán Tafoya Ortiz, de Tumbiscatío; y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, de Zitácuaro, sobrino del actual senador priista Ascensión Orihuela Bárcenas.

Del PRD cayeron Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buena Vista Tomatlán, y Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán; mientras que los presidentes municipales panistas arraigados fueron José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo, y Antonio González Rodríguez, de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán.

Entonces, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alegó que el operativo era producto de una investigación de medio año sobre las relaciones de funcionarios y autoridades municipales con el narcotráfico. Pero en realidad, desde febrero de 2008, el PRD

denunció ante el gobierno federal las presiones recibidas por La Familia Michoacana. Acusaron que 20 presidentes municipales electos fueron secuestrados y llevados al poblado de Nueva Italia, tenencia del municipio de Múgica, donde miembros de La Familia los coaccionaron.

En un hecho inédito en el país, los alcaldes –aseguraron– fueron concentrados y vigilados por hombres armados, quienes les advirtieron: “Los dueños del territorio donde van a gobernar somos nosotros. No se confundan, los directores de Seguridad Pública nosotros los vamos a poner. (...) No deben meterse en ninguno de los asuntos de La Familia”. (**Proceso** 1700).

El 27 de mayo de 2009, Carlos Navarrete, entonces coordinador del PRD en el Senado, reveló que Leonel Godoy, antes de su toma de posesión en febrero de 2008, se reunió con el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, para informarle de este hecho.

“Cuando Leonel Godoy era gobernador electo y preparaba su acto de toma de posesión, tuvo conocimiento de un cónclave de presidentes municipales, en un lugar de Michoacán, de todos los partidos políticos, amenazados por el narco. (...) Cuando tuvo en sus manos ese informe de un presidente municipal que acudió y le informó, le dio nombres, municipios, quiénes habían convocado, le dio toda la información; Leonel lo que hizo es comunicarse con el presidente nacional (del partido) en ese entonces, Guadalupe Acosta Naranjo, quien convocó a Javier González Garza y a mí para que los tres acompañáramos a Leonel a un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional.”

Según Godoy, le dijo al general Galván: “Le informo de esto y aquí están nombres, municipios, asistentes, convocantes. Le pido al general, no esperar a que yo tome posesión, me quiero poner de acuerdo con usted y con la PGR y con Seguridad Pública, ya de inmediato, para las acciones correspondientes. Ustedes por delante, porque les toca como gobierno federal, pero cuenten con mi gobierno para ello, como gobernador electo”.

El encuentro se realizó en el Campo Militar Número 1. Acordaron que se coordinarían a través de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, y de la 21 Zona Militar, en Morelia.

Pero nada se hizo. A pesar de que en julio de 2006 lanzó la declaración de guerra al narcotráfico en un acto militar en Apatzingán, Felipe Calderón dejó que el crimen organizado de su estado natal siguiera operando y sólo actuó de manera más firme hasta después del 15 de septiembre, cuando se dieron las explosiones de las dos granadas lanzadas por Los Zetas.

Después actuaría nuevamente con mano dura en vísperas de los comicios de 5 de julio de 2009, con *El Michoacanazo*.

Aunque el día del operativo Godoy dijo que se había violado la soberanía del estado, el jueves 28 de mayo pidió en Guanajuato cerrar la controversia, “porque la federación y Michoacán no pueden estar confrontados”. Esto debido a que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en una visita a Morelia un día después de *El Michoacanazo* manifestó su desconfianza en Godoy.

“Yo sólo confío en la ley y el gobierno”, expresó el

funcionario panista a la prensa al final de un breve encuentro con el gobernador, y argumentó que no se le avisó a Godoy “para que la acción judicial tuviera menos riesgos”.

A pesar de lo aparatoso del operativo y del arraigo impuesto a todos los detenidos –salvo Julio César Godoy que sigue prófugo– para septiembre de 2010 todos los acusados habían quedado libres porque no se sustentaron las acusaciones en el proceso judicial que se les siguió.

–¿Qué pasó con su hermano? –se le inquiera al ex-gobernador Leonel Godoy, en entrevista para este libro.

–Hay que recordar que yo crecí en Tijuana, salí a los siete años de Lázaro Cárdenas y no conozco bien esa historia de mi hermano. Por ejemplo, no sé si sea cierto que es su compadre (de *La Tuta*), no tenía esa relación como para conocer ese tipo de detalles. Creo que en su caso, como ocurrió con muchos políticos, o le pidieron el favor o se dejaron doblegar por ellos, ésa es una posibilidad. Pero de que él formara parte de la estructura de La Familia Michoacana o de Los Templarios, tendría mis dudas.

A su ver, las actividades políticas y de litigio de su medio hermano como abogado atrajeron a La Familia Michoacana y ahí fue que se le acercaron amenazándolo u ofreciéndole dinero para que les ayudara.

Al salir libres todos los acusados, se demostró que *El Michoacanazo* no sirvió para los fines electorales para los que fue diseñado. Fue el fracaso más estruendoso del gobierno calderonista en la lucha contra el crimen organizado.

Godoy señala que, por eso, en su momento dijo que *El Michoacanazo* fue un error de Calderón, porque se tra-

tó de una especie de *razia*: los soldados y los policías llegaron y levantaron gente sin tomar en cuenta que el tema penal es más delicado y tiene aspectos técnicos que deben cumplirse.

“Yo señalé que era un grave error y una violación flagrante a la Constitución. Eso tampoco les gustó. Lo que ocurrió con el gobierno de Calderón es que armó una estrategia equivocada, la politizó. Sí había un objetivo que me parecía correcto –fortalecer las instituciones– pero no se puede hacer golpeándolas.

“Por ejemplo, no es lo mismo el municipio de Nueva Italia que Guadalajara, si en el primero llega un grupo de 10 personas armadas ni modo que no los reciba el presidente municipal, pero si tratan de hacerlo en Guadalajara o en el Distrito Federal, pues es imposible. Es cierto que sí se requieren instituciones fuertes, entre ellas los municipios, pero con políticas públicas correctas.”

CAPÍTULO 7. LA GUERRA

La guerra de Calderón

El 11 de diciembre de 2006 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el despliegue de 7 mil efectivos de las fuerzas federales para el Operativo Conjunto Michoacán. Felipe Calderón apenas tenía 11 días como presidente de la República, luego de un triunfo polémico ante Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionaba su legitimidad.

En el acto participaron los cinco integrantes del gabinete de seguridad: Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y PGR. Calderón no quiso presentarse aunque se trataba de su primer gran acto como presidente. Pretextó que tenía actividades privadas.

Ramírez Acuña dijo entonces que una de las tres prioridades de Calderón era “fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, para traer la paz que la delincuencia organizada ha arrebatado”.

La acción conjunta en Michoacán implicaba el uso de todas las fuerzas federales, poner en las calles al Ejército en labores de seguridad pública –para las cuales está impedido constitucionalmente–, con las metas de terminar con los plantíos ilícitos, efectuar cateos, órdenes de aprehensión y dismantelar los lugares donde se vendía droga.

Calderón empezaba así su administración, exhibiendo fuerza militar y policiaca, luego de que el primero de diciembre anterior había tomado posesión tras entrar a la Cámara de Diputados subrepticamente, en medio de gritos de protesta de los legisladores de izquierda que tomaron la tribuna y que cuestionaban su legitimidad y su triunfo ante López Obrador.

Para el Operativo Conjunto Michoacán se destinaron 2 mil 900 millones de pesos en los dos primeros años, la Secretaría de la Defensa Nacional mandó 29 aeronaves y 246 vehículos terrestres para que se concentraran en 16 regiones catalogadas de alta incidencia delictiva en Michoacán, y asignó a 4 mil 200 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. También desplegó 131 bases de operación, con 30 efectivos cada una, y se establecieron 24 puestos de control en varias regiones.

La Marina, por su parte, destinó mil 54 elementos de Infantería, nueve helicópteros, dos aviones con cámara para detección nocturna, tres patrullas interceptoras y una oceánica con helicóptero embarcado.

La Secretaría de Seguridad Pública puso mil 400 elementos, de los cuales 900 eran de fuerzas federales de apoyo y 300 de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, 10 perros y 220 unidades de inteligencia y operación de la Agencia de Federal de Investigación (AFI).

En tanto que la PGR destinó 50 agentes del Ministerio Público.

Semanas después, el 3 de enero de 2007, mientras las aguas políticas seguían agitadas por su polémica victoria, Felipe Calderón llegó a Uruapan a las 8 de la mañana, sorprendiendo a todos porque se había ataviado como si fuera un militar: un quepis con las cinco estrellas de “Comandante general de las fuerzas armadas”, una casaca verde que le quedaba grande y muy larga de las mangas. Así ratificó su declaración de guerra.

Con una actitud que intentaba ser marcial, Calderón se dirigió a las instalaciones de la 43 Zona Militar de Apatzingán, donde encabezó una ceremonia de saludo a

la bandera frente a las tropas, firmó el libro de visitantes distinguidos y ofreció “todo su apoyo” en su nueva encomienda: abatir al narcotráfico en todo el país.

Acompañado de todos los altos mandos castrenses del país, Calderón empezó su administración rindiendo tributo a soldados, marinos y policías. Dijo que ya habían logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase. Les ordenó no desfallecer en esta tarea.

A diferencia de Vicente Fox, quien usó vestimenta militar sólo en casos extraordinarios, como en 2001 cuando supervisó las obras de reconstrucción luego del huracán *Isidore* en Yucatán, Calderón llegó a su tierra natal portando la indumentaria militar en una ceremonia a la que tradicionalmente otros presidentes acudían vestidos de civil.

El mensaje era claro, se había investido como jefe de las fuerzas armadas y ratificaba una declaración de guerra desde Michoacán, donde La Familia controlaba amplias zonas.

En apenas 34 días de gobierno, Calderón ya se había reunido cinco veces con tropas, marcando así la tónica de lo que sería su administración.

“Vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega, y a decirles que estamos con ustedes”, les dijo a los militares ese día en Apatzingán, flanqueado por los secretarios de la Defensa, el general Guillermo Galván, y de Marina, el almirante Mariano Saynez.

Apuntó que su gobierno estaba decidido a recuperar la paz, no sólo en las entidades más afectadas, sino en cualquier región de México que estuviese amenazada por

el crimen organizado. Reconoció que la lucha no sería fácil ni rápida e implicaría enormes recursos, incluso la pérdida de vidas.

Al final del convivio, Calderón dejó la ropa militar, entregó la casaca y el gorro a su jefe de ayudantes, el teniente coronel Mario Castro, y se despidió de los efectivos, a quienes prometió aumentarles el salario.

Esta no fue la única vez que Calderón hizo uso de la indumentaria militar para mandar un mensaje de fuerza y apuntalar su declaración de guerra. El 16 de septiembre de 2007, durante el desfile militar, vistió a sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe con uniforme militar, incluyendo insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente. El hecho tuvo muchas críticas pues se consideró que fue un exceso de Calderón, pero en Los Pinos se justificaba diciendo que había sido por la “alta estima que el presidente tiene por las Fuerzas Armadas”.

Durante cinco años, Calderón usó el término “guerra” para referirse al operativo que ordenó en diciembre de 2006. En 2011, cuando ya era evidente el fracaso de este operativo, el panista quiso enmendar el discurso y negó que hubiese empleado el vocablo “guerra”.

Ese día, Calderón hizo una rabieta cuando Miguel Treviño, director del Consejo Cívico e Institucional de Nuevo León, le dijo: “Si ya eligió usted el concepto de ‘guerra’ para definir lo que estamos viviendo, no puedo imaginar tarea más importante para el comandante supremo que asegurar la unidad de propósito y la coordinación de todas las instancias públicas que participen”.

Molesto, Calderón reviró: “Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis expresiones públicas y privadas. Usted dice: ‘Usted ya eligió el concepto de «guerra»’. No. Yo no lo elegí. Yo he usado permanentemente el término ‘lucha contra el crimen organizado’ y ‘lucha por la seguridad pública’, y lo seguiré usando y haciendo”.

La respuesta vino de la prensa, que hizo un seguimiento de sus discursos y encontró un buen número de ocasiones en que Calderón habló de “guerra”. El 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, repitió hasta en cuatro ocasiones, en un sólo discurso, el término: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi gobierno encabeza contra la inseguridad”; “La lealtad y la eficacia de las fuerzas armadas son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella”; “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que ésta sería una lucha de largo aliento”; “Así son, precisamente, las guerras”.

Hay más: el 12 de septiembre de 2008, en la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar, repitió media docena de ocasiones el vocablo: “Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes en 1810, una guerra distinta a la que afrontaron los cadetes del Colegio Militar hace 161 años”; “Todos los mexicanos de nuestra generación tenemos el deber de declarar la guerra a los enemigos de México. (..) Por eso, en esta guerra contra la delincuen-

cia”; “Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México”; “Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar”.

El 19 de febrero de 2007, durante la celebración del Día del Ejército, en un desayuno con los altos mandos castrenses, Calderón solamente utilizó una vez la palabra “guerra”. A partir de entonces solamente usó el término “lucha”, tratando, con este juego de palabras, de aminorar la percepción adversa que ya había en su contra por la creciente cantidad de pérdidas humanas –que él llamo “daños colaterales”, usando nuevamente un lenguaje militar para tiempos de guerra.

Guillermo Valdés Castellanos, director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) durante la administración calderonista, argumenta que la decisión de Felipe Calderón de poner al Ejército en labores de seguridad fue porque no había suficientes policías federales para el combate –sólo 10 mil–, y poseían un armamento menor que el de los criminales; además, los policías estatales y municipales no eran confiables y las instituciones de procuración de justicia eran débiles.

Asegura que no lanzó la guerra porque Calderón necesitara legitimarse a través del uso de las fuerzas armadas.

“En 2007, ante la irrupción cada vez más violenta de las organizaciones criminales y sin la posibilidad de implementar acciones de contención, control y debilitamiento de la delincuencia organizada por la insuficiencia, debilidad y corrupción de las policías locales,

el gobierno de Felipe Calderón no tenía otra opción que recurrir a la única fuerza pública del Estado con las capacidades numéricas y de fuego para comenzar a hacer frente al despliegue criminal. (...) Por eso la participación del Ejército y la Marina. No son policías, es cierto; lo óptimo era que las policías se encargaran del problema; pero era lo único con que contaba el Estado mexicano para hacer frente a las organizaciones criminales. Su participación no fue, por tanto, una decisión para mostrar el respaldo del Ejército a un ‘presidente débil’, como algunos analistas han afirmado.” (Valdés Castellanos, 2013)

Las consecuencias de la declaración de guerra al narcotráfico, sin una estrategia social, de salud y educación, provocaron el peor escenario posible: más de 100 mil muertes, 30 mil desaparecidos, miles de desplazados y una violencia que no se vivía en México desde los años de la Revolución y de la Guerra Cristera.

El fracaso

El 11 de agosto de 2010, durante un encuentro que se llamó Diálogo por la Seguridad, al que acudieron los dirigentes de PRI, PRD, PAN, Partido Verde, Convergencia y Nueva Alianza, Felipe Calderón fue criticado duramente por el fracaso de su guerra. Fiel a su carácter irascible y despótico, se molestó y dijo que no la había perdido, aunque admitió que la percepción general era ésa.

“Entiendo perfectamente y sé que es la percepción, esta afirmación de que la guerra se va perdiendo. No

comparto la afirmación, pero comprendo que es una percepción general que, creo, también el Estado debe combatir”, soltó.

El jefe del Ejecutivo trató de deslindarse del uso del término “guerra” y los escasos resultados, pero sostuvo, “y si de guerra habláramos”, en los enfrentamientos del Ejército, la Marina y la policía con los grupos delincuenciales, las bajas de los criminales eran considerablemente mayores, quizá en proporción de ocho a uno.

“Indefectiblemente, la victoria, digamos, de este enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo.”

Más aún, aseguró que sí se podía derrotar al crimen organizado, pero reconoció que la duración de la batalla sería indefinida: “Que el escenario de violencia, de enfrentamiento, de bajas, se prolongue, incluso, más tiempo ¿cuánto tiempo? Es difícil saberlo”.

Ese día Calderón aceptó estar dispuesto a “cambiar o mejorar la estrategia” a cambio de escuchar propuestas precisas. Pero advirtió que si toda la energía política en el país se orienta a atacar, cuestionar o a debilitar al Estado, los beneficiados serían los grupos criminales. “Sí se pierde la legitimidad de su acción, sí se baja la moral de las tropas, de las policías, pero quien gana ahí no son los partidos políticos, son los criminales”.

Beatriz Paredes, del PRI, y Jesús Ortega, del PRD, criticaron como el resto de la sociedad el uso electoral de la guerra contra el crimen, a lo cual Calderón volvió a defenderse diciendo que el día en que México cuente con 32 policías estatales y una federal, así como ministerios

públicos confiables y eficientes, “ese día estará derrotada la criminalidad”. Y lanzó un par de interrogantes: “¿Quién se va a encargar de vigilar estas 32 policías estatales? ¿Qué tal si una de ellas queda en manos de uno de estos criminales?”.

Calderón se asumió “incomprendido” en su cruzada contra la criminalidad y señaló que el primer gran consenso debía ser el combate a la criminalidad y, el segundo, que la seguridad pública fuera corresponsabilidad de todas las autoridades.

“Si alguien considerase que el error del gobierno ha sido combatir a la criminalidad, es momento de que lo diga abierta y sinceramente y comparta con la sociedad las razones por las cuales considera que esta premisa fundacional del Estado de derecho ha dejado de tener vigencia.”

Para entonces el fracaso de la estrategia guerrista de Calderón ya se reflejaba en las cifras de homicidios vinculados al crimen organizado. Cada año aumentaron en todo el país, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública: en 2007 hubo 2 mil 819; en 2008 aumentaron a 6 mil 824; en 2009 fueron 9 mil 612; en 2010 se alcanzó el número de 15 mil 259; hacia 2011 subió a 16 mil 987; y para 2012 se disparó hasta llegar a 51 mil 501.

Para Michoacán, donde empezó la estrategia militar y policiaca, los números eran similares: En 2006 se registraron mil 349 homicidios, de los cuales 661 fueron dolosos y 688 culposos; en 2007, la cifra aumentó a mil 484 homicidios, de los cuales 527 fueron dolosos y 957 culposos; en 2008 subieron a mil 906, de éstos 565 fue-

ron dolosos y mil 341 culposos; en 2009 aumentaron a 2 mil 265, 728 dolosos y mil 537 culposos; en 2010 hubo 2 mil 29 asesinatos, 661 dolosos y 368 culposos; en 2011 aumentaron a 2 mil 272 homicidios, 773 fueron dolosos y mil 499 culposos; en 2012 fueron 2 mil 287, de los que 755 fueron dolosos y mil 532 culposos.

Para entonces también había múltiples reportes de violaciones a los derechos humanos por parte de soldados y policías en todo el país, sobre todo en estados como Michoacán.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 634 quejas contra militares de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008, de las cuales 250 fueron por ejercicio indebido de la función pública; 221 por cateos; 182 por tratos crueles; 147 por detenciones arbitrarias; 85 por robo; 41 por amenazas y 32 por intimidación.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán registró muchos más casos que la CNDH. Solo en 2008, en su informe anual, señaló haber atendido a 11 mil personas, de las cuales se integraron mil 200 expedientes. También, en sólo un año, aumentaron 300% los casos de tortura por parte de militares y policías federales.

La CEDH informó que, en 2008, 2 mil personas fueron objeto de violaciones de derechos humanos en Michoacán, de las cuales 716 estaban relacionadas con el Operativo Conjunto Michoacán. De éstas, 467 fueron cometidas por el Ejército, 128 por la Policía Federal Preventiva, 19 por agentes de la Subsecretaría de Investigaciones en Delincuencia Organizada, siete por la Agencia Federal de Investigaciones y 95 por personal de la PGR.

En marzo de 2011 y ante el creciente número de víctimas en todo el país, en Morelos comenzó a formarse el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, a quien a finales de ese mes le asesinaron a su hijo Juan Francisco junto con otras cinco personas que fueron torturadas y ejecutadas.

Calderón fue obligado a sentarse con una representación de ese movimiento, que aglutinó a organizaciones de víctimas de la violencia y del narcotráfico que ya existían en otras partes del país, como Fuerzas Unidas por los Desaparecidos en Coahuila (Fundec).

Para entonces, a nivel internacional comenzó a difundirse con mayor fuerza la grave situación que se vivía en México. El Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad realizó una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México que duró tres días y a la que se unieron cientos de miles de personas protestando contra la estrategia guerrista de Calderón. Hubo réplicas de esta protesta en París, Montreal, Toronto, Japón, Buenos Aires, Río de Janeiro, Barcelona, Madrid, Londres y muchas más ciudades.

Este movimiento realizó además dos caravanas al sur y el norte de la nación recorriendo la mitad del territorio, recopilando las historias de miles de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, las cuales fueron expuestas en dos reuniones con Calderón en el Castillo de Chapultepec, donde los reclamos al panista fueron duros y se le exigió un cambio de su estrategia militar.

El 27 de marzo de 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, tras reunirse con los titulares de las secretarías de la Defensa y Marina de México, reveló un dato que después trató de ser corregido por el

gobierno mexicano: que las víctimas mortales por esta guerra eran 150 mil y que se lo habían informado los oficiales mexicanos.

Casi de inmediato, las autoridades mexicanas trataron de precisar la declaración de Panetta y señalaron que la cifra se refería a los muertos en toda América Latina.

Dentro y fuera de México las muestras del fracaso de la estrategia de Felipe Calderón eran evidentes y las protestas sociales fueron amentando.

Una muestra de ese fracaso fue que empezaron a surgir los primeros grupos de autodefensa en diez estados: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Colima, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Tabasco y Puebla. La gente empezó a tomar las armas en sus manos para defenderse de los grupos criminales que –otra señal del fiasco calderonista– se multiplicaron hasta en los rincones más apartados del territorio nacional.

Según un informe de 2013, elaborado por la PGR y publicado por la revista *Contralínea* un año después de la salida de Caderón, la guerra provocó el surgimiento de 80 grupos criminales bajo el mando de ocho grandes agrupaciones. Sus ganancias anuales superaban los 39 mil millones de dólares.

Los Zetas, el Cártel de Sinaloa (o del Pacífico), los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva son las organizaciones que dan origen o cobertura a las 80 bandas, indica el informe *Células delictivas con presencia en el país*, fechado el 25 de marzo de 2013 y elaborado por la PGR con base en reportes de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano.

Además de multiplicarse, estas agrupaciones se fortalecieron y extendieron fuera de México, como empresas transnacionales. Se estima que están presentes en más de 50 países de los cinco continentes, y se vinculan con mafias de Estados Unidos, Italia, Rusia, China, Colombia y Medio Oriente.

Según Guillermo Valdés, exdirector del Cisen en la administración calderonista, el gobierno del panista no fue el culpable de la mayor parte de las víctimas sino las peleas entre las agrupaciones criminales. De los 51 mil 501 homicidios vinculados al crimen organizado, 84.56% fue por violencia entre organizaciones, y el resto por el combate al crimen organizado.

Públicamente nunca cedió a las demandas de partidos políticos, organizaciones sociales y movimiento de víctimas para que cambiara su estrategia fallida, pero desde 2007 Calderón admitió su equivocación.

Retomando cables de Wikileaks, en diciembre de 2010 la prensa española difundió que el expresidente José María Aznar y Felipe Calderón se reunieron en abril de 2007. Entonces, el mexicano aceptó sus errores.

“Calderón Hinojosa admitió que había cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, que estaba más allá de toda comprensión”, informó Aznar al embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, luego de una gira por América Latina, en la cual mantuvo un encuentro privado con el presidente de México, publicó la prensa española.

Wikileaks, las dudas de EU

La percepción del fracaso en la lucha contra el narcotráfico no sólo era de la clase política mexicana y de las agrupaciones sociales. También en el gobierno de Estados Unidos estaban preocupados desde el primer año del Operativo Conjunto Michoacán.

De acuerdo con las filtraciones de Wikileaks, desde 2007 en la Casa Blanca hubo inquietudes por una guerra mal planteada y mal ejecutada por Calderón.

En el cable 246329, Washington afirmó que el Estado mexicano era incapaz de derrotar a los cárteles, y ante autoridades norteamericanas, el gobierno de Felipe Calderón supuestamente admitió que podía perder el control sobre extensas zonas del país. El gran culpable, decían los cables del Departamento de Estado, “es la incompetencia del Ejército, al que ha confiado el señor Calderón la lucha contra los maleantes, ya que sólo es capaz de presentar pruebas para incriminar a 2% de sus detenidos”.

Destacó que había problemas entre las secretarías de Marina y Defensa a raíz de los operativos exitosos de la primera y los errores de la segunda, lo que atrajo críticas de la población.

En el cable 231890 se relató que el entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pidió imponer el estado de excepción y anular las garantías individuales en algunas zonas del país fuera del control por la violencia del narcotráfico, refiriéndose a Ciudad Juárez. Su propuesta fue rechazada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En el número 224819, el gobierno estadounidense describió la falta de recursos del gobierno mexicano y las peticiones de ayuda que hizo a Washington para combatir el narcotráfico en ciudades como Juárez y Tijuana.

En el cable 238295 se ve que Hillary Clinton, secretaria de Estado, preguntó a diplomáticos mexicanos la situación actual del presidente Felipe Calderón frente a las críticas por la violencia en el país, los malos resultados en las elecciones de su partido, el desempleo y la crisis económica. Pidió también a la embajada de EU en México investigar cómo afectaban las “presiones” la personalidad y el liderazgo del presidente mexicano.

De acuerdo con ese cable, fechado el 4 de diciembre de 2009, Washington consideraba que Calderón y su gobierno estaban “bajo mucha presión proveniente de la guerra contra las drogas, el colapso económico y las derrotas de su partido en las elecciones de mitad de mandato. Seguimos interesados en saber cómo estas presiones afectan su personalidad y su estilo para dirigir, así como si ese estilo afecta el desempeño del gobierno, especialmente a la luz de los recientes cambios en el gabinete”.

Lo que reflejaban estos cables revelados por WikiLeaks era que el gobierno de Barack Obama desconfiaba de la capacidad de los recursos mexicanos para encarar la guerra contra el crimen organizado. Sus razones: la inoperancia del Ejército mexicano, la rivalidad entre esta fuerza y la Marina, así como el alto índice de corrupción que existe en el país.

En el cable 240473, el embajador Carlos Pascual reconoció la labor de la Marina en la captura y muerte del Arturo Beltrán Leyva y la incapacidad del Ejército para

actuar, porque desde una semana antes le habían dado la información del lugar donde estaba el jefe del cártel y no hizo nada.

En el cable número 000193 el gobierno norteamericano mostró su desconfianza en el gobierno de Calderón. Externó su preocupación por la seguridad de los agentes de la DEA y del FBI en México que apoyaban la lucha contra el narcotráfico. Esto porque, en 2007, 10 funcionarios federales que trabajaban como enlaces de la DEA fueron asesinados y, en 2006, la cifra fue de 51.

Según los cables enviados por las sedes diplomáticas estadounidenses en México, los funcionarios mexicanos podían estar involucrados con el narcotráfico y esto ponía en riesgo a los norteamericanos.

En otra comunicación se revelaban las peticiones de ayuda tecnológica y de entrenamiento que Felipe Calderón lanzó a Estados Unidos.

En una reunión del 5 de octubre de 2009, el subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez, señaló que los mexicanos necesitaban ver éxitos palpables, o de lo contrario la situación sería intolerable en la próxima administración; incluso llega a insinuar que el gobierno ha perdido control en algunos territorios de alto riesgo.

Era evidente que Washington tenía profundas dudas de los resultados de la estrategia calderonista para abatir al narcotráfico, observaba las rivalidades en el gobierno, la corrupción interna y los contraproducentes resultados en el intento de acabar con las bandas criminales.

CAPÍTULO 8.
EL NARCOGOBIERNO

El narcogobierno

Michoacán es quizá la primera entidad de México que cubrió el perfil de un estado capturado por el crimen organizado, el cual a través de las armas, la corrupción y la simbiosis con la clase política local se impuso como parte de un gobierno, dominando todo el territorio, aplicando impuestos, teniendo bajo sus órdenes a autoridades y legisladores y controlando la generación de riqueza a través del dominio del comercio, los bienes y servicios, estableciendo sus propios códigos de conducta, es decir, sus propias leyes.

Tal vez Michoacán es la primera entidad donde se está configurando nuevamente el Estado mexicano, 200 años después de que en la ciudad de Apatzingán se proclamara la primera Constitución, en 1814. Sólo que ahora, el crimen organizado y las autodefensas ciudadanas aparecen como actores de poder que llegaron a controlar parte del territorio michoacano, estableciendo su propia forma de gobierno.

Esta modalidad del crimen organizado empezó con Los Zetas, siguió con La Familia Michoacana y después con Los Caballeros Templarios, que la perfeccionaron hasta llegar a los niveles más altos del cogobierno, como pasó en la administración del gobernador Fausto Vallejo, quien se retiró un año antes de concluir su mandato por viejas enfermedades que se mezclaron con investigaciones judiciales a su hijo, acusado de estar con Los Templarios, y entre señalamientos de haber recibido dinero templario para su campaña.

Ya no se trataba de la simple compra de autoridades,

es decir, de los tradicionales casos de corrupción en los que ha caído un buen número de políticos, sino de un fenómeno de simbiosis entre el crimen organizado y las autoridades de los niveles municipal y estatal, que fueron apoyadas con narcodólares en sus campañas o impuestas a punta de las armas, como ocurrió en la elección de 2011 en Michoacán.

Los Caballeros Templarios encontraron un territorio fértil para fortalecer su proyecto político y de gobierno en la permisividad de autoridades locales corruptas; en organizaciones sociales corrompidas; en policías municipales y estatales mal pagados; en movimientos campesinos, estudiantiles y políticos debilitados por el golpeteo brutal del gobierno federal priista que se ensañó por ser la meca del cardenismo, provocando la muerte de 50 militantes de 1986 a 1993. También en una población campesina en extrema pobreza en la mitad de los 113 municipios, y sobre todo en la clase política priista dispuesta a ganar elecciones a cualquier costo.

Desde el principio, Los Templarios reclamaron como un derecho natural su predominancia en Michoacán por el hecho de haber nacido en la entidad; su potestad de controlar el estado y su gobierno con la ley de “plata o plomo”; su facultad de defender su territorio de otros cárteles; la atribución de realizar funciones de seguridad pública y justicia en pueblos, comunidades y municipios completos como si fueron autoridades electas, pero a través de la fuerza y el terror, y la autoridad para gobernar por el apoyo económico que le dieron al PRI para que ganara las elecciones de 2011.

De esta manera, La Familia Michoacana y luego Los

Caballeros Templarios se apropiaron por la fuerza, la coerción y la corrupción de estas facultades de la administración pública, lo que les generó beneficios económicos, políticos y sociales, pero sobre todo les ayudó a crear una serie de alianzas políticas y respaldo social con la idea de generar legitimidad.

Dice Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen, que Michoacán “fue el estado pionero en este tipo de privatización de la totalidad de los asuntos públicos municipales” por parte de La Familia Michoacana, a lo que habría que agregar que con Los Caballeros Templarios este nivel de dominio llegó a la ya mencionada “captura del Estado” o a la “reconfiguración cooptada del Estado”, que significa la validación política de las acciones del crimen organizado para obtener legitimación a largo plazo. (Valdés Castellanos, 2013)

Al referirse a la descomposición política y de gobierno de Michoacán, el exgobernador Leonel Godoy aclara que ya no fue producto de la estrategia de Calderón, sino de la llegada del PRI al gobierno del estado con el apoyo de Los Templarios.

“Lo que ahora todo mundo ve con claridad es el vínculo del PRI con el crimen organizado, con Los Caballeros Templarios, desde las elecciones de 2011. Eso está clarísimo a estas alturas. En descargo de Calderón, aunque nunca estuve de acuerdo con su estrategia, ésta no fue la que descompuso Michoacán. Sí hubo muchos muertos, como pasó en otros lados, porque era una guerra de las fuerzas federales contra el crimen organizado, que en mi época era La Familia Michoacana y ahora son Los Caballeros Templarios. Pero la descomposición del

estado, casi un narcoestado, es en la época del PRI, y aquí nada tiene que ver la estrategia de Felipe Calderón.

“No me canso de poner el ejemplo de Apatzingán, donde el PRD iba 20 puntos arriba una semana antes de la elección. Y el candidato del PRI, Uriel Chávez, a quien todo el mundo identifica como familiar de *El Chayo*, hace que nuestro candidato se vaya, y el día de la elección amenazan a los movilizadores del PRD y ganamos dos de 90 casillas, lo que es absolutamente imposible de creer en un municipio donde el PRD ha ganado tantas batallas, donde el cardenismo está en la médula de la gente.”

El exmandatario señala que ésta es una muestra de cómo el crimen organizado se metió hasta el fondo en la vida política del gobierno priista de Fausto Vallejo, y aclara que probarlo le corresponderá al gobierno federal, porque se trata de un delito federal.

“Yo se lo pedí a Felipe Calderón y en mi opinión hizo lo posible por probarlo, para no especular. Sólo hay que recordar que a Fausto Vallejo le validaron su triunfo dos días antes de la toma de protesta, el 13 de febrero de 2012, y Calderón jamás le habló para felicitarlo. No tengo ninguna duda de que Calderón intentó probarlo, pero no lo consiguió y nosotros tampoco tuvimos elementos. La gente nos lo decía pero nadie lo quería denunciar.

Godoy aclara que son cosas diferentes la actitud guerrista de Calderón y la simbiosis Templarios-PRI en Michoacán, que no se da en ningún otro estado, aunque ha habido gobernadores acusados de estar con el narcotráfico.

Gobernador por cuatro años (2008-2012), Godoy reconoce que los cárteles han apoyado a diferentes parti-

dos, pero como estrategia para gobernar el estado, Los Templarios lo hicieron con el PRI en 2011.

“Yo aventuro una razón: en mi opinión Los Templarios no querían que ganara Luisa María Calderón por la actitud de su hermano, Felipe. Por eso resolvieron apoyar al PRI. A nuestros candidatos los amenazaron, supongo que no querían que se desperdiciara un voto.”

–¿Es un hecho de que con el regreso del PRI en Michoacán con Los Caballeros Templarios se conforma un cogobierno? –se le pregunta.

–No te sé decir si hubo un cogobierno, los elementos jurídicos que en este momento se están viendo parecerían indicar que la respuesta es afirmativa, pero no sé.

–¿Hay una captura del gobierno, una captura del estado?

–Yo creo que se sintieron libres, a sus anchas, que había un gobierno que les debía el triunfo a ellos, como lo ha dicho varias veces *La Tuta*, eso ocurrió. Sin duda las pláticas de varios prominentes priistas con ellos no eran para ver cómo trasladar droga al norte del país, yo creo que se trataban temas políticos, como queda claro en la entrevista de *La Tuta* con Rodrigo Vallejo.

Godoy fue secretario de Gobierno en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y luego gobernador. Le tocó ver de frente el crimen organizado y la transformación de Michoacán.

Explica que, al igual que en el resto del país, en Michoacán el fenómeno del crimen organizado fue avanzando, y pasó de albergar a productores de amapola y mariguana a comercializadores, distribuidores, creadores de nuevas drogas sintéticas e integrantes del gobierno estatal.

Pero hace una distinción: “Esta actividad de participar en la vida política y económica de una sociedad es nueva, no la había visto, soy criminólogo, estudio el tema y eso sí es nuevo, el hecho de que incursionaran en el cobro de piso, influir en las elecciones municipales, exigir posiciones en los ayuntamientos, no se había dado antes. Eso viene con un crecimiento paulatino en Michoacán desde el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí.”

En la administración de Tinoco Rubí, apunta, el crimen organizado estaba en cinco municipios; con Cárdenas Batel, en 13, y en su administración, en 21, pero con Vallejo llegó hasta 112, salvo el municipio de Cherán, que tiene un consejo de gobierno indígena.

“Antes de que el PRI gobernara en Michoacán el crecimiento era natural, normal, paulatino, y ese crecimiento lo analizó bien Calderón, sintió que se estaban debilitando las instituciones y había que fortalecerlas, pero cometió el error de hacerlo sólo con la fuerza.”

Se le comenta que hace 200 años, en Apatzingán –el corazón de Tierra Caliente– se escribió la primera Constitución, que comenzó a configurar el Estado mexicano. Ahora, en esa misma ciudad, parece que es el crimen organizado el que configura el nuevo perfil del Estado.

–¿No es aventurado decir eso? –se le inquiera.

–Si duda que no lo es, pero también están las autodefensas, que es el movimiento popular armado. Digan lo que digan, ése fue un movimiento popular armado, porque estaban limoneros, cortadores de limón pobres, ganaderos, profesionistas, maestros, eso es lo que componían las autodefensas en esa región.

Los tratos de *Cocoa* y *La Tuta*

El crecimiento y la influencia de los cárteles en Michoacán alcanzaron a todos los partidos políticos. Incluso prominentes panistas parientes del expresidente de la República, Felipe Calderón, fueron acusados de tener tratos con las bandas.

En un video que circuló en las redes sociales el 27 de noviembre de 2013, *La Tuta* dijo que tuvo contactos con Luisa María Calderón *Cocoa*, a través de intermediarios, en 2006 y 2011.

Las revelaciones del jefe templario se dieron en respuesta a las afirmaciones que la hermana del hoy expresidente hizo en 2013 acerca de que Fausto Vallejo había ganado con la ayuda del grupo criminal. La senadora y la dirigencia de su partido habían insistido en la desaparición de poderes en Michoacán, argumentando ingobernabilidad por la presencia de las bandas criminales y la ausencia del gobernador durante meses por motivos de salud.

En agosto de 2013, la senadora Calderón dijo en entrevista (Olmos, 2013) que el gobernador Vallejo había cedido el poder gubernamental a los grupos del crimen organizado. Criticó también a Jesús Reyna, quien se quedó al frente del gobierno temporalmente, mientras Vallejo se recuperaba.

En septiembre acusó nuevamente a funcionarios del gobierno vallejista de tener vínculos con Los Templarios, imputó al secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas; al alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, y al exdiputado local y líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua.

Un mes después, en octubre, acusó a Rodrigo Vallejo Mora, de tener vínculos con las bandas. “Gente de la campaña del actual gobernador de Michoacán negoció con el crimen organizado” y “uno de los hijos de Fausto Vallejo está vinculado”, espetó la senadora conocida como *Cocoa*.

Luego de esta tanda de aseveraciones, *La Tuta* sacó el video donde negó todo contacto con Fausto Vallejo y miembros de su equipo, afirmando que el único contacto había sido con la senadora Calderón.

Dijo que, en 2006, *Cocoa* lo buscó a través de intermediarios para resolver el caso de Alfonso Reyes Hinojosa, primo de Felipe y Luisa María, quien fue secuestrado por Los Templarios para obligarlo a pagar una deuda que tenía con ellos por 30 millones de pesos y que no quería cubrir.

En realidad, el plagio del familiar de los Calderón se registró el 3 de enero de 2008 a las 18:00 horas en la lujosa colonia Las Américas, de Morelia.

Reyes Hinojosa se dedicaba a la compraventa de dólares y era dueño de una casa de cambio. Cuando fue plagiado viajaba con su esposa, Martha Contreras de Reyes, en un vehículo que fue interceptado por tres hombres encapuchados armados con rifles de alto poder, que tripulaban una camioneta Ford Expedition blanca.

Los plagiarios obligaron al primo del presidente a descender de su vehículo y a subir a la otra camioneta, en la que se lo llevaron rumbo al sur.

Más tarde fue confirmado por el gobierno estatal y federal que Alfonso Reyes había sido liberado sano y salvo a las 22:00 horas. Se ratificó que ese hombre era hijo

de un hermano de María del Carmen Hinojosa González, madre de Felipe Calderón.

En el video, *La Tuta* consideró que no era admisible que Alfonso no pagar sus deudas sólo por pariente de un mandatario.

“Ahí empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros, La Familia Michoacana y ahora Los Caballeros Templarios. El motivo realmente fue que nosotros retuvimos a un familiar de él, Alfonso Reyes Hinojosa.”

La Tuta dijo que Luisa María, por medio de su hermano Juan Luis, les mandó decir “que por qué no soltábamos a la persona, que nos estábamos metiendo con la familia del presidente”.

Nuevamente confundiendo las fechas, sostuvo que llegaron a un arreglo: “El primero de noviembre, cuando tuvimos al señor, de 2006, y lo soltamos el 2 de noviembre de 2006, más o menos un mes antes de que tomara posesión el electo, que era Felipe Calderón Hinojosa. Arreglamos, se comprometió a pagar a los pequeños empresarios 20 millones de pesos, y al señor no lo volvimos a ver más que cuando toma posesión el señor Felipe Calderón y aparece a un lado de él”.

A partir de ahí el capo hace una serie de acusaciones en las que vincula a la familia Calderón con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

“El pleito se agrava cuando sacamos a Los Zetas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a finales de 2008, a mediados, ya había pasado la mitad de 2008, y se nos dejan venir con más ganas: porque les afectamos sus intereses. Ya teníamos el pleitecito con ellos de esa manera.

“Cuando nosotros hicimos el trato para soltar al mu-

chacho, o al señor más bien, lo hicimos por medio de un señor que se llama Carlos Mejía Villaseñor, lo pueden buscar en el IFE y darse cuenta quién es ese señor. Él tenía una relación muy íntima con la actual senadora Luisa María Calderón. Él se volvió testigo protegido, está en Guadalajara, está siendo protegido por el Cártel Jalisco Nueva Generación, nos ha atacado mucho.

“Investiguen y ustedes verán, señores de la SEIDO, señores de la PGR, señores de la PFP, lo que estoy diciendo, y para eso les voy a mostrar unas pequeñas pruebas. Esa es la historia de cómo se vinieron dando los casos”.

El traficante ofrece antecedentes de este personaje, que tuvo un papel de mediador en la campaña de 2011 junto con Francisco Javier Girón del Toro, cuando la ahora senadora fue candidata del PAN a la gubernatura:

“Carlos Mejía Villaseñor nos adeuda a la empresa 12 millones de dólares que se le prestaron para hacer los fraccionamientos. Por no pagarlos se va con los enemigos. Antes (inaudible) muchas cosas. Interviene Luisa María Calderón para hacer ciertos arreglos cuando su hermano todavía no se venía lo de Lázaro (sic) para que perdonáramos al señor a cambio de algunos favores. ¿Por qué? Porque tenían una relación muy íntima, no sé de qué tipo. Lo pueden constatar. (...)

“Mis respetos para los señores que están en el poder, tanto en la Presidencia de la República como en el gobierno del estado. No tenemos que ver nada, nunca me he reunido con ningún funcionarios del gobierno, ni siquiera personalmente –lo aclaro–, ni siquiera me reuní con Luisa María Calderón Hinojosa, pero sí nos mandó pedir un favor y se lo voy a demostrar con unos videos

que aquí van anexados para que ustedes escuchen.”

En el video subido a YouTube en 2013, el jefe del narco insiste: “La única persona que tuvo acercamiento con nosotros fue Luisa María Calderón Hinojosa, por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán, Francisco Javier Girón del Toro”.

La Tuta añade, en la grabación de 16.29 minutos: “Esta señora lo mandó tres veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Le vamos a mostrar los videos para que vea que es cierto lo que decimos. Lo mandaron con nosotros en tres ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando dos días para la elección, que fue un viernes por la tarde, para decirnos que estábamos en los acuerdos, y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano para que ella ocupara el triunfo y que todo se olvidaba”.

El dirigente de Los Templarios, que con su clásica gorra de beisbolista niega vínculos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Vallejo, insiste: “Yo en lo personal me molesté un poco, porque claramente le dije a esa persona, Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no queríamos tratos con ningún partido político y que ganara el que mejor fuera.

La cooptación de Fausto Vallejo

Las elecciones de 2011 en Michoacán fueron especiales no por la contienda entre los partidos, sino por la clara participación de Los Caballeros Templarios en apoyo a los candidatos del PRI.

Antes de los comicios ya había denuncias de la intromisión de grupos criminales en los procesos de otras entidades, como en Tamaulipas. Pero en el caso de Michoacán, el IFE tenía detectadas 66 secciones en riesgo de ser afectadas por el crimen organizado. Se ubicaban en Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Jiquilpan de Juárez, Zamora de Hidalgo, Ciudad Hidalgo, Zacapu, Pátzcuaro y Apatzingán. Extrañamente no incluía otros municipios de la Tierra Caliente michoacana, zona controlada por Los Templarios.

En los comicios del 13 de noviembre, que estuvieron salpicados de denuncias por la presencia de hombres armados en muchos municipios, el PRI ganó la gubernatura, 46 municipios –entre ellos Apatzingán y Uruapan, reconocidos como enclaves de Los Templarios– y 25 diputaciones.

El 6 de diciembre de 2011, el excandidato del PAN a la alcaldía de Michoacán, Marko Cortés, denunció que el mismo día de la elección fue detenido un operador de Los Caballeros Templarios, Juan Gabriel Orozco *El Gasca*, con propaganda del candidato del PRI Wilfrido Lázaro, así como con armas y el manual de su grupo delictivo. Esto demostraba, destacó, que el crimen organizado operó a través de las casillas, amenazó a los operadores panistas y a sus representantes, movilizó ciudadanos e inhibió el voto.

Unas semanas después de la elección, fue difundida una grabación donde se escuchaba a Horacio Morales Baca *El Perro*, reconocido como el tercero al mando en La Familia Michoacana, presionando a pobladores para que votaran por el candidato del PRI a la alcaldía de

Tuzantla, Julián Rodríguez Rosales. En la grabación se menciona que el aspirante del PRD, Silvano Aureoles, había recibido 2 millones de dólares para su campaña de parte de Los Caballeros Templarios, así que la sentencia era que cualquiera que votara por el sol azteca moriría.

Hubo más denuncias antes y después de los comicios. Pero ni el gobierno de Leonel Godoy ni el de Felipe Calderón hicieron algo. Es más, el mero día de la votación el gobierno federal retiró a los militares y policías federales, dejando que los criminales actuaran de manera impune a favor de los candidatos del PRI.

Semanas después del proceso electoral michoacano, en el marco de la celebración de su quinto año de gobierno, Felipe Calderón reconoció que en Michoacán el crimen organizado “bajó” de sus aspiraciones a 50 candidatos del PRI, PAN y PRD bajo la amenaza de ser desaparecidos. Justificó que, por ese riesgo, no lanzó una alerta sobre la injerencia de los delincuentes en las elecciones.

El 28 de diciembre de aquel año, la cadena de noticias estadounidense CNN reportó que los comicios michoacanos “estuvieron marcados por algunos acontecimientos que, de acuerdo con los partidos y el mismo gobierno federal, afectaron los resultados, como las amenazas por parte del crimen organizado contra los votantes y el asesinato de un alcalde panista”. Se trataba del edil de La Piedad, Ricardo Guzmán.

Al final, ninguna autoridad electoral, judicial o política cambió los resultados electorales, sólo Los Caballeros Templarios lanzaron un reclamo y advertencia al priista Fausto Vallejo a través de mantas: le exigieron

cumplir su palabra de dejarlos trabajar por el bienestar de los michoacanos.

En entrevista, Luisa María Calderón hace hincapié en que esta contienda fue controlada por el crimen organizado.

“Entiendo que en el año 2006 hay una alarma al final del gobierno de Fox sobre el montón de tienditas de narcomenudeo que había en Michoacán. Se habló mucho de las tachas que vendían a los chiquillos afuera de las escuelas, tal alarma nos llamó a modificar el código de procedimientos penales.”

Ya para esas fechas, recapitula, la delincuencia organizada tenía cooptadas a los policías estatales y municipales. “Ellos dicen (los agentes): ‘Si van a ser mis enemigos, mejor me los hago mis amigos’, y con eso tenemos la primera llamada de atención grave, que es el secuestro y desaparición de la secretaria del ayuntamiento en Uruapan, Maribel Martínez Martínez, en agosto de 2008”.

El plagio de la funcionaria se dio en San Juan Nuevo. En ese rapto participó Isidro Echavarría, director de Seguridad Pública, quien un año después fue detenido por la PGR junto con otros tres hombres, identificados como miembros de La Familia Michoacana.

“Así que las cosas siguen creciendo, siguen haciéndose mucho más difíciles. Para 2007 tenemos claro que hay unos personajes que convocan a los aguacateros a un hotel, les dicen que va a llegar una persona y quien llega es *El Chayo*, quien les anuncia que necesita una cuota para protegerlos, y desde entonces el asunto de la cuota se extiende, lo aceptan los aguacateros, luego los limoneros, los empacadores y así, ejido por ejido. En Morelia

recientemente han ido apareciendo quemas de restaurantes, antros, negocios... eso responde a que la gente no paga su cuota.

“Las cosas son más difíciles, en 2009 –que a mí me tocó coordinar el proceso electoral intermedio– me acuerdo que algunos de nuestros precandidatos en municipios pequeños de Tierra Caliente y en el Oriente fueron llamados (por La Familia Michoacana). El encargado de ésta era un personaje al que le decían *El Lince*. Él hacía este trabajo de Tacámbaro para abajo (hacia el sur) porque ya tenían repartidas sus zonas.

“*El Lince* les dijo que no se les ocurriera contender, que ellos iban a decir con quién irían en la elección. En efecto, el día en que llegan las elecciones amenazaron a nuestros representantes de casilla, les exigieron que no se presentaran y les dijeron que quien no aceptara hasta lo podrían matar. Las cosas fueron aumentando, algunos de los nuestros se atrevieron a ir de candidatos, a más de uno lo levantaron para asustarlo y luego lo soltaron.”

Saúl Solís Solís *El Lince* era el encargado de La Familia Michoacana y después de Los Caballeros Templarios del control de la siembra y cosecha de enervantes, tráfico de droga y manejo de laboratorios clandestinos, extorsiones, secuestros y homicidios en los municipios de La Huacana, Ario de Rosales, Nuevo Urecho, Tacámbaro y Turicato, así como en el Estado de México.

El 19 de septiembre de 2011, en Nueva Italia, el Ejército lo detuvo y lo acusó de ser uno de los principales responsables de la agresión en contra de personal militar el primero de mayo de 2007, en Carácuaro, Michoacán,

donde perdieron la vida un coronel y cuatro elementos de tropa.

El Lince es primo de *Kike* Plancarte. De 2003 a 2005 fue director de Seguridad Pública de Turicato y, en 2009, candidato del Partido Verde Ecologista de México para una diputación federal.

La senadora del PAN sostiene que ya desde entonces la policía municipal era impuesta por las bandas del crimen organizado y que eran los agentes quienes informaban a los capos quién salía y entraba a los pueblos.

“Yo empecé a meter más las narices porque me importaba ir resolviendo el problema cuando fuera gobernadora y vi que los ministerios públicos no tenían elementos para hacer sus averiguaciones previas. Alguien me dijo: ‘Me piden que vaya a levantar huellas y la tinta que tengo aquí ya no sirve, ya no tengo dinero para la gasolina para desplazarme a tal lado, cuando tengo que traer una orden de presentación se la tengo que pedir a la policía municipal que me ayude. Pero la policía municipal, en lugar de ir por el que se necesita presentar, va a informar y luego golpea al que hace la denuncia’.

“Entonces empiezas a ver que los secuestros se repiten una y otra vez, que la gente decía: ‘A mi hijo lo secuestraron y cuando lo llevé al Ministerio Público a ratificar se orinó en la puerta porque los secuestradores eran ellos’. También otro caso en el que alguien pagó (un secuestro) con un portafolio que luego vio en la oficina ministerial. Era muy difícil esto porque son uno solo, los ministeriales persiguen a alguien que está en falta y, si es de los suyos, los liberan, y si es de los de enfrente, los *ponen*. De tal manera que no hay gente que denuncie.”

La panista recuerda testimonios de gente que había sido secuestrada y contaba que la traían en una patrulla por varios días y escuchaba por la radio cómo le decían a la policía del municipio: “Ábranme cancha, porque aquí traigo uno”.

Hacia las elecciones de 2011, en las que participó como candidata para el gobierno de Michoacán, las cosas fueron empeorando, al grado de que todo ese proceso estuvo controlado por Los Caballeros Templarios.

“Cuando termina el gobierno pasado de Leonel Godoy, (las autoridades) deciden retirar al Ejército y a la Policía Federal, y claro, los del crimen organizado salen a las calles y controlan. Nosotros tuvimos malas señales en los cierres de campaña, hubo candidatos nuestros que ya no llegaron, y otros que después de la elección los levantaron o los mandaron llamar para decirles que mejor ni se metieran.

“Hubo más de 20 candidatos nuestros atorados, sin poder salir, gente nuestra amenazada con muchas variantes, había un tal ‘grupo de distención’ con el que pactaban grupos políticos, y el gobernador nunca quiso pedir que salieran las fuerzas armadas, nunca lo autorizaron, sólo salieron en el municipio de Maravatío porque iban a linchar a la gente, pero ya era tarde.

“De tal manera que ellos decían a quién iban a apoyar y si, a pesar de ello, la gente participaba y ganaba al que apoyaban, bueno, pues ellos iban y le cobraban, imponiendo al jefe de la policía municipal.”

La legisladora sostiene que cuando Vallejo tomó posesión como gobernador, la invitó a conversar cuando presentó su plan de desarrollo.

“Le dije: ‘Le encargo a mis alcaldes, tengo 28, la policía no es suya y los extorsionan’. Me dijo ‘así están todos’. De tal forma que eso se agravaba, en Tierra Caliente fueron tomando el territorio de forma terrible, a los limoneros les decían cuándo cortar o cuándo no hacerlo. Además de la cuota que desde hacía cinco años ya pedían: si mataban un becerro pedían cuota, si vendían queso, también. Controlaban la actividad económica más elemental.

“Cuando decían cuándo y quién podía cortar limón afectaban hasta a los jornaleros que sólo podían trabajar un par de días y luego no tenían qué comer. Después fueron cobrando impuesto predial y decidieron cobrar por comprar carne, etc. Es cuando la gente se rebela y dice ‘hasta aquí’.”

Recuerda que el 20 de abril de 2013 y para demostrar fuerza, el crimen organizado realizó una serie de manifestaciones en varias zonas del estado, incluyendo Morelia.

“Estos mentecatos hicieron una demostración de fuerza, hicieron marchas en las ciudades grandes, obligando a la gente a ir, cerraron las salidas de Morelia, Uruapan, con gente que mandaron. A los empresarios que no cooperaron les quemaron sus empacadoras, como en Tancítaro, y cuando la gente corrió y quiso apagarlo, la detuvieron diciendo: ‘¡Hey, esto se quema hasta el último palo!’. La gente había tratado de rescatarlo porque era su empleo.”

De acuerdo con reportes periodísticos, ese día Los Templarios lanzaron amenazas de bomba y realizaron bloqueos carreteros, de alcaldías y comercios, además de

suspender clases en 735 escuelas y diseminar rumores de estallido social.

Los accesos a Morelia fueron bloqueados por integrantes de supuestas organizaciones sociales, transportistas y comerciantes –algunos embozados–, que causaron densos congestionamientos en las salidas a Pátzcuaro, Charo, Los Reyes, Uruapan, Múgica y Quiroga.

Las carreteras a Pátzcuaro, Guadalajara y Salamanca fueron bloqueadas por cinco horas y, según informes de la PJEM, ante las amenazas de bomba las autoridades municipales de los ayuntamientos de Zacapu, Apatzingán, Buenavista, Múgica, Tepalcatepec, La Huacana, Jiquilpan, Sahuayo, Villamar, Briseñas, Cojumatlán, Venustiano Carranza, Marcos Castellanos, Pajacuarán y Zamora, entre otras, decidieron parar labores.

En Apatzingán, aproximadamente mil 500 personas vestidas con pantalones de mezclilla y playeras con la leyenda “Soy comunitario. Muera el mal gobierno”, se manifestaron portando palos. Un hombre que se identificó como “Comandante Tonatiuh” emitió un comunicado para dar a conocer el surgimiento del Frente Nacional por un Modelo de Seguridad Pública.

Mientras que, en Zacapu, un grupo denominado Movimiento Ciudadano por la Ciudad, el Pueblo, Caminos y Carreteras de Michoacán demandó a los gobiernos federal y estatal garantizar la seguridad. El grupo emitió volantes de protesta por el surgimiento de guardias comunitarias.

El gobierno de Fausto Vallejo tuvo que admitir en un boletín que las manifestaciones fueron incitadas por grupos delictivos: “Se identifica con toda claridad que la

mayor parte de los manifestantes no están ahí por su propia voluntad, sino que en diversos puntos acudieron ante el temor de represalias por parte de grupos delictivos”.

Después de esta demostración de fuerza, dice la senadora Calderón, Los Templarios fueron tomando más territorios y sometiendo a la gente a tal grado que ya no podía hacer nada.

Todo esto, porque en las elecciones del 2011, Fausto Vallejo ganó con el apoyo de Los Caballeros Templarios. “La elección se las debe, cuando perdí en números y lo entendí, le dije que no se trataba de cuántos votos sino de cómo llegaron esos votos. Le pedí que no se arrodillara frente a los delincuentes organizados.

–¿Se arrodilló? –se le pregunta.

–Bueno, pues no ha podido hacer gran cosa, no ha podido cambiar funcionarios, el C4 (centro de control y mando policial) lo tienen bajo control (los narcos). ¡Qué es eso! Los ministeriales los tienen bajo su control, ¡qué es eso! No ha podido cambiar las cosas y esto no es un secreto, lo sabemos todos.

Por su parte, el exdirigente de las autodefensas José Manuel Mireles, unos días antes de ser detenido en la población de La Mira, ubicada en la costa de Michoacán, denunció que los niveles de corrupción fueron tan altos que se llegó al “narcogobierno”.

“Durante 12 años no nada más los policías federales estuvieron al mando del crimen organizado, también el Ejército, también la Marina, yo incluso estuve ocho meses denunciando que el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, era el comandante general de Los Templarios, y decían: ‘No, pinche Mireles está loco’. Está

bien, pero nosotros teníamos las fotos y los vídeos de la gente de nosotros que iba a las reuniones cuando *El Chayo* le dio 3 mil millones de pesos para la campaña a los priistas en Michoacán, para Chucho Reina.

“No, pero Mireles es un mentiroso, volvían a decir... ¡Perfecto! ¿Pero dónde está Chucho Reyna ahorita? Está en la cárcel, porque a los ocho meses el obispo de Apatzingán publicó un desplegado nacional diciendo lo que Mireles había dicho durante ocho meses. Y a los 10 meses una televisora presentó la documentación de esta asociación entre Jesús Reyna y Los Caballeros Templarios, porque lo filmaron los muy pendejos. Ahí se comprometían con ese dinero a poner todos los presidentes municipales, todos los diputados, todo el equipo de gobierno de puros caballeros templarios, para eso ocuparon los 3 mil millones de pesos.

“Ya está Chucho Reina en la cárcel y varios alcaldes en la cárcel y hay varios diputados en la cárcel y hay varios señores del gabinete del estado. (...) Yo personalmente denuncié que un general recibía un millón y medio de pesos mensuales, el de la 43 Zona Militar en Apatzingán, porque yo no hallaba una explicación lógica. El cuartel de la 43 Zona Militar está en la entrada de Apatzingán, y a 100 metros estaban los retenes de Los Templarios encapuchados y con cuernos de chivo ¡y no los veían!

Sólo en una cosa me equivoqué, no era un millón y medio, eran 15 millones de pesos mensuales lo que recibían esos federales, comprobado. Así que no nada más la Policía Federal estaba vendida con ellos, también el Ejército”.

El caso de Jesús Reyna

Desde el inicio del gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán todos sabían del papel protagónico de Los Caballeros Templarios en el proceso electoral de 2011 y de los vínculos de este grupo con miembros importantes de la familia del gobernador y de su equipo.

Pero nadie decía nada por temor a represalias de este grupo, que había hecho tratos directos con Jesús Reyna cuando era el coordinador de la campaña vallejista.

En 2012, cuando Vallejo ya gobernaba y Reyna era su segundo, en la oficina de Seguridad Pública estatal se tenía elaborada una ficha en la cual constaba que el otra coordinador de campaña había tenido encuentros en marzo y octubre de 2011 con *El Chayo* y *La Tuta*.

Según el documento, en esas dos reuniones se acordó el apoyo del grupo criminal a la campaña de Vallejo, quien al final derrotó por amplio margen al perredista Silvano Aureoles y a la panista Luisa María Calderón.

En varias ocasiones el coordinador general de las autodefensas, José Manuel Mireles, aseguró que Los Templarios metieron 3 millones de dólares a la campaña del PRI en 2011. Pero nadie le hacía caso.

El análisis citado es un informe “confidencial”, fechado el 16 de marzo de 2012. Tiene membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, fue elaborado por un asesor de nombre Juan García Bravo y se dirigió al entonces titular de esa dependencia, Elías Álvarez Hernández.

El reporte señala que “de acuerdo con informaciones obtenidas”, Reyna tuvo reuniones privadas con “interlo-

cutores de la delincuencia organizada” y que los datos se obtuvieron por conducto de una “fuente confiable”.

“Se estableció contacto con la fuente de información, la cual informó que a finales del mes (entre el 26 y el 29) de marzo de 2011 se realizó una reunión privada entre C. JOSÉ DE JESÚS REYNA GARCÍA y operadores de Los Caballeros Templarios en Michoacán, y quien fuera identificado como Miguel Granados Godoy, los dos de filiación priista, (quienes) acordaron contactar una reunión privada con los líderes de la cúpula de este grupo delictivo para establecer una estrategia política electoral y de acuerdos mutuos”, señala el texto.

En palabras de la fuente, “en dicho acuerdo se priorizó una primera entrevista, la que fue autorizada, y debería ser en la sierra más alta entre Tumbiscatío y Aguililla, la cual debería ser en la última semana del mes de julio, donde se designa para la reunión (a) Mario Gascón Juárez, quien fungió como chofer para llevarlos al lugar previsto según la fuente, estableciendo el restaurante de Aguililla en la ciudad de Uruapan”.

El escrito precisa que a ese lugar llegaron Jesús Reyna, coordinador de campaña del PRI; Guillermo Valencia Reyes, aspirante a la alcaldía de Tepalcatepec, y José Trinidad Pasalagua o Martínez Pasalagua, líder de los transportistas locales.

Valencia abandonó desde 2013 la presidencia municipal de Tepalcatepec, acusado por la población de ser templario. En entrevista para este libro niega haber asistido a dicho cónclave y ser parte de este grupo. Por su parte, José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local, fue detenido en la SEIDO por esta vinculación con

Los Templarios y como parte de la averiguación PGR/SEIDO/UEITA/059/2014.

Estos tres personajes, señala el documento, fueron trasladados a la comunidad de Cuatro Caminos, donde los contactos serían *El Chivo* (Ignacio Berber) y *El Chuky* (Omar Tafolla), “quien los recibiría en la plaza principal, donde transbordan (a) otros vehículos que los llevarían al lugar (en el) que se había acordado la reunión, el cual se identificó como un rancho llamado El Jabalí, en la parte alta de la comunidad llamada Las Cruces del municipio de Tumbiscatío”.

En la fecha de ese encuentro, Reyna coordinaba la campaña de Vallejo, quien tenía como bandera política limpiar el estado de la delincuencia organizada que se había expandido durante los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, cuyo medio hermano había sido acusado precisamente de tener vínculos con La Familia Michoacana.

Siempre según la fuente, después de la reunión los asistentes –Reyna, Valencia y Pasalagua– fueron regresados a la plaza principal de Cuatro Caminos, donde los recibió Mario Gascón Juárez. Se menciona que los tres políticos llegaron entusiasmados y comentando que *El Doctor (El Chayo)* y *El Profe (La Tuta)* habían decidido “apoyar a los candidatos del PRI”.

Agrega que en la reunión también estuvo presente Saúl Solís Solís *El Lince*, con quien acordaron la alianza con el Partido Verde Ecologista rumbo a la gubernatura, cosa que se concretó el 2 de agosto de 2011.

Otro acuerdo que menciona la fuente sería el de una segunda reunión en los últimos días de septiembre de

2011, para la cual Reyna le pidió nuevamente a Gascón Juárez que estableciera contacto con *El Chivo*, a fin de reunirse con “los amigos”. Finalmente el segundo encuentro supuestamente tuvo lugar la segunda semana de octubre.

“Para el caso la fuente dijo que previo a salir de la reunión fueron citados en la sede del PRI estatal Jesús Reyna, Guillermo Valencia Reyes (el candidato a la alcaldía de Tepalcatepec), José Trinidad Martínez Pasalagua (líder de transportistas) y Armando Ballinas Mayes (asesor de campaña de Fausto Vallejo).”

El informante indica que fueron de nuevo a Cuatro Caminos, “donde se hizo el mismo procedimiento, estando igualmente solo en esa ocasión *El Chivo*, quien se encargó de llevarlos al mismo cerro en Tumbiscatío”.

Cinco horas después volvieron a Cuatro Caminos y, según la fuente, de regreso a Morelia Reyna les compartió a Valencia, Pasalagua y Ballinas el acuerdo tomado en dicho cónclave con Los Caballeros Templarios para su futuro político.

“Que dentro de su estrategia él sería el próximo secretario de Gobierno, que Armando Ballinas (quedaría) en el Consejo de Seguridad para establecer la estrategia electoral con los municipios y de ahí operaría sus cuadros para preparar el terreno para 2015.”

Pero que si se daba el caso de que “el gordito”, es decir Fausto Vallejo, se fuera antes, “nos colaríamos para ser el interino a la gubernatura del estado”, confió Reyna. Y así ocurrió tiempo después.

El 29 de noviembre de 2012, con mantas colocadas en distintos puntos de Michoacán y Guanajuato, Los Ca-

balleros Templarios revelaron los acuerdos con el equipo de campaña de Vallejo.

Después de saludar al mandatario michoacano y manifestarle respeto “como gobernador elegido constitucionalmente”, Los Caballeros Templarios le recuerdan que ellos “limpiaron” Michoacán del Cártel del Golfo y de Los Zetas y que no tuvieron que ver con la muerte de la alcaldesa de Tiquicheo (María Santos Gorrostieta Salazar, asesinada en noviembre de 2012).

Pero sobre todo le reclaman no haberles otorgado los favores prometidos, pese a que lo ayudaron a ganar.

El mensaje de “Los Caballeros Templarios Guardia Michoacana” decía: “Las últimas tres generaciones de gobernantes han tenido lazos con nuestras organizaciones, llámese Familia Michoacana o Caballeros Templarios” y esos vínculos “deben de ser indirectos pero fuertes, en el caso suyo usted sabe que hay parientes de primera línea que no sólo simpatizan con nosotros y hasta han convivido con nosotros, hay un hecho relevante”. Era clara la referencia a Rodrigo Vallejo, quien en agosto de 2014 apareció en un video bebiendo y departiendo con *La Tuta*.

En el mensaje, Los Templarios sostenían que, además de combatir “oficialmente” a los otros grupos criminales, “extraoficialmente nosotros estamos esperando los frutos de nuestra labor hacia su partido, cosa que por el momento no hemos (tenido)”.

Los Templarios aludían a compromisos hechos “por sus dirigentes de campaña”. Y revelaron el trabajo que hicieron: “Como agrupamiento al margen de la ley fomentamos la apatía hacia el partido político del PAN, por nuestras acciones el PAN (perdió) enclaves impor-

tantísimos que ustedes capitalizaron bajo una coordinación mutua, larga, ardua y sobre todo costosa. Fueron dos objetivos: frenar al PAN e impulsar a los candidatos del PRI.

“Muchas fueron las promesas que se hicieron, pero por lo visto ninguno de sus enviados o delegados dan la explicación de por qué el alejamiento del PRI ahora en el poder, si en la campaña se sentaban a comer y a degustar una buena copa. Por un momento pensamos que los priistas que vinieron a buscar votos para usted, ayuda social, financiamiento económico, vehículos, hasta comida para sus cónclaves, etc. etc. etc. hablaron a sus espaldas.

“Esos pensamientos serían ingenuos porque usted, un gobernante inteligente, nunca podría decir y menos asegurar que el argumento sustancial y porcentual en votos al PRI y en especial para usted, por ejemplo (en) Tierra Caliente, se debió sólo a la estupenda labor de los agitadores políticos de su campaña.

“Usted sabe, la gente sabe, el gobierno federal sabe que tenemos una capacidad de movilización importante que cualquier político querría tener, cosa que usted como PRI propusieron y nosotros aceptamos, sólo buscamos que usted y su gobierno sean congruentes con lo que hicimos, sólo queremos que de manera directa podamos acceder a un beneficio por nuestra inversión.”

Los Templarios le decían a Vallejo que para ellos como “empresa” la situación sigue siendo igual desde que el PAN llegó a la Presidencia de la República, pero advierten: “Le aseguramos señor gobernador que podemos resistir otro sexenio de embates, tenemos capacidad de movilización social, tenemos capacidad de respuesta,

hemos permeado en la sociedad sin amenazas, sin ventajas, sólo estamos ofreciendo a los michoacanos oportunidad de negocios, trabajo.

“No queremos, nunca hemos pensado, que se repita un mandato como el de Mario Marín o de Moreira, o para no ir más lejos como el del maestro Leonel Godoy, que no resistiría una fiscalización porque saldrían a relucir aparte de malos manejos, endeudamiento a nuestro estado con todo lo que se robó en contrataciones; eso no lo queremos, por eso tenemos metidos en cintura a los ediles que están a nuestra vista. Si usted está interesado en nuestra carta se estará preguntando ‘¿Bueno, pero qué es lo que quieren Los Caballeros Templarios?’

“Con gusto atenderemos a la persona que usted envíe. Los canales están diseñados con su oficina, sólo debe usarlos, usted es michoacano, nosotros también hemos enterrado compañeros, parientes, amigos que están luchando en otros estados para que la amenaza *zeta* no llegue a nuestras puertas, que no llegue a su casa señor gobernador. Si no gusta sumarse sea discreto por favor, no nos haga la vida más pesada, son 11 años de conflicto tanto internos como externos. Si usted tiene objeciones o puntos de vista para nosotros como grupo por supuesto que escucharemos atentamente, usted es parte de la sociedad por lo tanto nos debemos a usted y esperamos su respuesta.”

Jesús Reyna fue detenido el viernes 4 de abril tras una investigación de la PGR. Una de las líneas de investigación es el dinero del exgobernador interino.

Según otro documento confidencial al que se tuvo acceso, Reyna es propietario y administrador de varias

lavanderías y tintorerías en Morelia desde 1992. El valor de esos negocios ronda los 3.2 millones de pesos.

Es concesionario y administrador de permisos para la prestación de servicios de transporte colectivo urbano en la capital del estado, con un valor aproximado de 1.5 millones de pesos. Posee dos edificios de departamentos en Morelia con un valor de 14 millones de pesos y una casa de 3 millones de pesos en la misma ciudad.

El documento registra que Reyna es socio, con una familia de apellido Otero, de algunos moteles y hoteles de paso en Morelia y otros municipios

El otro asistente al encuentro de 2011 con Los Caballeros Templarios que fue detenido es José Trinidad Martínez Pasalagua. El 21 de julio, con evidencia recabada por la PGR, el exlegislador priista fue acusado de formar parte de Los Templarios a quienes entregaba dinero producto de extorsiones.

El líder transportista apareció en un video que el 3 de abril obtuvo la PGR –y que posteriormente fue exhibido en YouTube–, en el que se evidencian las reuniones que sostenía con *La Tuta*.

Según la PGR, se acreditó que formaba parte de dicho cártel y que se dedicada a la comisión de delitos contra la salud. A través de testimonios se supo que, en su calidad de líder transportista, cobraba cuotas mensuales a los concesionarios de las rutas. Los testigos lo identifican como colaborador directo de Servando Gómez, a quien era entregado el dinero.

Durante al menos ocho años, Martínez Pasalagua ejerció un fuerte liderazgo en ese sector de Michoacán, presionando para que la Comisión Reguladora del Trans-

porte otorgara concesiones y rutas a personas afines a él y al grupo delictivo. También se detectó que el exlegislador priista influyó en la designación de funcionarios públicos en el área de transporte.

Los tentáculos de Los Caballeros Templarios en el gobierno de Vallejo alcanzaron hasta a su hijo menor, Rodrigo Vallejo, a quien el mandatario estatal defendió muchas veces diciendo: “Es parrandero y le gusta divertirse”, pero no tiene vínculos con ese grupo criminal. En los hechos, empero, las defensas del padre de *El Gerber* se cayeron cuando su vástago apareció al lado de *La Tuta* en un video.

El Gerber y La Tuta

El miércoles 18 de junio de 2014, Fausto Vallejo Figueroa anunció por Twitter su renuncia a la gubernatura de Michoacán antes de que Presidencia de la República lo hiciera oficial. Cinco días antes comenzó a circular una foto de su hijo Rodrigo Vallejo Mora en una reunión con *La Tuta*, lo que confirmaba algo que este grupo había insinuado desde noviembre de 2011: el hijo del mandatario protegía al cártel.

Aunque Fausto Vallejo quiso ocultar desde el principio de su gobierno y hasta donde pudo estas relaciones, cuando estaban a punto de ser reveladas presentó su dimisión arguyendo que se iba por motivos de salud. Para entonces, el gobierno federal ya alistaba la estrategia para detener a Rodrigo Vallejo, conocido como *El Gerber*, quien desde 2008 operaba para el crimen organizado.

El 21 de junio la revista **Proceso** (Olmos, 2014) publicó información basada en documentación confidencial de seguridad pública e inteligencia militar que confirmaba que *El Gerber* comenzó a trabajar para distintos grupos criminales de Michoacán desde joven, pero cobró más importancia a partir de que su padre ganó la gubernatura.

En el informe se decía que Vallejo Mora “es y fue utilizado por sus vínculos políticos para lograr los objetivos del grupo criminal tanto en (el) tráfico de influencias como en (los) acercamientos con la clase política que arribaría al gobierno michoacano, encabezado por Fausto Vallejo”.

Desde 2008 *El Gerber* aparece en la estructura de organizaciones criminales como La Empresa, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, en las que cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con empresarios, comerciantes y políticos.

A últimas fechas, el hijo del gobernador tenía varias responsabilidades con Los Caballeros Templarios: el cobro de piso y protección de bares y discotecas de Morelia; conjuntaba a propietarios para otorgarles “el servicio” de manera obligada; traficaba con influencias a fin de facilitar “los trámites correspondientes para pagos”; otorgaba nuevos permisos y modificaba adeudos al municipio; y realizaba la “verificación y control de bares y restaurantes para el lavado de dinero”.

Los reportes mencionan que su primer contacto con La Empresa fue Héctor Gerardo Guzmán Múzquiz, a quien se señala como “operador” de cobros de piso y

extorsiones en Morelia, igual que para el lavado de dinero. Este personaje estuvo involucrado, en enero de 2008, cuando miembros de La Familia Michoacana secuestraron durante unas horas a Alfonso Reyes Hinojosa, primo de Felipe Calderón.

Los documentos recogen también información de 2009, cuando Fausto Vallejo era alcalde de Morelia. En junio de ese año la Policía Federal detuvo a Arnoldo Rueda Medina, conocido *La Minsa* o *El Fresa*, quien en ese momento estaba acompañado de Rodrigo Vallejo. Desde el gobierno de Felipe Calderón llegó la orden de ponerlo en libertad sólo a él.

José Manuel Mireles ya había denunciado en 2013 los vínculos de Rodrigo Vallejo con Los Caballeros Templarios, así como los excesos que alardeaba hacer desde la Casa de Gobierno, donde vivía, mientras su padre habitaba otro domicilio.

“Hacía bailes en la Casa de Gobierno con puro criminal para demostrar que tenía poder para hacer las cosas. Eran bailes fastuosos a los que iban puros criminales: jefes de plaza, encargados de zona y muchos otros ‘invitados especiales’. A Rodrigo le gustaba mucho andar con los hijos de los narcos, en sus pachangas y francachelas. También le gustaba mostrar que tenía cierto control sobre los federales, porque cuando detenían a alguno de sus amigos hablaba con los federales para liberarlo. Además, como hijo del gobernador también tenía el control de algunas mafias en los transportes, y con los comerciantes era el encargado de cobrarles las cuotas”, señaló Mireles en entrevista cuando se le preguntó sobre Rodrigo Vallejo.

El jueves 19 de junio, al oficializar su renuncia, Vallejo Figueroa dijo que se iba “con la frente en alto”. Un mes después, ya en el retiro, el exmandatario tuvo que agachar la cabeza y defender una vez más a su hijo. El 28 de julio la agencia de noticias Quadratín difundió un video donde aparecía *El Geber* con *La Tuta* compartiendo una mesa, poniéndose de acuerdo sobre temas de gobernabilidad en el estado.

En dicha grabación, que dura 18 minutos y 15 segundos, se ve a Rodrigo Vallejo tomando una cerveza. A un lado, *La Tuta*. Hay otras dos personas que fugazmente intervienen en el diálogo.

Sentado cómodamente, Vallejo se dirige de modo distendido al jefe de Los Templarios, que le pide explicar la situación política del gobierno de su padre. En la charla, que se entrecorta en algunas de sus partes, Rodrigo le informa a “La Tuta” que su padre ha tenido múltiples trasplantes de órganos: “Ton’s le van a cambiar el páncreas, le van a cambiar el hígado, le van a cambiar el intestino. O sea son cinco cosas, es multivisceral”.

Después, Vallejo Jr. le propone al jefe de Los Caballeros Templarios formar parte de la agrupación para resolver algunos de los problemas: “Yo quiero formar un grupo para la empresa; cualquier cosa personal de los de hasta arriba, o cualquier cosa que no se quiera llegar a mezclar o los vayan a llegar a mezclar...”. *La Tuta* le pide que sea intermediario con funcionarios de gobierno para acabar con un cobro de cuotas.

Aunque se trataba de la prueba más clara de los goznes de Rodrigo Vallejo y Los Caballeros Templarios, antes ya se habían difundido otras dos muestras. El 4 de

junio circuló en las redes una grabación donde se veía un camino, pero las voces eran las del hijo del exgobernador y Servando Gómez.

En el video de 12 segundos se escucha un breve diálogo: *La Tuta* le da instrucciones a *El Gerber*: “Los quiero a la chingada”, en tanto que Rodrigo contesta: “Unidos p’a delante, esto no acaba”.

En aquella ocasión el gobernador defendió a su hijo: “En mi familia no hay delincuentes”.

Pero después apareció una foto de su hijo con Servando Gómez, también conocido como *El Profe* porque estudio en la Normal Rural de Maestros en Arteaga, donde nació.

El 14 de junio el portal de Valor por Michoacán publicó una foto en blanco y negro donde estaban *El Gerber* y *La Tuta*. Los dos están sentados en torno a una mesa como si estuvieran platicando, en presencia de otras personas. Ese día Fausto Vallejo había salido a un chequeo médico en Estados Unidos, pero días antes, en una entrevista y sin especificar nombres, dijo que uno de sus hijos había sido llevado por la fuerza por un grupo de criminales.

El 30 de julio, cuando ya todos conocían el video de Rodrigo Vallejo y Servando Gómez, el exgobernador defendió una vez más a su hijo, quien fue citado por la SEIDO a comparecer para que declarara sobre esta reunión.

Vía Facebook, Rodrigo Vallejo mandó un mensaje anunciando que acudiría a las instalaciones de la PGR: “Como lo he dado a conocer, me presentaré a declarar con toda puntualidad ante las autoridades acatando el citatorio que ha emitido la PGR. Ahí expondré los he-

chos tal y como sucedieron y presentaré las pruebas que acreditan que la reunión a la que los delincuentes me forzaron a asistir fue en contra de mi voluntad tal y como en todo momento he sostenido y como se lo he hecho saber a mi propia familia, lamento profundamente que por ser hijo de quien soy no se me dé el beneficio de la duda y que con un video editado se presuma mi culpabilidad. Sin embargo puedo ver enfrente a mi familia con dignidad y confío ampliamente en que las autoridades actuarán conforme a derecho”.

Su padre compartió este mensaje en su cuenta de Twitter y esgrimió otra vez el argumento de las amenazas, y esta vez también él se defendió: “En el servicio público siempre me he conducido con absoluto apego a la ley, convencido de que es el único camino que nos puede conducir a la paz y al desarrollo. En mi paso por la política partidista y la administración pública he respetado y he instruido categóricamente a que sin distingos se respete la ley de forma irrestricta. Hoy más que nunca ratifico lo anterior”.

Hizo hincapié en que su hijo había acudido a la cita con el líder de Los Caballeros Templarios bajo amenazas, como tuvieron que hacer empresarios y presidentes municipales.


“En este sentido manifiesto que desde mi persona, mi familia, hasta cualquier otro ciudadano, se debe investigar y proceder conforme a derecho corresponda. Si se acredita que (Rodrigo) asistió por voluntad propia, enfáticamente lo digo: que se le castigue conforme a la ley. Sin embargo, si se comprueba que asistió bajo amenazas e intimidaciones en contra de su voluntad, esto deberá


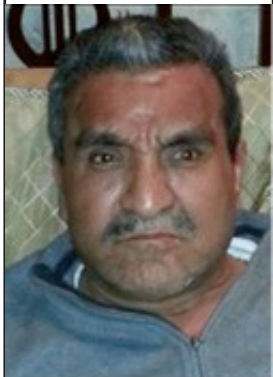
ser sopesado por las autoridades competentes. Confío en mi hijo, pero deberán ser las autoridades las que deslinden responsabilidades.”

A pesar de sus esfuerzos, de haber acudido personalmente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales del Estado de México y de solicitar un amparo para no pisar la cárcel, el 8 de agosto el juez dictó auto de formal prisión contra “el hijo incómodo”, luego de que el acusado se negara a colaborar informando el lugar, fecha y contenido de la conversación que tuvo con el líder de Los Caballeros Templarios, quien se encuentra prófugo.

El siguiente es el documento de inteligencia militar que, desde el 21 de junio, ya documentaba el trabajo de *El Gerber* para el crimen organizado.

Forma de operar de Rodrigo Vallejo Mora desde 2008 Puesto dentro del organigrama Familia Michoacana / Caballeros Templarios

	<p>Carlos Rosales Mendoza fundó las primeras células de La Familia Michoacana en la década de 1980. El Cártel del Milenio estaba compitiendo con la organización para el control de la producción y distribución de narcóticos en Michoacán. En 2000, Rosales Mendoza se unió con el Cártel del Golfo y Los Zetas para frustrar al Cártel del Milenio, causando una ola de violencia en el oeste de México que duró hasta 2003. Fue arrestado por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFFE) el 24 de octubre de 2004.</p> <p>En la actualidad se encuentra libre viviendo y operando nuevamente en Michoacán.</p>
---	--

	<p>Servando Gómez Martínez (Arteaga, Michoacán, 6 de febrero de 1966) es el actual líder de Los Caballeros Templarios y fue líder de La Familia Michoacana, por debajo de Nazario Moreno González <i>El Chayo</i> y de José de Jesús Méndez Vargas <i>El Chango</i> Méndez. Se graduó en la Escuela Normal de Arteaga, donde obtuvo su plaza como maestro en 1985.</p> <p>“Es uno de los hombres más violentos de La Familia Michoacana, al grado de ser capaz de asesinar sólo porque quien le leía las cartas del tarot le revelaba que supuestamente alguien lo traicionaba”, detalla un expediente de la PGR sobre la personalidad de Servando Gómez.</p> <p>Fue profesor de primaria, después agricultor, creó centros de ayuda a jóvenes farmacodependientes y luego traficante de estupefacientes, según la PGR. Con base en las declaraciones de su hermano, Luis Felipe Gómez Martínez <i>El Güicho</i>, incursionó en el tráfico de drogas después de 2001.</p> <p>En marzo de 2011, cuando se da a conocer la ruptura de La Familia Michoacana, Servando Gómez pasa a liderar, junto con Enrique Plancarte, el naciente cártel Los Caballeros Templarios. También fue, junto con Nazario Moreno <i>El Chayo</i> y Jesús Méndez <i>El Chango</i> (capturado por policías federales), líder de La Familia Michoacana.</p>
	<p>Dionisio Loya Plancarte <i>El Tío</i> (nacido el 21 de octubre de 1955) es un alto dirigente de Los Caballeros Templarios. Es el tío de Enrique Plancarte Solís, otro exalto rango. Desde 2009 fue catalogado como uno de los 37 capos de México más buscados, con 30 millones de pesos como recompensa por información que conduzca a su captura. Fue detenido por el Ejército mexicano en Morelia el 27 de enero de 2014.</p> <p>En la actualidad, el operador en la región de Guanajuato es su hijo.</p>

	<p>Alberto Espinoza Barrón <i>La Fresa</i> fue detenido el 29 de diciembre de 2008 en Morelia, en posesión de dos armas largas, una pistola, siete cargadores, cartuchos, tres teléfonos celulares, un radio de comunicación y documentos con información de La Familia, y trasladado al Centro Federal de Occidente El Rincón, ubicado en Tepic. En la actualidad se encuentra en libertad en Michoacán y reestructurando la organización criminal que pretende hacerse llamar La Sobra (o Las Obras o La Obra) de Nazario.</p>
	<p>Héctor Gerardo Guzmán Mizquiz <i>El Güero Guzmán</i> fue detenido en 2009 por vínculos con la delincuencia organizada y dejado en libertad. Tiene en su haber ocho procesos en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, y uno pendiente en estados Unidos. Su vínculo con La Empresa, Los Caballeros Templarios o Familia Michoacana es ser operador en Morelia para cobros de extorsiones; su posición es importante pues no sólo es de las personas de confianza de Carlos Rosales Mendoza <i>El Tísico</i>, sino que también es consuegro de Dionisio Loya Plancarte <i>El Tío</i>, actualmente detenido. En la actualidad se dedica no sólo a cobros de adeudos al grupo criminal, sino también a contactar a empresarios para lavar dinero. Es también intermediario en secuestros y extorsiones. Este hombre estuvo involucrado en el secuestro del primo del presidente Felipe Calderón Hinojosa. También fue el contacto inicial y actual del Rodrigo Vallejo Mora <i>El Gerber</i>.</p>

	<p>Rodrigo Vallejo Mora <i>El Gerber</i> es y fue utilizado por sus vínculos políticos para lograr ciertos objetivos del grupo criminal, tanto tráfico de influencias como el acercamientos con la clase política que arribaría al gobierno michoacano, encabezada por Fausto Vallejo Figueroa</p> <p>Su primera responsabilidad era el cobro de piso y protección a bares y discotecas de Morelia. Con-juntaba a propietarios para otorgarles “el servicio” de manera obligada.</p> <p>Su segunda responsabilidad era el tráfico de influencias para concretar los trámites corres-pondientes por pagos, otorgar nuevos permisos o modificar adeudos al municipio.</p> <p>La tercera responsabilidad era la verificación y control de bares y restaurantes para el lavado de dinero.</p>
---	---

Estructura

La Empresa, La Familia Michoacana/ Los Caballeros Templarios

Carlos Rosales

- └ Servando Gómez
- └ Dionisio Loya
- └ Alberto Espinoza
 - └ Gerardo Guzmán
 - └ Rodrigo Vallejo

CAPÍTULO 9.
LAS AUTODEFENSAS Y LA
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO

La crisis de ingobernabilidad

Cuando Enrique Peña Nieto se sentó en la silla presidencial, en diciembre de 2012, su prioridad fue sacar adelante las reformas energética y de telecomunicaciones; y sólo en segundo lugar enfrentar el crecimiento y el fortalecimiento del crimen organizado en todo el país, para lo cual repitió la estrategia militar y policiaca de su antecesor, Felipe Calderón, quien en lugar de resolver el conflicto avivó el avispero.

Para entonces la llamada “industria del narcotráfico” ya se había transformado en una agrupación más acabada, en un corporativo del crimen organizado, pues los grupos trasmutados en firmas empresariales ya no sólo se dedicaban a la producción, transporte y comercialización de las drogas, sino que ya tenían una amplia división con actividades comerciales, económicas y hasta políticas.

La crisis de gobernabilidad durante la transición del gobierno de Calderón al de Peña Nieto era más que evidente en algunas entidades, sobre todo en Michoacán, donde los más fuertes –como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, los Beltrán Leyva y hasta los remanentes de La Familia Michoacana– peleaban el control del territorio con Los Caballeros Templarios, lo que generó 328 muertes violentas en el último semestre del panista y 235 en el primero del priista.

A este contexto se aunaban otros factores que abonaban a la ingobernabilidad, como la pobreza. Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, 54% de la población michoacana se encuentra en alguna situación de pobreza, con poco más de dos millones 200

mil habitantes –más de una décima parte (11.6%)– en pobreza extrema; 85% de la población, 3 millones 828 mil personas, padece al menos una carencia social; a 3 millones 225 les hace falta seguridad social (71.6%); un millón 286 mil no tienen acceso a los servicios de salud, y un millón 369 mil carecen de servicios básicos en su hogar.

El Colegio de Economistas de Michoacán registró que, en el primer semestre de 2013, se perdieron 6 mil 976 empleos formales, lo que situó al estado en el último lugar nacional en la generación de puestos de trabajo. En tanto, el crecimiento de la economía estatal era de 1.9%, una reducción respecto del 2.4% de 2012 y el 4.3% de 2011.

En materia educativa, el promedio de estudios es de 7.4 años, 1.2 años menos que el promedio nacional. Y si a esto se le añade que la décima parte de la población de la entidad es analfabeta, no es difícil deducir que el crimen organizado tiene, de sobra, mano de obra barata y dispuesta a colaborar entre los jóvenes pobres, desempleados y sin posibilidades de educación.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, encabezado por José Antonio Ortega Sánchez, calificaba la situación michoacana de ingobernable y veía a la entidad como un “estado fallido”, porque ni Peña Nieto ni Vallejo podían atemperar la violencia.

Un estudio publicado por la ONU señalaba que desde 2011, siete de cada 10 municipios de Michoacán sufrían de alguna infiltración del crimen organizado. Es decir: 79 de los 113 municipios.

El punto relevante es que desde la gubernatura de Cárdenas Batel, quien pidió la intervención del gobierno

federal ante la crisis de seguridad, quedó en evidencia la ingobernabilidad.

A este escenario de penetración del crimen organizado en las instituciones de gobierno y la cooptación de territorios habría que sumarle la ausencia continua del gobernador por razones de salud. Desde la campaña estaba muy enfermo, pero ni al PRI ni a Vallejo les importó con tal de recuperar Michoacán.

Philippe Schmitter, politólogo estadounidense, propuso en 1988 cuatro indicadores para identificar una situación de ingobernabilidad: Primero, la indisciplina que se manifiesta cuando algunos ciudadanos intentan “influir en las decisiones públicas por métodos violentos, ilegales o anómalos”; segundo, la inestabilidad expresada por el fracaso de la élite “para conservar sus posiciones de dominación”; tercero, la ineficacia, que implica la incapacidad de los políticos y burócratas “para alcanzar los objetivos deseados, emanados de la autoridad del Estado”. Y finalmente, la ilegalidad, que proviene del hecho de que actores con gran poder corporativo logran “evadir restricciones constitucionales en búsqueda de ventajas e, incluso, de su supervivencia”.

Todos estos indicadores se cumplían y se siguen cumpliendo en Michoacán con Los Caballeros Templarios y las autodefensas, que como grupos sociales influyeron en las decisiones públicas a través de las armas; con la inestabilidad que se vive desde hace dos décadas; por la incapacidad del gobierno vallejista y de Peña Nieto en dar estabilidad y seguridad; y por la ilegalidad en la acción de los diversos grupos criminales y hasta de las autodefensas buscando su sobrevivencia.

En el arranque de su gobierno, Peña Nieto quiso administrar el conflicto en Michoacán con la misma estrategia calderonista pero sin el mismo interés que el panista. La realidad se le vino encima. El 24 de febrero de 2013 un grupo de hombres de los municipios de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec se armaron con rifles de asalto y declararon su rebeldía contra la opresión de Los Caballeros Templarios quienes imponían su ley con el terror de secuestros, extorsiones y ejecuciones.

Pero el primer pueblo que se levantó en armas fue el municipio de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana, encabezado por Hipólito Mora, un agricultor limonero de 58 años, con 11 hijos y sin ninguna preparación académica ni militar, que durante un tiempo fue la figura central del movimiento de las “policías comunitarias”, como se llamaron en un principio las autodefensas.

Enfermo del corazón, acosado por Los Caballeros Templarios, Mora no duró mucho tiempo al frente del movimiento. Sobre todo porque fue acusado de haberse quedado con dos huertas de limones propiedad de *El Chango* Méndez, quien asumió el control de La Familia Michoacana tras la supuesta muerte, en diciembre de 2010, de Nazario Moreno. *El Chango* fue capturado en junio de 2011 durante una operación de la Policía Federal realizada en Aguascalientes.

Mora estuvo en la cárcel en marzo de 2014, acusado de “coparticipación” en el asesinato de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en Buenavista. Dos meses más tarde salió libre y posteriormente se convirtió en Fuerza Rural, presionado por el gobierno.

Fueron los habitantes de Tierra Caliente quienes difundieron a escala nacional e internacional las condiciones de dictadura criminal que vivieron durante años con las bandas de delincuentes que les cobraban impuesto en todas sus actividades económicas, comerciales, en la cosecha y venta de limones y aguacate, la compra de alimentos, gasolina y medicinas.

La situación se hizo intolerante cuando los criminales “se cobraban” con las hijas y esposas de los rancheros y comerciantes que se negaban a pagar las cuotas impuestas por sus actividades y trabajos. Ahí fue cuando estalló el conflicto armado.

En abril de 2013, en medio del silencio del gobierno federal, Los Templarios ordenaron el bloqueo de alimentos, gasolina, agua embotellada, medicinas y otros productos básicos a la población de la zona donde ya operaban las autodefensas.

Los Caballeros Templarios emitieron un comunicado dirigido a las empresas, fechado en Apatzingán, en el que daban la orden del bloqueo:

“Buenas tardes o días, este comunicado va para todas las empresas como son: Cerveza, Agua, Refresco, Chucherías, Bimbo, Sabritas, Barcel, Marinela, Gas, Cable, Teléfono y Abarrotes, etc. Que a partir de hoy se le pide de la manera más atenta que va a estar (PROHIBIDO), surtir de sus productos a sus pobladores del 25, Buenavista, La Ruana y Tepalcatepec, y que a partir de mañana se les va a quemar todas las unidades si se les sorprende ir a dichas localidades mencionadas... Esto va a ser de 15 a 20 días tal vez más días esperamos que no sea así, donde si

pueden sus rutinas son: Aguililla, Santa Ana y Apatzingán. Muchas gracias por su apoyo y comprensión. ATT: LOS CABALLEROS TEMPLARIOS GUARDIA MICHOACANA.”

Durante varias semanas de abril el bloqueo puso a la población de los municipios castigados en una situación desesperada. En la carretera que comunica esos sitios con el centro del estado había camiones y autobuses quemados por Los Templarios. La circulación era escasa y muchos habitantes tuvieron que pedir ayuda a sus familiares en Colima y Estados Unidos para que denunciaran la precaria situación y les hicieran llegar alimentos, gasolina y medicamentos, que ya escaseaban.

Ocho de cada diez tiendas de abarrotes cerraron porque no tenían mercancía para vender, los transportistas y taxistas dejaron de circular porque carecían de gasolina y los productores de limón de la zona dejaron de trabajar, por lo que tampoco había dinero en circulación.

A principios de mayo un grupo de migrantes michoacanos acudió al consulado de San José, California, pidiendo auxilio para sus familiares, otros realizaron manifestaciones pacíficas en Los Ángeles y algunos más enviaron cartas en inglés a la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e incluso al presidente estadounidense Barack Obama, para denunciar la situación.

Sólo el 20 de mayo, cuando el estado de sitio impuesto por Los Templarios imperaba, Enrique Peña Nieto reforzó la estrategia militarista y mandó 6 mil soldados y policías.

Para entonces ya se habían registrado en Michoacán 235 muertes relacionadas con el crimen organizado, en enfrentamientos abiertos en Tierra Caliente entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios.

La situación con Peña Nieto fue exactamente la misma: mandó a miles de militares y policías federales a apostarse a las orillas de las carreteras con la orden de dar seguridad a los vehículos y camiones, pero sin perseguir a Los Templarios que se desplazaban por los caminos vecinales. Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán carecían de policías y de autoridades municipales, que dejaron sus puestos por acusaciones de colaborar con los criminales. La ingobernabilidad se profundizaba ante la indolencia de los gobiernos priistas.

En mayo, Vallejo solicitó un permiso de cuatro meses y lo sustituyó Jesús Reyna, quien desde el inicio fue señalado por las autodefensas como aliado de Los Templarios. En respuesta, el gobernador interino acusó a las autodefensas de estar apoyadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hacia finales de julio de 2013 la situación empeoró cuando el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y otro militar fueron ejecutados por un comando mientras viajaban de Morelia a Puerto Vallarta.

El comandante de la VIII Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y otro elemento de la Marina circulaban por la autopista México-Morelia, y ahí fueron desviados a un camino de segundo orden, aproximadamente a 1.5 kilómetros al suroeste de La Noria, Michoacán.

Tras el ataque, funcionarios federales y estatales se reunieron para discutir una solución. Después de la

junta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el gobierno federal se había “tropezado” en los operativos realizados en Michoacán e indicó que revisaría las fallas.

El 4 de agosto, al salir del Hospital Central Militar, donde lo intervinieron de un problema de las glándulas tiroideas, Peña Nieto reconoció la existencia de zonas controladas por el crimen organizado en Michoacán, y anunció que el gobierno federal respaldaría a las autoridades estatales para recuperar territorios y reconstruir el tejido social.

“El propósito es acompañar al gobierno estatal, pero con gran respaldo y apoyo de la federación, para hacer frente a la complicación y complejidad que implica reconstruir el tejido social de Michoacán”, apuntó Peña, y aseguró que las fuerzas federales y estatales recuperarían los territorios donde las autoridades “prácticamente han perdido espacio. No es un tema solamente de seguridad, tiene que ver con darle atención a las demandas de la población”.

Sin embargo, Peña descartó plazos para ver resultados: “Vamos a ir viendo avances gradualmente, yo no quiero poner fechas. El tema central y el eje articulador de todo este esfuerzo será la labor que el gobierno federal despliegue para la seguridad pública de Michoacán”.

Peña Nieto tardó cinco meses en reaccionar nuevamente. En enero de 2014, previo al encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, en Toluca, funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana consideraron “extremadamente preocupante” el ambiente de violencia e ingobernabilidad

que se ha extendido en Michoacán y reiteraron el apoyo de la administración estadounidense al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Estamos hablando de comunidades que, al igual que hemos visto en otras partes del hemisferio, han estado bajo presión de los cárteles y ahora se encuentran entre dos fuegos”, consideró un alto funcionario norteamericano. “La más básica responsabilidad de un gobierno, en todos los niveles, es ofrecer protección a sus ciudadanos ante los desastres naturales o el crimen organizado”, criticó el enviado de la Casa Blanca.

“Al igual que en otras circunstancias –prosiguió–, el gobierno de México ha dado muestras de manejar esta crisis. Si requieren de nuestra asistencia técnica estamos dispuestos a respaldarlo. Pero por el momento no hemos recibido ninguna petición en este sentido.”

El 15 de enero de 2014 y ante las evidentes fallas de la estrategia militar y policiaca que por seis meses había sido aplicada y el reconocimiento de “debilidad institucional” en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto dio un viraje y dio a conocer la creación de una comisión encargada del “restablecimiento” de la seguridad, con un enfoque “integral”.

Tres días antes, el mandatario estatal Fausto Vallejo, ya de regreso, había pedido ayuda federal para tratar de disminuir la violencia. Así pues, Peña Nieto decretó el nacimiento de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Esa comisión supuestamente buscaba coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano “bajo un enfoque amplio”, que abarcara no sólo aspectos de se-

guridad, sino también políticos, sociales y económicos. Pero en los hechos se trataba de una instancia que violaba el principio de soberanía de los estados, pues se impuso a una especie de virrey en Michoacán, por encima del gobernador y del Congreso local.

Peña Nieto puso como “virrey” a su amigo Alfredo Castillo, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien fue el investigador en la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah, en 2010.

La comisión especial tenía, además de coordinar a las autoridades federales, la facultad de formular y ejecutar políticas orientadas a la prevención de delitos, reconstrucción de tejido social, fortalecimiento institucional, y vincularlas con autoridades de los tres niveles; disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio por parte de las instituciones federales de fuerza pública; solicitar el auxilio de las fuerzas armadas; y recibir a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo federal que ejerzan funciones en Michoacán.

También, solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los servidores públicos de organismos federales que operen en Michoacán, y celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales.

Al darse a conocer la integración de esta instancia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la nueva estrategia y la labor de la Comisión parten de la idea de que “la violencia no se combate con más violencia”, aunque también reconoció que la coyuntura de Michoacán obligó al despliegue de militares.

Un gran eje de la estrategia, dijo, es “atender desde sus raíces los factores sociales que originan, pero que no justifican la inseguridad, como lo son la falta de oportunidades, la falta de acciones concretas para el desarrollo y la falta de resultados de quienes tenían el deber de entregarlos”.

Al mismo tiempo que se echaba a andar el nuevo plan, los grupos de autodefensa ciudadana avanzaban sobre más de una decena de municipios que estaban bajo el yugo de Los Caballeros Templarios, en una táctica paramilitar que ocasionaba inquietud en la clase política.

Con la actuación libre de las autodefensas, protegidas por soldados y policías federales a bordo de camionetas, tanquetas y helicópteros, lo que en realidad se presenciaba era una estrategia tejida de manera secreta desde 2011 bajo la batuta del general colombiano Óscar Naranjo, quien en su país había fomentado las autodefensas colombianas con la finalidad de acabar con la insurgencia y el narcotráfico, pero que al final se convirtieron en un nuevo cártel de las drogas.

Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto

Desde el 24 de febrero de 2013, cuando aparecieron las autodefensas ciudadanas, se generaron múltiples sospechas sobre su origen y financiamiento. En su momento, el gobierno de Vallejo dijo que estaban apoyadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y las acusó de ser delinquentes. Lo mismo sostuvieron Los Caballeros Templarios en mantas y videos de *La Tuta*. El gobierno federal, fiel a su tendencia, guardó silencio.

La hipótesis que más llamaba la atención era que estaban apoyadas por el Ejército, que les daba armas, protección y dinero para mantener a los miles de integrantes que se habían sumado con el paso de los meses.

Ahora, con base en testimonios, se apuntala la teoría de que las autodefensas michoacanas fueron un proyecto ideado y financiado desde el gobierno federal, en el cual mucho tuvo que ver Óscar Naranjo Trujillo, a quien el 14 de junio de 2012, Enrique Peña Nieto, aún como candidato presidencial, presentó como su asesor en cuestiones de seguridad pública.

El general Naranjo Trujillo es un personaje polémico que guardó un bajo perfil durante los dos años en los que estuvo como asesor de Peña Nieto. Era lógico que mantuviera esa presencia discreta, pues en la década de los noventa, siendo jefe de la Policía Nacional de Colombia, fue acusado de estar detrás de los grupos paramilitares en su país y estuvo considerado el “mejor policía del mundo” luego de que desarticulara a los cárteles de Cali y Medellín. En 1993 dirigió la operación en la que fue abatido el capo Pablo Escobar a través de un grupo paramilitar conocido como Los Pepes, una sigla de la agrupación de exmilitares pagados por empresarios y el gobierno bautizado como “Perseguidos por Pablo Escobar”, que al final devino un nuevo cártel de la droga.

Paradójicamente, siendo uno de los enemigos del narcotráfico en Colombia, su hermano Juan David Naranjo fue detenido en 2006, en Alemania, y fue acusado de presuntos vínculos con los cárteles.

Según testigos, en el caso de las autodefensas de Michoacán, Naranjo es clave: En noviembre de 2012, el

general colombiano fue visto en Tepalcatepec y La Ruana, donde se reunió con grupos pequeños de personas entre los que estaba José Manuel Farías Álvarez *El Abuelo*, quien había sido señalado por las autoridades como miembro importante del Cártel del Milenio o de Los Valencia. Ahí encabezó el grupo formado especialmente para echar a Los Zetas de Michoacán.

Guillermo Valencia, expresidente municipal de Tepalcatepec, revela en entrevista que desde 2012 fue informado por vecinos de este municipio de la formación de un grupo armado que se enfrentaría a Los Caballeros Templarios. Al frente de este grupo estaba *El Abuelo* y su hermano Uriel Farías alias *El Paisa*, quien fuera presidente municipal de Tepalcatepec y uno de los presos de *El Michoacanazo*.

Al principio él pensaba que se trataría de un grupo similar a los “Mata Zetas” que *El Abuelo* había organizado cuando estaba con Los Valencia, pero señala que al poco tiempo se dio cuenta de que se trataba de otro proyecto más fuerte y amplio, financiado por el gobierno federal.

Fueron pobladores de la cabecera municipal quienes le informaron de la llegada del general Naranjo, vestido de civil, y un grupo de militares a bordo de camionetas oscuras al centro de Tepalcatepec.

Sin precisar el día, Valencia señala que la reunión se realizó en el salón Plaza, un edificio alto hecho de cemento ubicado a dos calles del palacio municipal, propiedad de *El Abuelo*.

“Fue de civil y se reunió con *El Abuelo*, llegó en unas camionetas del Ejército, eso fue lo que me dijeron. Aún no era presidente de la República Enrique Peña Nieto, le

faltaban unas semanas, pero Naranjo ya era su asesor”, recuerda Guillermo Valencia en entrevista realizada en la revista **Proceso** el 5 de agosto de 2014.

–¿En esta reunión qué acordaron? –se le pregunta.

–Quien me lo platicó dice que ahí se acordó todo el apoyo para este movimiento (de las autodefensas). Yo sabía que *El Abuelo* tenía amigos que andan en la milicia y por eso no me sorprendió el apoyo del Ejército. Pero en diciembre de 2013 otro amigo que llegó de Estados Unidos me platicó que hasta allá la gente ya sabía del apoyo del gobierno a las autodefensas y que el general Naranjo había estado en el salón Plaza con *El Abuelo*. Ahí fue donde confirmé todo, que el general colombiano estuvo en Tepalcatepec y se reunió con más gente que participó, desde el principio, en la formación de las autodefensas.

Otro testigo que habló con Valencia en su estancia forzada fuera del país por razones de seguridad, expresa que general Naranjo, igualmente vestido de civil, también estuvo en La Ruana, donde participó en una reunión con lugareños a quienes no identificó.

Los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán fueron donde el 24 de febrero de 2013 se dieron a conocer los grupos de autodefensa.

“Creo que el movimiento de las autodefensas fue planeado, me di cuenta desde noviembre de 2012, y así lo informe, en enero de 2013, a las autoridades estatales, un mes antes de que surgieran, y no hicieron absolutamente nada. Tuve conocimiento de reuniones que tenían, inclusive de los hermanos Farías con el gobierno federal. Se habló mucho de que el general Naranjo estuvo en Tepalcatepec, me lo dijeron ciudadanos del pueblo que

tenían el apoyo de este señor. No lo vi pero me lo dijeron quienes sí lo vieron”, rememora Valencia.

–¿Cómo fue que se empezaron a organizarse las autodefensas? –se le inquiera.

–Mire, Naranjo fue a Tepalcatepec. Yo voy a hablar ahora aunque tengo miedo, pero no a los criminales sino a Castillo, que ya trae gente armada haciendo operativos, es gente peligrosa.

“El asunto de las autodefensas lo planeó José Manuel Farías *El Abuelo*, inclusive se dice que nunca estuvo preso. Cuando lo detienen (5 de marzo de 2009) le sembraron un envoltorio con hachís y una pistolita 9 milímetros. Si el gobierno realmente lo quería en la cárcel le hubiera puesto armas de alto poder y un costal de cocaína, pero no fue así.

“Las versiones que hay es que en lugar de estar preso estuvo recibiendo un curso de contrainsurgencia. Él salió de la cárcel en noviembre de 2011, después de la elección local. Andaba con un bajo perfil porque decía que ya no quería ser el jefe de plaza del Cártel del Milenio. Pero en realidad comenzó a operar fino, a reclutar gente diciendo que ya no era posible seguir aguantado a Los Templarios, que cobraban muchas cuotas, violaban a las mujeres y eso lo agarraron como bandera.

“*El Abuelo* comenzó a organizar a las autodefensas y cooptó a un grupo de ocho o 10 personas del pueblo, entre ellos mi suegro, más los de su familia, que son bastantes. Ellos jalaron a esta gente porque no podían hacerlo entre puro criminal, porque no los iban a apoyar; jalaron gente buena, bien vista ante la sociedad, como mi suegro Edmundo Vargas, que el día que se dan a conocer

en la (Unión) Ganadera (el 24 de febrero de 2013), fue el único que no llegó encapuchado. Fue él quien agarró el micrófono y empezó a gritarle a los ganaderos “Vamos a rebelarnos” mientras distribuía las playeras. A mi suegro los Farías lo emborracharon para que se animara porque tenía temor. Así como a él, los hermanos Farías agarraron a otro grupito de personas como los Álvarez, los Moreno, y se lanzaron.”

Valencia dice que él informó en 2013 al entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, de lo que estaba ocurriendo en Tepalcatepec. Reconoce que entonces veía al movimiento como una nueva intentona criminal de los hermanos Farías, porque antes ya habían formado un grupo para echar a Los Zetas de Michoacán, aliándose con el Cártel del Milenio, que al final resultaron lo mismo, porque se transformaron en un nuevo grupo criminal y siguieron con las extorsiones, cuotas, asesinatos y el control del crimen, ahora encabezados por los hermanos Farías.

“Yo pensé que sería algo similar a eso porque ya había un antecedente, sin embargo me di cuenta de que no, que fue algo en lo que mandaron al pueblo por delante, y obviamente, como la gente ya estaba cansada de que extorsionaran a ganaderos, limoneros, a los taqueros, a todos, pues sólo bastó que les dieran armas y les dijeran ‘vámonos a pelear’, para que le entraran a la guerra”, recapitula.

El exalcalde de Tepalcatepec dice que, en aquellos momentos, Los Caballeros Templarios ya investigaban el apoyo del gobierno federal a través del general Naranjo al movimiento de autodefensas. En enero de 2013, re-

construye, en una reunión con Los Templarios a la que fue obligado a ir (en el pueblo de San Isidro, municipio de Tepalcatepec), le preguntaron si sabía algo del movimiento.

“Yo les dije que no sabía nada, aunque yo ya le había informado al gobierno del estado”. Para entonces señala que *El Paisa*, Uriel Farías, lo invitó a ser el vocero del movimiento antes de que eligieran al doctor José Manuel Mireles, pero que no aceptó bajo el argumento de que no podía ser juez y parte, como edil y vocero de las autodefensas, en tanto agrupación armada nacida fuera de la ley.

“En una ocasión que estaba con Juan Carlos Becerra, que era el director de Gobernación, Martín Barragán, Uriel Farias, *El Abuelo*, Secundino Vargas, Jaime Álvarez, Porfirio Álvarez, entre otros, analizábamos la posibilidad de que el movimiento se incorporara a la policía municipal, eso les propuse para que no estuvieran al margen de la ley sino dentro de las instituciones, pero no aceptaron y a la larga entendí que no quisieron incorporarse porque traían un plan de expansión, que su fin no era Tepalcatepec, sino todo el estado.”

A pesar de esto, indica que a los dos meses de que se dieron a conocer públicamente, las autodefensas le pidieron ayuda con despensas, comida, gasolina, porque muchos de ellos eran gente del pueblo y había comunidades donde las mujeres se habían quedado solas con sus niños porque los hombres andaban en la pelea.

“Bueno, pues luego empezaron a decir que yo estaba apoyando con vales de gasolina y con comida, para el colmo, mi suegro andaban en las autodefensas desde

el principio. Entonces comenzaron a correr el rumor de que yo estaba financiando a las autodefensas”, recuerda Valencia.

También se le acusó de apoyar al movimiento porque el 24 de febrero, el Día de la Bandera, que es cuando se dan a conocer las autodefensas, como presidente municipal invitó al comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, a que fuera al acto protocolario.

El comisario llegó en medio de un despliegue de Policía Federal impresionante, dio su discurso y se fue. Pero al poco rato, en las instalaciones de la Unión Ganadera, que se ubica a la entrada de la cabecera municipal, se dieron a conocer las autodefensas.

“Al acabar el evento yo también me fui a otra comunidad que se llama Carácuaro, a otro desfile del Día de la Bandera, y de ahí me fui a Coalcomán, a acompañar al diputado Eduardo Esquivel a que diera su primer informe legislativo. Desde ahí me reportaron lo que sucedía en la Unión Ganadera, que cada año hace un acto para repartir implementos agrícolas y otras cosas.

“Me dijeron que llegaron como mil ganaderos que eran los más afectados por las cuotas de Los Templarios. Ahí llegaron estas 10 personas que habían cooptado los hermanos Farías con las playeras de autodefensas y a arengar al pueblo a levantarse.

“Yo le pedí a la síndico Carmen Sánchez Vega que fuera y también a mi madre, que me ayudaba y era síndico. Mi madre es una mujer de edad, camina con bastón y se sintió mal porque estaba de pie y se salió a tomar aire. Entonces mi madre vio cómo llegó una camioneta del Ejército cargada de ametralladoras, de rifles. Ella

estaba sentada cuando vio cómo empezaron a bajar las armas los familiares de *El Abuelo* para repartirlas como si fueran playeras. Entonces todo estuvo muy bien orquestado, *El Abuelo* siempre estuvo bien relacionado en el Ejército.”

Valencia indica que dos meses después de este acto, Los Caballeros Templarios nuevamente lo llevaron a una reunión bajo amenaza de muerte, pues lo acusaban de haber ayudado a organizar el movimiento armado.

“Decían que yo estaba financiando. A la persona con la que me llevaron le dije, cómo voy a financiar un movimiento encabezado por mis adversarios políticos *El Abuelo* y *El Paisa*. Una cosa era que les ayude, porque había gente del pueblo cansada de los abusos, y otra que anduviera financiando. Lo de la presencia del comisario de la PFP, Teófilo Gutiérrez, fue coincidencia.”

Luego de esta reunión abandonó Tepalcatepec. La presidencia municipal fue tapizada con carteles de colores acusándolo de ser templario y ladrón. El municipio dice que esto fue obra de los hermanos Farías, quienes se molestaron porque no aceptó ser el vocero de las autodefensas.

Guillermo Valencia afirma que, en el arranque el movimiento de las autodefensas no tuvieron el impacto que esperaban, sino hasta que José Manuel Mireles agarró la batuta, encabezó la lucha y empezó a dar entrevistas.

Pero el protagonismo de Mireles les provocó problemas. Se molestaron con él cuando comenzó a tomar un liderazgo natural, mediático, y todos lo identificaban con el movimiento.

“Eso ya no les gustó, tuvieron serios problemas, quisieron matarlo, eso todos lo saben en Tepalcatepec. A veces me arrepiento de no haber aceptado ser vocero, nunca creí realmente que el gobierno los estuviera apoyando, se me hacía irresponsable, increíble. Pensaba: ‘si le pagamos al gobierno con los impuestos para que hagan esa chamba, entonces por qué mandar al pueblo a hacer esa chamba’.”

Después de analizar esta información presume que Alfredo Castillo, desde que estaba en la PGR como subprocurador de Control de Procesos, sabía del proyecto de autodefensas y por eso lo enviaron como comisionado.

Lanza su hipótesis: “Yo creo que tuvo que ver con todo este movimiento porque esto no se hace de la noche a la mañana, se necesita financiamiento, protección del Estado; si no fuera así habría grupos de autodefensas en otros lados, pero no los hay porque no está la mano negra que sí hubo en Michoacán.

“Yo me pongo pensar si Alfredo Castillo ha estado años en temas de seguridad pública y todo esto lo planearon con el general Naranjo, pero en un determinado momento se dejó crecer y se descontroló, entonces alguien le dijo al presidente Peña Nieto que mandara a Alfredo Castillo porque era bueno para esto. Entonces, cuando llega, pues ya conocía a las autodefensas y resolvió el problema. Pero todo fue un gran circo.”

La presencia del general Naranjo no pasó inadvertida para Los Caballeros Templarios. El 8 de diciembre de 2013, en ocho municipios, incluida Morelia, aparecieron mantas y volantes de este grupo acusando al general colombiano de estar vinculado con los grupos de auto-

defensa de la Tierra Caliente, a expensas del gobierno federal.

En su mensaje Los Templarios decían lo siguiente:

Al pueblo en general, a la ciudadanía del estado y del país entero. Es nuestro deber como integrantes de un grupo al margen de la ley poner sobre aviso a las autoridades del gobierno federal, estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Interamericana e Internacional, así como a diputados federales, locales y al Congreso de la Unión (senadores, a los secretarios de la Defensa Nacional, al procurador de la República, al comisionado de la Policía Federal y agrupaciones). El caos nacional que a lo largo de 12 años se ocasionó en los mandatos de los expresidentes Fox y Calderón, quienes implementaron un plan contra la delincuencia, que únicamente trajo como consecuencia: MUERTE, TERROR Y DESOLACIÓN, en cuanto a ello se ahuyentó la inversión y el turismo en el territorio nacional.

Esos gobiernos, al ordenar la captura de grandes capos, inclusive la muerte de nuestro máximo líder, que ni con eso tambaleó ni melló a nuestra estructura, si no que al contrario nos fortaleció, ya que hemos demostrado que somos una organización y un grupo social.

Por lo cual esta administración decidió tomar errónea y equivocadamente como 'BUENA' la propuesta de un extranjero y controvertido oscuro 'OSCAR NARANJO', que junto con 'GALINDO' de la PFP, y el general del ejército, 'ERNESTO BERNAL REYES', el coronel de Tacámbaro, 'OSWALDO BEJAR MENDEZ', que fue implementar y conformar los grupos de autodefensa y cáncer comunitario, quienes al demostrar y evidenciar

ARMAS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS como RP-67 y lanza granadas, pierden y carecen de toda legalidad y se hacen que el país caiga en un estado de indefensión y se violen todas las garantías de los ciudadanos, establecidas en nuestra CARTA MAGNA (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y se violente el estado de derecho que es una obligación única y exclusiva de hacerlo valer los órganos de Gobierno Federal, Policías Estatales y Municipales.

La intromisión de GRUPOS ANTAGÓNICOS A LOS INTERESES DE LOS MICHOACANOS, como los de JALISCO NUEVA GENERACION, quienes obligan a la ciudadanía a delinquir bajo la protección del nuevo régimen, perjudicando a la clase más pobre y desprotegida de nuestro estado, que son los ANCIANOS, MUJERES Y NIÑOS, y los utilizan como CARNE DE CAÑÓN ¡Y NO ES JUSTO SEÑORES! ¿Quién responderá a los DESPOJOS, ASESINATOS, EXPROPIACIONES, ROBOS, VIOLACIONES, MASACRES Y TORTURAS en este ‘NUEVO SANTUARIO COMUNITARIO’? Nosotros asumimos la parte que nos corresponde y estamos dispuestos a dialogar y al mismo tiempo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para comentarles que LA LUMBRE NO SE APA-GA CON LUMBRE, será un Honor Nuestro el mandar y combatir con las armas a estos GRUPOS DE LACRAS y regresar la PAZ Y TRANQUILIDAD A NUESTRO ESTADO, atentamente LOS CABALLEROS TEMPLARIOS GUARDIA MICHOACANA.



Esta narcomanta, a diferencia de otras, contenía un mensaje más político: la identificación del general colombiano Óscar Naranjo como autor intelectual de las policías comunitarias o autodefensas ciudadanas.

El texto también revelaba que Los Caballeros Templarios tenían desde entonces información privilegiada que ayudaba a entender el complejo rompecabezas del conflicto michoacano, en el cual las autodefensas aparecían avanzando y “liberando” las poblaciones, pero con la protección de la Policía Federal y las tropas del Ejército en Michoacán, al mando del jefe de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, especializado en movimientos armados.

Se notaba el apoyo de los soldados y policías a las autodefensas, que durante más de un año, esto es, desde febrero de 2013, cuando aparecieron, hasta mayo de 2014, cuando se transformaron en “Fuerza Rural”, actuaron de manera libre, con armas de alto poder, ha-

ciendo el trabajo difícil y peligroso de limpiar las zonas que Los Templarios tenían bajo su dominio y que, según información de inteligencia militar, abarcaba 70% del estado.

Sin alcanzar una formación militar, las autodefensas actuaban de una manera organizada cada vez que entraban en algún territorio enemigo: mandaban a un grupo especial a la vanguardia, que era protegido por soldados o policías federales en una especie de formación diamante. Los federales les indicaban cómo entrar y avanzar en formación de ataque. De tal manera que al ingresar a la población, eran las autodefensas las que ubicaban los lugares y a los integrantes de Los Templarios que vivían u operaban en cada sitio, mientras que las fuerzas federales sitiaban el lugar protegiendo a los comunitarios.

El grupo de vanguardia más identificado era el llamado “H3”, que algunos decían que significaba “Hermandad 3”. Los integrantes, en su mayoría, habían pertenecido a la banda de Los Viagras, un grupo de sicarios al servicio de Los Caballeros Templarios.

Las autodefensas llegaron a tener una estructura organizativa encabezada por el Consejo General –integrado por 37 comandantes que representaban cada zona ganada. Dentro de ese alto mando había algunos con mayor peso a cargo de zonas completas, mientras que otros tenían funciones más específicas, como Mireles, quien se convirtió en el vocero de todo el movimiento, lo que le trajo problemas con José Manuel Farías *El Abuelo*.

Los líderes de las autodefensas tenían en sus manos armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército, con las cuales hacían frente a Los Templarios en batallas que

podían durar horas. También poseían grandes cantidades de dinero en efectivo para pagarles a algunos de sus integrantes 3 mil pesos quincenales, que eran entregados después de cada enfrentamiento.

Según los dirigentes del movimiento civil, las armas las obtenían de los templarios que las tiraban al huir, mientras que el dinero para mantenerse provenía de aportaciones de ganaderos, empresarios y comerciantes que les daban una parte de lo que antes entregaban como cuotas a Los Templarios.

A los pocos meses de su nacimiento, las autodefensas llegaron a tener 15 mil hombres luchando en diferentes lugares. Cada uno de ellos portaba armas de gran poder como rifles de asalto R-15 y AK-47, con suficiente parque para enfrentar a Los Templarios en el campo o en las zonas urbanas.

En un año las autodefensas consiguieron lo que en seis años Felipe Calderón no pudo: liberar y recuperar el territorio que el crimen organizado dominó por 12 años; romper los vínculos que Los Caballeros Templarios tenían con el gobierno de Fausto Vallejo; desarticular la estructura de liderazgos que imponía la ley de impuestos, cobro de cuotas y extorsiones a todos los empresarios, comerciantes, profesionistas, productores agrícolas y consorcios mineros de China, y poner fin al cogobierno que existía en la mayoría de los 113 municipios.

El 8 de mayo de 2013, al participar en la mesa de debate *La función de las policías como pieza clave en el nuevo sistema*, en el “Quinto foro sobre seguridad y justicia. Por una adecuada implementación de la reforma penal” que

se realizó en la UNAM, Óscar Naranjo apuntó: “Cuando a una autodefensa se le llama ‘policía’ se produce una distorsión que, realmente, lejos de invocar el deber ser, destruye el deber ser. Lo primero que habría que hacer para no incurrir en fallas al debido proceso es que el Estado se asegure de que es el único que aplica justicia y ejerce el monopolio de la fuerza”.

Después defendió la labor militar y la decisión de Peña Nieto de que las fuerzas armadas siguieran combatiendo el crimen organizado, pero coordinadas con la policía. “En México los delincuentes, los criminales organizados, salieron de su zona de confort. Hoy esa delincuencia siente el peso institucional y está recibiendo el impacto de una ciudadanía que dice alto a la violencia”, declaró Naranjo.

Coincidentemente, a principios de 2014, cuando las autodefensas mostraban su músculo armado liberando 37 municipios del yugo templario y se convertían en un ícono libertario en todo el país y en el extranjero, Naranjo anunció su salida de México y su renuncia como asesor del gobierno federal.

El 26 de enero de 2014, el gobierno informó en un escueto comunicado que el colombiano renunciaba y regresaba a su país, para incorporarse al equipo que buscaba la reelección presidencial de Juan Manuel Santos.

“Las autoridades mexicanas agradecen y reconocen ampliamente la labor que desempeñó el general Naranjo Trujillo, así como su contribución en materia del diseño de estrategias de seguridad para nuestro país”, redactó la administración federal a través de la Secretaría de Gobernación, que le deseó “el mayor de

los éxitos en las nuevas tareas que desempeñará para su nación”.

Para esas mismas fechas, Peña Nieto echó a andar la segunda fase de su estrategia con la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, encabezada ya por Alfredo Castillo, quien se encargaría de domesticar las autodefensas y de quitar de en medio a Mireles, alguien que se había convertido en un personaje incómodo para los planes del gobierno.

Mireles, el alzado

En su arranque, las autodefensas no tenían un rostro, una figura o un discurso que los identificara. Se les conocía como policías comunitarios y se les confundía con los de Cherán, que desde 2011 declararon autónomo a su municipio y formalizaron la creación de una policía comunitaria indígena.

A las autodefensas se les veía como hombres muy bien pertrechados que iban y venían a bordo de camionetas a través de Tierra Caliente, buscando a los templarios que se escondían en las montañas y cerros de la Sierra Sur.

Conforme pasó el tiempo la figura de uno de ellos empezó a resaltar por su estatura, el sombrero negro, el bigote ancho, tipo revolucionario y, sobre todo, por su discurso de contenido político que traspasaba la denuncia de los abusos de Los Caballeros Templarios.

Se trataba de José Manuel Mireles Valverde, de 55 años de edad, médico militar cirujano a quien en Tepal-

catepec conocían como *El Loco Mireles*, por su franqueza, y también como *El Doctor*, por su trabajo como médico en el pueblo.

Su familia era de los fundadores de la localidad y él, como muchos, emigró a Estados Unidos en 1992, donde fue representante en la Casa Michoacana, voluntario en la Cruz Roja y defensor de migrantes ante los abusos policiacos en un buffet de abogados.

Antes de ir a California, Mireles enfrentó un proceso penal (II-223/988) que lo tuvo en la cárcel de Uruapan y Morelia entre 1988 y 1992 bajo la acusación de siembra, cultivo y venta de marihuana en Tepalcatepec. Aunque la sentencia fue de siete años y tres meses, sólo se quedó en prisión tres años y ocho meses. Mireles siempre ha asegurado que la droga le fue “sembrada”.

Purgada su condena, a su regreso de Estados Unidos realizó algunas actividades en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. En 2006 fue inscrito en la lista plurinominal del PRD, en el lugar 25, para llegar al Senado, y en noviembre de 2007 se lanzó como candidato a diputado de mayoría relativa por el Distrito XXI, con cabecera en Coalcomán, por el Partido Alternativa Socialdemócrata en fórmula con su esposa, Ana Delia Valencia.

Al final de su incursión en la política, Mireles ingresó al gobierno estatal de Godoy Rangel, donde trabajó como asesor de asuntos internacionales de la Secretaría de Salud hasta 2011.

Pero si en la vida política de los partidos no logró trascender, entre las autodefensas ciudadanas lo haría con creces, dos años después.

El 24 de julio de 2013 se difundió en las redes sociales una larga entrevista con Mireles que le hizo el medio independiente *Subversiones*, la cual se volvió viral.

El testimonio era durísimo, hablaba de todos los abusos de Los Caballeros Templarios, las ejecuciones, extorsiones, cuotas a todos los limoneros, trabajadores agrícolas, la sujeción de los presidentes municipales y del gobernador Fausto Vallejo, de la incapacidad del gobierno federal y, principalmente, del abuso sexual a adolescentes y esposas de los habitantes de este municipio calentense.

Para entonces Mireles ya había participado durante varios meses en la recuperación de los municipios que Los Templarios tenían bajo su yugo, y en cada uno de ellos desplegaba un discurso político que ninguno de sus compañeros tenía. Citando los artículos de la Constitución recordaba que el pueblo tiene el derecho de defender su vida y la de los suyos con las armas, que no era ilegal hacerlo, y los convocaba a defenderse.

El 13 de agosto, al llegar a Tancítaro, cerca de 3 mil personas lo esperaban para organizar sus propias autodefensas. Ahí Mireles les habló usando las palabras que la gente quería escuchar: “No hay que tener miedo de esos perros, nosotros en Tepalcatepec teníamos mucho miedo, pero decidimos enfrentarlos, decidimos cómo morir porque ya no podíamos aguantar que se llevaran a nuestras mujeres. Otros pueblos como Cherán se han organizado para enfrentar a esos malditos, por qué nosotros no hacemos lo mismo”.

Tres meses después, en la plaza principal de ese mismo pueblo, Mireles fue recibido por una multitud

entre aplausos, vivas y abrazos. Le daban las gracias por haberlos ayudado a liberarse de Los Templarios y le pedían que les hablara. Una vez más lo hizo a capela: “No necesito un micrófono para que me escuchen, mi voz ya se escucha en todo México y en el mundo, en la ONU ya saben lo que digo, ya no hay que dejar que esos perros nos intimiden, el pueblo tiene el derecho a defenderse con las armas. Sólo el pueblo puede defender al pueblo”.

En noviembre de 2013 Mireles apareció en la portada de la revista **Proceso** con el título de “El Alzado”. Se hablaba de su liderazgo y se decía que representaba al “sujeto de cambio” dentro de la corriente nacional de inconformidad y protesta ciudadana contra el crimen organizado y la incapacidad del gobierno federal para terminar con el narcotráfico.

Para entonces y cómo él bien sabía, el doctor de Tepalcatepec ya era conocido en México y el extranjero; canales de televisión de varios países le dedicaron notas especiales contando la historia de las autodefensas de Michoacán, calificándolas como la expresión más clara del hartazgo de la sociedad mexicana.

Así como en el movimiento del 68 el sujeto de cambio lo encarnó la figura del estudiante y en 1994, con la insurgencia zapatista, fue el indígena, en la corriente de protesta social de los últimos años, las autodefensas se erigieron con este rol, pero sobre todo el rancharo que, como grupo social, no se había manifestado.

El rancharo en general, pero en particular el michoacano, tiene un perfil singular: aunque vive del campo no es un campesino pobre sino un productor de frutas

y hortalizas que comercializa en el mercado nacional o internacional; tiene posibilidades económicas para vivir cómodamente e incluso disfruta de grandes terrenos, casa y vehículos; tiene la capacidad económica para dar estudios a sus hijos y, sobre todo, tiene como máximas prioridades de protección su familia y su rancho.

Estos parámetros culturales son importantes para entender a las autodefensas, cuyos integrantes más importantes eran rancheros que decidieron rebelarse para proteger su propiedad y su familia, principalmente a sus hijas y esposas, que era violadas por Los Caballeros Templarios cuando no se les pagaban las cuotas o como simple muestra de poder.

El investigador del Colegio de Michoacán Salvador Maldonado dice que al sur del estado se desarrollaron complejas redes espaciales, económicas, políticas y familiares que configuraron esta región del narcotráfico, y que estas redes se distinguen por contar con una cultura regional ranchera que le da cierta identidad al narcotráfico y, en nuestro caso, a las autodefensas.

“Esa cultura se caracteriza por los valores del individualismo frente al Estado, de la familia contra la sociedad, y por un exacerbado catolicismo popular. El rancho se ubica formalmente en el plano de la igualdad individual, pero socialmente desigual frente a sus semejantes y superior ante los demás sectores rurales: indios y ejidatarios. Se representa al margen del Estado debido a que escasamente ha sido objeto de apoyo, a la parcialidad de la ley y a las frecuentes y agresivas intervenciones policiacas o militares.

“Los códigos rancheros han tejido una red de silen-

cio y solidaridad entre quienes cultivan y trafican drogas y sus nexos espaciales-familiares permiten evadir la ley entre ciudades medias y territorios serranos. Una vez que el narcotráfico forma parte de la economía y la cultura regional, la población lo adopta como un estilo de vida y de movilidad social.” (Maldonado Aranda, 2012a)

Maldonado da otros datos que ayudan a entender el perfil de los rancheros como personajes principales del conflicto en Tierra Caliente, y con esto también ayuda a distinguir a Mireles como ranchero y autodefensa.

Señala que la independencia personal entre los rancheros es muy importante tanto en lo económico como en el prestigio, y que una familia ranchera sin estabilidad financiera se convierte en objeto de críticas hasta la estigmatización. De ahí que exista una relación simétrica entre dinero, prestigio y respeto, por lo que toda persona que no sea respetada puede ser objeto de abuso en propiedad, ganado y familia.

“Estas prácticas derivan, la mayoría de las veces, en actos de violencia física en defensa del honor. Si una persona es deshonrada, se puede atentar, ultrajar o robar sin problema. Las mujeres son un elemento central en las *vendettas* porque ‘alientan’ a su familia a defender el apellido y, con ello, a su familia y su integridad de mujeres. Con todo, para los rancheros, el Estado es algo extraño e indiferente en torno a la justicia.”

Mireles fue el primer integrante de las autodefensas que habló sin reparo del abuso sexual de las hijas y esposas de los habitantes de Tierra Caliente. En la larga entrevista realizada por el portal *Subversiones* el 24 de

julio de 2013, el doctor de Tepalcatepec dijo que este abuso fue una de las razones por las que la gente decidió rebelarse en contra de Los Caballeros Templarios y tomar las armas. Denunció que había decenas de menores de edad embarazadas por los criminales y provocó una reacción nacional más favorable para las autodefensas y para el propio Mireles. Esto, más que las denuncias de extorsiones y asesinatos, fue lo que llamó la atención de la opinión pública e irritó a amplios sectores sociales.

A partir de que Mireles tomó la vocería de las autodefensas de Tepalcatepec, a los pocos meses su figura creció tanto que fue elegido como coordinador general de todas las autodefensas de Michoacán y se levantó como el principal crítico del gobierno federal y del gobernador Fausto Vallejo.

Él fue el primero que denunció públicamente la vinculación de Jesús Reyna, secretario de Gobierno y luego gobernador interino, con Los Caballeros Templarios; también fue quien reveló que la campaña de Vallejo recibió millones de pesos de ese grupo criminal y que el hijo de éste, Rodrigo Vallejo, tenía relaciones con distintos templarios.

Posteriormente él se opuso a los planes del gobierno federal de domesticación de las autodefensas y denunció las negociaciones del comisionado Alfredo Castillo con los grupos criminales infiltrados en el movimiento. Calificó de una “farsa” y un “teatro” la estrategia de Enrique Peña Nieto para limpiar a Michoacán del crimen organizado.

Así, resultó incómodo para el plan del gobierno de terminar con el proyecto de las autodefensas como grupo

de choque –que funcionó para sacar a los Templarios del sur de Michoacán y acabar con el cogobierno que habían establecido con Vallejo.

Después de estas críticas y denuncias, así como del rechazo a integrarse a la Fuerza Rural, Mireles fue detenido el 27 de junio en el poblado de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, acusado de traer droga y armas de uso exclusivo del Ejército.

El líder de las autodefensas en 34 municipios fue tratado peor que *El Chapo* Guzmán, le taparon los ojos y, esposado, los soldados lo llevaron en helicóptero a las instalaciones militares y luego ante el Ministerio Público, sin dejarle hacer una llamada telefónica sino hasta 14 horas después de su detención. Luego lo llevaron al penal de Hermosillo, Sonora, a miles de kilómetros de Michoacán. La droga y las armas se las sembraron en una de las camionetas que usaban sus escoltas.

Antes de su aprehensión tenía planeado seguir con el plan inicial de crear autodefensas en la costa michoacana, tomar Lázaro Cárdenas, formar el Frente Nacional de Autodefensas e iniciar una cruzada nacional contra el crimen organizado.

Su discurso político liberal y constitucionalista tenía un impacto directo en la gente. Este protagonismo le trajo enemigos dentro y fuera de las autodefensas. “Yo sé que me quieren matar, es gente peligrosa en el movimiento a la que le estorbo”, confesó semanas antes de ser detenido, cuando estaba reanudando la creación de autodefensas en la costa.

Desde el 30 de junio el médico cirujano se encuentra encerrado en la cárcel de Hermosillo, a donde fue confi-

nado por el gobierno de Peña Nieto para impedir que se formara un frente de oposición que exigiera su libertad en su tierra natal Tepalcatepec.

Lo que pocos saben es que Mireles es un masón de la logia Benito Juárez número 71 de Michoacán, que se reactivó hace apenas unos años en Tierra Caliente y que se interesaba en fortalecer los valores de organización ciudadana y la difusión de la historia libertaria del pueblo michoacano.

El pasado 4 de junio, Mireles escribió una carta dirigida a las logias masónicas del estado y de todo el país, en la que pedía dejar la comodidad de sus posiciones y actuar en consecuencia, pero sin usar las armas:

Queridos Hermanos y Hermanas de los diferentes ritos masónicos y de los diferentes Grandes Orientes de Michoacán y de México.

Nos hacen comunes principios y valores profundos, esas convicciones e ideales masónicos que acercan a la humanidad a su expresión más sagrada. Recibimos Luz y a la Luz nos debemos; nacimos en una logia venida a laboratorio de ideas, donde se acrisolan proyectos, donde se entretrejen brazos, donde se temple el carácter.

Tú como yo, por igual nos ceñimos a la justicia, a la igualdad, a la democracia y a la libertad responsable, como en lo individual luchamos contra los vicios y las pasiones que golpean nuestra naturaleza humana.

Somos herederos de la pléyade de masones que han forjado una mejor patria en los diferentes rincones del mundo, donde las logias han parido un nuevo hermano.

Como depositarios de las grandezas que exaltan el espíritu humano, cuando la patria y la sociedad lo demanden, estamos obligados tácitamente a actuar más allá de nuestras posibilidades. No es una opción. Más bien un obligado acto de congruencia de quien se diga masón y sea reconocido como tal por sus hermanos.

La masonería en estos momentos debe trascender del mal interpretado simbolismo hacia la acción, de la especulación hacia la operatividad, del ensueño histórico masónico hacia la transformación de nuestra cruda realidad.

Lo que vive Michoacán y México no es para menos. Precisa entonces recapitular haciendo un alto para, en un acto de humildad, ver de dónde vienen nuestras huellas como masones; sólo profundizando en nuestro origen podremos llevar a buenaventura nuestra jornada.

Como acto de dignidad tenemos que trascendernos. Imposible seguir con esta estúpida inercia que arroja más pobres, que derrama más sangre y que siembra de pesadillas paridas con sangre, muerte e injusticias nuestro suelo. Definitivamente no podemos continuar así.

Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir el sueño del hombre libre. En mi sueño los hijos de México viven, no sobreviven; sueñan, no despiertan con angustias; siembran, no se tienen que armar por el deajo de quienes debían cuidar la paz de los justos.

Por eso quiero llamarlos a que sean consecuentes al momento histórico que vivimos. Que si en sus circunstancias Hidalgo, Morelos, Juárez, Ocampo, Madero o Cárdenas trastocaron el ficticio orden establecido para ofertarnos mejor patria, nos toca ahora a estas genera-

ciones de masones hacer lo propio para rescatarnos del abismo en que han sumergido a este país.

Mi llamado es a que dejes esa masonería intrascendente de cuatro paredes. Mi exhortación es a que hagas algo más allá de tu familia y de tu entorno inmediato; mi llamado es a que te organices y luches dentro de la ley por lo que crees que es justo para tus hijos y las generaciones que vienen.

Yo te invito a que luchemos juntos por la justicia y la paz digna, a que demos lo mejor que como masones tenemos para sacar adelante nuestro estado y, con ello, nuestras familias. Yo te pido que te armes pero de valor y que si empuñas armas éstas sean la plomada, el nivel, el cincel, el marro, la escuadra y el compás para que bajo el cobijo de la congruencia masónica caminemos juntos. Nuestra misión ahora es desbastar para dar forma a la piedra cúbica que pueda servir de base para el levantamiento de un mejor país.

Pero si decides que ésta no es tu lucha, sólo te pido que seas portador de Luz propia surgida bajo los principios y valores emanados de la escuadra y el compás. Si lo haces así, ten por seguro que por igual nos encontraremos en la refriega por construir futuro, porque la fuente de Luz masónica es sólo una.

Querido hermano: reforcemos nuestra cadena, sé un verdadero masón y practica tus juramentos, en pocas palabras, asúmete hombre. No te pido otra cosa. Es cuanto...

En las últimas entrevistas Mireles dejaba ver en su dedo anular un anillo con los símbolos de la masonería para

mandar un mensaje discreto a los miembros de otras logias en Michoacán y otros lugares del país. Durante una conferencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue cuestionado sobre su masonería, a la cual se refirió destacando el papel que ésta ha tenido en las luchas históricas del mundo y de México, así como en la elaboración de las Constituciones.

Dijo que toda la Carta Magna mexicana había sido elaborada por los masones, pero no tiene nada que ver con la forma en que es aplicada por las autoridades. Aseguró que muchos de los movimientos independentistas y revolucionarios en el mundo y en México han sido encabezados por masones, como Benito Juárez, quien inspiró a Nelson Mandela para la liberación de Sudáfrica.

Mireles reconoció su pertenencia a la masonería: “Lo que les puedo decir es que las armas que yo uso y que nadie me las puede quitar en este mundo, ningún gobierno me las puede quitar, son las que me heredó la masonería, la verdad, la razón y la justicia, que sólo ahí se aprenden”.

Ante los estudiantes hizo una larga crítica al Ejército, a la Policía Federal y al gobierno del estado, a los cuales acusó de estar corrompidos por el crimen, que les da millones de pesos a cambio de colaboración o silencio.

“Estamos viendo la impunidad y la corrupción de los más altos niveles de gobierno metidos con ellos; ya tenemos al gobernador de Michoacán (Jesús Reyna) metido en el bote pero faltan más; cuando empezamos la guerra creíamos que sólo iba a ser contra los criminales y contra el gobierno del estado de Michoacán, que ya

sabíamos que estaba asociado con ellos, pero ahora que me salgo tantito del estado me doy cuenta de que una parte del gobierno federal también está contaminada”, sostuvo.

Recordó una conversación que tuvo con un jefe templario: “Yo no lo quería creer y les voy a decir por qué no: había un jefe de plaza ahí en Tepalcatepec que teníamos que atenderle a todos los heridos y balaceados, un día le dije: ‘Oiga, ¿cómo es posible que viene tanto militar a Tepalcatepec, tanto federal, y a ustedes nunca los hayan?’ Me dijo: ‘Lo que usted no sabe es que el mismo que les ordena a los militares y federales de Morelia que vengan a buscarnos es el mismo que me avisa a mí que van a venir a buscarme’. Le dije: ‘Oye, ¿entonces está hasta la Defensa Nacional contaminada?’ ‘No, jefe – dijo –, más para arribita’, y ya no dije nada”.

Desde que se formaron las autodefensas el panorama en algunas partes de Michoacán, como Tepalcatepec, cambió, sostuvo Mireles: en su pueblo ya no había robos, secuestros y ni una violación, a pesar de que no tienen policías municipales, federales ni militares.

“Somos simples civiles cuidando nuestra familia, cuidando nuestro pueblo, y nos dio mucho trabajo hacerlo, pero cuando nos dimos cuenta lo fácil que era ya no nos detuvimos y aquí estamos”, manifestó.

En su último discurso público –el de la universidad capitalina–, que dio ante varios cientos de estudiantes, el carismático dirigente habló de un proyecto que fue el que quizá prendió las luces de alerta en los aparatos de inteligencia gubernamentales: la intención de crear un nuevo estado que integraría las zonas purépechas, Tierra

Caliente y Costa, un estado separado de Michoacán pero que formaría parte de la federación, donde gobernarán las autodefensas.

Un nuevo Estado y el Frente Nacional de Autodefensas

A mediados de 2013, en entrevista con este autor, Mireles reveló uno de los planes que tenía con las autodefensas una vez que consiguieran recuperar los municipios del sur de Michoacán infestados de templarios.

En su momento se escuchaba como algo descabellado pero, con el paso del tiempo y en la medida en que el movimiento de las autodefensas avanzaba y se extendía por esta zona del estado, la idea del médico comenzó a tomar una forma peligrosa para el gobierno y Estado mexicano.

Se trataba de crear una nueva entidad federativa en el sur de Michoacán, que abarcaría 20 municipios de Tierra Caliente, Costa y una parte de la región Purépecha. Su extensión sería la mitad de todo el estado. Tendría ventajas por su situación geográfica, más las económicas propias de la producción agrícola (limón, aguacate y frutas). Además, existía la idea de construir un puerto de gran calado como el de Lázaro Cárdenas, que haría más atractiva esta nueva entidad.

Después de esa entrevista, Mireles ya no sacó a colación el tema sino hasta una conferencia realizada el 29 de mayo de 2014 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

“Miren, cuando íbamos los ocho primeros munici-

pios libres yo estaba bien preocupado porque el gobierno del estado seguía diciendo que éramos criminales. Ya llevábamos ocho municipios, pero yo quería liberar Aquila. ¿Por qué Aquila? Miren, toda la costa michoacana tiene 260 kilómetros, pues resulta que el municipio de Aquila nada más tiene 200. Por eso yo dije, vamos a liberar Aquila y hacemos un estado soberano e independiente.”

El insurgente dijo que habló al Senado sobre esta idea y le dijeron que sí se podía llevar a cabo, que sólo era necesario reunir 120 mil firmas de esos municipios y podían declararse estado soberano e independiente.

“El municipio de Aquila está más grande que Colima y tiene una riqueza enorme, hay minas de oro, de plata, tiene maderas finas, ganadería, agricultura y una gente original náhuatl, pura, que no se mezcla. Pensé: si en el Senado me dijeron ‘júntame las 120 mil firmas’ y el proyecto dura cinco años, dije ‘Mmm, ¡cabrón! Si en un mes llevo ocho municipios, en seis meses agarro todo Michoacán y ya no ocupo hacer otro estado, nomás me independizo y ya.”

En tanto, el objetivo del Frente Nacional de Autodefensas era restablecer el Estado de derecho en todo el país “con ayuda del gobierno o sin ayuda del gobierno”.

Explicó ante los estudiantes: “¿Qué es restablecer el Estado de derecho? Es tener una seguridad pública eficiente y una justa impartición de justicia. Eso es constitucional. No queremos que nos lo regale nadie”.

Y cuestionó: “¿Por qué digo que con el gobierno federal o sin el gobierno federal? Si el gobierno federal se quiere unir al Frente Nacional de Autodefensas para

buscar esas dos cosas nada más, es bienvenido. Pero si no quiere ayudarnos, ¡chingao!, es su obligación constitucional hacerlo, entonces que no estorbe, lo vamos a hacer los ciudadanos mexicanos. Y no es una guerra declarada contra el Estado, que quede claro, ninguno de nosotros trae armas, ninguno de nosotros va a traer armas, aunque ya somos 16 estados de la República que tenemos autodefensas armadas”.

El doctor informó que ya había recibido invitaciones de Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y otras entidades para que los visitara y les ayudara a formar sus propias autodefensas.

Detalló: “Me hablaron y mi respuesta ha sido la misma: con qué calidad moral va a ir Manuel Mireles a fomentar las defensas o las autodefensas a otro estado si todavía no terminamos con el de Michoacán, y ésta es la verdad, yo no puedo ir a apoyar a ningún otro estado en su movimiento social mientras no termine de limpiar el mío, y así lo vamos hacer.

“Pero sí invito a todos a que le echen ganas. No queremos una guerra contra el Estado, que quede claro, no la estamos haciendo. Estamos tratando de despertar conciencias en todos los estados que tengan los mismos o peores problemas que nosotros. Puede haber más problemas pero de momento lo que queremos, si tenemos una excelente seguridad pública y si tenemos también la justa impartición de justicia, nuestra guerra termina, no creo que haya más problemas más graves, porque con eso resolvemos todo y pacificamos a la nación entera, que es nuestro objetivo, pacificar México.”

Citó el caso de Tamaulipas, que no ha dejado de

estar en una situación de violencia y de ejecuciones: “Ahorita está en llamas y no hay quien los ayude porque no tienen autodefensas, y tienen guerra todos los días en sus calles, entre criminales y entre policías, que también son criminales, y el pueblo es el que está recibiendo todos los balazos. ¿Por qué no se matan entre ellos? Sí, que no vayan a sacar la misma estupidez que la forma de resolver el problema, como en Michoacán, es desarmando a los que se defienden, ¿cómo pues? Si estamos demandando seguridad pública, estamos demandando justicia, y es un derecho constitucional. Vean nuestra Carta Magna, ahí está lo que estamos pidiendo y que no tenemos, no es una declaración de guerra, estamos exigiendo los que pagamos impuestos, estamos exigiendo que cumplan los que fueron empleados para eso”.

Semanas antes, el 5 de mayo y en la casa de Thalía Vázquez Alatorre –una abogada michoacana que ayudó a Mireles en su convalecencia, tras un accidente aéreo ocurrido el 4 de enero– un grupo de líderes sociales, exgobernadores, expresidentes municipales y políticos se reunieron para discutir la idea de lanzar una convocatoria con el fin de formar el Frente Nacional de Autodefensas, una reproducción del movimiento que se había gestado en Michoacán.

Mireles encabezó el cónclave, al que asistieron el poeta Javier Sicilia como representante del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el padre Alejandro Solalinde, el general Francisco Gallardo, el senador panista Ernesto Ruffo, Isabel Miranda de Wallace, la diputada michoacana Selene Vázquez Alatorre, el empresario

Javier Garza Lagüera, los politólogos Denisse Dresser y John Ackerman, entre otros.

Por más de tres horas se habló de la situación de violencia en el país, cada uno expuso su labor desde la sociedad civil y sólo el general Gallardo defendió desde las leyes la posibilidad de lanzar la convocatoria de crear autodefensas armadas en todo el país.

El poeta Javier Sicilia fue el primero que pidió aclarar si se estaba convocando a una insurrección social armada porque, dijo, al lanzar la idea de replicar las autodefensas en todo el país el referente directo serían las de Michoacán, que estaban armadas. “Tenemos que ser responsables, las palabras no son inocentes, si se va a hacer un llamado a la insurrección hagámoslo pero de manera abierta y no con medias palabras”, pidió tras deslindarse de una convocatoria de esta naturaleza porque iría en contra de la resistencia civil pacífica que profesa.

Al final de la reunión sólo se acordó llevar a cabo un foro público que se realizaría en la UNAM o en la Universidad Iberoamericana, donde se lanzaría la convocatoria del Frente Nacional de Autodefensas pero sin armas.

Cinco días después, el 10 de mayo, Mireles fue desconocido como coordinador general de las autodefensas por sus compañeros y por el comisionado Alfredo Castillo. No sólo le quitaron el cargo sino también toda representatividad en el movimiento y lo amenazaron con detenerlo si no aceptaba adherirse a las fuerzas rurales, entregando sus arsenales.

La gira que Mireles tenía planeado realizar a estados como Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Ta-

maulipas, donde lo invitaron a formar autodefensas, se canceló. Lo mismo ocurrió con el foro en los auditorios de la UNAM o de la Ibero. Al final, el foro proyectado se llevó a cabo en el Polyforum Cultural Siqueiros, donde Mireles se puso una playera con la leyenda “Yo soy autodefensa”.

Debilitado en su representación, criticado luego de que en entrevistas públicas confesara tener una novia de 17 años con la que pensaba casarse una vez que terminara el conflicto en Michoacán, confrontado con el gobierno federal por haber rechazado las fuerzas rurales, Mireles regresó a Tepalcatepec para continuar con su plan de crear otras autodefensas armadas en la costa michoacana.

Para entonces ya había recibido una amenaza de que lo iban a detener. Mireles recordó ese episodio cuando estuvo con los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: “Un coronel que es amigo mío me sacó un papel que decía que me iban a agarrar. ‘La orden es chingarte a ti donde te veamos, así es que no te nos atraveses. Sale’, me dijo.

“Desde entonces me les paseo todos los días. Soy un peligro para ellos por lo que pienso, por lo que digo, pero si se fijan, todo es basado en la Constitución, no he hablado de ninguna otra cosa más que de los artículos que protegen a los ciudadanos y de las obligaciones que tiene el gobierno federal para con los ciudadanos. Estos pendejos creen que como gastaron mucho dinero en la elección el pueblo no tiene por qué demandarles nada. ¿Cómo no? Si son constitucionales las demandas de nosotros.”

Era evidente que Mireles era un estorbo para los planes del gobierno de Peña Nieto, al que le pidió, a través de un video que circuló en redes sociales, una cita para hablar de lo que estaba pasando en Michoacán, sobre todo de la acusación de que su emisario Alfredo Castillo estaba pactando con grupos criminales. “Te están mintiendo, todo es una farsa”, le dijo en un tono que a muchos en el gobierno federal no les gustó, porque tuteaba al presidente.

El doctor era el único que se había salido del guion establecido y se enfrentaba a las intenciones de eliminar por completo las autodefensas en Michoacán para evitar su proliferación.

Dentro del movimiento de comunitarios, Mireles tenía muchos enemigos que no sólo lo desconocieron sino que ya lo amenazaron de muerte si seguía con sus planes. El gobierno también le advirtió de que lo detendría si no entregaba las armas y se adhería a las defensas rurales a partir del 10 de mayo.

El viernes 27 de junio, al mediodía, José Manuel Mireles fue apresado junto con 83 personas más en un operativo militar en el poblado de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, precisamente cuando intentaba organizar las autodefensas en este municipio y liberarlo de Los Caballeros Templarios.

Al ser aprehendido en una clásica maniobra del gobierno –sembrarle armas y droga en una de sus camionetas–, sus excompañeros autodefensas devenidos fuerzas rurales no protestaron. Ellos estaban de acuerdo con Alfredo Castillo porque Mireles había denunciado que eran parte de los grupos criminales que desplazarían a Los

Caballeros Templarios y se quedarían con el control del narcotráfico en el estado.

El gobierno acusó al médico de criminal y lo mandó fuertemente custodiado al penal de alta seguridad de Hermosillo, pero radicó su expediente en un juzgado de Uruapan, en una clara maniobra para desgastar a su defensa y su familia.

La infiltración

A principios de junio de 2013 un habitante de Tepalcatepec informó al autor que no era del todo cierto que el pueblo calentano estuviera con las autodefensas y mucho menos que fuera la población la que las integrara. Se trataba, aseguró, de un movimiento orquestado por Juan José y Uriel Farías Álvarez, apoyado por algunos militares –entre ellos, el teniente coronel Fernando Domínguez, del 43 batallón del cuartel de Apatzingán.

Según el testimonio anónimo, los hermanos Farías no trataban de liberar al municipio del narco, sino de controlar el trasiego y entregarlo al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los dos hermanos habían estado en la cárcel. Juan José era conocido como *El Abuelo* y había participado con el Cártel del Milenio y los hermanos Valencia. Uriel presuntamente colaboraba con el cártel jalisciense.

“Esta guerra no es del pueblo, como se ha estado manejando, es de ciertos líderes mafiosos que quieren tener el control del pueblo de Tepalcatepec como en años anteriores”, decía.

Inmediatamente después daba una lista de quienes se hacían pasar como líderes comunitarios pero que en realidad eran narcotraficantes o sicarios.

“Los hermanos Antonio y Martín Barragán *Manos cortitas* son narcos de oficio; Santiago Valencia *El Burras* es narcotraficante de oficio responsable de la matanza de Tecatitlán en diciembre de 2010 y de un sinnúmero de asesinatos y desapariciones en Tepalcatepec y Ahuijillo, Jalisco. Es responsable, al menos, de seis muertos del 24 de febrero a la fecha.

“José Valencia alias *Chelo Valencia* es narcotraficante y primo hermano de *El Burras*, es dueño del laboratorio que encontraron los militares cerca de la presa de Chilatlán a finales de febrero o principios de marzo. Jaime Álvarez también es narcotraficante.

“Gonzalo Estrada *El Quinque* es narcotraficante y asesino; Alberto Gutiérrez *El Tragabalas* o *La Chopa* es sobrino político de otro narcotraficante, Álvaro Peña. Baltasar Horta Mendoza es narco y Francisco Mendoza *El Atole* es narco y secuestrador. Avelino Galván Díaz es sicario a la orden de Santiago Valencia Sandoval; Martín Ríos y Adalberto Valencia Chávez, narcotraficantes; y Federico Medina, Antonio Vaca Medina, Alfonso Medina, narcotraficantes de la zona de Taixtán”, redactó en una carta.

Todos ellos eran parte de las autodefensas o policías comunitarias de Tepalcatepec y pasaron a integrarse a las fuerzas rurales, avaladas por el gobierno federal y comandadas por el Ejército, como lo denunció Mireles.

En una de estas entrevistas, Mireles recordó un pasaje que ilustró la “infiltración” del crimen organizado en

las autodefensas: “Muchos de mis compañeros se enojaron conmigo un día cuando una delegación de chinos llega y me pone un 1 millón de dólares en la mesa. ‘Doctor, queremos ayudarte en tu movimiento, ten’, me dijeron. A lo que les contesté: ‘¿Quieres ayudarme en mi movimiento? ¿Con un millón de dólares? ¡No, hombre!, regálame una pinche ambulancia y con eso me ayudas muchísimo más que con este dinero, porque con este dinero tú vas a querer que yo te proteja mientras tú sigues robando las minas de Michoacán, y si yo me levanté en armas para combatir bandidos y criminales, ¿crees que te voy ayudar? ¡Jamás!’”.

Por eso, dijo el doctor, “algunos de mis compañeros me odian, mis excompañeros de los que se infiltraron, criminales que se infiltraron, perdonados porque alguien los perdonó, pero no fue gratis el perdón, les sacaron tres, cuatro millones de pesos a cada uno para poder perdonarlos, los perdonaron tan bien que los nombraron comandantes de algunas barricadas, y como yo he dicho siempre ‘voy a combatir al crimen organizado donde se encuentre, en el nivel que se encuentre, ya sea municipal, estatal o federal, no le hace que traigan la camiseta de nosotros puesta, si son criminales también me los voy a chingar’ y es la verdad y les duele, y los tengo identificados.

“Hay muchachos que empezaron este movimiento siendo cortadores de limón, ahorita tienen ocho huertas de aguacate, hay muchachos que no tenían ni una pinche bicicleta y ahorita son dueños de 10 a 12 trailers mineros, porque mientras yo me dedico a levantar poblaciones para que se defiendan, se autodefendan, estos gallos

van detrás de nosotros. Cuando tomamos Tancítaro yo no vi a ninguno de ellos cuando nos estaban atacando. Cuando hago el Consejo de Autodefensas de Tancítaro con el presidente municipal, el sacerdote, el presidente de la asociación de aguacateros me dicen: ‘Doctor, tenemos 3 mil 700 hectáreas de aguacate sin dueño, ¿por qué creen que no tenían dueño? Porque Los Templarios llegaban y mataban al dueño, a la esposa, a los hijos, a los sobrinos y hasta a los vecinos.

“Cuando llegamos nosotros, pues nomás en el primer día murieron 23 de ellos, se quedaron las huertas sin dueño. Pero los compañeros que nunca andan en el frente, que siempre llegan dos o tres días después, bien listos, ahora ya tienen sus huertas de aguacate y no les importa el movimiento social.

“Yo soy enemigo de ellos, de los perdonados, de los infiltrados, de los apadrinados, donde quiera que se encuentren. No crean que hablo mal del comisionado Castillo porque me cae gordo, sino porque ya se asoció con los criminales y ya es un criminal también.”

El 8 de febrero de 2014 el diario *Reforma* publicó una imagen en la que Alfredo Castillo Cervantes, comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, aparecía junto a un hombre identificado como Juan José Farías, presunto lugarteniente de Los Valencia.

El encuentro ocurrió el 5 de febrero en una bodega en Tepalcatepec. Participaron varios comandantes de los grupos de autodefensa que querían tomar Apatzingán, el enclave de Los Templarios.

Dicha reunión fue grabada por las cámaras del programa *Punto de Partida*, de Denisse Merker, que transmite

Televisa. Pero ni los reporteros ni la conductora dieron cuenta de la asistencia de Juan José Farías *El Abuelo*, quien en una indagatoria de la PGR del sexenio pasado fue vinculado con Zhenli Ye Gon y con Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes *El Mencho*, dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por algún informante, el diario *Reforma* ubicó a *El Abuelo*, que según la PGR fundó un grupo armado Antizetas, que buscaba expulsar de esta zona michoacana al dicho cártel, y al que se responsabilizaba de una emboscada a policías municipales de Apatzingán así como de diversos “levantones” y asesinatos, entre ellos el del exdirector de Seguridad Pública del municipio de Tepalcatepec, J. Reyes Vargas Morfín, cometido el 18 de enero de 2006.

Días después de la publicación, la Secretaría de Gobernación envió una comunicación a *Reforma*, en la que confirmó la reunión de Castillo con líderes de autodefensas y aclaró que no se trataron cuestiones estratégicas de seguridad. No obstante, no abordó la evidente presencia de *El Abuelo*.

El domingo 9 de febrero, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, dijo que Castillo confirmó la presencia del capo. “Alguna razón debe haber habido y no necesariamente una mala razón, puede ser incluso una buena razón”, justificó el procurador.

Al día siguiente el mismo diario publicó una entrevista con Castillo, quien argumentó que acudió a Tepalcatepec porque, estando en Apatzingán en un acto de la Cruzada contra el Hambre, recibió información sobre algunos movimientos de los grupos de autodefensa.

Aseguró que al ingresar a una bodega donde estaban los líderes del movimiento, “una persona” se le acercó para pedirle ayuda. “A mí se me acercó una persona y me dijo: ‘Oiga, quiero decirle que yo soy fulanito de tal’. Yo no ubiqué el nombre ni ubiqué a la persona; yo ni sabía. Ahí estaban el jefe de la Policía Federal, estaba el jefe de la Zona Militar de ahí, y en ningún momento nadie me hizo señalamientos sobre esta persona”.

El comisionado insistió en que no conocía los antecedentes de este personaje ni trató detalles de seguridad con él, además de que Farías le aseguró que había sido absuelto del delito de delincuencia organizada pero que tuvo que estar tres años en la cárcel por portación de droga y un arma.

Murillo Karam había dicho el 30 de enero que la PGR investigaba presuntos nexos entre los grupos de autodefensa y los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que dos detenidos que se ostentaban como autodefensas confesaron haber recibido armas de este grupo criminal.

Pero una vez más, al opinar sobre la reunión entre Castillo y *El Abuelo*, sostuvo que no tenía indicios sobre los nexos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos de autodefensa. Para entonces el gobierno federal ya pensaba en un programa de legalización.

Antes de esta reunión de Castillo y *El Abuelo*, que despertó las sospechas de acuerdos entre el gobierno federal con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es parte del Cártel de Sinaloa, aparecieron mantas y panfletos que advertían de este probable vínculo:

“Les hacemos del conocimiento que los jetos que se

rebelaron son comandados por Nemesio Oseguera Valencia y/o Rubén Oseguera Cervantes alias *El Mencho*, y es señalado como quien organizó la llamada policía comunitaria, que está integrada por gente dedicada al secuestro y extorsión, y como pueblo estamos en la zozobra y tememos por nuestras vidas, pues el gobierno federal los apoya y el gobierno del estado quiere capacitarlos. Demandamos ayuda de la sociedad en general y exigimos al presidente de México que gire la instrucción necesaria para detener este acto brutal de violencia que atenta contra la libertad y vida de todas nuestras familias.”

Las mismas mantas señalaron como responsable del surgimiento de las guardias a Uriel Farías *El Abuelo*, quien opera en Tepalcatepec. En marzo, a dos semanas de la aparición del grupo de autodefensa, el Ejército detuvo a 51 miembros de la guardia comunitaria, a quienes la PGR vincula con Jalisco Nueva Generación. Desde entonces no han salido de la cárcel.

Por su parte, a través de un video difundido en YouTube, *La Tuta* habló una vez más de la implicación de supuestos líderes de cárteles como Jalisco Nueva Generación y Milenio con el movimiento popular.

En el video, *El Profe* señalaba a lugartenientes de distintos cárteles implicados en el surgimiento de estos grupos armados: *El Abuelo*, Hipólito Mora y *El Mencho*, quienes habían sido aprehendidos y puestos en libertad.

El Mencho, Rubén Oseguera Cervantes, originario del municipio de Aguililla, Michoacán, es señalado como uno de los capos más influyentes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, Jalisco y Colima. De acuerdo

con datos del gobierno, es el responsable de la incursión en Veracruz, donde combatía a Los Zetas por encargo de Joaquín Guzmán Loera *El Chapo*.

En Michoacán, Rubén Oseguera Cervantes, que también se hace llamar Nemesio Oseguera Ramos, es considerado como uno de los principales traficantes de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, con influencia en los municipios de Tepalcatepec, Coalcomán, Coahuayana y Aquila.

Según fuentes de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue el responsable de recomponer una parte del Cártel de Sinaloa tras la muerte de Ignacio Coronel. Fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación para combatir a Los Zetas en Jalisco e invadir Veracruz, bastión del grupo criminal que fuera dirigido por Heriberto Lazcano *El Lazca*.

Pero no sólo la infiltración de los grupos criminales minó a las autodefensas, sino también la codicia carcomió las alianzas internas.

La traición

Mireles, en su visita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habló de la traición que más le dolió: la de su compañero Estanislao Beltrán *Papá Pitufo*, quien se alió con el comisionado Alfredo Castillo para desconocerlo como vocero y coordinador general de las autodefensas a cambio, acusó, de propiedades y dinero.

Recordó que cuando el 4 de enero de 2014 tuvo un

accidente aéreo, *Papá Pitufó* era su escolta personal y su amigo de mayor confianza. Al despertar estaba en un hospital de la Ciudad de México y a los pocos días ya estaba custodiado por agentes del Cisen y militares.

“En el accidente yo quedé en coma, desperté aquí en la Ciudad de México cinco días después, pero ya traía en la cara 48 tornillos y placas, todavía los traigo, no se me han salido ni se me han aflojado. Me quitaron un pedazo de hueso de la pierna izquierda porque perdí los huesos de este lado de la cara y ahí me parcharon.”

Dice que *Papá Pitufó* se encargó de juntar el dinero para pagar las cuentas de los hospitales de La Huacana y Morelia donde estuvo internado, hasta que el gobierno federal dispuso de helicópteros y aviones para trasladarlo a la capital del país.

“Él era mi amigo, para mí sigue siendo mi amigo, se encargó de coleccionar lo que cobraron los hospitales. Un día, cuando salgo de terapia intensiva, me pregunta el subdirector del Cisen: ‘Doctor, necesitamos que nombres un interlocutor tuyo mientras tú sales’. Y les digo: ‘Pues en el único que confío es en *Papá Pitufó*, que se fue a Tepalcatepec y empezó a reacomodar nuestras fuerzas porque en ese tiempo yo tomé La Huacana y tomé Churumuco’.

“Hacen cambios y ponen a *Papá Pitufó* al frente como vocero cuando apenas tenía dos meses que había ingresado al movimiento y nosotros ya teníamos 10 meses. Pero por la confianza le dije al de Gobernación: ‘Él, que hable; él, que se presente con ustedes’. Pero Castillo hace una supuesta asamblea donde me destituye de vocero y le pongo un mensaje a *Papá Pitufó*: “Ponte trucha porque

este cabrón nomás va a dividir, no va a hacer ningún trabajo bueno con los michoacanos”.

Según Castillo todos los líderes de las autodefensas firmaron el cambio de representación en una asamblea, pero cuando Mireles les preguntó, ninguno lo había hecho salvo *Papá Pitufu*, los hermanos Farías y otros vinculados con grupos criminales.

“Les dije: ‘Pues este señor anda diciendo que fueron ustedes’. Hipólito me dijo: ‘No, nadie firmó nada, esa decisión la tuvo nada más Castillo con *Pitufu*’. Y empieza a salir en las redes que *Pitufu* es un traidor. Desde entonces no nos hablamos.”

Mireles acusó a *Papá Pitufu* de ser uno de los que se aprovecharon del movimiento para enriquecerse, de los que perdonaron a criminales para sumarlos a las autodefensas a cambio de dinero.

“Él era uno de los que trabajaban cortando limón y ahora tiene cuatro huertas de aguacate, siete huertas de limón, 500 cabezas de ganado y Hummer del año. Él es de los que perdonaron templarios y les puso uniforme de comunitarios, y ahora resulta que Castillo les pone uniformes a él y a todos los templarios. Si nosotros permitimos que el gobierno siga haciendo sus pendejadas inconstitucionales, ¿en qué se está convirtiendo este gobierno? En una dictadura, porque no tomó en cuenta el estado, el Congreso estatal, no tomó en cuenta el Senado de la República para mandar ese ‘virrey’, como dicen, pluripotencial, ¿no?”

Las diferencias con Estanislao Beltrán se profundizaron conforme se acercó el plazo fatal para la desaparición de las autodefensas y su conversión en Fuerza Rural.

Mientras que en Tierra Caliente decenas de hombres registraban sus armas, en la costa Mireles seguía con el plan de crear más autodefensas y tomar el puerto de Lázaro Cárdenas, enclave de Los Caballeros Templarios.

El 27 de abril ocurrió un incidente que fue aprovechado por *Papá Pitufó* y Castillo para quitarle toda la representatividad a Mireles.

Ese día por la tarde, varias camionetas con autodefensas al mando de un personaje conocido como *El Plátano* arribó a Caleta de Campos, donde estaba una barricada ubicada. Estaba ahí un grupo de jóvenes cuidando el lugar cuando fue rafagueado por autodefensas que, alegaron, desde el monte alguien les había disparado.

Testigos informaron que, cuando las autodefensas bajaron de las camionetas y preguntaron a gritos dónde estaban las armas, de inmediato dispararon y mataron a un joven de 13 años.

Estanislao Beltrán, quien venía en camino por la sierra, supo que *El Plátano* había sido autorizado por Mireles para avanzar hacia Lázaro Cárdenas y lo culpó del incidente.

Mireles llegó al lugar cuando ya había ocurrido el asesinato y se encontraban peritos de la Policía Federal levantando los cuerpos. Le pidieron que los ayudara a subir uno a las camionetas oficiales y le tomaron una foto.

Las familias de los cinco muertos acusaron a Mireles de ser el responsable y presentaron quejas familiares en la 43 Zona Militar de Apatzingán, con el general Miguel Ángel Patiño Canchola, para que detuviera a *El Plátano*.

El 7 de mayo Mireles fue destituido como coordinador general de las autodefensas. *Papá Pitufó* y Alberto

Rodríguez *Comandante 5*, a quien Mireles acusó de pertenecer a la banda de Los Viagras, ratificaron su destitución. Exhibieron un documento firmado en Coalcomán, en el que acusan al doctor de no rendir cuentas, utilizar a los medios para posicionarse y de irse a la Ciudad de México sin permiso del Consejo de Autodefensas.

Ya sin Mireles estorbándoles, Castillo aseguró que su salida no confrontaba al movimiento y manifestó que, para él, lo que contaba era el Consejo, la máxima autoridad del movimiento, así como las firmas y decisión de 30 municipios.

En el mismo sentido se manifestó *Papá Pitufo*: “La autoridad máxima de nuestro movimiento social es el Consejo, ellos decidieron retirar a nuestro gran amigo el doctor Mireles. No hay vuelta de hoja, queda fuera de las autodefensas”.

Casi al mismo tiempo, el comisionado Alfredo Castillo anunció que se investigaba al doctor de Tepalcatpec por la muerte de las cinco personas en Caleta de Campos y apuntó que como prueba estaba la foto de Mireles sosteniendo la cabeza de uno de los fallecidos como si fuera un trofeo. Ante la opinión pública el gobierno federal ponía como un criminal y asesino a quien fuera ícono del movimiento social más importante en varios años.

Mireles alegó en entrevista con varios medios que fue el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas quien le pidió bajar uno de los cadáveres y después le dijeron que tenían que tomarle una fotografía a la persona ejecutada, por lo que la tomó de la cabeza.

Refirió que él sólo participó en el levantamiento de

ese cadáver, pero que llegó horas después de los crímenes. Dijo tener el acta de una asamblea de un pueblo al que acudió, donde estuvo reunido con 380 comuneros indígenas, explicándoles el asunto de la defensa rural. Ese encuentro terminó a las 5:30 de la tarde y los asesinatos ocurrieron antes de esa hora.

En cuanto a su destitución y las acusaciones de que había quedado mal de la cabeza después del accidente aéreo mencionó: “No sabía que (Alfredo) Castillo o *Pitufó* (Estanislao Beltrán) eran especialistas en psiquiatría” pues el primero había dicho que necesitaba de atención psicológica y responsabilizó al comisionado federal de la carta en la que se anunció su salida de las autodefensas.

Castillo se deslindó: “Simplemente ellos (los comunitarios) se sintieron no tomados en cuenta en declaraciones del doctor, dejaron de sentirse representados. Tomaron una determinación (de destituirlo) y nosotros la respetamos. Ellos escogen a sus interlocutores y con ellos hablamos”.

En entrevista radiofónica, Mireles sostuvo que su presunto “despido” era una represalia de Castillo, debido a que emplazó a Peña Nieto a entablar un diálogo “de tú a tú”, no a través del comisionado. “Lo están engañando (al presidente) diciéndole que no pasa nada”, sostuvo en un video en Youtube.

Castillo se desistió de acusar de asesinato a Mireles, pues las pruebas eran ridículas. En cambio, resaltó que la Policía Rural estatal ya había iniciado sus actividades desde el sábado 10 de mayo en Tepalcatepec y Buenavista.

Asentó que la nueva corporación de seguridad es-

taría conformada “por las personas mejor capacitadas e iniciará funciones en municipios donde se cubra el total de elementos seleccionados”, e informó que ya se habían recibido 3 mil 316 solicitudes de exautodefensas “para ser institucionalizados e incorporados a estos cuerpos rurales”.

Sólo le faltaba cerrar el ciclo, y quitar definitivamente de en medio a Mireles, lo cual hizo con una nueva treta: sembrarle droga y armas.

El reacomodo

Durante los noventa Michoacán fue un territorio que se disputaron diversos grupos del narcotráfico. Si al principio sólo fueron Los Valencia o el Cártel del Milenio con el Cártel del Golfo, con el paso del tiempo se sumaron Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

A principios de 2013 se dio una serie de reacomodos en los grupos criminales tras la detención de José Ángel Carrasco Coronel *El Changel*, sobrino del extinto narcotraficante Ignacio Coronel Villareal, conocido como *Nacho Coronel*. *El Changel* lideraba la banda La Corona.

Según el general Daniel Velasco Ramírez, comandante de la V Región Militar, la detención de *El Changel*, ocurrida en las inmediaciones de Culiacán, provocó que se rompiera la alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Federación de Sinaloa, cuyo principal

integrante es el Cártel de Sinaloa o del Pacífico. Los dos grupos querían el control de Guadalajara y municipios conurbados.

Esta ruptura impactó en las rutas de Jalisco, Michoacán y Colima, por donde sale la efedrina y crystal fabricados en los laboratorios de la sierra michoacana de Tepalcatepec, Apatzingán y Coalcomán.

Las primeras consecuencias de esta lucha se vivieron en municipios de Jalisco como Pihuamo, Tecatitlán, Jicotlán, Santa María del Oro, Quitupan, Tamazula, Valle de Juárez, Mazamitla, Tizapán, Chapala, Jamay, Zapotlanejo, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y Ciudad Guzmán, entre otros.

En Michoacán hubo ajustes en Coahuayana, Tepalcatepec, Tancítaro, Peribán, Buenavista, Los Reyes, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Cojumatlán de Regules, Marcos Castellanos, Venustiano Carranza, Briseñas, Vista Hermosa, Ixtlán, Pajacuarán, Villamar, Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo, Numarán, Churintzio y La Piedad. En Colima, el peor golpe lo acusaron Comala, Manzanillo, Cuauhtémoc, Colima, Ixtlahuacan, Tecomán y Armería.

El informe señalaba lo que, en su momento, también denunció José Manuel Mireles: que el conflicto abrió las puertas a Los Zetas, que de nuevo buscaron ingresar a Jalisco, como lo habían intentado en 2010 y 2011, cuando se multiplicaron los hechos violentos en Guadalajara.

Según fuentes de inteligencia, Los Zetas podrían estar formando una alianza de colaboración o convivencia con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo que reforzarían sus controles e influencia en las rutas principales de Jalisco, Michoacán y Colima.

Los datos de este informe tomarían forma en 2014. A la salida de Los Caballeros Templarios se dio un nuevo reacomodo en Michoacán, en el que el grupo beneficiado es el Cártel Jalisco Nueva Generación y, en consecuencia, el de Sinaloa, con nuevos personajes que estarían dentro y atrás de las autodefensas ciudadanas.

Un documento de inteligencia militar asienta que dos grupos aprovecharon la debilidad de Los Templarios para apoderarse de Tierra Caliente: Los Gallegos, liderados por el empresario limonero y hotelero Miguel Gallegos Godoy *El Micheladas* o *El Migueladas*, y El H3 o La Tercera Hermandad, encabezada por Luis Antonio Torres *El Americano*, nacido en Estados Unidos pero también con la nacionalidad mexicana. Las dos primeras “hermandades” serían La Familia y Los Templarios.

En el informe supuestamente confidencial se señala: “*El Micheladas*, exjefe templario, ha hecho acuerdos con Nemesio Ocegüera Cervantes *El Mencho* desde 2011, pues Gallegos Godoy es uno de los principales productores de droga sintética en Michoacán, y de quienes se señala está traficando el producto a través de supuestas autodefensas que operan en Tierra Caliente, utilizando las rutas que se encuentran entre los límites de Jalisco y Michoacán (Tepalcatepec, La Ruana y Buenavista).

“Se habla de que sus operadores para tal objetivo son los denominados H3, que encabeza Luis Antonio Torres, conocido como *Simón El Americano*, quien es el líder de las autodefensas de Buenavista Tomatlán y que encabeza un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas que también denominan autodefensa operativa.”

Otro de los operadores es José Alvarado Robledo *El Burrillo* o *El Burro*, a quien se identifica como patrocinador de las autodefensas de Buenavista Tomatlán.

El grupo H3 rotulaba con su nombre las camionetas y autos de lujo que traían sus integrantes, la mayoría jóvenes, incluida una Hummer negra. Desde principios de 2014 este grupo comenzó a distinguirse del resto de las autodefensas por la cantidad de armas, joyas, ropa y calzado de marca que vestían algunos de sus miembros, conocidos entre los reporteros como el “comando Armani”.

El Americano tuvo una serie de enfrentamientos con Hipólito Mora que lo llevaron a la cárcel, acusado del asesinato de Rafael Sánchez Moreno *El Pollo* y José Luis Torres Castañeda *El Nino*, el 8 de marzo de 2014.

En el informe confidencial mencionado se lee que *El Americano* y *El Burrillo* querían apoderarse de unas huertas propiedad de José de Jesús Méndez Vargas *El Chango*, un jefe templario detenido en 2011. Al parecer, Hipólito Mora las tenía en su poder bajo el argumento de que *El Chango* Méndez era su compadre y las ganancias eran para mantener a las autodefensas y a las viudas del municipio.

Después del 8 de marzo de 2014, con el apoyo del comisionado Castillo, *El Americano* se apoderó de Buenavista Tomatlán y presionó para que Hipólito Mora fuera encarcelado. De esta manera se quedó con una de las principales rutas de transporte de las drogas sintéticas.

Otros de los integrantes de H3 son los hermanos José Méndez Vargas y Antonio Méndez Vargas, hermanos de *El Chango* Méndez; Gerardo Serafín *El G1*, exmiembro de

Los Caballeros Templarios; así como los hermanos Rodolfo y Mariano Serra Santana, de Los Viagras.

Por otro lado, el documento señalaba que, a partir de enero de 2014, una célula de Cártel del Golfo empezó a tener presencia en Michoacán a causa de una alianza hecha entre Nicanor Barrera Medrano *El Chato* o *El Nica*, del Cártel del Golfo, con *La Tuta*. Así se pretendía enfrentar a grupos como H3.

Otro informe de inteligencia militar indicaba que, en algún momento, Miguel Ángel Gallegos Godoy *El Micheladas* había sido identificado como “operador financiero” de *La Tuta* y compadre de *El Chayo*, con quien rompió cuando no respetaron el acuerdo de no meterse con sus huertas de limón. Además, pertenecía a un grupo político ligado al PRI de la región de La Huacana denominado El Grupo Zicuirán.

Gallegos Godoy supuestamente financió la campaña de Fausto Vallejo, así como la de otros diputados federales y locales. Originario del ejido de Copales (La Huacana), lo identificaban como dueño de hoteles, moteles, huertas de limón y almacenes de materiales de construcción. También como un personaje con fuertes relaciones políticas en el gobierno vallejista, entre otros, con Jesús Reyna; con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, y con los diputados César Chávez Garibay, Marco Antonio Trejo Pureco, Rigel Macías Hernández, Salomón Fernando Rosales Reyes, Salvador Ortiz García y Rodomiro Barrera Estrada.

Con estos grupos –mezcla de templarios, Cártel de Jalisco y hasta de La Familia Michoacana– es con los que

pactó Alfredo Castillo, según el líder histórico de las autodefensas, José Manuel Mireles. Serían los nuevos jefes del crimen organizado en Michoacán, dominando 72 comunidades de 32 municipios, con más de 10 mil integrantes, según el último número de autodefensas registrados por el gobierno.

**CAPÍTULO 10.
LAS VÍCTIMAS**

Concentrados en la estrategia militar y policiaca para combatir al crimen organizado, el gobierno federal y el estatal no tuvieron ojos para quienes quedaron atrapados en la guerra contra el narcotráfico y sufren la violencia diaria de policías, soldados y sicarios.

De mediados de 2013 a mediados de 2014 se registraron cientos de familias desplazadas a otros estados y miles de una ciudad a otra; hay más de 3 mil muertos extraoficialmente y, contabilizada, una docena de desaparecidos a manos de policías municipales y soldados en Michoacán.

Desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006 se tienen reconocidas 12 mil 715 muertes dolosas en Michoacán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados en septiembre de 2013. Ese conteo oficial marca que, sólo de enero a julio de 2013, se habían cometido 496 homicidios dolosos, la cifra más alta desde 1998, cuando se registró el récord histórico de la entidad, con 695 muertes.

En realidad no hay una cifra clara o exacta del total de desaparecidos y muertos en esta guerra. De acuerdo con lo observado por el autor desde que aparecieron los grupos de autodefensa (febrero de 2013), en cada enfrentamiento con Los Caballeros Templarios cada bando recoge a sus muertos y heridos y no se levanta ninguna acta ministerial.

Por ejemplo, el 19 de octubre de 2013 hubo un tiroteo entre estos dos grupos y, según Mireles, el saldo fue de 13 fallecidos, de los cuales uno era autodefensa y, los

demás, delincuentes. No hubo registro oficial del hecho.

Antes, el 10 de abril de 2013, en la conmemoración del asesinato de Emiliano Zapata, un grupo de limoneros se manifestó en la glorieta de la carretera que comunica Nueva Italia y Apatzingán pidiendo seguridad para su trabajo. Fueron reprimidos por la Policía Federal y murieron 10 personas. Tampoco hubo reportes oficiales.

La nubosidad en las cifras incluso se detecta cuando se tienen datos institucionales de algún enfrentamiento, como en julio de 2013, cuando se registraron ataques en seis puntos distintos del estado. Entonces, el gobierno federal informó de 20 civiles muertos, pero en ningún momento se dieron los nombres, solamente de dos policías federales y del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet.

El registro de las víctimas no es claro para nadie. Por ejemplo, cifras eclesiales indican que, desde que llegó Fausto Vallejo al gobierno, en 2011, se cuentan 2 mil 300 muertes violentas y, en todo lo que va desde la declaración de guerra, en 2006, más de 30 mil.

Tampoco nadie sabe el número de desplazados, ya que miles de familias han huido de los municipios de mayor violencia a casa de otras en una migración “hormiga y silenciosa”. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, reconoció que, en los primeros 20 días de 2014, 90 personas huyeron de sus casas en Tierra Caliente por la inseguridad, y en 2013 fueron más de 200.

La intención de los michoacanos de dejar su tierra por el temor de ser víctimas de la violencia se observa de manera más nítida si se toma en cuenta que, de las 36

mil solicitudes de asilo en Estados Unidos en 2013, 2 mil eran de Michoacán, sobre todo de habitantes de Tierra Caliente.

El Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México Alzando Voces (Cofadde) sostiene que “en esta nueva estrategia (la de Peña Nieto) siguen ausentes los derechos humanos y la impartición de justicia”.

Violencia de Estado

El 3 de enero de 2007 Felipe Calderón ratificó desde Apatzingán la guerra que había declarado menos de un mes antes. A partir de entonces, Michoacán se transformó en una tierra con todos los signos de una guerra: enfrentamientos entre bandas criminales, soldados, policías y autodefensas, quema de autos, camiones y autobuses, miles de muertos, desplazados y desaparecidos, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos que no han sido reconocidas con claridad por el gobierno federal y el estatal.

Cristina Paredes, hija de Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos desaparecido el 26 de septiembre de 2007, sostiene que la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos en Michoacán están generadas por el Estado, se originaron desde que Calderón lanzó su lucha y continúa con la misma gravedad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Esa lucha empieza a generar graves violaciones a los derechos humanos, como son desapariciones forza-

das, el desplazamiento involuntario, tortura como método de inculpación, allanamiento de morada, cateos ilegales, violaciones, robo a casa habitación por parte de militares. La posición que nosotros manejamos es que es una violencia de Estado, no creemos que sea sólo una guerra contra las drogas o el crimen organizado, porque éstas están dentro de las mismas estructuras del gobierno, como lo hemos visto en los casos que tenemos registrados de desaparición forzada, que han tenido que ver con militares, marinos, policías estatales y municipales.

“Esta violencia no obedece simplemente a un partido, al PAN con Felipe Calderón, sino que se sigue agudizando con el PRI de Enrique Peña Nieto. Ahora se sigue desapareciendo gente, desplazándola. Es lo mismo porque no se han creado las condiciones de seguridad, y es por eso que nacen las guardias comunitarias, diciendo ‘ya basta’. Hoy se vuelven a desplegar soldados y policías y nos están llegando reportes de que se están llevando a gente que ni siquiera tiene que ver con el crimen organizado ni con el narcotráfico. Nosotros creemos que otra vez, con todo esto, se van a registrar graves violaciones a los derechos humanos”, sostiene Cristina, miembro de Cofaddem.

Mercedes Ruiz González, madre del activista Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, quien desapareció junto con la también defensora Vianey Heredia Hernández el 29 de junio de 2010 en el municipio de Tumbiscatío, señala otras de las graves faltas en la impartición de justicia para todos los casos de desaparición forzada.

“No existe un solo caso en el que se haya consignado por una desaparición forzada. Ahora, con la administra-

ción de Peña Nieto, estamos viendo que esa impartición de justicia y la impunidad continúan bajo el manto de la retórica y del discurso, porque las violaciones se siguen llevando a cabo. Incluso vemos que en los medios de comunicación existe un velo en el que ni siquiera pueden hacerse visibles muchos casos de desaparición forzada. No es que ya no existan o no se lleven a cabo, sino que están ocultas, no se están registrando”, advierte.

Laura María Orozco, también de Cofaddeem y quien tiene desaparecidos a su padre y sus dos hermanos, advierte que hay casos en los cuales se juntan tres graves violaciones a los derechos humanos: desplazamiento involuntario, desaparición forzada y sustracción de bienes y tierras.

“Tenemos conocimiento de que muchas de las personas que han sido despojadas de sus propiedades o son víctimas de desaparición forzada o asesinato han tenido que dejar sus hogares. Pero no hay un registro concreto de desplazados, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene ese registro. Es una situación grave,”, sostiene la joven que sufre estas tres situaciones.

Historias de terror

La Cofaddeem tiene registrados 189 casos de desaparición forzada de 2006 a la fecha, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos a mediados de 2013 tenía 678 quejas acerca de personas desaparecidas, sin especificar si habían sido forzadas.

Laura María Orozco dice que en la Cofaddeem esti-

man que, por cada caso registrado, hay cinco más, porque muchos familiares no se atreven a denunciar por las amenazas y hostigamiento de los policías municipales y de la PJEM. Esto significa que habría unos 945 casos de este tipo en Michoacán y que en la mayoría estarían involucrados policías municipales, estatales y militares. Como es el caso de su familia.

En agosto de 2007, dice Laura, su hermano fue detenido por un grupo de soldados que entró al pueblo de Nuevo Zirosto, Uruapan, a ubicar una supuesta casa de seguridad que encontraron completamente vacía. Dice que al no encontrar a nadie en dicho domicilio, los militares detuvieron a su hermano José Iván Orozco Medina y lo acusaron de portar armas, tráfico de droga y posesión ilegal de autos.

En el comunicado número 100 de la Secretaría de la Defensa Nacional, con fecha del 1 de agosto de 2007, se consigna la detención de José Iván y de otro menor, y efectivamente los acusan de haber secuestrado a otra persona. Se lee que los militares aseguraron nueve pistolas, cinco fusiles y cientos de cartuchos, así como una camioneta, fornituras, uniformes de la policía municipal y placas de un auto de Guerrero.

Laura señala que José Iván salió de prisión el 8 de mayo de 2012, absuelto por encontrársele inocente. Pero en esos cinco años su papá y sus hermanos Moisés y Leonel fueron desaparecidos por militares en venganza por las denuncias que interpusieron ante las autoridades estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Su papá, Leonel Orozco Ortiz, fue desaparecido por soldados vestidos de civil el 3 de julio de 2008, luego de

presentar una denuncia por intento de extorsión contra soldados, que le pidieron 200 mil pesos para liberar a su hijo José Iván –reaprehendido el 21 de diciembre de 2007, una vez que había sido liberado bajo las reservas de la ley.

“Le dijeron a mi papá que si no quería que se llevaran a su hijo les diera 200 mil pesos. Mi papá les dijo que no tenía por qué darles dinero y entonces le dicen a mi hermano: ‘Ahora a ver si sales’, que para qué fue a quejarse a Derechos Humanos. Como no dimos el dinero saquearon la casa, se llevaron ropa, fotos de la familia y todo lo que podían.

“Mi papá puso denuncias por extorsión y robo de los militares y se quejó incluso en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 5 de julio de 2008 iba a presentar sus pruebas ante la CNDH, pero el 3 de julio llegó un grupo armado que dijo ser de la Policía Ministerial, con una orden de aprehensión en su contra. Amagaron a mi mamá, a mi hermano y a un tío. Estas personas tenían un corte de cabello militar pero decían que eran ministeriales y se lo llevaron.”

Después de ese hecho, Laura cuenta que presentaron denuncias ante la PJEM (APP 244/2008/II-FEADS), sin resultado alguno. Dedicados a trabajar huertas de aguacate siguieron sus labores pero continuaron los hostigamientos de militares, que catearon la casa de su hermano Moisés y la de su madre.

“Mi mamá no los dejó. Ellos anotaron algo en su libreta y, a los ocho días, esto ya fue el 18 de abril de 2009, llegó a la casa un grupo de la AFI y se llevó a mi hermano Leonel Orozco Medina, de 17 años. Se puso una

denuncia ante la procuraduría (APP 62/2009/I-FEADS) y no hicieron nada. Hasta ahorita sigue desaparecido.”

Luego de esto dejaron el pueblo y encargaron sus tierras a dos tíos, pero en 2010 fueron despojados de las huertas por soldados y se las dieron a otras personas vinculadas con bandas criminales. Ante lo cual, su hermano Moisés presentó nuevas denuncias. La respuesta fue brutal. Este último fue desaparecido por la policía municipal de Apatzingán el 22 de mayo de 2012. Hoy, 50 integrantes de esa familia decidieron desplazarse a sitios más seguros.

Otros casos de desaparición forzada son el de Luis Gómez Álvarez, un hojalatero que se llevaron policías municipales de Morelia el 19 de abril de 2013; Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, los dos abogados dedicados a la defensa de los derechos mineros que desaparecieron cuando iban a Tumbiscatío el 29 de noviembre de 2010; y Patricio Barrera Corona, Simón Corona Banderas, Roberto Mejía Mendoza y otra persona más que desaparecieron el 23 de septiembre de 2009 en un retén policiaco de Turicato, cuando regresaban a su casa luego de pedir recursos para mejorar la iglesia.

En la lista de desapariciones forzadas en Michoacán hay periodistas, jóvenes que no militan en ninguna organización, abogados, jornaleros y trabajadores. Según un recuento periodístico, sólo en lo que va del gobierno de Peña Nieto ya se tiene una lista de 12 desapariciones forzadas, con lo cual Michoacán ocupa la cuarta posición en ese rubro, superado sólo por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Trabajos citados

- Astorga, L. (2001). *Drogas sin frontera. Los expedientes de una guerra permanente*. Ciudad de México, México: Grijalbo.
- Becerra Acosta, J. (11 de junio de 2013). Ganancias de templarios superan 970 mdp al año. *Milenio*.
- Calderón Hinojosa, L. M. (enero de 2014). (J. G. Olmos, Entrevistador) Ciudad de México.
- Garay Salamanca, L. J., & Salcedo Albarrán, E. (2012). *Narcotráfico, corrupción y estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Ciudad de México, México: Debate.
- González y González, L. (1991). *La querencia*. Guadalajara, Jalisco, México: Hexágono.
- González y González, L. (2001). *En la Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, México: El Colegio de Michoacán.
- Graham, D. (3 de enero de 2014). Ventas de mineral de hierro a China provocan choques con cártel de droga mexicano.
- Gutiérrez, A. (2007). *Narcotráfico. El gran desafío de Calderón*. Ciudad de México, México: Planeta.
- Maldonado Aranda, S. (2010). *Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán*. Zamora, Michoacán, México: El Colegio de Michoacán.
- Maldonado Aranda, S. (enero-marzo de 2012). Drogas, violencia y militarización en el México rural. (I. d. Sociales, Ed.) *Revista Mexicana de Sociología*(74).
- Maldonado Aranda, S. (2012). *Transición política, seguridad y violencia en México*. Buenos Aires: CLACSO.
- Olmos, J. G. (3 de agosto de 2013). Vallejo entregó Michoacán a los narcos: "Cocoa". *Proceso*(1918).
- Olmos, J. G. (21 de junio de 2014). La verdadera historia de los Vallejo. *Proceso*(1964).
- Ravelo, R. (9 de diciembre de 2007). Los Valencia y su conglomerado criminal. *Proceso*(1623).
- Valdés Castellanos, G. (2013). *Historia del narcotráfico en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia*. Ciudad de México, México: Aguilar.
- Vargas Uribe, G. (enero-febrero de 1993). Michoacán en la red internacional del narcotráfico. *El Cotidiano*, 52.

Se terminó de imprimir en febrero de 2015
en los talleres de Quad Graphics.
Durazno No.1, Col. San José de las Peritas,
Xochimilco, México, DF